

Información de envíos

Información de los envíos realizados y de los apuntes realizados en los libros de registro correspondientes.

Mensaje enviado del departamento a SGRP

Reg. salida **Remitente:** GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
Num: 201800000455255 **Fecha:** 26/12/2018

Reg. entrada **Destinatario:** Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
Num: 201800001120063 **Fecha:** 26/12/2018

Mensaje enviado de SGRP al Parlamento

Reg. salida **Remitente:** Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
Num: 201800000455365 **Fecha:** 26/12/2018

Reg. entrada **Destinatario:** Parlamento Vasco
Num: **Fecha:**

Documentos Adjuntos con apunte en el Libro de registro

Nombre	Salida	Entrada
III y IV.pdf	26/12/2018 201800000455365	
I y II PARA FIRMA DEL SAILB□R□.pdf	26/12/2018 201800000455365	

Cerrar

ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2018ko abenduaren 18an egindako bilkuran, **EAE-ko Kooperatiben LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de Cooperativas de Euskadi**.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoa betez.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 18a.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2018.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

Consulta de Documento

Archivo del documento[I y II PARA FIRMA DEL SAILBURU.pdf](#)**Descripción**

PROYECTO DE LEY de Cooperativas de Euskadi

Creador

Cortés Larramendi, Carmen

Cargo firmante

Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki

Fecha modificación

18/12/2018

**Firmado digitalmente por**

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO



**EAE-ko KOOPERATIBEN LEGE-
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI**

**HONEKIN BATERA
AURKEZTEN DIREN
AGIRIAK**

**DOCUMENTOS QUE SE
ACOMPAÑAN**

- | | |
|--|--|
| I. BIDALKETA-IDAZKIA | OFICIO DE REMISIÓN |
| II. LEGE PROIEKTUAREN TESTUA | TEXTO DEL PROYECTO DE LEY |
| III. PROZEDURAREN AMAIERAKO
MEMORIA | MEMORIA FINAL DEL PROCEDIMIENTO |
| IV. EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE
JURIDIKOKO IRIZPENA | DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA
ASESORA DE EUSKADI |

I

**OFICIO DE REMISIÓN /
BIDALKETA-IDAZKIA**

**EAE-ko KOOPERATIBEN LEGE-
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI**

ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2018ko abenduaren 18an egindako bilkuran, **EAE-ko Kooperatiben LEGE PROIEKTUA** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, ha procedido a la aprobación del **PROYECTO DE LEY de Cooperativas de Euskadi**.

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutakoa betez.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 18a.

Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2018.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA

**EUSKADIKO KOOPERATIBEN
LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI**



PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- Antecedentes y justificación general de la modificación y refundición de la legislación cooperativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El legislador vasco, urgido por el desarrollo, la creciente complejidad y sobre todo, la potencialidad del cooperativismo vasco, protagonizado por las cooperativas de trabajo asociado, fue tempranamente sensible a dotarle de un instrumento jurídico propio y ajustado, una legislación adecuada a que impele el artículo 129.2 de la Constitución española a los poderes públicos como medida de fomento de las sociedades cooperativas, desarrollando la competencia que con carácter de exclusiva le atribuía el artículo 10.23 del estatuto de autonomía para la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobada por la Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

La Ley 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas, cumplió con esta finalidad, permitiendo bajo una configuración jurídica cooperativa el desarrollo de importantes proyectos empresariales así como la consolidación y creación de numerosos puestos de trabajo, además de dotarle de seguridad jurídica a todo el sistema.

La Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi (en adelante, Ley 4/1993), durante los veinticinco años de su vigencia, ha significado un paso decisivo en la consolidación de un modelo jurídico cooperativo ajustado a las necesidades contemporáneas de las cooperativas vascas a la par que ha posibilitado nuevos desarrollos, necesarios para su afianzamiento en mercados cada vez más globalizados en que han de competir.

La exigencia de una legislación adecuada obliga a una permanente adecuación legislativa. Por ello, la vigente norma ha sido modificada en aspectos específicos y por razón de urgencia, en diversas ocasiones en dicho período:

- . Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
- . Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
- . Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi, por la que se modifican los artículos 67 y 68 de la ley 4/1993.

Además, se ha aprobado y publicado un Reglamento de desarrollo general de la Ley, aprobado por el Decreto 58/2005, de 29 de marzo (además de otros, como son el de

organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, aprobado por Decreto 59/2005, de 29 de marzo; Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento y requisitos relativos a las sociedades cooperativas de utilidad pública; y Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las cooperativas de iniciativa social) cuyo contenido, en determinados aspectos, merece su fijación por ley.

La razón del presente texto legislativo trae causa de la necesidad de refundición de los mencionados textos legales que han modificado la Ley 4/1993 sucesivamente en el tiempo; y ello por razones de sistematicidad y facilidad en la identificación y aplicación de la norma en vigor; esto es, para la seguridad jurídica necesaria en la interpretación y aplicación de la norma cooperativa.

La aprobación de un texto único en el que se incluyan todas las disposiciones, de carácter general, aplicables a las cooperativas sujetas a la legislación autonómica vasca excede de la mera consideración compiladora de dicha tarea y precisa de una labor añadida de armonización, fundamentalmente terminológica y de identidad de razón y solución jurídicas, en unos casos y, en otros, de aclaración respecto de aquellos elementos normativos que pudieren adolecer de inconcreción o suscitar duda en su aplicación. Dicha tarea aclaratoria ha precisado puntualmente el añadido propositivo necesario para su correcta interpretación, sin que ello haya supuesto variación alguna del sentido y finalidad originarias.

Cuanto antecede no contradice el mantenimiento de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi, ya que regula una cooperativa cuyas características singulares exigen un ley propia y claramente diferenciada, respecto de la cual la ley general actúa con carácter supletorio. Esta norma en efecto, responde a una estructura de ordenación compleja en que se integran distintas clases y grados de cooperativas además de las mixtas, en un equilibrio sistemático que la inserción de la norma que regula la sociedad cooperativa pequeña quebraría.

La sistematicidad de un texto único se justifica tanto más cuanto en este momento de la evolución de la legislación cooperativa vasca se hace preciso introducir determinados desarrollos normativos que sin alterar la base normativa originaria de mínimos encauzan el desarrollo de sociedades cooperativas; singularmente respecto de determinadas clases de cooperativas.

Así mismo, entre los elementos objeto de modificación, se ha de destacar la actualización del modo y la intensidad de la actuación administrativa respecto del fomento cooperativo por una parte, así como sobre el control del cumplimiento de la legalidad cooperativa, por otra.

En efecto, las soluciones normativas adoptadas pretenden solventar la obsolescencia de determinados elementos, el coste y dificultad de su aplicación; reforzar la autonomía de regulación adaptada a cada proyecto cooperativo, compatibilizándolo con el mantenimiento de las líneas definitorias de una sociedad

como cooperativa; garantizar su funcionamiento democrático y participativo a la par que su gestión y control eficaces; así como el reforzamiento de la colaboración público privada; y en definitiva, agregar un nivel de seguridad jurídica, tanto en las relaciones internas como respecto de terceras personas no socias, que hagan de la legislación vasca de cooperativas un instrumento certero para fijar las relaciones intracooperativas y el tráfico jurídico externo.

Todo ello se inserta en la estructura normativa vigente, cuyo contenido en su mayor parte se mantiene en sus términos y coherente con las líneas maestras de diseño normativo: profesionalización del órgano de gestión, agilización en la toma de decisiones, reforzamiento de los recursos financieros y potenciación de la intercooperación; con la finalidad de garantizar la competencia empresarial con idénticas posibilidades, no obstante conservar la identidad cooperativa de la sociedad, garantizar su funcionamiento democrático e impulsar su responsabilidad social.

Para este objetivo se ha tenido en cuenta el estado actual y evolución de la normativa en materia mercantil en general junto con los desarrollos y soluciones cooperativas del derecho comparado; así como las medidas e instrumentos para emprender de reciente implantación; procurando un resultado equilibrado con la autonomía de la cooperativa para auto-organizarse, de conformidad con la tradición, principios y parámetros generalmente admitidos.

Integrando cuanto antecede, cabe concluir que la presente regulación resulta la mínima imprescindible necesaria para conseguir los objetivos indicados, sin que se haya evidenciado ningún instrumento alternativo más adecuado para su logro; evita innecesarias cargas administrativas no claramente garantes de los intereses en juego a proteger; y finalmente, mantiene la estabilidad de los aspectos básicos del marco normativo cooperativo aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi, al que se dota de una mayor seguridad jurídica. Por todo lo cual, la norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presente Ley consta de 154 artículos, 8 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una derogatoria y 6 disposiciones finales, estructurados en 4 títulos, 15 capítulos y 18 secciones.

Se dicta al amparo del artículo 10.23 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco que atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de cooperativas, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación general en materia mercantil. De otro lado, el artículo 10.5 del Estatuto atribuye competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia.

II.- Disposiciones generales.

Sin perjuicio del mantenimiento de la formulación del concepto de sociedad cooperativa fijado en 1993 y de su garantía normativa que la norma pretende, se ha entendido conveniente, en el momento actual, introducir la referencia expresa a los principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional, para una mayor precisión y comprensión del mismo; además de una más certera interpretación y aplicación normativa ajustada a aquellos.

Respecto de las secciones, aspecto que había sido ya objeto de adecuación importante, insistiéndose en el carácter unitario de la responsabilidad de la cooperativa y en la prioridad de sus órganos en relación con la derivada de la estructura de las secciones, se flexibiliza ahora su operatoria interna, sin perjuicio del mantenimiento de dicho carácter, fundamentalmente respecto de las relaciones con terceras personas no socias

Se mantiene así mismo, la regulación general de operaciones con terceras personas no socias, debiendo prevalecer las transacciones cooperativas con las personas socias, no obstante haberse flexibilizado en las cooperativas agrarias y alimentarias con la motivación y cautelas reguladas específicamente para las mismas, así como el importe del capital social mínimo, propio de toda sociedad que soporta una empresa a la vez que asequible para toda clase de emprendimientos.

III.- Constitución de las cooperativas.

La regulación sobre constitución cooperativa permanece inalterada, incluyéndose únicamente ajustes técnicos de armonización: especificación de que el reembolso no constituye un derecho en todo caso; la no obligatoriedad legal de determinados órganos; la remisión a la ley de sociedades de capital vigente, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en sustitución de la referencia a la ley de sociedades anónimas, o al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, en lugar del nombre concreto que en cada legislatura varía ordinariamente.

IV.- Registro de Cooperativas de Euskadi.

La eficacia y los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo, por los que se rige el Registro de Cooperativas de Euskadi no resultan modificados; únicamente se aclara la materia de la que traiga causa la impugnación en vía judicial mercantil, prevista originariamente con diferenciación de la vía contencioso administrativa y se agrega, a efectos prácticos,

la consideración como fecha de inscripción la causada por la presentación del título correspondiente objeto del mismo, solo para los supuestos de inscripción constitutiva.

Asimismo se prevé expresamente la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para facilitar los procesos de inscripción.

V.- Las personas socias.

La regulación de la posición jurídica de las personas socias se mantiene en los términos vigentes; singularmente, la obligación estatutaria de fijar los criterios de participación de las personas socias de trabajo, aclarando la posibilidad de hacerla efectiva en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe, y siempre con carácter minoritario salvo en situaciones de necesidad empresarial; aspecto que ya había sido desarrollado reglamentariamente, y que pueden tener carácter estructural o coyuntural.

No sufre alteración alguna el derecho de información de las personas socias, su acceso a la documentación social más relevante, los límites en caso de resultar gravemente lesiva para los intereses de la cooperativa o claramente abusiva por parte de las personas socias, el carácter motivado, y de su denegación así como, en todo caso, la decisión última por la asamblea general. Tampoco varía la obligación de toda persona socia de guardar secreto, para no lesionar los intereses sociales, ni el derecho a formular propuestas.

Ahora bien, se amplía el derecho de las personas socias a examinar el informe, no preceptivo, que sobre las cuentas anuales auditadas de la cooperativa, emita la comisión de vigilancia.

Permanece sin modificación así mismo, el número mínimo de tres personas socias para la constitución de la cooperativa; la materia de admisión, su impugnación y efectos; periodo de prueba y baja, con su requisitos de plazo de preaviso para las personas jurídicas; período mínimo de permanencia; el derecho de la cooperativa a exigir a la persona socia separada el cumplimiento de una serie de obligaciones preexistentes; la diferenciación legal entre bajas justificadas y no justificadas; así como los supuestos en que la baja deviene obligatoria. Igualmente, queda inalterado el régimen de disciplina social: tipos de sanción; la prescripción de las faltas y las normas de procedimiento; la suspensión de derechos de las personas socias; el plazo para resolver y el momento concreto de su tratamiento durante el desarrollo de la asamblea general.

Se ha incorporado, a efectos sistemáticos, en el primero de los artículos que introduce el capítulo, la relación y definición de las distintas modalidades societarias, hasta ahora dispersas en el texto legal; tal como se había anticipado reglamentariamente. Al respecto, procede significar la continuidad de la regulación

de las relaciones societarias de duración determinada en sus términos, por haberse acreditado necesarias en la práctica y coherentes con la naturaleza cooperativa de la sociedad cooperativa para cubrir necesidades económicas coyunturales; así como el periodo y procedimiento para adquirir la condición de persona socia de duración indefinida.

Se mantienen las personas socias inactivas o no usuarias, limitados sus votos a la quinta parte del total de votos sociales, y se prevé, como novedad, la posibilidad de la persona socia en excedencia, remitiendo a la regulación estatutaria sus derechos y obligaciones.

Finalmente, se regula expresamente que los supuestos de suspensión y baja obligatoria de las personas socias trabajadores en las cooperativas de trabajo asociado son de aplicación también para las personas socias de trabajo de las cooperativas de otra clase; para lo que se ajusta la terminología y se traslada su regulación originaria para ubicarlo sistemáticamente en este capítulo, con los siguientes ajustes técnicos: flexibilización del órgano competente para adoptar la decisión pertinente, extendiéndolo al consejo rector, siempre y cuando así esté previsto en los estatutos sociales; regulación del plazo para devolución de las aportaciones al capital en función de su naturaleza en los supuestos de baja obligatoria por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor, de forma que se pueda proceder a la devolución de la aportación en el plazo máximo de 2 años (periodificado) para las aportaciones obligatorias y con carácter inmediato para las aportaciones voluntarias.

VI.- Los órganos sociales.

Las novedades que se introducen en el régimen de los órganos sociales son, con carácter general, desarrollos concretos de aspectos específicos; significándose la nueva regulación del órgano de administración y gestión, donde los desarrollos normativos han sido mayores.

De esta forma, con carácter introductorio y a efectos sistemáticos se identifican los órganos de la cooperativa, previamente a su regulación individualizada; dejando a la autorregulación el preciso y concreto complemento de organización para el más adecuado funcionamiento de la sociedad.

Respecto de la asamblea general, se mantiene su configuración y delimitación funcionales en relación con el resto de órganos, respondiendo a la misma finalidad de eficaz y eficiente gestión empresarial además de seguridad jurídica; así como su régimen jurídico innovado en 1993 en relación con la publicidad reforzada para la convocatoria en cooperativas de gran número de personas socias; reducción de los supuestos de mayoría reforzada de dos tercios para la adopción de determinados acuerdos; posibilidad del voto plural respecto de específicas personas jurídicas; límite al derecho de voto de las personas socias que no realicen de

manera plena la actividad cooperativizada; la regulación del conflicto de intereses y sus efectos; así como aspectos formales como la redacción del acta y su aprobación.

Es novedad la obligación de celebración de la asamblea general ordinaria en los seis primeros meses desde el cierre del ejercicio social en lugar de referir dicho plazo a la convocatoria de la misma, en línea con la legislación mercantil y para una mayor precisión temporal de celebración de la reunión asamblearia.

También se innova respecto de la válida celebración de asamblea en tercera convocatoria para las cooperativas de enseñanza, que ya había sido permitida para las cooperativas de consumo y agrarias y alimentarias, modificando la regulación inicial de obtener un quorum de asistencia en segunda convocatoria; en las mismas condiciones de intentar previamente la celebración en segunda convocatoria sin resultado. Las razones que lo justifican responden a la misma lógica participativa y realidad sociológica contrastada que justificaron la inclusión de la primera modificación referida.

Así mismo, se ha introducido la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación respecto de las convocatorias de la asamblea general para facilitar la participación societaria en la adopción de acuerdos, garantizando la información suficiente.

Finalmente, como otro aspecto innovador cabe señalar que se ha adoptado el criterio establecido en la reciente regulación de sociedades de capital para la impugnación de acuerdos: supuestos, legitimación, plazos y caducidad; en aras de la seguridad jurídica del tráfico de las empresas cooperativas y considerando que ello no compromete ninguna especificidad cooperativa.

En lo que se refiere a la administración y representación de la cooperativa, se mantiene el régimen, con carácter exclusivo, de sus funciones y los efectos de su ejercicio respecto de terceras personas no socias de buena fe en relación con el objeto social; así como su conformación colegiada o unipersonal y la participación limitada de personas no socias para facilitar su profesionalización; las mayorías reforzadas para la adopción de acuerdos de especial trascendencia; el régimen de incapacidades y prohibiciones; y la posibilidad de designar comisiones ejecutivas o nombrar consejeros delegados.

Se han introducido modificaciones graduales o de flexibilización, según acuerdos adoptados por cada cooperativa ajustados a su realidad y necesidades, de aspectos operativos respecto de: la posibilidad de regular estatutariamente un número máximo y mínimo de miembros del órgano colegiado, correspondiendo a la asamblea general fijarlos en cada caso; la elevación hasta una tercera parte el límite de participación de personas no socias en la composición de dicho órgano, propiciando una mayor profesionalidad; la posibilidad de que la función de secretario o secretaria recaiga en profesional no consejero; la posibilidad de cooptar temporalmente mientras no lo nombre la asamblea general, y en ausencia de

suplente, al miembro sustituto del consejero que cesa, por el propio consejo rector; la obligación de motivar la renuncia por los consejeros y regular su calificación por el órgano de administración, procedimiento y efectos; así como la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su funcionamiento, garantizando la efectiva participación; y finalmente, la aclaración del régimen de cómputo de votos siguiendo el mismo criterio que en el supuesto de la asamblea general.

Sin embargo, donde mayores innovaciones se han producido es en la regulación de los deberes de los administradores de diligencia y lealtad y su correlativa responsabilidad, y las acciones para su exigencia, en línea con las actuales tendencias legislativas en la materia en régimen de sociedades. En coherencia con dichas materias se ha regulado también la remuneración, si el cargo fuera retribuido por decisión de la propia cooperativa, residenciando en la asamblea general la competencia para fijar su importe, vinculado en todo caso, a la situación económica de la cooperativa y a la efectiva prestación, y obligando a su carácter transparente.

Se mantiene la regulación de la comisión de vigilancia, por su carácter democrático y de enlace entre el órgano de administración y las reuniones de la asamblea general, sin que sea un obstáculo para la eficiente gestión del órgano a quien corresponde la administración. La modificación ahora introducida se limita a ajustar su composición a su naturaleza societaria, no laboral, así como su función y efectos de la emisión de informe sobre las cuentas de la cooperativa en el caso de concurrencia con auditoria externa.

Respecto del consejo social, se constata la utilidad de dicho órgano en la experiencia del cooperativismo vasco, ampliando la posibilidad de su existencia con carácter potestativo a toda cooperativa independientemente de su dimensión cuantitativa.

El comité de recursos mantiene su organización democrática, naturaleza de autocontrol cooperativa, así como la justificación de su existencia, también potestativa, por razón de eficacia; no variándose los términos de su regulación.

VII.- Régimen económico.

Se aclara y delimita con mayor precisión la responsabilidad, de la sociedad y de las personas socias, frente a terceras personas no socias así como el régimen de imputación de las pérdidas en el seno de la cooperativa, flexibilizando en este caso el límite de la imputación al Fondo de Reserva Obligatorio, al que se imputará como máximo el porcentaje medio de lo destinado a los fondos legalmente obligatorios en los últimos cinco años de excedentes positivos, o desde su constitución si ésta no fuera anterior a dichos cinco años. No obstante, en caso de que el Fondo de Reserva Obligatorio supere el cincuenta por ciento del capital social de la cooperativa, el importe

que exceda de dicho porcentaje se podrá también emplear para compensar las pérdidas.

Se remiten, en cualquier caso, a la normativa concursal los supuestos y efectos de la insolvencia empresarial.

Además, se han introducido sendos ajustes técnicos: uno, ampliando a un año el periodo que dispone la persona socia para hacer frente a las pérdidas que le correspondan, facilitándole el cumplimiento de su obligación para con la cooperativa; y otro, para recoger expresamente la posibilidad no solo de nuevas aportaciones acordadas por la asamblea general sino también de aportaciones ya establecidas al tener fijada la cooperativa un importe mínimo de aportación a capital para mantener la condición de persona socia.

La responsabilidad es limitada, tal y como lo ha sido desde 1993.

Se mantiene la regulación del régimen económico de la cooperativa con las diversas posibilidades de financiación distintas a las aportaciones a capital social previstas en 1993 para facilitar el desarrollo de los proyectos empresariales cooperativos, en correlación con los instrumentos financieros utilizados por las sociedades de capital; si bien se ha optado por prever su existencia en sede cooperativa con carácter general y remitir el desarrollo concreto a su regulación específica.

Siguiendo el espíritu de protección de inversores y consumidores en materia de inversión financiera que vienen recogiendo distintas normas del ordenamiento jurídico, y en particular las reguladoras del sector financiero, se ha introducido en la presente ley un recordatorio sobre la necesidad de que exista una obligación de entregar una información suficiente, clara y comprensible a los consumidores inversores en productos financieros. En el caso de aportaciones financieras subordinadas reguladas en la presente ley que se encuentren sometidas a la autoridad financiera competente, se recuerda que para su suscripción se deberán cumplir con las exigencias vigentes, garantizando información suficiente, clara y comprensible. Obligación de información que deberán observar aquellas entidades que presten servicios de inversión a fin cumplir con los requerimientos de transparencia y rigor informativo a consumidores que deseen adquirir dichos instrumentos financieros.

Respecto del capital social se mantiene su regulación con carácter general, si bien se introducen las siguientes tres variaciones. En primer lugar, una variación operativa para los supuestos de reembolso, posibilitando una retribución mayor al del interés legal del dinero para los casos de no liquidación. En segundo lugar, la identificación de supuestos específicos de los que derive como son los casos de reducción de capital o de la actividad cooperativizada. Finalmente, sendos ajustes técnicos a efectos de mayor seguridad jurídica, exigiendo una modificación estatutaria en el supuesto de transformación obligatoria entre aportaciones con derecho de reembolso y aquellas cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente, por una parte, y, por otra, vinculando, potestativamente por remisión a los estatutos sociales, el rehuso del

reembolso de las aportaciones a un criterio objetivo de carácter económico relacionado con la evolución de la actividad empresarial.

En cuanto a la aplicación de los excedentes respecto al Fondo de Reserva Obligatorio y a la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público, se mantiene la regulación introducida en 2008, en relación a la citada contribución.

VIII.- Documentación social y contabilidad.

En la regulación de la contabilidad de la cooperativa se agrega la referencia al estado de cambios de patrimonio neto y el de flujos de efectivo, en su caso, para acomodarlos a la normativa contable; manteniéndose la regulación en vigor sobre documentación social, auditoría de cuentas y contabilidad, que deberá ajustarse al Plan General de Contabilidad, a las normas contables específicas de las sociedades cooperativas, las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad, así como el resto de normativa contable que le sea de aplicación.

Así mismo, se han especificado diversos extremos de carácter técnico, en consonancia con la legislación mercantil general, como son, de un lado, la definición del marco normativo de información financiera que debe aplicar una cooperativa en la formulación de las cuentas anuales y, de otro, la determinación de un plazo desde el cierre del ejercicio para formular las cuentas anuales por el órgano de gobierno de la cooperativa.

Otros aspectos como la definición del contenido del informe de gestión en los términos del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se entiende innecesario en cuanto que se considera subsumido en la remisión que se realiza a la legislación mercantil. Sucede algo similar con la especificación del plazo para la aprobación de las cuentas anuales por la asamblea general, por la aplicación del artículo 34 en relación con el artículo 35.1 de la ley.

Por el contrario, sí conviene aclarar cuando una cooperativa está obligada a auditar por razón del tamaño.

IX.- Modificación de estatutos, fusión y escisión de cooperativas.

En materia de modificación, fusión y escisión, además de aspectos técnicos de carácter operativo, se introduce la previsión expresa, respecto de fusiones especiales, de la posibilidad de que las sociedades cooperativas se fusionen con cualquier otro tipo societario, civil o mercantil, siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente, como ya estaba fijado como criterio. En línea con las

modificaciones propuestas para el supuesto de transformación de cooperativa, se prevé el mismo tratamiento para los fondos contemplados en el artículo 89.4, cuando se trate de la fusión de una sociedad cooperativa por una sociedad no cooperativa.

En el mismo sentido, se regulan expresamente no sólo las fusiones especiales en los términos mencionados, sino también la escisión o segregación de una sociedad cooperativa en favor de una entidad no cooperativa; posibilidad que en la práctica cooperativa se ha advertido necesaria, por lo que la norma societaria debe posibilitarlo, como sucede en la legislación cooperativa autonómica y en la normativa mercantil.

Permanecen inalteradas las diversas innovaciones instauradas en 1993 respecto de la modificación de los estatutos: su publicidad, el derecho de las personas socias a examinar y obtener la documentación y la publicidad especial, o el derecho de las personas socias a causar baja justificada; la fusión, la necesidad del previo acuerdo, los plazos y cautelas para su realización, la publicidad reforzada, el derecho de información de las personas socias y de los acreedores o el mecanismo para inscripción y efectos para las cooperativas implicadas; así como respecto de la escisión, los supuestos en que puede producirse, la exigencia de un proyecto suscrito por los administradores de las cooperativas participantes o estableciéndose la responsabilidad solidaria y limitada de las Sociedades beneficiarias de la escisión.

X.- Transformación.

Los procesos de reestructuración societaria a través de las vías reconversoras de tipos societarios, que cautelan la desnaturalización de la esencia cooperativista de las cooperativas intervinientes a la vez que aprovechan las técnicas normativas del Derecho de Sociedades, se mantienen formuladas en los términos legales vigentes, excepto en lo que afecta a la intervención del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en el proceso transformador y, en su caso, a la intervención de la Comisión de Vigilancia en el mismo.

En este sentido, en línea con la regulación de las distintas leyes autonómicas sobre cooperativas al respecto se ha revisado la causa y finalidad de la función de homologación atribuida al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, así como el carácter y cuantía del patrimonio que se debe acreditar a dicho órgano como cuentas en participación.

De su resultado deriva una nueva opción legislativa que elimina, como requisito para la transformación, la homologación referida, por entender que si bien la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi fue pionera en regular la transformación de la sociedad cooperativa, la condicionó a determinados requisitos que con el paso de tiempo han devenido en excesivos como cautelas. Así, además de sustituir la homologación por información al mencionado órgano, se flexibiliza el modo operativo

de transferencia de los fondos irrepartibles al mismo; se aclara que no integran el patrimonio cooperativo a retener dentro del movimiento cooperativo para su fomento, aquellas reservas finalistas que se hallen sujetas a aplicaciones concretas; y por otra parte, se ajusta el valor real de dichos fondos en relación con las pérdidas afloradas en el balance pendientes de compensar, como posibles minusvalías sobre los elementos del activo derivadas de informe de experto independiente.

Así mismo, sobre la previsión de posible intervención de la comisión de vigilancia, es una previsión legal que desde su regulación ha resultado inédita, por lo que en aras a una técnica normativa adecuada se considera conveniente su eliminación.

XI.- Disolución y liquidación.

La regulación de las causas de disolución, con la única novedad de la necesaria acomodación a la actual regulación concursal, de la que deriva del supuesto de insolvencia, así como la posibilidad de reactivación se mantiene inalterada.

Por el contrario, el régimen legal de los liquidadores varía significativamente respecto de la anterior regulación en que era necesario ostentar la condición de persona socia para ser nombrada liquidadora, pudiendo ahora ser nombrada quien no tenga tal condición, para supuestos especiales de cooperativas totalmente desestructuradas, con falta de personas socias, incapacidad o negativa de las mismas, y a efectos de posibilitar la liquidación y extinción ordenadas de la sociedad. En el mismo sentido, se faculta a la asamblea general la determinación de su régimen de funcionamiento aplicable.

Por su parte, la adjudicación del haber social y publicidad de la aprobación del balance final y del proyecto de distribución continúan con su regulación originaria, si bien se incluye, a efectos de seguridad jurídica, un plazo de impugnación específico, similar al establecido en el derecho cooperativo comparado, con los efectos anudados al mismo.

Finalmente, en el régimen de cancelación registral se ha flexibilizado, como pura cuestión formal, la posibilidad de conservación de los libros y demás documentación cooperativa durante el período de seis años por los propios liquidadores.

XII.- Clases de cooperativas.

Con carácter general, la clasificación de las cooperativas sigue teniendo naturaleza abierta en función del objeto y la posición jurídica de las personas socias, siendo de aplicación prioritaria las reglas especiales de cada clase de cooperativa sobre las normas generales que las integran en lo no regulado específicamente.

En las cooperativas de trabajo asociado se mantiene su capacidad de determinar autogestionariamente el régimen de trabajo, que podrá establecerse también en reglamento de régimen interno, y el disciplinario; recalándose su naturaleza societaria y no laboral, aunque se mantiene la previsión de un anticipo laboral mínimo. Respecto de las personas trabajadoras por cuenta ajena, se recalca expresamente la finalidad de la cooperativa de proporcionar empleo a las personas socias trabajadoras, por ser esa la finalidad fundacional de las cooperativas de trabajo asociado, sin perjuicio de mantener la posibilidad de contratar personas trabajadoras por cuenta ajena, cuando las circunstancias de la empresa cooperativa así lo requieran, elevándose el límite de la contratación al treinta por ciento respecto de las personas socias trabajadoras, en cómputo de horas/año, por razones operativas.

De la base para el cómputo del referido límite se exceptúan determinados supuestos específicos que se han incrementado, dada la experiencia acumulada que evidencia la necesidad de extenderlo a supuestos de discapacidad, contratos en prácticas y para la formación o los contratados por cualquier contrato por cooperativas educativas con finalidad de integración, conciliación familiar o supuestos de personas trabajadoras contratadas para ser puestos a disposición de empresas usuarias cuando la cooperativa actúe como empresa de trabajo temporal. En el procedimiento para el acceso a la condición de persona socia se ajusta el período de tiempo de antigüedad como trabajador asalariado y se evita el acceso automático, debiendo solicitarlo expresamente en el plazo de doce meses, en aras de la seguridad jurídica.

Así mismo, la cooperativa que opte por encuadrar a sus personas socias trabajadoras en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, puede asumir de forma expresa en sus estatutos el compromiso de abono a la Seguridad Social de cuotas de la persona trabajadora, facilitando el cumplimiento de las obligaciones societarias, sin perjuicio del sometimiento a normativa sectorial correspondiente, adquiriendo rango legal la regulación reglamentaria que lo había previsto. Se deja constancia que tales pagos, en dicho supuesto, no forman parte del anticipo laboral y tienen la consideración de partida deducible para la determinación del excedente neto.

Sendas matizaciones expresas se han considerado necesarias realizar, con carácter meramente aclaratorio: el régimen a tiempo parcial o completo de las personas socias que prestan su trabajo en la cooperativa y la aplicación de las normas generales de prevención de riesgos laborales, adecuando la nomenclatura anterior de seguridad e higiene en el trabajo.

También en las cooperativas agrarias y alimentarias se realizan determinados ajustes, además del de la propia denominación, relativos a la realización de labores agrarias para las personas socias en sustitución temporal de los mismos, con sus propios medios personales así como aclarar la situación jurídica de las personas socias que sean entidades de titularidad compartida o cualquier entidad sin personalidad jurídica, frecuente en el sector, así como su relación con la cooperativa, a efectos de seguridad jurídica. Con ello se pretende ofrecer una respuesta más adecuada a la concepción

comunitaria ya prevista respecto de este tipo de cooperativa como entidad al servicio del medio rural, con un claro componente de responsabilidad social comunitaria. En el mismo sentido, respecto de las operaciones con terceras personas no socias, se pretende cohonestar su regulación, limitada mayoritariamente a las personas socias, de tal forma que si lo prevén los estatutos el porcentaje máximo en cada ejercicio económico podrá llegar hasta el cuarenta y nueve por ciento , con las disposiciones comunitarias sectoriales específicas, que en cada caso existieren, que procuran integrar en explotaciones agrarias la producción de terceras personas no socias, y a los que la cooperativa agraria y alimentaria quiera adherirse, superando dicho porcentaje.

Por lo demás, en la tipología clasificatoria cooperativa donde más se ha innovado es respecto de las cooperativas de viviendas, de transporte y las denominadas junior cooperativas.

En efecto, respecto de las cooperativas de viviendas, manteniendo la estructura básica de diseño legislativo del cooperativismo de viviendas regulado actualmente y compartido con el resto de la legislación autonómica y estatal respecto de este tipo de cooperativas, con la modificación se trata de asegurar que las decisiones básicas de la construcción y gestión se adopten por los propios cooperativistas, democráticamente, desde su constitución. Y ello con independencia de que por la profesionalidad que requiere la promoción inmobiliaria y dada la forma de unirse las personas socias de la cooperativa (personas socias que se desconocen entre sí habitualmente) y su cuantía, sea necesaria la contratación de una entidad gestora que asesore sobre la construcción y financiación de la cooperativa.

Ha de asegurarse además, en todo caso, la información y transparencia de todas las operaciones, delegadas o no, de gestión.

Asimismo, se permiten las operaciones con terceras personas no socias, hasta un límite del treinta por ciento, respecto de las viviendas, en coherencia con la regulación existente para las otras clases de cooperativas reguladas por la Ley 4/1993. Esta limitación lo será con independencia de posibles actuaciones de realojo.

Se mantiene la obligatoriedad de la auditoría de cuentas y se introduce la del letrado o letrada asesora que asegure el referido objetivo de participación efectiva y gestión democrática al precisar de su dictamen respecto de las operaciones jurídico-económicas fundamentales.

Por otra parte, por la concurrencia con la normativa sobre edificación y en su caso, de promoción de viviendas de protección pública, la regulación legal deberá ser desarrollada reglamentariamente.

En cualquier caso, se dispone que la normativa reguladora de viviendas de protección pública será de aplicación prioritaria respecto de la regulación cooperativa; la cual a su vez, establece diversas especificidades respecto de la promoción privada de viviendas, acomodadas a su naturaleza y aspectos procedimentales.

Ha de destacarse por otra parte, la regulación precisa, que mejora sustantivamente la mera posibilidad sugerida en la norma derogada, de las cooperativa de viviendas de cesión de uso, como alternativa a la adjudicación en propiedad.

Finalmente, cabe mencionar en relación con la responsabilidad de las personas socias, la regulación de su carácter mancomunado simple, referido además de a sus aportaciones a capital, a las cantidades entregadas para la edificación y las entregadas para cubrir el precio de adjudicación de la vivienda o local.

Por su parte, respecto de las cooperativas de transporte, se prevé expresamente su constitución como cooperativa de servicios, en línea con lo que ya se preveía en la regulación de las cooperativas de servicios empresariales, o como cooperativas de trabajo asociado. En todo caso, la regulación propuesta pretende mantener una estructura y un régimen jurídico diferenciados, de forma que no se produzca una mixtificación de ambos con los problemas de aplicación y conflictividad que en la práctica se han evidenciado. Todo ello sin perjuicio de la integración de clases de cooperativas que con carácter general, se reconoce; pero que en todo caso, deberá atenerse a una regulación concreta estatutaria que garantice la identidad cooperativa de la sociedad cooperativa de transporte integrada.

Las cooperativas junior son un nuevo tipo de cooperativa que merece identificación y regulación específicas, definido por la finalidad del contrato societario que es de carácter educativo: la adquisición de conocimientos exigidos por una titulación académica a través de la constitución y puesta en marcha de una cooperativa. Ello implica el carácter temporal limitado de la sociedad y su transformación, en su caso, en una cooperativa ordinaria.

Finalmente, las cooperativas de enseñanza mantienen su configuración jurídica, con su triple modalidad y regulación flexible autonormada, además de la posibilidad de personas socias de naturaleza o utilidad públicas, con la única modificación de que cuando asocien a profesores y personal no docente se les aplicará las normas reguladoras de las cooperativas de trabajo asociado excepto lo regulado por el artículo 31. Dicha excepción se justifica por las singulares características de esta clase de cooperativas, que desarrollan proyectos educativos y donde predomina el aspecto social, -se trata de entidades que han sido declaradas de utilidad pública en su práctica totalidad, sin ánimo de lucro-, que hacen que los aspectos de la prestación de trabajo en ellas desarrollado revistan también especificidades propias, no asimilables en su totalidad, al menos en el momento actual de evolución empresarial de este tipo de cooperativas, al prestado por las personas socias trabajadoras o de trabajo en otras clases de cooperativas.

La regulación del resto de las clases de cooperativas no ha sido objeto de alteración normativa, por modificación de la existente o por complemento o agregación. Así, las cooperativas de consumo, que mantienen el régimen abierto de operaciones con personas no socias; las cooperativas de servicios, profesionales o empresariales, como entidades de coordinación, centro societario común; las cooperativas financieras, cuya regulación básica corresponde al estado; así como las aún en la práctica inéditas

cooperativas sanitarias, como opción societaria cooperativa de futuro; o las cooperativas de carácter comunitario, y las de integración social.

XIII.- Integración y agrupación cooperativa

La configuración dada a las cooperativas de segundo o de ulterior grado ha supuesto un cauce normativo realista para los fenómenos de agrupación intercooperativa necesitados de un marco para una colaboración empresarial efectiva con estructura genuinamente cooperativa y con el grado de integración autorregulado por los intervinientes en el mismo, no solo cooperativas, aunque sí mayoritariamente.

De idéntica forma, respecto de otras modalidades de colaboración económica de carácter más instrumental, la posibilidad de participar en instrumentos y vínculos contractuales o personificados, como para incorporarse a los ya constituidos, reconocida jurídicamente y aplicada en la práctica, continúa regulada en los términos más amplios posibles, para ajustarse a las necesidades reales y coyunturales de las cooperativas intervinientes.

Por ello se ha estimado conveniente, en este momento de evolución del desarrollo cooperativo, suprimir la concreta regulación de las denominadas corporaciones cooperativas, basado en la aplicación de un sistema dualista de administración, que ha demostrado su utilidad, pero que actualmente puede resultar constrictivo o innecesario.

Por el contrario, y para dotarle de mayor seguridad jurídica, se ha incorporado a nivel legal el desarrollo reglamentario de los grupos cooperativos, por consistir en un instrumento de intercooperación singularmente adecuado para poder intervenir eficazmente en los mercados.

Por último, respecto de las cooperativas mixtas, calificación que puede atribuirse a cualquier clase de las reguladas por la Ley, su regulación constituyó una importante innovación incorporada en 1993 que ha sido desarrollada posteriormente de forma reglamentaria, con la finalidad de facilitar la financiación de proyectos empresariales cooperativos.

XIV.- Las cooperativas y la administración.

Los dos aspectos en que se manifiesta y justifica la actividad administrativa en materia de cooperativas corresponden a la actividad de fomento, por una parte y de garante del cumplimiento de la legalidad cooperativa, por otra.

En el primero de dichos ámbitos, además de complementar determinados aspectos sectoriales de colaboración público privado, añadidos a los ya previstos respecto de las

cooperativas de trabajo asociado, consumo, agrarias y alimentarias o de viviendas, como son los relativos a la materia educativa, desarrollo rural, dependencia e integración social, se incide en la representatividad institucional del movimiento cooperativo propiciando la presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y decisión y organismos de representación institucional correspondientes; en sintonía con los alineamientos de la Ley 5/2011, de Economía Social.

En el segundo de los referidos ámbitos de actividad administrativa, se suscita en el momento actual de desarrollo de las cooperativas vascas, la necesidad de innovar aspectos que han quedado en cierta manera obsoletos. Uno de ellos, importante por el papel que desempeña la Administración de “policía”, es el referido a las infracciones, con la correspondiente función de inspección, y sanciones, por contravenir la legislación cooperativa sustantiva vasca.

Con este objetivo, se preveía en 1993 la necesidad de regular un procedimiento sancionador específico que, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha producido.

Cuanto antecede exige abordar el régimen de infracciones y sanciones actualmente previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley 4/1993, no ya para su desarrollo, sino para su revisión, como política legislativa en esta materia, después de la prolongada vigencia de la Ley 4/1993; sobre todo, teniendo en cuenta la evolución empresarial y societaria de las cooperativas vascas durante dicho período, por una parte y por otra, que la actual tipificación de infracciones y correspondientes sanciones, es tributaria de una regulación anclada en una visión de tutela y supervisión administrativas que se entiende necesario revisar.

Se considera que el papel de la Administración ha de focalizarse a lo fundamental cooperativo (participación –ejercicio real de la democracia cooperativa: participación de las personas socias, adopción de acuerdos- y solidaridad –fondos irrepartibles, aplicaciones); desprendiéndose de otros aspectos puramente formales u operativos, comunes por otra parte con el resto de sociedades que operan en el mercado, que no se hallen vinculados directamente con aquellas cuestiones que son sustanciales de la cooperativa y la hacen diferente del resto de sociedades. Es decir, aquellas aspectos que hacen a este tipo de empresas de “interés social” que es lo que legitima la intervención pública.

XV.- Asociacionismo cooperativo.

Se mantiene la regulación de mínimos, en aras de la libertad asociativa, de las asociaciones de cooperativas y del llamamiento a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que fomenten las relaciones intercooperativas, así como los criterios de reconocimiento de representatividad y su reflejo nominal.

Únicamente se acomoda, por adaptación del grado de desarrollo asociativo del cooperativismo vasco, el número mínimo de la clase de cooperativas para que su federación pueda incluir en su denominación “de Euskadi”. A su vez, se agrega la especificación de las obligaciones contables y de auditoría de cuentas y se completa por otra parte, el régimen de fuentes de derecho aplicables a uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, a efectos de seguridad jurídica.

En relación con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, se aclara en sede legal la necesidad de formular sus cuentas anuales de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

El resto de los aspectos orgánicos, presencia del Gobierno Vasco, de las entidades de integración asociativa cooperativa, a través de su confederación y de las universidades del País Vasco permanece inalterada, así como sus funciones. Se agrega respecto de la función arbitral, la obligación de agotar la vía cooperativa interna regulada estatutariamente, en los supuestos de conflicto de la cooperativa con sus personas socias, como una manifestación de la autocomposición de intereses sin perjuicio del acceso posterior a la vía arbitral, en otro caso.

XVI.- Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales.

Entre las disposiciones de cierre de la norma cabe destacar la disposición adicional sexta sobre igualdad de género en los órganos de las sociedades cooperativas, sin distinción de su clase, que pretende la composición equilibrada de los mismos, cualesquiera que estos sean.

En el mismo sentido, procede mencionar las siguientes disposiciones adicional y final:

- La disposición adicional octava, sobre la adopción de acuerdos sobre previsión social.
- la disposición final tercera, que pretende equiparar las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública con las cooperativas que tengan declarado tal carácter, en relación con los actos de disposición gratuita sobre bienes o derechos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi. Así mismo, y con los mismos fines, a favor de sociedades cooperativas de viviendas declaradas de utilidad pública en el caso de terrenos destinados a la construcción de viviendas para las personas socias.

TÍTULO I DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Concepto.

1.- La cooperativa es aquella sociedad que desarrolla una empresa que tiene por objeto prioritario la promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos, observando los principios del cooperativismo y atendiendo a la comunidad de su entorno.

2.- La cooperativa deberá ajustar su estructura y funcionamiento a los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, que serán aplicados en el marco de la presente ley.

Dentro de ésta actuará con plena autonomía e independencia respecto de cualesquiera organizaciones y entidades, públicas o privadas.

3.- Las cooperativas pueden realizar cualquier actividad económica o social, salvo expresa prohibición legal basada en la incompatibilidad con las exigencias y principios básicos del cooperativismo.

Artículo 2.- Denominación.

1.- Las cooperativas incluirán necesariamente en su denominación las palabras «Sociedad Cooperativa» o su abreviatura «S. Coop.».

2.- No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente. Reglamentariamente podrán establecerse requisitos adicionales para formar la denominación social válida.

3.- Ninguna otra entidad, sea cual fuere su clase y naturaleza, pública o privada, podrá utilizar el término «Cooperativa», o la abreviatura «Coop.», salvo que una disposición le obligue o le autorice expresamente a ello.

Artículo 3.- Domicilio social.

La cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus personas socias o donde centralice la gestión administrativa y la dirección empresarial.

Artículo 4.- Capital social mínimo.

El capital social mínimo no será inferior a tres mil euros (3.000 €) y se expresará en esta moneda. En la cuantía correspondiente a dicho mínimo legal, el capital deberá hallarse íntegramente desembolsado desde la constitución de la cooperativa.

Artículo 5.- Operaciones con terceras personas no socias.

1.- Las cooperativas podrán realizar su actividad cooperativa con personas que no tengan la condición de socias sin más limitaciones que las establecidas por la Ley y los estatutos.

2.- Cuando por circunstancias no imputables a la cooperativa las operaciones de ésta con sus personas socias y con personas que no tengan la condición de socias, dentro de los supuestos o límites legales, supongan una disminución o deterioro de la actividad empresarial que ponga en peligro la viabilidad económica de la cooperativa, ésta podrá ser autorizada para iniciar o aumentar actividades y servicios con terceras personas no socias por el plazo y hasta la cuantía que fije la autorización, en función de las circunstancias que concurren. La citada autorización se entenderá concedida si en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud no resuelve expresamente el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo.

3.- En todo caso, las cooperativas de crédito y las de seguros habrán de cumplir en sus operaciones con personas que no tengan la condición de socias los requisitos y limitaciones de la regulación aplicable a su respectiva actividad financiera y aseguradora.

Artículo 6.- Secciones.

1.- Los estatutos podrán regular la existencia y el funcionamiento de secciones que desarrollen dentro del objeto social, actividades económico-sociales específicas con autonomía de gestión, sin perjuicio de la responsabilidad general y unitaria de la cooperativa. En todo caso será necesario que lleven contabilidad independiente, sin perjuicio de la general que corresponde a la cooperativa.

2.- En los estatutos se definirán:

- a) Las áreas o actividades afectadas por la inclusión dentro de la Sección.
- b) La duración prevista para el funcionamiento diferenciado de la Sección, en caso de ser dicha duración limitada.
- c) Los criterios para definir la asignación patrimonial que corresponda a dicha Sección.
- d) En su caso, los criterios de contabilización diferenciada que procedan.
- e) Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán, en su caso, para la distribución diferenciada de excedentes positivos y negativos en

la Sección que se constituye.

f) El régimen orgánico y su relación con los administradores de la cooperativa.

3.- En su caso, los estatutos podrán limitar el porcentaje de los excedentes sujeto a distribución diferenciada por Secciones.

4.- La regulación de la respectiva Sección podrá también establecer políticas diferenciadas a efectos de intereses del capital, anticipos laborales o precios de las operaciones con las personas socias.

5.- La asamblea general podrá acordar la suspensión inmediata de los acuerdos de la junta de personas socias de una sección, haciendo constar los motivos por los que los considera ilegales, antiestatutarios o contrarios al interés general de la cooperativa. Sin perjuicio de ello, tales acuerdos podrán ser impugnados según lo previsto en el artículo 41 de la presente ley.

La existencia de una o varias secciones no altera el régimen de facultades propias de los administradores, aunque puedan designarse directores o apoderados de la sección encargados del giro y tráfico de la misma. Los administradores de la cooperativa podrán acordar la suspensión inmediata de los acuerdos de la sección, en términos equivalentes a lo previsto para los acuerdos de la junta de personas socias.

Los estatutos o el reglamento de régimen interno regularán la relación entre la junta de personas socias de una sección y los administradores de la cooperativa.

6.- Se exigirá auditoría de cuentas a las cooperativas con sección de crédito o con secciones de otro tipo, en defensa de quienes contraten con las mismas.

CAPÍTULO II

CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA

Artículo 7.- La asamblea constituyente.

1.- La asamblea constituyente, integrada por las personas promotoras, aprobará los estatutos de la cooperativa y adoptará los demás acuerdos que sean necesarios para la constitución de la misma.

Las personas promotoras deberán reunir los requisitos exigidos para adquirir la condición de persona socia de la cooperativa de la clase de que se trate.

2.- Los cargos de presidencia y secretaría de la asamblea constituyente serán elegidos entre las personas promotoras asistentes.

3.- El acta de la asamblea constituyente deberá expresar, al menos, el lugar y fecha de la reunión, la lista de asistentes, un resumen de las deliberaciones, los resultados de las votaciones, y el texto de los acuerdos adoptados.

4.- La certificación del acta será expedida por la persona promotora que ejerza las funciones de secretaria de la asamblea constituyente, con el visto bueno de la presidencia de la misma.

Artículo 8.- La cooperativa en constitución.

1.- Las personas promotoras de la cooperativa en constitución, o las personas gestoras designadas de entre aquéllas en la asamblea constituyente, celebrarán, en nombre de la sociedad, los actos y contratos indispensables para su constitución, así como los que la asamblea constituyente les encomiende expresamente. También estarán habilitadas para actuar en nombre de la sociedad durante esta fase las personas designadas y con mandato específico para ello.

2.- De los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi responderán solidariamente quienes los hubiesen celebrado, salvo que su eficacia hubiese quedado condicionada a la inscripción y, en su caso, a la posterior asunción de los mismos por parte de la cooperativa.

3.- De los actos y contratos descritos en el número 1 de este artículo responderá la Sociedad en constitución con el patrimonio formado por las aportaciones de las personas socias. Las personas socias responderán personalmente hasta el límite de las aportaciones que se hubiesen obligado a desembolsar.

4.- Inscrita la cooperativa, ésta quedará obligada por los actos y contratos a que se refiere el apartado precedente. También quedará obligada por aquellos actos y contratos que acepte dentro del plazo de tres meses desde su inscripción. En ambos supuestos cesará la responsabilidad solidaria de las personas promotoras, gestoras o mandatarias.

5.- En el supuesto de que el valor del patrimonio social, sumado el importe de los gastos indispensables para la inscripción de la cooperativa, fuese inferior a la cifra del capital social, las personas socias estarán obligadas a cubrir la diferencia.

6.- Hasta que no se produzca la inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi la sociedad deberá añadir a su denominación las palabras «en constitución».

Artículo 9.- Calificación previa del proyecto de estatutos.

1.- Las personas gestoras, salvo acuerdo en contrario de la asamblea constituyente, podrán solicitar del Registro de Cooperativas de Euskadi, que deberá resolver en el plazo de treinta días desde la solicitud, la calificación previa del proyecto de estatutos,

anticipadamente al otorgamiento de la escritura de constitución.

2.- Si el Registro de Cooperativas de Euskadi apreciara defectos subsanables, los comunicará a las personas gestoras, quienes estarán autorizadas, salvo acuerdo en contrario de la asamblea constituyente, para subsanarlos en el plazo de un mes.

Artículo 10.- Cooperativa irregular.

1.- Verificada la voluntad de no inscribir la sociedad en el Registro de Cooperativas de Euskadi y, en cualquier caso, transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin que se haya solicitado su inscripción, cualquier persona socia podrá instar la disolución de la cooperativa en constitución y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la restitución de sus aportaciones.

2.- En tales circunstancias, si la cooperativa ha iniciado o continúa sus operaciones se aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la sociedad civil. El número 4 del artículo 8 no será aplicable a la posterior inscripción de la cooperativa.

Artículo 11.- Constitución.

1.- La cooperativa se constituirá mediante escritura pública, que deberá otorgarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la asamblea constituyente o, en su caso, desde su calificación previa del proyecto de estatutos sociales, y se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Euskadi, en cuyo momento adquirirá personalidad jurídica.

2.- La inscripción de la escritura de constitución y la de todos los demás actos relativos a la cooperativa podrán practicarse previa justificación de que ha sido solicitada o realizada la liquidación de los impuestos correspondientes al acto inscribible.

Artículo 12.- Escritura de constitución.

1.- La escritura pública de constitución, salvo que sea otorgada por la totalidad de las personas promotoras, deberá serlo por las personas designadas en la asamblea constituyente, con sujeción a los acuerdos adoptados por la misma.

2.- La escritura pública de constitución, que incluirá, en su caso, el acta de la asamblea constituyente, deberá contener los siguientes extremos:

- a) Los nombres, apellidos, edad, profesión y estado civil, de las personas otorgantes y personas promotoras, si éstas fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fuesen personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad, el domicilio y la clase de persona socia.
- b) La voluntad de fundar una cooperativa de la clase de que se trate.

- c) Manifestación de las personas otorgantes de que cada una de las personas promotoras ha desembolsado, al menos, el veinticinco por ciento de la aportación obligatoria mínima para ser persona socia fijada por los estatutos, o, en su caso, la fracción superior necesaria para cubrir el capital mínimo fijado en el artículo 4, y, en su caso, la forma y plazos en que se deberá desembolsar el resto de dicha aportación, si se hubiere diferido.
- d) Los estatutos sociales.
- e) Los nombres, apellidos, profesión y edad de las personas físicas, o la denominación o razón social si fueran personas jurídicas, designadas para ocupar los cargos de los órganos sociales necesarios y, en ambos supuestos, su nacionalidad y domicilio y, en su caso, los datos correspondientes de los auditores de cuentas.
- f) Declaración de que no existe otra cooperativa con idéntica denominación, adjuntándose para su incorporación al instrumento público las certificaciones originales sobre denominación no coincidente expedidas por el Registro de Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por el Registro de Cooperativas de Euskadi.
- g) Valor asignado a las aportaciones no dinerarias, si las hubiese, con descripción suficiente de las mismas y detalle de las que realice o se obligue a realizar cada una de las personas promotoras.
- h) La cuantía aproximada de los gastos de constitución de la cooperativa, tanto de los efectuados como de los que se hayan previsto hasta que aquélla quede inscrita.

3.- En la escritura pública de constitución podrán incluirse además todos los pactos y condiciones que las personas promotoras hubiesen acordado en la asamblea constituyente, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad cooperativa.

Artículo 13.- Contenido mínimo de los estatutos.

1.- Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la cooperativa harán constar como mínimo los siguientes extremos:

- a) La denominación de la misma.
- b) El domicilio social.
- c) La actividad que constituya su objeto social.
- d) Su duración.
- e) Ámbito territorial de la actividad cooperativa principal.
- f) Requisitos para la admisión y la baja de las personas socias.
- g) Derechos y obligaciones de las personas socias, indicando el compromiso o la participación mínima de aquellas en las actividades de la cooperativa.

- h) Normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimientos sancionadores y recursos.
- i) Capital social mínimo de la cooperativa y determinación de la aportación obligatoria inicial de las distintas personas socias que tenga la sociedad.
- j) Reembolso de las aportaciones de las personas socias, así como el régimen de transmisión de las mismas.
- k) Criterios de distribución de excedentes, con determinación de los porcentajes mínimos a destinar al Fondo de Reserva Obligatorio y a la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público.
- l) Forma de publicidad y plazo para convocar la asamblea general, ordinaria o extraordinaria, en primera o segunda convocatoria, o bien en tercera convocatoria para el caso de las cooperativas de consumo, enseñanza y agrarias y alimentarias, así como el régimen de adopción de acuerdos, tal como se recoge en el artículo 36 apartados 2 y 3 de esta Ley.
- m) La estructura del órgano al que se confía la administración de la cooperativa, así como su régimen de actuación.
- n) Composición y funciones, si fuesen preceptivos o se prevean estatutariamente, de la comisión de vigilancia y, en su caso, del comité de recursos y del consejo social.
- o) Causas de disolución de la cooperativa.
- p) Los demás supuestos obligatorios en aplicación de la presente Ley.

2.- Los estatutos podrán ser desarrollados mediante reglamentos de régimen interno.

Artículo 14.- Nulidad de la cooperativa.

Una vez inscrita la cooperativa, la acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por las causas y con los efectos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, con la salvedad de que la concurrencia en el acto constitutivo de la voluntad efectiva de dos personas socias fundadoras queda sustituida por la del número mínimo de personas socias establecido por la presente Ley.

CAPÍTULO III REGISTRO DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

Artículo 15.- Organización.

El Registro de Cooperativas de Euskadi es un registro jurídico, con estructura orgánica unitaria, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo.

Artículo 16.- Eficacia del registro.

1.- La eficacia del registro está definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

2.- La inscripción de la constitución, fusión, escisión, disolución y reactivación de las cooperativas, así como la de transformación en sociedades de esta naturaleza, tendrá carácter constitutivo, considerándose como fecha de inscripción la fecha de presentación de la documentación. En los demás casos será declarativo.

3.- El Registro de Cooperativas de Euskadi promoverá, en sus relaciones con los ciudadanos y con las entidades interesadas en acceder al mismo, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a los efectos de facilitar dichas relaciones, especialmente la inscripción y depósito de los actos sujetos al mismo, así como la resolución de consultas y expedición de certificados.

Artículo 17. Funciones.

El Registro de Cooperativas de Euskadi tendrá las siguientes funciones:

- a) Calificar, inscribir y certificar los actos que según la normativa vigente deban acceder a dicho Registro, que se refieran a cooperativas de primero, segundo o ulterior grado, a uniones y federaciones de cooperativas, a asociaciones de dichas federaciones o a otras entidades jurídicas que agrupen mayoritariamente a cooperativas reguladas en la presente ley.
- b) Habilitar y legalizar los libros obligatorios.
- c) Recibir el depósito de las cuentas anuales y la certificación de los acuerdos correspondientes de las cooperativas a que se refiere el apartado a), limitándose a calificar si los documentos presentados son los exigidos por la ley, si están debidamente aprobados por la asamblea general y si constan las preceptivas firmas.
- d) Expedir certificaciones sobre la denominación de las entidades cooperativas.
- e) Resolver las consultas que sean de su competencia.
- f) Cualquier otra atribuida por esta ley o por sus normas de desarrollo.

Artículo 18. Normas supletorias.

1.- En cuanto a plazos, personación en el expediente, representación y demás materias formales referidas al Registro de Cooperativas de Euskadi no reguladas expresamente en esta ley o en sus normas de desarrollo, serán de aplicación las normas del procedimiento administrativo.

2.- La demanda judicial contra actos dictados en aplicación del derecho sustantivo cooperativo se interpondrá ante los Juzgados y Tribunales Mercantiles, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial y normativa procesal aplicable.

CAPÍTULO IV DE LAS PERSONAS SOCIAS

Artículo 19.- Personas que pueden ser socios o socias.

1.- Pueden ser socios o socias de las cooperativas de primer grado tanto las personas físicas como las jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en el Título II de la presente Ley.

En las cooperativas de segundo o ulterior grado se estará a lo dispuesto en el artículo 136.

En el momento de la constitución, las cooperativas de primer grado habrán de estar integradas, al menos, por tres personas socias de la clase de la cooperativa que se constituye. Las de segundo o ulterior grado deberán contar entre sus personas socias fundadoras con dos sociedades cooperativas como mínimo.

2.- Las personas socias de las cooperativas se encuadrarán en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Personas socias cooperadoras.
- b) Personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia.
- c) Personas socias colaboradoras.
- d) En las cooperativas mixtas, las personas socias titulares de partes sociales con voto.

3.- Son personas socias cooperadoras, las personas físicas o jurídicas cuya condición de persona socia está directamente relacionada con la participación efectiva en la actividad de la cooperativa, sea como trabajador o trabajadora, o como usuario o usuaria.

4.- Son personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia las así consideradas en el artículo 31 de esta Ley.

5.- Podrán adquirir la condición de personas socias, que se denominarán colaboradoras, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en la consecución del mismo. Sus derechos y obligaciones se regularán por lo dispuesto en los estatutos, y, en lo no previsto por éstos, por lo pactado entre las partes. El conjunto de estas personas socias, salvo que sean sociedades cooperativas, no

podrá ser titular de más de un tercio de los votos, ni en la asamblea general ni en el consejo rector.

Las personas socias colaboradoras, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tendrán derecho a participar en los resultados de la cooperativa, si así lo prevén expresamente los estatutos o bien lo acuerda la asamblea general y el consejo rector lo formaliza de forma expresa.

Las personas socias colaboradoras tendrán la consideración de personas socias cooperadoras exclusivamente en relación a las cooperativas mixtas.

6.- Son titulares de partes sociales con voto las personas socias minoritarias en las cooperativas mixtas.

7.- Los entes públicos con personalidad jurídica podrán ser personas socias cuando el objeto de la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades relacionadas con las encomendadas a dichos entes, siempre que tales prestaciones no supongan ni requieran el ejercicio de autoridad pública.

Artículo 20.- Admisión.

1.- Los estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de persona socia de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

2.- La aceptación o la denegación de la admisión no podrán producirse por causas que supongan una discriminación arbitraria o ilícita, en relación con el objeto social.

3.- La solicitud de admisión se formulará por escrito a los administradores, que resolverán en un plazo no superior a sesenta días a contar desde la recepción de aquélla, debiendo ser motivada la decisión desfavorable a la admisión. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá aprobada la admisión.

4.- Denegada la admisión, la persona solicitante podrá recurrir ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general, en el plazo de veinte días desde la notificación de la decisión denegatoria.

El recurso deberá ser resuelto por el comité de recursos en el plazo de treinta días o, en su caso, por la primera asamblea general que se celebre mediante votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.

5.- El acuerdo de admisión podrá ser recurrido ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la primera asamblea general que se celebre, a instancia del número de personas socias que fijen los estatutos, que deberán establecer el plazo para recurrir, el cual no podrá ser superior a veinte días desde la notificación del acuerdo de admisión.

La adquisición de la condición de persona socia quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si ésta fuese recurrida, hasta que resuelva el comité de recursos o, en su caso la asamblea general. El comité de recursos deberá resolver en el plazo de treinta días y la asamblea general en la primera reunión que celebre, mediante votación secreta. En ambos supuestos será preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.

Artículo 21.- Personas socias de trabajo.

1.- En las cooperativas de primer grado que no sean de trabajo asociado, y en las de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán prever los requisitos por los cuales las personas trabajadoras podrán adquirir la cualidad de personas socias de trabajo, consistiendo su actividad cooperativa en la prestación de su trabajo personal en la cooperativa.

2.- Serán de aplicación a las personas socias de trabajo las normas establecidas en esta ley para las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado, con las salvedades establecidas en este artículo.

3.- Los estatutos deberán fijar los criterios para una participación equitativa y ponderada de las personas socias de trabajo en la cooperativa.

4.- En el caso de que los estatutos prevean un período de prueba para las personas socias de trabajo, éste no procederá si la nueva persona socia llevase en la cooperativa, como trabajadora por cuenta ajena, el tiempo que corresponda al período de prueba. Si procediese dicho período y la relación fuera resuelta por decisión unilateral de cualquiera de las partes, la relación jurídico laboral que no se hubiese extinguido con anterioridad al período de prueba por transcurso de su plazo se entenderá renovada en las condiciones existentes al inicio de dicha fase de prueba.

Artículo 22.- Obligaciones de las personas socias.

Las personas socias estarán obligadas a:

- a) Asistir a las reuniones de las asambleas generales y demás órganos a los que fuesen convocadas.
- b) Aceptar los cargos para los que fueran elegidas, salvo justa causa de excusa.
- c) Participar en las actividades que constituyen el objeto de la cooperativa. A estos efectos, los estatutos señalarán los módulos o normas mínimas de participación, pudiendo los administradores, cuando exista causa justificada, liberar de esta obligación a la persona socia en la medida que proceda.

La participación mínima o compromiso de las personas socias en las actividades de la cooperativa, podrá hacerse efectiva mediante su participación directa en las actividades de la propia cooperativa o bien –siempre que así se prevea en los estatutos- en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe y en las que ésta tenga un interés especial vinculado al objeto social. Las personas socias que participen en estas otras entidades tendrán carácter minoritario en la cooperativa de origen, salvo en situaciones de necesidad empresarial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o de fuerza mayor.

- d) No realizar actividades competitivas con el objeto social que desarrolle la cooperativa, ni colaborar con quien las realice, salvo que sean autorizadas expresamente por los administradores.
- e) Guardar secreto sobre actividades y datos de la cooperativa cuando su divulgación pueda perjudicar los intereses sociales.
- f) Desembolsar sus aportaciones al capital social en las condiciones previstas.
- g) Asumir la imputación de las pérdidas en la cuantía acordada por la asamblea general.
- h) Cumplir los demás deberes que resulten de las normas legales y estatutarias, así como los que deriven de acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la cooperativa.

Artículo 23.- Derechos de las personas socias.

1.- Las personas socias tendrán derecho a:

- a) Elegir y ser elegidas para los cargos de los órganos de la cooperativa.
- b) Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de todos los acuerdos de la asamblea general y de los demás órganos de los que formen parte.
- c) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminación.
- d) Recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- e) La actualización y devolución, cuando procedan, de las aportaciones al capital social, así como, en su caso, percibir intereses por las mismas.
- f) El retorno cooperativo, en su caso.

g) Los demás que resulten de las leyes y de los estatutos.

2.- Las personas socias deberán ejercitar sus derechos de conformidad con las normas legales y estatutarias y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la cooperativa.

Artículo 24. Derecho de información.

1.- Las personas socias podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos en esta ley, en los estatutos o en los acuerdos de la asamblea general, que podrán establecer los cauces que consideren oportunos para facilitar y hacer efectivo este derecho.

2.- Toda persona socia tendrá derecho a:

- a) Solicitar una copia de los estatutos de la cooperativa y, en su caso, del reglamento de régimen interno.
- b) Examinar el libro registro de personas socias de la cooperativa y el libro de actas de la asamblea general, y, si lo solicita, los administradores deberán proporcionarle copia certificada del acta y de los acuerdos adoptados en la asamblea general, y certificación de las inscripciones en el libro registro de personas socias previa solicitud motivada.
- c) Solicitar copia certificada de los acuerdos de los administradores que le afecten individualmente.
- d) Que se le informe por los administradores, y en el plazo máximo de un mes desde que lo solicite, sobre su situación económica en relación con la cooperativa.

3.- Toda persona socia podrá solicitar por escrito a los administradores las aclaraciones o informes que considere necesarios sobre cualquier aspecto del funcionamiento o de los resultados de la cooperativa, que deberán ser proporcionados en la primera asamblea general que se celebre pasados quince días desde la presentación del escrito.

4.- Cuando en la asamblea general, de acuerdo con el orden del día, haya de deliberarse sobre las cuentas del ejercicio o cualquier propuesta económica, los documentos que reflejen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y, en su caso, el informe de gestión realizado por el consejo rector y la auditoría externa de cuentas, deberán estar a disposición de las personas socias en el domicilio de la cooperativa, para que puedan ser examinados por los

mismos durante el plazo de convocatoria. Asimismo deberá estar a disposición de las personas socias, en su caso, el informe de la comisión de vigilancia que contempla el artículo 56.

Durante este plazo las personas socias podrán solicitar por escrito, al menos con cinco días de antelación a la celebración de la asamblea, las explicaciones y aclaraciones referidas a aquella documentación económica para que sean contestadas en el acto de la asamblea.

5.- Sin perjuicio del derecho establecido en el apartado anterior, las personas socias que representen al menos el diez por ciento del total de los votos sociales podrán solicitar por escrito en todo momento la información que consideren necesaria. Los administradores deberán proporcionar por escrito la información solicitada, en un plazo no superior a treinta días.

6.- En todo caso, los administradores deberán informar a las personas socias o a los órganos que los representen, trimestralmente al menos y por el cauce que estimen conveniente, de las principales variables socioeconómicas de la cooperativa.

Artículo 25.- Límites y garantías del derecho de información.

1.- Los administradores sólo podrán denegar, motivadamente, la información cuando la solicitud resulte temeraria u obstruccionista, o el proporcionarla ponga en grave peligro los intereses legítimos de la cooperativa. No obstante, no procederá esta excepción cuando la información denegada haya de proporcionarse en el acto de la asamblea general y la solicitud de información sea apoyada por más de la mitad de los votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando así lo acuerde el comité de recursos o, en su defecto, la asamblea como consecuencia del recurso que las personas socias solicitantes de la información hayan interpuesto.

En todo caso, la negativa de los administradores podrá ser impugnada por las personas solicitantes de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 51 de esta ley, quienes además, respecto a los supuestos del apartado 2 de este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Los estatutos, para evitar arbitrariedades y perjuicios tanto en la solicitud como en la aportación o la denegación de información, podrán establecer un sistema de garantías que tenga en cuenta las particularidades de la cooperativa y la efectiva situación de la persona socia tanto en la actividad cooperativa como en sus derechos y obligaciones.

Artículo 26.- Baja voluntaria.

1.- La persona socia podrá darse de baja voluntariamente en la cooperativa en todo momento, mediante preaviso por escrito a los administradores en el plazo que fijen los estatutos, que no podrá ser superior a tres meses para las personas físicas y a un año para las personas jurídicas.

2.- La pertenencia de la persona socia a la cooperativa tendrá carácter indefinido.

No obstante, si lo prevén los estatutos y se acuerda en el momento de la admisión, podrán establecerse vínculos sociales de duración determinada. Los derechos y obligaciones propios de tales vínculos serán equivalentes a las de las demás personas socias y serán regulados en los estatutos. El conjunto de estas personas socias no podrá ser superior a la quinta parte de las personas socias de carácter indefinido de la clase de que se trate, ni de los votos de estos últimos en la asamblea general, salvo en las cooperativas de trabajo asociado o en las que, siendo de otra clase, tengan personas socias de trabajo, que podrán superar dichas proporciones siempre que el número de horas/año de trabajo realizadas en conjunto por las personas socias de duración determinada, y las personas trabajadoras por cuenta ajena, no llegue al cincuenta por ciento del total de horas/año realizadas por las personas socias trabajadoras o de trabajo de carácter indefinido.

Las personas socias trabajadoras o de trabajo titulares de contratos societarios de duración determinada que acumulen un período de tres años en esa situación tendrán la opción de adquirir la condición de persona socia de duración indefinida, y si dicho período alcanza cinco años la adquirirán en todo caso, para lo que deberán cumplir los demás requisitos estatutariamente establecidos para las personas socias de duración indefinida.

3.- Sin perjuicio de lo establecido en el número 1, los estatutos pueden exigir la permanencia de las personas socias hasta el final del ejercicio económico o por un tiempo mínimo que no podrá ser superior a cinco años.

4.- El incumplimiento del plazo de preaviso, así como las bajas que dentro de los plazos mínimos de permanencia se produjeran, tendrán la consideración de bajas no justificadas, salvo que los administradores de la cooperativa, atendiendo las circunstancias del caso, acordaran lo contrario. Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse a la persona socia, además, el cumplimiento de las actividades y servicios cooperativos en los términos en que venía obligado y, en su caso, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

5.- Además de lo establecido en el apartado anterior, se considerará que la baja voluntaria es no justificada:

- a) Cuando la persona socia vaya a realizar actividades competitivas con las de la cooperativa.
- b) En los demás supuestos previstos en los estatutos.

6.- Cuando se produzca la prórroga de la actividad de la cooperativa, su fusión o escisión, el cambio de clase o la alteración sustancial del objeto social de aquella, o la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital, se considerará justificada la baja de cualquier persona socia que haya votado en contra del acuerdo correspondiente o que, no habiendo asistido a la asamblea general en la que se adoptó dicho acuerdo, exprese su disconformidad con el mismo. En el caso de transformación se estará a lo previsto en el artículo 89.

Artículo 27. Baja obligatoria

1.- Causarán baja obligatoria las personas socias que pierdan los requisitos exigidos para serlo según esta ley o los estatutos de la cooperativa.

2.- La baja obligatoria será acordada, previa audiencia de la persona interesada, por los administradores, de oficio, a petición de cualquier otra persona socia o de la propia persona afectada.

3.- El acuerdo de los administradores será ejecutivo desde que sea notificada la ratificación del comité de recursos o, en su defecto, de la asamblea general, o haya transcurrido el plazo previsto en estatutos para recurrir ante los mismos. No obstante, podrá establecer con carácter inmediato la suspensión cautelar de derechos y obligaciones de la persona socia hasta que el acuerdo sea ejecutivo si así lo prevén los estatutos, que deberán determinar el alcance de dicha suspensión. La persona socia conservará su derecho de voto en la asamblea general mientras el acuerdo no sea ejecutivo.

4.- La baja obligatoria tendrá la consideración de justificada cuando la pérdida de los requisitos para ser persona socia no sea consecuencia de la voluntad de la persona socia de incumplir sus obligaciones con la cooperativa o de beneficiarse indebidamente con su baja obligatoria.

Será de aplicación a la baja obligatoria no justificada lo establecido en los números 3 y 4 del artículo precedente.

5.- La persona socia disconforme con la decisión de los administradores sobre la calificación o efectos, tanto de su baja voluntaria como de la obligatoria, podrá recurrir; siendo de aplicación al efecto lo establecido en los números 2 y 4 del artículo siguiente.

Artículo 28.- Expulsión.

1.- La expulsión de las personas socias sólo podrá ser acordada por los administradores por falta muy grave tipificada en los estatutos, mediante expediente instruido al efecto y con audiencia del interesado.

2.- Contra el acuerdo de expulsión la persona socia podrá recurrir, en el plazo de treinta días desde la notificación del mismo, ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general.

El recurso ante el comité de recursos deberá ser resuelto, con audiencia de la persona interesada, en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin haber sido resuelto y notificado, se entenderá que el recurso ha sido estimado.

El recurso ante la asamblea general deberá incluirse como punto del orden del día de la primera que se convoque y se resolverá por votación secreta, previa audiencia de la propia persona interesada.

3.- El acuerdo de expulsión, será ejecutivo desde que sea notificada la ratificación del comité de recursos o, en su defecto, de la asamblea general, o haya transcurrido el plazo para recurrir ante los mismos.

4.- El acuerdo de expulsión, una vez ratificado por el comité de recursos o la asamblea general, podrá ser impugnado, en el plazo de dos meses desde su notificación, por el cauce procesal a que se refiere el artículo 41.

Artículo 29.- Normas de disciplina social.

1.- Los estatutos de cada cooperativa fijarán las normas de disciplina social. Las personas socias sólo pueden ser sancionadas en virtud de faltas previamente tipificadas en los estatutos o, por lo que respecta a las leves, en el reglamento de régimen interno. Las sanciones que pueden ser impuestas a las personas socias por cada clase de falta serán fijadas en los estatutos y pueden ser de amonestación, económicas, de suspensión de derechos sociales, o de expulsión.

2.- Las infracciones leves prescriben al mes, las graves a los dos meses, y las muy graves a los tres meses.

El plazo de prescripción empieza a contar el día en que los administradores tengan conocimiento de la comisión de la infracción y, en cualquier caso, doce meses después de haber sido cometida. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador, y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta ni se notifica la resolución.

3.- Los estatutos fijarán los procedimientos sancionadores y los recursos que correspondan, respetando en cualquier caso las siguientes normas:

- a) La facultad sancionadora es competencia indelegable de los administradores.
- b) Es preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.
- c) Las sanciones por faltas graves o muy graves son recurribles ante el comité de recursos o, si no lo hubiere, ante la asamblea general, en el plazo de treinta días desde la notificación de la sanción.
- d) El acuerdo de sanción puede ser impugnado según el trámite procesal establecido en el artículo 52. En su caso, la ratificación por el comité de recursos o por la asamblea general puede ser impugnada en el plazo de un mes desde la notificación, por el trámite procesal de impugnación establecido en el artículo 41.

4.- El alcance de la suspensión de los derechos de la persona socia vendrá determinado necesariamente por los estatutos sociales.

Artículo 30.- Suspensión o baja obligatoria de la persona socia trabajadora o de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

1.- Cuando se produzcan causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor que así lo hagan necesario, se podrá suspender temporalmente, la obligación y el derecho de la persona socia trabajadora o de trabajo a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicos de dicha prestación, conservando el resto de sus derechos y obligaciones de persona socia.

Para ello, la asamblea general o, en su caso, el consejo rector si así lo establecen los estatutos, deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión la totalidad o parte de las personas socias trabajadoras o de trabajo que integran la cooperativa, así como el tiempo que ha de durar la suspensión, y designar, justificadamente, las concretas personas socias trabajadoras o de trabajo que han de quedar en situación de suspensión.

Al cesar las causas de suspensión, la persona socia trabajadora o de trabajo recobrará plenamente sus derechos y obligaciones.

2.- Cuando por gravedad de las causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor que concurran sea necesario, para mantener la viabilidad económica de la cooperativa, reducir con carácter definitivo el número global de puestos de trabajo o el de determinados colectivos o grupos profesionales, la asamblea general o, en su caso, el consejo rector si así lo establecen los estatutos, deberá determinar el número e identidad de las personas socias trabajadoras o de trabajo que habrán de causar baja en la cooperativa. La baja, en estos casos, tendrá consideración de obligatoria justificada, y las personas socias cesantes tendrán derecho a la devolución inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo de hasta dos años de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual conservando un derecho preferente al reingreso, si se crean nuevos puestos de trabajo de contenido similar al que ocupaban, en los dos años siguientes a la baja. No obstante, cuando la cooperativa tenga disponibilidad de recursos económicos objetivables, la devolución de las aportaciones obligatorias deberá realizarse en el ejercicio económico en curso.

En caso de que las personas socias cesantes sean titulares de aportaciones previstas en el artículo 60.1b) y la cooperativa no acuerde su devolución inmediata, las personas socias que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones inmediatamente en los términos que acuerde la asamblea general.

Artículo 31.- Personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia.

1.- Los estatutos de la cooperativa podrán prever que las personas socias que por cualquier causa justificada, y con la antigüedad mínima que aquéllos establezcan, dejen de utilizar los servicios prestados por la misma o de realizar la actividad cooperativa, puedan ser autorizadas para mantener su cualidad de personas socias pasando a la condición de la persona socia inactiva o no usuaria.

2.- Tales persona socias tendrán los derechos y obligaciones que resulten de lo establecido en los estatutos, si bien el conjunto de sus votos no podrá ser superior a la quinta parte del total de votos sociales.

3.- Si la inactividad estuviera provocada por la jubilación de la persona socia, el interés abonable a su aportación al capital social podrá ser superior al de las personas socias en activo, respetando el límite señalado en el artículo 63.

4.- Los estatutos podrán regular, estableciendo sus derechos y obligaciones, la situación de la persona socia en excedencia, que ha dejado de realizar temporalmente la actividad.

CAPÍTULO V

LOS ÓRGANOS DE LA COOPERATIVA

Artículo 32.- Clases de órganos.

1.- Son órganos necesarios en la cooperativa:

- a) La asamblea general.
- b) El órgano de administración.

2.- Los estatutos podrán regular la creación y funcionamiento de la comisión de vigilancia, el consejo social y el comité de recursos en los términos previstos en esta Ley, sin perjuicio de establecer otros, que en ningún caso desempeñarán funciones y competencias atribuidas a los citados órganos sociales.

3.- Los órganos de la cooperativa se regirán por lo dispuesto en esta ley, complementada por los estatutos sociales, así como por el reglamento interno o cualquier acuerdo válidamente adoptado que apruebe con el fin de organizar adecuadamente su funcionamiento.

SECCIÓN 1ª

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 33.- La asamblea general. Concepto y competencias.

1.- La asamblea general de la cooperativa es la reunión de las personas socias, constituida para deliberar y tomar acuerdos en las materias propias de su competencia.

2.- Los acuerdos de la asamblea general obligan a todas las personas socias.

3.- Corresponde en exclusiva a la asamblea general la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Nombramiento y revocación, por votación secreta, de los administradores, de los miembros de la comisión de vigilancia y de los liquidadores , así como, en su caso, de los miembros del comité de recursos y de los miembros del consejo social, y el ejercicio de la acción de responsabilidad contra los mismos.
- b) Nombramiento y revocación, que sólo cabrá cuando exista justa causa, de los auditores de cuentas.
- c) Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la distribución de excedentes o imputación de pérdidas.
- d) Establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, del interés que devengarán las aportaciones a capital y de las cuotas de ingreso o periódicas.
- e) Emisión de obligaciones, de títulos participativos y de participaciones especiales, u otras formas de financiación previstas en el artículo 68 sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62.2.
- f) Modificación de los estatutos sociales.
- g) Constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado, grupos cooperativos y entidades similares, así como la adhesión y separación de las mismas.
- h) Fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad.
- i) Toda decisión que suponga, según los estatutos, una modificación sustancial en la estructura económica, organizativa o funcional de la cooperativa.
- j) Aprobación o modificación del reglamento interno de la cooperativa.
- k) Todos los demás acuerdos en que así lo establezca la ley.

4.- Asimismo, podrá debatir la asamblea sobre cuantos asuntos sean de interés para la cooperativa, pero únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que esta ley no considere competencia exclusiva de otro órgano social.

5.- La competencia de la asamblea general sobre los actos en que su acuerdo es preceptivo en virtud de norma legal tiene carácter indelegable, salvo lo previsto para los procesos de integración cooperativa, señalado en el punto 3 apartado g) del presente artículo.

Artículo 34.- Clases de asambleas generales.

Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La asamblea general ordinaria tiene por objeto principal el examen de la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales y, en su caso, resolver sobre la distribución de los excedentes o la imputación de las pérdidas. Podrá, asimismo, incluir en su orden del día cualquier otro asunto propio de la competencia de la asamblea. Todas las demás asambleas tienen el carácter de extraordinarias.

Artículo 35.- Convocatoria.

1.- La asamblea general será convocada por los administradores.

2.- La asamblea general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social. Si transcurre dicho plazo sin que se haya celebrado ni convocado, cualquier persona socia podrá requerir, notarialmente o por otro medio fehaciente, a los administradores para que procedan a convocarla. Si éstos no la convocan en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del requerimiento, cualquier persona socia la podrá solicitar al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social, que deberá convocar la asamblea, designando quién haya de presidirla. Esta asamblea general, aun convocada fuera de plazo, no perderá su condición de ordinaria.

3.- La asamblea general extraordinaria se reunirá, en cualquier momento, por iniciativa propia de los administradores, a petición de la comisión de vigilancia, o a petición de personas socias que representen al menos el veinte por ciento del total de votos, efectuada por medio de un requerimiento fehaciente a los administradores que incluya un orden del día con los asuntos y propuestas a debate. Si la asamblea general no fuera convocada en el plazo de treinta días a contar desde la recepción de la solicitud, se podrá solicitar convocatoria judicial, conforme a lo previsto en el número anterior.

4.- Las personas socias que representen más del diez por ciento del total de votos podrán solicitar, en escrito dirigido a los administradores y en los cinco días siguientes al anuncio de convocatoria, la introducción de uno o más asuntos en el orden del día. Los administradores deberán incluirlos, publicando el nuevo orden del día con, al menos, la publicidad exigida legalmente y con una antelación mínima de cuatro días a la fecha de celebración de la asamblea, que no podrá posponerse en ningún caso.

5.- La asamblea general se convocará siempre mediante anuncio expuesto públicamente de forma destacada en el domicilio social y en cada uno de los

demás centros en que la cooperativa desarrolle su actividad, así como mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrito, previsto en su caso, en los estatutos.

Cuando la cooperativa tenga más de quinientas personas socias, o si así lo exigen los estatutos, la convocatoria se anunciará también en uno de los periódicos, escritos o digitales, de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social.

Cuando la cooperativa tenga una página web corporativa, la asamblea general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad siempre que la creación de dicha página se hubiera acordado por la asamblea general y el acuerdo de dicha creación se hubiera hecho constar en la hoja abierta para la cooperativa en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Los estatutos podrán establecer mecanismos adicionales de publicidad a los previstos en la Ley, de modo que se garantice la comunicación de la convocatoria a todas las personas socias, e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a las personas socias de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad.

6.- La convocatoria se hará pública con una antelación mínima de diez días y máxima de sesenta días a la fecha en que haya de celebrarse.

7.- La convocatoria indicará, al menos, la fecha, la hora y el lugar de la reunión, en primera y segunda convocatoria, entre las cuales deberá transcurrir como mínimo media hora, y expresará con claridad, precisión y suficiente detalle los asuntos que componen el orden del día.

Además en el anuncio de la convocatoria se hará constar el derecho de todas las personas socias a examinar en el domicilio social, y en la intranet de la sociedad si la hubiese, la documentación correspondiente a los puntos del orden del día.

8.- No obstante lo dispuesto en los números anteriores del presente artículo, será válida la reunión sin necesidad de convocatoria siempre que, estando presentes o representadas todas las personas socias, decidan por unanimidad constituirse en asamblea general universal, aprobando y firmando todas el orden del día y la lista de asistentes, sin que sea necesaria la permanencia de la totalidad de las personas socias con posterioridad.

Artículo 36.- Funcionamiento.

1.- La asamblea general, salvo que tenga el carácter de universal, se celebrará en la localidad donde radique el domicilio social. Los estatutos, en los casos en que exista causa que lo justifique, podrán fijar con carácter general otros lugares de reunión, o los criterios a seguir por los administradores para la determinación del lugar de celebración de la misma.

Los estatutos podrán posibilitar que las personas socias que se encuentren geográficamente distantes, participen y manifiesten su voluntad para adoptar válidamente acuerdos, a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal.

Cuando alguna persona socia participe en la asamblea general y manifieste su voluntad de la forma señalada en el párrafo anterior, el secretario o secretaria que lo sea de la asamblea dejará constancia expresa en el acta de la misma, de la identidad de la persona socia y del medio utilizado para ello, junto con el resto de condiciones exigidas para la adopción válida de los acuerdos.

2.- La asamblea general quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando estén presentes o representados la mayoría de votos, y en segunda convocatoria cuando estén presentes o representados al menos personas socias que ostenten el diez por ciento de los votos o cien votos. Salvo previsión estatutaria en contra, basta alcanzar dicho quórum al inicio de la sesión. No obstante, los estatutos de las cooperativas de consumo, enseñanza y agrarias y alimentarias, exclusivamente, podrán prever una tercera convocatoria por la que la asamblea general podrá celebrarse cualquiera que sea el número de votos presentes o representados, si bien deberá mediar al menos, entre la segunda y tercera convocatoria, el intervalo que se fije en los estatutos sociales.

3.- Tendrán derecho de asistencia las personas socias que lo sean al menos desde la fecha en la que se acordó la convocatoria de la asamblea general.

4.- Salvo que los estatutos exijan su asistencia personal, las personas socias podrán hacerse representar por otras personas socias autorizándoles por escrito con carácter especial para cada asamblea. En el caso de asamblea universal, el escrito en que se acredite la representación deberá contener el orden del día previsto.

Ninguna persona socia podrá ostentar más de dos representaciones, además de la suya. La representación es revocable. La asistencia personal a la asamblea general de la persona representada tendrá valor de revocación.

5.- Si los estatutos lo prevén, en las cooperativas de consumo, de viviendas, enseñanza, agrarias y alimentarias, y en cualesquiera otras dirigidas a la satisfacción de necesidades familiares, las personas socias podrán hacerse representar en la asamblea general por su cónyuge u otro familiar, o tutor o tutora legal con plena capacidad de obrar y hasta el grado de parentesco que admitan los estatutos, que también determinarán si se exigirá poder especial para cada sesión asamblearia o si el escrito de representación tendrá validez durante el período que aquéllos señalen.

6.- Presidirá la asamblea general la persona designada por los estatutos, en su defecto, quien presida el órgano de administración, y, a falta de ésta, la persona socia que elija la asamblea. Corresponde al presidente o presidenta dirigir las deliberaciones, mantener el orden en el desarrollo de la asamblea y velar por el cumplimiento de las formalidades legales.

7.- El presidente o presidenta estará asistido por un secretario o secretaria, designado también por los estatutos o por las personas socias asistentes a la asamblea.

8.- La votación será secreta en los supuestos previstos en esta ley o en los estatutos, y, en todo caso, a solicitud de personas socias que representen el diez por ciento de las personas socias presentes y representadas.

9.- Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el orden del día, salvo que esta ley expresamente autorice su adopción.

10.- Los administradores deberán asistir a las asambleas generales. Los estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de directores, gerentes, técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. La asamblea general podrá autorizar la presencia de cualquier otra persona.

Artículo 37.- Derecho de voto.

1.- En las cooperativas cada persona socia tendrá un voto.

2.- No obstante, en las cooperativas de primer grado los estatutos pueden prever que el derecho de voto de las personas jurídicas socias que sean cooperativas, sociedades controladas por éstas y entidades públicas sea proporcional a la actividad cooperativa con la sociedad o a las prestaciones complementarias a esta actividad en el marco de la intercooperación.

En este supuesto los estatutos deberán fijar con claridad los criterios de proporcionalidad del derecho de voto.

El número de votos de una persona socia que no sea una sociedad cooperativa no podrá ser superior al tercio de los votos totales de la Cooperativa.

3.- En las cooperativas de segundo o ulterior grado se estará a lo previsto en el artículo 138.

En las de crédito, se aplicará lo establecido en la normativa especial aplicable a estas entidades.

4.- El número total de votos de las personas socias colaboradoras, las inactivas o no usuarias, las personas socias en excedencia y las de vínculo de duración determinada no podrá alcanzar, en ningún caso, la mitad de los votos totales de la cooperativa.

5.- Los estatutos deberán establecer los supuestos en los que, por conflicto de intereses, la persona socia deba abstenerse de votar.

6.- Los estatutos podrán establecer el procedimiento, las condiciones y los requisitos para efectuar las votaciones mediante procedimientos telemáticos, que, en su caso, deben garantizar la confidencialidad del voto.

Artículo 38.- Régimen de mayorías.

1.- Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán por más de la mitad de los votos válidamente emitidos. A estos efectos, no se computarán los votos en blanco ni las abstenciones. Se exceptuarán los supuestos en que esta ley o los estatutos establezcan una mayoría reforzada.

2.- Será necesaria mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos por las personas socias presentes o representadas para acordar la transformación, la fusión, la escisión y la disolución de la cooperativa, siempre que el número de votos presentes y representados sea inferior al setenta y cinco por ciento del total de votos de la cooperativa.

Artículo 39.- Acta de asamblea general.

1.- Los acuerdos de la asamblea general se consignarán en acta, que redactará el secretario o secretaria y transcribirá en el Libro de actas, con expresión de las siguientes circunstancias:

- a) Fecha y lugar de la reunión.
- b) Fecha y modo en que se hubiera efectuado la convocatoria, salvo que se trate de asamblea universal.
- c) Texto íntegro de la convocatoria.
- d) El número de personas socias concurrentes, indicando cuántas lo hacen personalmente y cuántas asisten por representación, y si se celebra la asamblea en primera, segunda o tercera convocatoria.
- e) Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia.
- f) El contenido de los acuerdos adoptados.
- g) El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiera adoptado cada uno de los acuerdos. Siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se hará constar su oposición a los acuerdos.
- h) La aprobación del acta, cuando se hubiera producido al finalizar la reunión.

2.- La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella, por medio de anexo firmado por el secretario o secretaria con el visto bueno del presidente o presidenta. La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte informático, con los requisitos establecidos en el Reglamento del Registro Mercantil para las sociedades de esta naturaleza.

3.- El acta podrá ser aprobada por la propia asamblea, a continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto y necesariamente, dentro del plazo de quince días, por el presidente o presidenta y dos personas socias, designadas por la asamblea, quienes la firmarán, además del secretario o secretaria

4.- Cualquier asistente a la asamblea tendrá derecho a solicitar certificaciones del texto íntegro del acta o de los acuerdos adoptados, que serán expedidas por quien sea secretario o secretaria a la fecha de la expedición, con el visto bueno del presidente o presidenta o en su caso, por el administrador o administradora única.

5.- Los acuerdos producirán los efectos a ellos inherentes desde el momento en que hayan sido adoptados.

6.- Los acuerdos inscribibles deberán presentarse en el Registro de Cooperativas de Euskadi dentro de los treinta días siguientes al de la aprobación del acta.

Artículo 40.- Asamblea de delegados.

1.- Los estatutos podrán establecer que la asamblea general se constituya como asamblea de delegados de las personas socias, elegidos en juntas preparatorias, en los casos en que la cooperativa tenga más de quinientas personas socias o concurren circunstancias que dificulten de forma grave y permanente la presencia de todas las personas socias en la asamblea general.

2.- Los estatutos deberán regular expresamente los criterios de adscripción de las personas socias a cada junta preparatoria, el régimen de convocatoria y constitución de éstas, las normas para la elección de delegados, que deberán ser siempre personas socias, el número de votos que podrá ostentar cada una en la asamblea y el carácter y duración del mandato que se les confiera.

3.- Para regular el número de delegados a elegir por cada junta preparatoria y el número de votos que ostenten en la asamblea general, los estatutos deberán atenerse necesariamente a criterios de proporcionalidad.

4.- En lo no previsto en el presente artículo y en los estatutos sobre las juntas preparatorias se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas para la asamblea general.

Artículo 41. Impugnación de acuerdos de la asamblea general.

1.- Podrán ser impugnados los acuerdos de la asamblea general que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de una o varias personas socias o de terceras personas no socias, los intereses de la cooperativa.

2.- No procederá la impugnación de un acuerdo que haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro en los términos de la Ley de Sociedades de Capital, ni en los demás supuestos que dicha norma prevé. Si fuera posible eliminar la causa de impugnación, el Juzgado de lo mercantil otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada.

3.- La acción de impugnación podrá ser ejercitada por todos las personas socias, los administradores, los miembros de la comisión de vigilancia y cualquier persona tercera no socia con interés legítimo, y caducará en el plazo de un año, con excepción de los acuerdos que, por su causa o contenido, resulten contrarios al orden público.

4.- El plazo de caducidad de este artículo se computará desde la fecha de adopción del acuerdo, o, si fuera inscribible, desde la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

5.- Con carácter general el procedimiento de impugnación se acomodará a las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, con la salvedad de que para solicitar en el escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado se exigirá que quien demande sea la comisión de vigilancia o personas socias que representen, al menos, un veinte por ciento del número de votos.

6.- La sentencia estimatoria de la acción de impugnación producirá efectos frente a todas las personas socias pero no afectará a los derechos adquiridos por terceras personas no socias de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, la sentencia determinará su cancelación.

SECCIÓN 2ª

DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA

Artículo 42.- Los administradores. Naturaleza y competencias.

1.- Los administradores son el órgano al que corresponde en exclusiva la gestión y representación de la cooperativa, y ejercen además todas las facultades que no estén expresamente reservadas por la ley o los estatutos a otros órganos sociales.

2.- Los estatutos deberán determinar el modo en que se ejerza la representación atribuida a los administradores, que se extenderá, en juicio o fuera de él, a todos los actos comprendidos en el objeto social. Cualquier limitación estatutaria de las facultades representativas de los administradores será ineficaz frente a terceras personas no socias. La cooperativa quedará obligada frente a terceras personas no socias que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aunque se desprenda de los estatutos que el acto no está comprendido en el objeto social.

Artículo 43.- Elección de los administradores.

1.- Los administradores se configuran como un órgano colegiado con el nombre de consejo rector. No obstante, cuando el número de personas socias de la cooperativa no sea superior a diez, los estatutos podrán prever la existencia de administrador o administradora única.

Los estatutos fijarán el número de administradores o, al menos, su número máximo y mínimo, en cuyo caso será la asamblea general la que lo precise.

2.- El administrador o administradora única deberá ser persona socia cooperadora. En el consejo rector, una tercera parte de sus miembros podrá ser elegida entre personas no socias, salvo prohibición expresa de los estatutos.

3.- Los administradores serán elegidos por la asamblea general, por el mayor número de votos válidamente emitidos en votación secreta.

Cuando en el consejo rector de la cooperativa se hayan establecido reservas de puestos conforme a lo previsto en el número 6 del artículo 47, salvo disposición contraria de los estatutos, cada colectivo de personas socias afectado tendrá derecho a elegir directamente en la asamblea el número de consejeros que le corresponda sin intervenir en la elección de los restantes miembros del consejo.

4.- En caso de ser designada administradora una persona jurídica, ésta deberá nombrar a una persona física para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

5.- El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su aceptación, debiendo ser presentado a inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aquélla.

6.- El órgano de administración podrá conferir y revocar apoderamientos generales a uno o varios directores-gerentes, cuyas facultades serán las otorgadas en la escritura de poder, que sólo podrá referirse al tráfico ordinario de la cooperativa. Tanto el nombramiento como el apoderamiento y su revocación deberán inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi. También podrá el órgano de administración conferir apoderamientos singulares a cualquier persona.

7.- Si durante el plazo para el que fueron elegidos consejeros, se produjesen vacantes en número minoritario, sin que existieran suplentes, el consejo rector podrá designar entre las personas socias la persona que haya de ocupar la vacante hasta que se reúna la primera asamblea general.

Artículo 44.- Incapacidad y prohibiciones.

1.- No podrán ser administradoras las siguientes personas:

- a) Las concursadas no rehabilitadas, las menores no emancipadas, las judicialmente incapacitadas, las condenadas a penas que llevan aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, las que hubieran sido condenadas por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y

aquellas que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas.

- b) Personal funcionario y al servicio de la Administración, con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la cooperativa de que se trate.
- c) Las que desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas a las de la cooperativa, o que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la misma.
- d) Los miembros de la comisión de vigilancia y del comité de recursos, y los directores- gerentes.
- e) Las incursas en los supuestos estatutariamente previstos.

2.- El administrador o administradora que estuviese incurso en cualquiera de las incapacidades o prohibiciones de este artículo deberá dimitir inmediatamente. No obstante, podrá ser suspendido temporalmente en el ejercicio de su cargo, hasta la celebración de la siguiente asamblea general, por la comisión de vigilancia, y si no la hubiera por el consejo rector. La asamblea general, siempre que se haya producido la suspensión cautelar o a petición de cualquier persona socia, procederá a la destitución del administrador o administradora, a excepción del caso previsto en el apartado c), en que la asamblea general decidirá libremente su cese o continuidad.

Artículo 45.- Remuneración.

1.- El cargo de administrador será gratuito. No obstante, será remunerado siempre que así se autorice expresamente en los estatutos, que establecerán además los criterios para la fijación de las remuneraciones a los administradores. Será la asamblea general a quien le corresponda fijar el importe anual de la remuneración.

En todo caso, la remuneración deberá guardar una proporción razonable con la importancia de la cooperativa, con la situación económica que tuviera en cada momento y, sobre todo, con las prestaciones efectivas realizadas por los administradores en el desempeño del cargo.

Todo ello deberá figurar en la memoria anual.

2.- En cualquier caso, serán resarcidos de los gastos que el cargo les origine.

Artículo 46.- Duración y cese.

1.- Los administradores serán elegidos por un período que fijarán los estatutos, entre dos y cinco años. Podrán ser reelegidos, por iguales plazos, salvo que los

estatutos establezcan lo contrario. Transcurrido el plazo para el que fueron nombrados, los administradores continuarán provisionalmente en su cargo, hasta que se celebre la próxima asamblea general.

2.- La asamblea general podrá, sin necesidad de su constancia en el orden del día, decidir la destitución de los administradores. Cuando no figure en el orden del día, deberán votar a favor de la destitución las dos terceras partes de los votos presentes y representados.

3.- Cuando algún administrador o administradora sea destituida, se procederá en la misma sesión a la elección de nuevos administradores por la asamblea general, aunque no figure en el orden del día.

4.- El cese por cualquier causa de los administradores sólo surtirá efectos frente a terceras personas no socias desde su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Artículo 47.- Composición y renovación del consejo rector.

1.- Los estatutos establecerán la composición del consejo rector, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a tres. Si estableciesen la existencia de suplentes para sustituir a los miembros titulares en caso de vacante definitiva, determinarán su número y el sistema de elección y sustitución.

2.- Salvo que los estatutos prevean su elección por la asamblea general, el consejo rector elegirá entre sus miembros los cargos de presidente o presidenta y secretario o secretaria. También podrán prever los estatutos que la figura del secretario o secretaria no ostente la condición de persona socia o consejera de la cooperativa.

3.- La renuncia de un consejero o consejera deberá ser motivada y comunicada por escrito al consejo rector, el cual deberá determinar si la causa alegada para renunciar es justificada o no y comunicarla por escrito al interesado.

La calificación de la renuncia podrá ser recurrida ante la asamblea general o comité de recursos en las mismas condiciones y plazos que las establecidas para la baja obligatoria.

La fecha de efectos de la renuncia será la que fije en su notificación el consejero renunciante, que, en ningún caso, podrá ser de fecha anterior a la de notificación.

En el caso de que la cooperativa considerara no justificada la renuncia, podrá exigirse, en su caso, al administrador o administradora la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

4.- El consejo rector se renovará parcialmente, salvo que los estatutos establezcan la renovación simultánea.

5.- Los consejeros podrán ser reelegidos indefinidamente, salvo que los estatutos establezcan lo contrario.

6.- Los estatutos podrán prever que la composición del consejo rector refleje, entre otras circunstancias, su distinta implantación geográfica, las diversas actividades desarrolladas por la cooperativa, las diferentes clases de personas socias y la proporción existente entre ellas, estableciendo las correspondientes reservas de puestos.

Artículo 48.- Funcionamiento del consejo rector.

1.- Los estatutos regularán el funcionamiento interno del consejo rector. En lo no previsto por éstos, el consejo rector podrá regular su propio funcionamiento.

2.- El consejo rector, que será convocado por el presidente o presidenta, quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión más de la mitad de sus componentes. La asistencia a las reuniones del consejo será personal e indelegable.

Los estatutos podrán posibilitar que los miembros del consejo rector que se encuentren geográficamente distantes, participen y manifiesten su voluntad para adoptar válidamente acuerdos, a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal.

Cuando algún miembro del consejo rector participe en las reuniones de dicho órgano y manifieste su voluntad de la forma señalada en el párrafo anterior, el secretario o secretaria dejará constancia expresa en el acta de la identidad del miembro y del medio utilizado para ello, junto con el resto de condiciones exigidas para la adopción válida de los acuerdos.

3.- Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de votos de las personas asistentes, salvo que la ley o los estatutos dispongan otra cosa, y cada consejero o consejera tendrá un voto. A estos efectos, no se computarán los votos en blanco ni las abstenciones.

El consejo rector necesitará el voto favorable de al menos dos tercios de los votos emitidos de conformidad con el párrafo anterior, para adoptar los siguientes acuerdos:

- a) Cierre o traslado de un centro principal de actividad o de una parte significativa del mismo.
- b) Restricción, ampliación o modificación sustanciales de la actividad de la cooperativa.
- c) Cambios de trascendencia en la organización de la cooperativa.
- d) Establecimiento o extinción de vínculos con otras entidades, cooperativas o no, que supongan una relación de colaboración permanente y valiosa para la cooperativa.
- e) Cuando así lo establezca la Ley.

El voto del presidente o presidenta dirimirá los empates.

4.- Los acuerdos del consejo serán llevados a un libro de actas. El acta de la reunión, firmada por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como los resultados de las votaciones.

5.- Cuando los estatutos de la sociedad cooperativa no dispusieran otra cosa, el consejo rector podrá designar de su seno una comisión ejecutiva o uno o más consejeros delegados.

En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de cuentas anuales a la asamblea general, ni las facultades que ésta conceda al consejo rector, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

La delegación permanente de alguna facultad del consejo rector en la comisión ejecutiva o en un consejero o consejera delegada y la designación de los miembros del consejo que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo rector de acuerdo con lo previsto en el número 3 y no producirán efectos hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Artículo 49.- Deberes de los administradores.

1.- Los administradores deberán desempeñar su cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos sociales con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos; adoptando las medidas precisas para la correcta gestión y representación de la cooperativa.

2.- Asimismo los administradores desempeñaran su cargo con la lealtad de un representante fiel, obrando de buena fe en el mejor interés de la cooperativa, sin que ejerciten sus facultades con fines distintos de aquellos para los que le han sido concedidas.

3.- Los administradores deben guardar secreto sobre los datos que tengan carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.

4.- Los administradores se abstendrán de desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia con la cooperativa o que, de cualquier otro modo, supongan un conflicto con los intereses de la cooperativa.

No obstante, la cooperativa, mediante previo acuerdo expreso de la asamblea general podrá dispensar las prohibiciones contenidas en el apartado anterior en casos singulares.

El administrador o administradora incurso en estas situaciones de conflicto, que en todo caso deberá comunicar al consejo rector o a la asamblea general cuando sea administrador o administradora única, no podrá tomar parte en la correspondiente votación.

Los actos, contratos u operaciones realizados sin la mencionada autorización podrán ser anulados, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceras personas no socias de buena fe.

5.- En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario o empresaria se entenderá cumplido cuando el administrador o administradora haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y en el marco de un funcionamiento adecuado.

No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones en que exista o pueda existir un conflicto de intereses con la cooperativa.

Artículo 50.- Responsabilidad de los administradores.

1.- Los administradores responderán, siempre que haya intervenido dolo o culpa, de los daños que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo.

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

La responsabilidad por actos en que haya intervenido culpa se estimará con más o menos rigor en función del carácter retribuido o no del cargo.

2.- Responderán solidariamente todos los miembros del órgano que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción o ejecución desconocían su existencia, o, en caso de conocerla, hicieron todo lo posible para evitar el daño, o al menos se opusieron expresamente a aquellas.

3. No exonerará de responsabilidad el hecho de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la asamblea general.

4.- La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador o administradora de hecho tanto la persona que, sin haber sido nombrada administradora, desempeñe efectivamente las funciones propias del cargo, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

No tendrá la consideración de administrador o administradora de hecho la persona acreedora que presta apoyo financiero a la cooperativa estableciendo una serie de condiciones o requerimientos, salvo prueba en contrario.

Artículo 51.- Acciones de responsabilidad contra los administradores.

1.- La acción social de responsabilidad contra los administradores podrá ser ejercitada por la cooperativa, previo acuerdo de la asamblea general, por mayoría ordinaria, que podrá ser adoptado aunque no figure en el orden del día. En cualquier momento la asamblea general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción.

Cuando no estuviera incluido en el orden del día, deberán votar a favor las dos terceras partes de los votos presentes y representados, excluidos los votos en blanco y nulos.

2.- El acuerdo de la asamblea general de promover la acción o transigir sobre ella implica la destitución automática de los administradores afectados.

3.- Cuando la cooperativa no entable la acción de responsabilidad, dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, podrá ejercitarla cualquier persona socia. Asimismo, las personas socias que representen al menos el veinte por ciento de los votos, podrán también entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social cuando los administradores no convocasen la asamblea general solicitada a tal fin.

4.- Transcurrido el plazo de seis meses a partir de la producción del daño sin que la acción hubiera sido ejercitada por la asamblea o las personas socias, podrá entablar la acción de responsabilidad cualquier acreedor social, a los solos efectos de reconstituir el patrimonio de la cooperativa.

5.- En todo caso, la acción prescribirá a los dos años de producirse los actos que hayan originado dicha responsabilidad o desde su conocimiento.

6.- No obstante lo dispuesto en los números precedentes, quedan a salvo las acciones individuales que puedan corresponder a las personas socias y a terceras personas no socias por actos de los administradores que lesionen directamente sus intereses.

7.- La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la cooperativa el enriquecimiento injusto.

Artículo 52.- Impugnación de acuerdos de los administradores.

1.- Podrán ser impugnados los acuerdos del consejo rector o de la comisión ejecutiva, en su caso, que sean contrarios a la ley o a los estatutos sociales o que lesionen, en beneficio de una o varias personas socias o de personas no socias, los intereses de la cooperativa.

2.- Los administradores y la comisión de vigilancia podrán impugnar dichos acuerdos en el plazo de sesenta días desde su adopción.

3.- También podrá impugnar los acuerdos cualquier persona socia, en el plazo de sesenta días desde que tuvo conocimiento del acuerdo y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción.

4.- La impugnación producirá los efectos previstos y se tramitará con arreglo a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general.

SECCIÓN 3ª

COMISIÓN DE VIGILANCIA

Artículo 53.- Composición, mandato y nombramiento.

1.- Los estatutos fijarán el número de miembros titulares de la comisión de vigilancia, que no podrá ser inferior a tres, así como, en su caso, el de suplentes y el período de duración del mandato, que no coincidirá con el de los administradores.

No será obligatoria dicha comisión cuando el número de personas socias resulte inferior a cien.

2.- Sólo las personas socias podrán ser miembros de la comisión de vigilancia, salvo que los estatutos prevean la designación de personas no socias que reúnan los requisitos de honorabilidad, cualificación profesional y experiencia técnica o empresarial adecuados en relación con las funciones de aquel órgano, y siempre que el número de dichos miembros personas no socias no exceda de la mitad del total de los de la comisión, calculada por defecto.

Si la cooperativa tiene más de cincuenta personas trabajadoras con contrato laboral, un o una representante de éstas podrá formar parte de la comisión de vigilancia, si los estatutos lo prevén.

3.- Los miembros de la comisión serán elegidos y revocados, siempre mediante votación secreta, por el mayor número de votos válidamente emitidos en la asamblea general; son reelegibles, salvo limitación estatutaria, y quedan sometidos a las normas de la presente ley sobre responsabilidad, remuneración, incapacidad, prohibiciones e inscripciones registrales establecidas para los administradores.

Artículo 54.- Facultades de información.

1.- Los administradores deben informar a la comisión de vigilancia, al menos una vez al trimestre, de las actividades y evolución previsible de la cooperativa.

2.- La comisión tiene derecho a realizar todas las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de su misión y puede confiar esta tarea a uno o varios de sus miembros o solicitar la asistencia de expertos, si ninguno de aquéllos lo fuere.

3.- Cada uno de los miembros de la comisión tendrá acceso a todas las informaciones comunicadas o recibidas, pero no podrá revelar fuera de los cauces estatutarios, ni aun a los miembros de la cooperativa, el resultado de las investigaciones producidas o de las informaciones obtenidas.

Artículo 55.- Ámbito de actuación.

La comisión de vigilancia ejercerá las funciones que señala la presente ley, pero no podrá intervenir directamente en la gestión de la cooperativa, ni representar a ésta ante terceras personas no socias; sin embargo, la representará ante el propio órgano de administración, o cualquiera de sus miembros, en caso de impugnaciones judiciales contra dicho órgano o de conclusión de contratos con sus miembros.

Artículo 56.- Competencias y funcionamiento.

1.- La comisión de vigilancia está facultada para realizar las siguientes funciones:

- a) Revisar las cuentas anuales y emitir un informe preceptivo sobre las mismas y sobre la propuesta de distribución de excedentes o de imputación de pérdidas antes de que sean presentadas a la asamblea general, salvo que la cooperativa viniese obligada a someter sus estados financieros a una auditoría de cuentas.
- b) Revisar los libros de la cooperativa.
- c) Convocar asamblea general cuando lo estime necesario en interés de la cooperativa y los administradores hubiesen desatendido, en los plazos establecidos, la petición previamente dirigida a los mismos por las personas socias a tenor de lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 35.
- d) Supervisar y calificar la idoneidad de los escritos de representación y, en general, resolver las dudas o incidencias sobre el derecho de acceso a las asambleas.

- e) Impugnar los acuerdos sociales en los casos previstos en la presente ley.
- f) Informar a la asamblea general sobre aquellas situaciones o cuestiones concretas que la misma le hubiese sometido.
- g) Vigilar el proceso de elección y designación, por la asamblea general de los miembros de los restantes órganos.
- h) Suspender a los administradores que incurran en alguna de las causas de incapacidad o prohibición del artículo 44 y adoptar, en su caso, las medidas imprescindibles hasta la celebración de la asamblea general.
- i) Las demás funciones que le encomiende expresamente la presente ley.

2.- Cuando la cooperativa esté obligada a auditar sus estados financieros, si lo consideran conveniente sus integrantes, la comisión de vigilancia podrá examinar los diferentes soportes contables, y en su caso, emitir un informe sobre los mismos, si bien dicho informe no tendrá carácter preceptivo para la aprobación de las cuentas anuales auditadas de la cooperativa.

Así mismo, aun cuando se auditen las cuentas anuales, la comisión de vigilancia podrá emitir un informe, sobre la propuesta de distribución de excedentes o de imputación de pérdidas.

En ambos supuestos, la comisión de vigilancia deberá comunicar a los administradores su intención de presentar un informe no preceptivo sobre las cuentas anuales de la cooperativa y sobre la propuesta de distribución de excedentes o de la imputación de pérdidas, para que las personas socias puedan examinarlo en el mismo momento en que se publique la convocatoria de la asamblea general ordinaria.

3.- El régimen de funcionamiento de la comisión de vigilancia se ajustará a lo previsto por los estatutos o, en su caso, por el reglamento interno. No obstante, cualquier administrador o administradora o miembro de la propia comisión puede solicitar por escrito al presidente o presidenta de este órgano la convocatoria del mismo, indicando los motivos de la petición. Cuando esta solicitud proceda de un tercio al menos de los miembros del consejo rector o de la propia comisión y ésta no fuese convocada en el plazo de un mes, cualquiera de los grupos solicitantes podrá efectuar la convocatoria.

4.- Durante el período de liquidación la comisión de vigilancia sólo ejercerá aquellas funciones de las señaladas en este artículo que resulten procedentes en dicho período.

SECCIÓN 4ª

OTROS ÓRGANOS

Artículo 57.- El consejo social. Naturaleza y funciones.

1.- Los estatutos podrán prever la existencia de un consejo social que, como órgano representativo de las personas socias cooperativistas, tenga como funciones básicas las de información, asesoramiento y consulta de los administradores en todos aquellos aspectos que afectan a la relación de trabajo, debiendo emitir informe preceptivo sobre los mismos, y especialmente sobre los señalados en los artículos 30 y 105.2.

2.- Asimismo, en aquellas cooperativas que lo recojan en sus estatutos, el consejo social será consultado preceptivamente en todos los aspectos que afectan a la relación de trabajo con las personas asalariadas no socias.

3.- El consejo social estará integrado en su totalidad por personas socias trabajadoras o personas socias de trabajo. Los estatutos establecerán su composición, duración, cese y funcionamiento, así como la posibilidad de que participen en sus reuniones los administradores.

Artículo 58.- Comité de recursos. Composición y funciones.

1.- Los estatutos de la cooperativa podrán regular un comité de recursos con competencia revisora, y siempre a solicitud de la persona afectada, de los acuerdos sancionadores adoptados en primera instancia en el seno de la entidad, por infracciones graves o muy graves de las personas socias. También serán recurribles ante dicho comité los acuerdos no disciplinarios cuando así lo prevean esta ley o los estatutos sociales.

2.- Sólo podrán ser miembros de este órgano las personas socias de pleno derecho que reúnan los requisitos de antigüedad, experiencia cooperativa e idoneidad, estatutariamente exigidos. Los miembros titulares, y en su caso los suplentes, serán elegidos, en el número que señalen los estatutos, por la asamblea general mediante votación secreta y entre aquellas personas socias que, además, no ostenten cargo social alguno ni sean personas asalariadas de la cooperativa. Su mandato, no inferior a tres años, podrá ser renovado.

3.- El comité de recursos deliberará válidamente cuando asistan a la sesión más de la mitad de sus componentes, sin que sea válida la delegación de voto, y sus acuerdos se decidirán por la mayoría que señalen los estatutos. Para adoptar resoluciones sobre materia disciplinaria la votación será siempre secreta y no existirá voto de calidad.

4.- No podrán tomar parte en la tramitación y resolución de los recursos los miembros del comité que tengan, respecto a la persona socia afectada, parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado, o que mantengan con ella vínculos que impliquen subordinación al expedientado, amistad íntima o enemistad manifiesta.

5.- Los acuerdos del comité de recursos serán inmediatamente ejecutivos y definitivos, como expresión de la voluntad social, y podrán ser impugnados, como si hubieran sido adoptados por la asamblea general, conforme a lo establecido en el artículo 41.

6.- En lo no previsto por los números anteriores de este artículo se estará a lo que dispongan los estatutos de la cooperativa.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 59.- Responsabilidad.

1.- La cooperativa responderá por las deudas sociales con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente a la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público, que sólo responderá de las obligaciones contraídas para el cumplimiento de sus fines.

2.- Las personas socias no responderán personalmente de las deudas sociales. Su responsabilidad por dichas deudas estará limitada a las aportaciones al capital social que hubieran suscrito.

3.- Una vez fijado el importe de las aportaciones a reembolsar, las personas socias que causen baja, no tendrán responsabilidad alguna por las deudas que hubiese contraído la cooperativa con anterioridad a su baja.

4.- Las personas socias que hubieran, expresa y específicamente, suscrito contratos o asumido obligaciones con la sociedad cooperativa y que por su naturaleza, no se extinguen con la pérdida de la condición de persona socia, responderán de su cumplimiento, aún después de causar baja.

Artículo 60.- Capital social.

1.- El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de naturaleza patrimonial realizadas al mismo por las personas socias, ya sean obligatorias o voluntarias, que podrán ser:

- a) Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.
- b) Aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por la asamblea o el consejo rector, según se prevea en los estatutos.

La transformación obligatoria de aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por la cooperativa, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de modificación de los estatutos. La persona socia disconforme podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada.

2.- Los estatutos podrán prever que, cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del consejo rector.

La persona socia disconforme con el establecimiento o disminución de este porcentaje podrá darse de baja, calificándose ésta como justificada.

En este supuesto, también serán de aplicación el apartado 4 del artículo 63, el apartado 1 del artículo 65 y el apartado 3 del artículo 98.

Así mismo, los estatutos podrán prever específicamente el deber de rehúse del reembolso de las aportaciones del apartado 1b) anterior, cuando ocasione a la cooperativa una cobertura insuficiente del ratio o referencia que en ellos se establezca.

3.- Las aportaciones al capital social se acreditarán mediante títulos nominativos que no tendrán la consideración de títulos valores, o mediante libretas o cartillas de participación nominativas que reflejarán, en su caso, las sucesivas aportaciones o actualizaciones y las deducciones practicadas por pérdidas imputadas a la persona socia.

4.- Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal. Si lo autorizan los estatutos sociales o lo acuerda la asamblea general, pueden consistir también en bienes o derechos. En dicho caso, los administradores fijarán su valor, previo

informe de uno o varios expertos independientes designados por dichos administradores realizado bajo la responsabilidad de tales expertos, sobre las características y el valor de la aportación y los criterios utilizados para calcularlo. No obstante, si los estatutos lo establecieran, la valoración realizada por los administradores deberá ser aprobada por la asamblea general.

5.- El importe total de las aportaciones de cada persona socia en las cooperativas de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas o personas socias colaboradoras, no puede exceder del tercio del capital social. No estarán sujetas a esta limitación las cooperativas cuyo número de personas socias no sea superior a diez.

6.- Se consideran financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.

Independientemente de su denominación o formalización jurídica, tendrá la consideración de capital social cualquier aportación financiera subordinada contratada por la cooperativa con personas socias o terceras personas no socias cuyo vencimiento no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la misma, sin que le sea de aplicación, salvo pacto en contrario, lo dispuesto en los artículos 62 a 66 de esta Ley. Dichas aportaciones o participaciones podrán ser reembolsables o adquiridas en cartera mediante mecanismos financieros de garantía equivalentes a los establecidos para las participaciones o acciones en las sociedades de capital, incluyendo las opciones previstas en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, o en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Estas aportaciones, cuya retribución podrá ser fija, variable o participativa, se representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que podrán tener la consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa aplicable a estos activos financieros.

Estas aportaciones en ningún caso atribuirán derechos de voto en la asamblea general ni de participación en el órgano de administración.

La emisión o contratación de estas aportaciones deberá ser ofrecida, en cuantía no inferior al 50 por 100, a las personas socias y personas trabajadoras asalariadas de la cooperativa antes de ofrecerse a terceras personas no socias. Tal oferta tendrá publicidad equivalente a la establecida en la cooperativa para la convocatoria de las asambleas generales.

Una vez la información suficiente haya sido supervisada y aprobada por las autoridades económicas competentes para autorizar su emisión, las entidades responsables que así establezca el órgano supervisor competente garantizarán la recepción de dicha información por parte de los adquirentes terceras personas no socias.

7.- Lo establecido en los números 1 a 5 de este artículo será aplicable a las cooperativas de crédito y de seguros sólo cuando la normativa sectorial sobre unas u otras no lo impida.

Artículo 61.- Aportaciones obligatorias al capital social.

1.- Los estatutos fijarán la aportación obligatoria inicial para adquirir la condición de persona socia, que podrá ser diferente para los distintos tipos de personas socias previstas en esta ley o en función de su naturaleza física o jurídica, o para cada persona socia, en proporción al compromiso o uso potencial que cada una de ellas asuma de la actividad cooperativa.

2.- La aportación obligatoria inicial para adquirir la condición de persona socia deberá desembolsarse al menos en un veinticinco por ciento en el momento de la suscripción, y el resto en el plazo que se establezca por los estatutos o la asamblea general, que como máximo será de cuatro años.

3.- Si por la imputación de pérdidas de la cooperativa a las personas socias o por sanción económica prevista estatutariamente la aportación al capital social de alguna o algunas de ellas quedara por debajo del importe mínimo que a estos efectos señalen los estatutos o, en su defecto, la asamblea general, la persona socia afectada deberá realizar la aportación necesaria hasta alcanzar dicho importe, para mantener su condición de persona socia, para lo cual será inmediatamente requerido. Dicha aportación deberá desembolsarse en el plazo que fijen al efecto los estatutos o, en su defecto, la asamblea general, que no podrá exceder de un año desde el requerimiento.

4.- La asamblea general fijará anualmente la cuantía de la aportación obligatoria inicial para las nuevas personas socias y podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias, fijando la cuantía, que podrá ser diferente para las distintas personas socias en función de los criterios señalados en el número 1, así como los plazos y condiciones en que habrán de desembolsarse. La persona socia disconforme con la ampliación obligatoria de capital podrá darse de baja, que se considerará justificada.

Las aportaciones voluntarias preexistentes podrán servir para cubrir nuevas aportaciones obligatorias.

5.- La persona socia que incurra en mora en el desembolso de las aportaciones exigibles, a tenor de lo establecido en los apartados precedentes, deberá abonar a la cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por su morosidad. La persona socia que no normalice su situación en el plazo de sesenta días desde que fuera requerido:

- a) podrá ser dado de baja obligatoria si se trata de la aportación obligatoria inicial para ser persona socia o al importe mínimo al que se refiere el apartado 3.
- b) ser expulsado de la cooperativa en los demás supuestos.

Artículo 62.- Aportaciones voluntarias al capital social.

1.- La asamblea general podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias al capital social realizadas por las personas socias, fijando las condiciones de las mismas.

2.- Los administradores podrán aceptar en todo momento aportaciones voluntarias de las personas socias al capital social, si bien la retribución que establezca no podrá ser superior a la de las últimas aportaciones voluntarias al capital acordadas por la asamblea general o, en su defecto, a la de las aportaciones obligatorias.

Artículo 63.- Interés de las aportaciones.

1.- Las aportaciones al capital social podrán devengar un interés en la cuantía que previamente establezca la asamblea general, sin perjuicio de lo establecido en el número 2 del artículo precedente.

2.- El interés no podrá exceder del interés legal del dinero más seis puntos.

3.- La retribución de las aportaciones a capital estará condicionada a la existencia de excedentes netos o reservas de libre disposición suficiente para satisfacerla.

4.- Si la asamblea general acuerda devengar un interés a las aportaciones o destinar excedentes disponibles a retornos o a reservas repartibles, las aportaciones previstas en el artículo 60.1b) cuyo reembolso hubiera sido rehusado por la cooperativa y cuyos titulares hubieran causado baja, tendrán una remuneración preferente que se establecerá en los estatutos sociales.

Artículo 64.- Actualización de las aportaciones.

1.- El balance de la cooperativa podrá ser regularizado en los mismos términos y con los mismos beneficios previstos para las sociedades de Derecho común, sin perjuicio del destino establecido por esta ley para la plusvalía resultante de la regularización del balance.

2.- La plusvalía citada se destinará por la cooperativa, en uno o más ejercicios, a la actualización del capital o al incremento de las reservas, obligatorias o voluntarias, en la proporción que aquélla estime conveniente. No obstante, cuando la cooperativa tenga pérdidas sin compensar, la plusvalía de la regularización se destinará en primer lugar a la compensación de las mismas, y el resto a los destinos señalados anteriormente.

Artículo 65.- Transmisión de las aportaciones.

Las aportaciones podrán transmitirse:

1.- Por actos inter vivos entre personas socias y entre quienes se comprometan a serlo en los tres meses siguientes, y en los términos fijados en estatutos.

Los estatutos podrán prever que las aportaciones obligatorias iniciales de las nuevas personas socias deban efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas en el artículo 60.1b) cuyo reembolso hubiese sido rehusado por la cooperativa, tras la baja de sus titulares. Esta transmisión se producirá por orden de antigüedad de las solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones, y en caso de solicitudes de igual fecha se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.

2.- Por sucesión mortis causa, a los y las causahabientes si fueran personas socias y así lo soliciten, o, si no lo fueran, previa admisión como tales realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, que habrá de solicitarse en el plazo de tres meses desde el fallecimiento. En otro caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación social, en los términos previstos en el artículo siguiente.

Los acreedores personales de las personas socias no tendrán derecho alguno sobre los bienes de las cooperativas ni sobre las aportaciones de las personas socias al capital social, que son inembargables. Todo ello, sin menoscabo de los derechos que pueda ejercer el acreedor o acreedora sobre los reembolsos, intereses y retornos que correspondan a la persona socia.

Artículo 66.- Reembolso de las aportaciones.

1.- Los estatutos regularán el reembolso de las aportaciones al capital social, pudiendo establecer deducciones tan sólo sobre las aportaciones obligatorias, que no serán superiores al treinta por ciento en caso de expulsión, ni al veinte por ciento en caso de baja no justificada.

Los estatutos podrán prever que, en caso de incumplimiento del período de permanencia mínimo pactado, los porcentajes de deducción para la baja no justificada puedan incrementarse hasta en diez puntos porcentuales.

2.- La decisión sobre el porcentaje de deducción aplicable en cada caso será competencia de los administradores.

3.- Sin perjuicio de las posibles deducciones antes citadas, se computarán, en todo caso y a efectos del oportuno descuento de la aportación a devolver a la persona socia que causa baja, las pérdidas reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provenga de otros anteriores o estén sin compensar hasta el límite de las aportaciones de capital social.

4.- El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja. En caso de fallecimiento de la persona socia, el reembolso a los y las causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho causante.

Para las aportaciones previstas en el artículo 60.1b), los plazos señalados en el párrafo anterior se computarán a partir de la fecha en la que la cooperativa acuerde el reembolso.

5.- En las aportaciones cuyo reembolso haya sido acordado por la cooperativa, las cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán derecho a percibir como mínimo el interés legal del dinero.

6.- Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el reembolso de las aportaciones también se podrá producir por acuerdo de la asamblea general de reducción de capital social, o por reducción de la actividad cooperativizada de la persona socia en su caso, en los términos que se fijen estatutariamente.

Artículo 67.- Participaciones especiales.

1.- Serán participaciones especiales las financiaciones subordinadas expresamente acogidas a la regulación establecida en este artículo, en las que las personas suscriptoras -salvo lo previsto en el número 4 de este artículo- sean necesariamente entidades no cooperativas, el reembolso no tenga lugar hasta que transcurran al menos cinco años desde la emisión y la remuneración se establezca en función de los resultados de la cooperativa.

2.- Las restantes características de estas participaciones serán establecidas libremente en el momento de su emisión, sin que en ningún caso atribuyan derechos de voto en la asamblea general ni de participación en el órgano de administración.

3.- Lo establecido en este artículo sólo será de aplicación a las cooperativas de crédito y seguros cuando la normativa sectorial sobre unas u otras no lo impida.

4.- La emisión o contratación de las participaciones especiales deberá ser ofrecida, en cuantía no inferior al 50 por 100, a las personas socias y personas trabajadoras asalariadas de la cooperativa antes de ofrecerse a terceras personas no socias. Tal oferta tendrá publicidad equivalente a la establecida en la cooperativa para la convocatoria de las asambleas generales.

5.- Independientemente de su denominación, las participaciones que no se sometan expresamente a la regulación de este artículo, se registrarán por el libre pacto y por lo dispuesto para el capital social en el artículo 60 o para otras financiaciones en el artículo 68.

Artículo 68.- Otras financiaciones.

1.- Los estatutos o, en su caso, la asamblea general podrán establecer cuotas de ingreso y periódicas que no integrarán el capital social ni serán reintegrables. Dichas cuotas podrán ser diferentes para los distintos tipos de personas socias previstas en esta ley, o en función de la naturaleza física o jurídica de los mismos, o para cada persona socia, en proporción a su respectivo compromiso o uso potencial de actividad cooperativa.

2.- Las cuotas de ingreso no podrán ser superiores al veinticinco por ciento de la aportación obligatoria al capital social vigente en cada momento para adquirir la condición de persona socia.

3.- La entrega por las personas socias de cualquier tipo de bienes o la prestación de servicios para la gestión cooperativa, y en general los pagos para la obtención de los servicios cooperativos, no integran el capital social y están sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la cooperativa. Aquellas entregas no integran el patrimonio de la cooperativa, no pudiendo ser embargadas por los acreedores sociales.

4.- La cooperativa podrá acordar la emisión de obligaciones, títulos participativos, cuentas en participación y financiación voluntaria de personas socias o de terceras personas no socias bajo cualquier modalidad jurídica, sin derecho de voto, cuya retribución podrá ser fijada total o parcialmente en función de los resultados de la cooperativa y con el plazo y condiciones que se establezcan.

Artículo 69.- Determinación de excedentes netos.

1.- Para la determinación de los excedentes netos se aplicarán las normas y criterios contables establecidos para las sociedades mercantiles salvo que se regulen de forma específica para las sociedades cooperativas.

2.- No obstante se considerarán partidas deducibles para la determinación de los excedentes netos las siguientes:

- a) El importe de los bienes entregados para la gestión cooperativa, en valoración no superior a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos laborales de las personas socias trabajadoras y de trabajo, en cuantía global no superior a las retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente.
- b) Los intereses debidos por las aportaciones al capital social regulados en el artículo 60 de esta Ley y por las prestaciones y financiaciones no integradas en el capital social.
- c) La participación de las personas trabajadoras por cuenta ajena en los resultados de la Cooperativa.

Artículo 70.- Distribución de excedentes.

1.- Los excedentes netos, una vez deducidas las cantidades que se destinen a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y atender los impuestos exigibles, constituirán los excedentes disponibles.

2.- Anualmente, de los excedentes disponibles se destinará:

- a) Al Fondo de Reserva Obligatorio y a la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público una cuantía global del treinta por ciento al menos, destinándose como mínimo un diez por ciento la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público y un veinte por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio.
- b) El resto estará a disposición de la asamblea general, que podrá distribuirlo en la forma siguiente: retorno a las personas socias, dotación a fondos de reserva voluntarios, con el carácter irrepartible o repartible que establezcan los estatutos o, en su defecto, la asamblea general, y, en su caso, participación de las personas trabajadoras asalariadas en los resultados de la cooperativa, sin perjuicio de su tratamiento contable como gasto.

3.- En tanto que el Fondo de Reserva Obligatorio no alcance un importe igual al cincuenta por ciento del capital social, la dotación mínima establecida en favor de la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público podrá reducirse a la mitad.

4.- Los retornos se adjudicarán a las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada persona socia con la cooperativa.

5.- La cooperativa podrá reconocer y concretar en sus estatutos, o por acuerdo de la asamblea general, el derecho de sus personas trabajadoras asalariadas a participar en los excedentes disponibles. Esta participación tendrá carácter salarial y sustituirá al complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.

Artículo 71.- Fondo de reserva obligatorio.

1.- El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, es irrepartible entre las personas socias, excepto en los supuestos expresamente previstos en esta ley.

2.- Al Fondo de Reserva Obligatorio se destinarán necesariamente:

- a) El porcentaje de los excedentes disponibles que establezca la asamblea general, de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente.
- b) Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social en caso de baja de personas socias.

c) Las cuotas de ingreso.

Artículo 72.- Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público.

1.- La contribución obligatoria impuesta sobre los excedentes citada en el apartado 2 a) del artículo 70 se destinará, en aplicación de las líneas básicas fijadas por los estatutos o la asamblea general, a alguna de las siguientes finalidades de interés público:

- a) La formación y educación de sus personas socias y personas trabajadoras sobre el cooperativismo, actividades cooperativas y otras materias no relacionadas con el puesto de trabajo.
- b) La promoción de las relaciones intercooperativas, incluyendo la cobertura de gastos por la participación en entidades creadas para la promoción, asistencia, dirección común o actividades de apoyo entre cooperativas.
- c) La promoción educativa, cultural, profesional y asistencial, así como la difusión de las características del cooperativismo, en el entorno social en que se desenvuelva la cooperativa y en la sociedad en general.
- d) La promoción del uso del euskera.
- e) La promoción de nuevas empresas cooperativas mediante aportaciones dinerarias a una entidad sin ánimo de lucro promovida por el movimiento cooperativo vasco.

2.- El destino de esta contribución obligatoria podrá canalizarse para las finalidades indicadas en el apartado anterior a través de aportaciones dinerarias a entidades sin ánimo de lucro o a alguna de las entidades de intercooperación citadas en el apartado 1 b) anterior.

Esta entrega a entidades intermediarias estará condicionada a su destino a las finalidades de interés público indicadas, a través de actuaciones de la propia entidad intermediaria o de otras personas físicas o jurídicas a las que dicha entidad destine los recursos recibidos.

3.- La cooperativa no tiene poder de disposición sobre esta contribución, más allá de destinarla a las finalidades de interés público indicadas, siendo, en consecuencia, inembargable y debiendo figurar en el pasivo del balance.

4.- A los fines previstos para esta contribución se destinarán las sanciones económicas que imponga la cooperativa a sus personas socias.

5.- El importe de la referida contribución que no se haya destinado a las finalidades de interés público indicadas por la propia cooperativa deberá entregarse, dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en el que se aprobó la distribución del excedente, a entidades sin ánimo de lucro para su destino a las finalidades de interés público establecidas para esta contribución.

Artículo 73.- Imputación de pérdidas.

1.- Los estatutos deberán fijar los criterios para la compensación de las pérdidas, que en todo caso deberán sujetarse a las siguientes reglas:

- a) Se podrán imputar a los fondos de reserva voluntarios, si éstos existiesen, la totalidad de las pérdidas.
- b) Al Fondo de Reserva Obligatorio, se imputará como máximo el porcentaje medio de lo destinado a los fondos legalmente obligatorios en los últimos cinco años de excedentes positivos, o desde su constitución si ésta no fuera anterior a dichos cinco años. No obstante, en caso de que el Fondo de Reserva Obligatorio supere el cincuenta por ciento del capital social de la cooperativa, el importe que exceda de dicho porcentaje se podrá también emplear para compensar las pérdidas.
- c) La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará a las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estos servicios u operaciones realizados fueran inferiores a los que, como mínimo, está obligado a realizar cada persona socia, la imputación de las pérdidas mencionadas ha de efectuarse proporcionalmente a la actividad cooperativizada mínima obligatoria.

2.- Las pérdidas imputadas a cada persona socia se satisfarán de alguna de las formas siguientes según acuerde la asamblea general:

- a) Directamente o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera de la persona socia en la cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran producido.
- b) Con cargo a los retornos que puedan corresponder a la persona socia en los cinco años siguientes. Si quedasen pérdidas sin compensar, éstas deberán ser satisfechas por la persona socia en el plazo máximo de un año.

3.- Será válido imputar las pérdidas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de cinco años. Las pérdidas que, transcurrido este plazo, queden sin compensar, se satisfarán de

conformidad con lo establecido en las letras a), b) y c) del número 1 del presente artículo; debiendo ser satisfechas en el último caso, en el plazo de un año.

4.- Si transcurridos todos los plazos señalados en los números anteriores, queden aún pérdidas sin compensar, serán satisfechas mediante nuevas aportaciones acordadas por la asamblea general o mediante las nuevas aportaciones que sean necesarias para mantener la condición de persona socia en la cooperativa, debiendo causar baja la persona socia cuando sus aportaciones queden por debajo del mínimo estatutariamente establecido y no realice estas nuevas aportaciones. Todo ello con independencia de que la cooperativa deba instar el concurso conforme a la ley concursal.

CAPÍTULO VII

DOCUMENTACIÓN SOCIAL Y CONTABILIDAD

Artículo 74.- Documentación social.

1.- Las cooperativas llevarán, en orden y al día, los siguientes libros:

- a) Registro de personas socias.
- b) Registro de aportaciones al capital social.
- c) Libro de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de la comisión de vigilancia, del comité de recursos y de las juntas preparatorias.
- d) Libro de inventarios y balances y libro diario.
- e) Cualesquiera otros que vengan exigidos por otras disposiciones legales.

2.- Los libros y los demás registros contables irán encuadernados y foliados, y antes de su uso serán habilitados por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

3.- También son válidos los asientos y las anotaciones realizados por procedimientos informáticos o electrónicos para formar los libros obligatorios.

Dichos libros, en soporte electrónico o en papel, serán legalizados por el Registro de Cooperativas de Euskadi en el plazo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

En tanto no estén legalizados los libros señalados en el apartado c) del número 1, habrá de remitirse al Registro de Cooperativas de Euskadi una copia certificada de las actas correspondientes, en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones.

Artículo 75.- Contabilidad.

1.- Las cooperativas deben llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad con arreglo a la legislación mercantil salvo que se regulen de forma específica para las cooperativas, respetando las peculiaridades del régimen económico de la cooperativa.

2.- Al cierre del ejercicio los administradores deberán formular las cuentas anuales de la cooperativa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y, en su caso, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información financiero que le resulta de aplicación y en un plazo que no exceda de tres meses desde el cierre del ejercicio social.

En el caso de que la cooperativa esté obligada a auditar las cuentas del ejercicio en virtud de lo establecido en el artículo siguiente se debe formular por los administradores, además, el correspondiente informe de gestión.

3.- Los administradores presentarán para su depósito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, en el plazo de un mes desde su aprobación, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Dichas cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores, y si faltare la firma de alguno se señalará con expresa indicación de la causa.

Artículo 76.- Auditoría de cuentas.

1.- Las cooperativas deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:

- a) cuando supere los límites que reglamentariamente se fijen. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total de activo según balance y al número medio de empleos, que resulte de la citada ley o de sus normas de desarrollo.
- b) cuando lo solicite una minoría de personas socias suficiente para exigir la convocatoria de la asamblea general, y siempre que los solicitantes hagan frente a sus costos, sin perjuicio de su reembolso si se detectaran vicios o irregularidades sustanciales en la contabilidad.

- c) cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general o el consejo rector o la comisión de vigilancia.

2.- Los auditores de cuentas serán nombrados por la asamblea general. No obstante, cuando el nombramiento por la asamblea general no se haya hecho oportunamente o las personas nombradas no puedan cumplir sus funciones, los administradores podrán proceder a dicho nombramiento dando cuenta a la primera asamblea general que se celebre.

Artículo 77.- Letrado o letrada asesora.

1.- Las cooperativas que, en virtud de lo establecido por la Ley de Auditoría de Cuentas o de sus normas de desarrollo estén obligadas a someter a auditoría externa sus cuentas anuales, deberán designar, por decisión de los administradores, un letrado o letrada asesora.

2.- El letrado o letrada asesora firmará, dictaminando si son ajustados a Derecho, los acuerdos adoptados por la asamblea general o el consejo rector que sean inscribibles en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Las certificaciones de tales acuerdos llevarán la constancia de que en el libro de actas figuran dichos acuerdos dictaminados por el letrado o letrada asesora.

3.- El letrado o letrada asesora responderá civilmente en caso de negligencia profesional frente a la cooperativa, sus personas socias y las terceras personas no socias .

4.- El ejercicio de esta función será incompatible con la condición de director o directora-gerente, administrador o administradora, o miembro del comité de recursos o de la comisión de vigilancia.

5.- La relación entre la cooperativa y el letrado o letrada asesora podrá ser de arrendamiento de servicios como profesional liberal, de contrato laboral, o societaria como persona socia trabajadora o de trabajo de la cooperativa.

Las uniones o federaciones de cooperativas, así como otras cooperativas, podrán prestar este servicio si cuentan con abogados, a los que corresponderá la ejecución y responsabilidad profesional del dictamen. Si las relaciones entre dichos abogados y las entidades mencionadas no son de arrendamiento de servicios como profesional liberal, las referidas entidades responderán civilmente junto con el abogado o abogada de los perjuicios que se produzcan a la cooperativa en el ejercicio del cargo de letrado o letrada asesora.

CAPÍTULO VIII

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 78.- Modificación de estatutos.

1.- Cualquier modificación de los estatutos sociales deberá ser adoptada por la asamblea general y exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

- a) Que los autores de la propuesta formulen un informe escrito con la justificación de la misma.
- b) Que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que hayan de modificarse.
- c) Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar expresamente el derecho de todas las personas socias de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

2.- Dicho acuerdo se elevará a escritura pública, que se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

3.- Además, el acuerdo de cambio de denominación, de cambio de domicilio o de modificación del objeto social se anunciarán en un periódico de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social, de manera previa a su inscripción.

4.- Cuando la modificación consista en el cambio de clase de la cooperativa o en la modificación sustancial del objeto social, las personas socias que hayan votado en contra o los que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su disconformidad por escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días a contar desde la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas de Euskadi, tendrán derecho a separarse de la cooperativa. En tales casos, su baja será considerada como justificada.

Artículo 79.- Cambio de domicilio social.

Salvo que los estatutos dispongan otra cosa, el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal no exigirá acuerdo de la asamblea general, pudiendo acordarse por los administradores, y deberá constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

CAPÍTULO IX

FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LA COOPERATIVA

Artículo 80.- Modalidades y efectos de la fusión.

1.- La cooperativa podrá fusionarse, sea mediante la fusión de varias cooperativas para constituir una nueva, sea por absorción de una o más cooperativas por otra ya existente.

2.- Las cooperativas que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas se disolverán, aunque no entrarán en liquidación, y sus patrimonios sociales se transmitirán en bloque a la cooperativa nueva o a la absorbente, que asumirá los derechos y obligaciones de las que se extingan. Igualmente, las personas socias de las cooperativas que se extingan como consecuencia de la fusión se incorporarán a la cooperativa nueva o absorbente.

3.- La totalidad de los fondos sociales obligatorios de las cooperativas que se extingan como consecuencia de la fusión pasarán a integrarse en los de la cooperativa nueva o absorbente.

Artículo 81.- Proyecto de fusión.

1.- Los administradores de las cooperativas que participen en la fusión habrán de redactar un proyecto de fusión, que deberán suscribir como convenio previo.

2.- El proyecto de fusión contendrá, al menos, las menciones siguientes:

- a) La denominación, clase y domicilio de las cooperativas que participen en la fusión y de la nueva cooperativa en su caso, así como los datos identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro de Cooperativas de Euskadi.
- b) El sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada persona socia de las cooperativas que se extinguen como aportación al capital de la cooperativa nueva o absorbente, computando, cuando existan, las reservas voluntarias de carácter repartible.
- c) Los derechos y obligaciones que se reconozcan a las personas socias de la cooperativa extinguida en la cooperativa nueva o absorbente.

- d) La fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas que se extingan habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la cooperativa nueva o absorbente.
- e) Los derechos que correspondan a los titulares de participaciones especiales, títulos participativos u otros títulos asimilables de las cooperativas que se extingan en la cooperativa nueva o absorbente.

3.- Aprobado el proyecto de fusión, los administradores de las cooperativas que se fusionen se abstendrán de realizar cualquier acto o celebrar cualquier contrato que pudiera obstaculizar la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la proporción de la participación de las personas socias de las cooperativas extinguidas en la nueva o absorbente.

4.- El proyecto quedará sin efecto si la fusión no queda aprobada por todas las cooperativas que participen en ella en un plazo de seis meses desde la fecha del proyecto.

Artículo 82.- Información sobre la fusión.

Al publicar la convocatoria de la asamblea general que deba aprobar la fusión deberán ponerse a disposición de las personas socias, en el domicilio social, los siguientes documentos:

- a) El proyecto de fusión.
- b) Los informes, redactados por los administradores de cada una de las cooperativas sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.
- c) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las cooperativas que participen en la fusión y, en su caso, los informes de gestión y de los auditores de cuentas.
- d) El balance de fusión de cada una de las cooperativas cuando sea distinto del último anual aprobado. Podrá considerarse balance de fusión el último balance anual aprobado, siempre que hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de aprobación del proyecto de fusión.
- e) El proyecto de estatutos de la nueva cooperativa o el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de la cooperativa absorbente.
- f) Los estatutos vigentes de todas las cooperativas que participen en la fusión.

- g) La relación de nombres, apellidos, edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Artículo 83.- El acuerdo de fusión.

- 1.- El acuerdo de fusión habrá de ser adoptado por las asambleas generales de cada una de las cooperativas que participen en ella, de conformidad con el proyecto de fusión.
- 2.- La convocatoria de la asamblea general, que se ajustará a las normas legales y estatutarias previstas para la modificación de estatutos, deberá indicar que el proyecto de fusión se halla depositado en el Registro de Cooperativas de Euskadi y hará constar el derecho de todas las personas socias a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo anterior, así como a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.
- 3.- El acuerdo de fusión deberá aprobarse por la mayoría prevista en el número 2 del artículo 38 y no podrá modificar el proyecto de fusión pactado.
- 4.- El acuerdo de fusión deberá incluir las menciones legalmente exigidas para constituir una nueva cooperativa o, para el caso de que exista una cooperativa absorbente, aprobar las modificaciones estatutarias precisas.
- 5.- Desde el momento en que el proyecto queda aprobado por las asambleas generales de las cooperativas intervinientes, éstas quedan obligadas a continuar el procedimiento de fusión.
- 6.- El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en dos periódicos de gran circulación en el territorio histórico en que tenga el domicilio social cada una de las cooperativas participantes en la fusión.

Artículo 84.- Derecho de separación de la persona socia.

- 1.- Las personas socias de todas las cooperativas participantes en la fusión que hayan votado en contra de la misma, o las que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su disconformidad mediante escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días desde el último de los anuncios del acuerdo de fusión, tendrán derecho a separarse de la cooperativa.

2.- En caso de ejercer este derecho, la baja de la persona socia se entenderá justificada. La devolución de su aportación para el caso de las personas socias de las cooperativas que se extingan como consecuencia de la fusión, será obligación de la cooperativa nueva o absorbente.

Artículo 85.- Derecho de oposición de los acreedores.

1.- La fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes desde el último de los anuncios previstos en el número 6 del artículo 83. Si durante este plazo alguna persona acreedora de cualquiera de las cooperativas participantes en la fusión se opusiera por escrito a ésta, no podrá llevarse a efecto si sus créditos no son enteramente satisfechos o si la sociedad deudora o la cooperativa resultante de la fusión no aporta garantía suficiente.

2.- Los acreedores no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos.

3.- En el anuncio del acuerdo de fusión deberá mencionarse expresamente este derecho de oposición de los acreedores.

Artículo 86.- Escritura e inscripción de la fusión.

1.- Los acuerdos de fusión se formalizarán en escritura pública única, en la que constará el acuerdo de fusión aprobado por las respectivas asambleas generales de las cooperativas que se fusionan y el balance de fusión de las cooperativas que se extinguen.

2.- En caso de crearse una nueva cooperativa como consecuencia de la fusión, la escritura deberá contener, además, las menciones legalmente exigidas para su constitución. En el caso de fusión por absorción, contendrá las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la cooperativa absorbente.

3.- La eficacia de la fusión quedará supeditada a la inscripción de la nueva cooperativa, o, en su caso, a la inscripción de la absorción. Una vez inscrita en el Registro de Cooperativas de Euskadi la escritura de constitución por fusión o de absorción, se cancelarán los asientos registrales de las cooperativas extinguidas.

Artículo 87.- Fusiones especiales.

1.- Siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente, las sociedades civiles, mercantiles o entidades de cualquier otro tipo podrán fusionarse con cooperativas mediante la absorción de aquéllas por éstas o constituyendo una nueva sociedad. En el supuesto de fusión por absorción de una cooperativa por una entidad de otro tipo, se aplicará lo regulado en el artículo 89.4 de esta Ley respecto de la transformación, en relación con los fondos a que se refiere el mismo.

En estas fusiones serán de aplicación las respectivas normas reguladoras de las sociedades que se fusionan.

2.- Lo dispuesto en el número anterior se aplicará a las fusiones que se produzcan entre cooperativas agrarias y alimentarias y sociedades agrarias de transformación.

Artículo 88.- Escisión de la cooperativa.

1.- Podrá escindirse la cooperativa mediante:

- a) Su extinción, sin liquidación previa, distribuyendo a sus personas socias y dividiendo su patrimonio en dos o más partes, las cuales se traspasan en bloque a otra u otras cooperativas o entidades no cooperativas de nueva creación o son absorbidas por otra u otras cooperativas o entidades no cooperativas ya existentes, a las que se adscriben aquéllos.
- b) La segregación de una o varias partes del patrimonio y de las personas socias de la cooperativa, sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado y adscribiendo las personas socias a una o varias cooperativas u otras entidades de nueva creación o ya existentes.
- c) La segregación de una o varias partes del patrimonio de la cooperativa, sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una o varias cooperativas o entidades no cooperativas, de nueva creación o ya existentes.

2.- El proyecto de escisión suscrito por los administradores de las entidades participantes deberá contener una propuesta detallada de la parte del patrimonio y, en su caso, de las personas socias que vayan a transferirse a las entidades resultantes o absorbentes.

3.- En defecto de cumplimiento por una entidad beneficiaria de una obligación asumida por ella, en virtud de la escisión responderán solidariamente del cumplimiento de la misma las restantes entidades beneficiarias hasta el importe

del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si la sociedad escindida no ha dejado de existir como consecuencia de la escisión será responsable la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación.

4.- La escisión de cooperativas se regirá, con las salvedades contenidas en los números anteriores, por las normas reguladoras de la fusión, en lo que fueran aplicables, y las personas socias y acreedores de las cooperativas participantes podrán ejercer los mismos derechos.

5.- En aquellos supuestos en los que se segrega el patrimonio y/o las personas socias de la cooperativa en favor de una entidad no cooperativa, y adicionalmente, como consecuencia de la ejecución de la segregación, se transfieran total o parcialmente los fondos a que se refiere el artículo 89.4 de esta Ley para la transformación, registrados en el pasivo del balance de la cooperativa, se aplicarán las reglas previstas en dicho artículo.

CAPÍTULO X

TRANSFORMACIÓN

Artículo 89.- Transformación de cooperativas.

1.- Las cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- a) La transformación sólo podrá efectuarse por necesidades empresariales que exijan soluciones societarias inviables en el sistema jurídico cooperativo, a juicio de los administradores, quienes elaborarán un informe al respecto. Dicho informe, que se incorporará a la escritura pública de transformación, se comunicará con carácter previo al acuerdo a que se refiere la letra b) siguiente, al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
- b) Habrá de recaer acuerdo, expreso y favorable, de la asamblea general, adoptado con los requisitos establecidos para modificar los estatutos.
- c) El acuerdo de la asamblea deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos periódicos de gran circulación en el territorio histórico en que la cooperativa tenga su domicilio.
- d) La escritura pública de transformación incluirá todas las menciones legal y reglamentariamente exigidas para la constitución de la entidad cuya forma se adopte, respetando lo dispuesto en la presente ley. El informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario, previsto en la legislación mercantil, se incorporará, en su caso, a dicha escritura.

- e) Dicha escritura pública habrá de ser presentada, sucesivamente, tanto en el Registro de Cooperativas de Euskadi, para inscribir la baja correspondiente, como, en su caso, en el Registro Mercantil o en el Registro competente para la inscripción primera de la entidad cuya forma se adopte. Dicha escritura irá acompañada del balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación o bien al finalizar el último ejercicio, si hubieren transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio social y puesto a disposición de las personas socias desde el mismo día en que se cursó la convocatoria de la asamblea general.
- f) La inscripción de la transformación de la Cooperativa no puede llevarse a cabo hasta que se acredite ante el Registro de Cooperativas de Euskadi el cumplimiento de lo regulado en el párrafo 4 siguiente en relación con lo dispuesto en el artículo 98.2 d) de esta Ley.

También se relacionarán las personas socias que hayan ejercitado el derecho de separación y el capital que representen, así como el balance final elaborado por los administradores y cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura.

2.- La transformación no afecta a la personalidad jurídica de la cooperativa transformada, que continuará subsistiendo bajo su nueva forma.

3.- Tendrán derecho de separación las personas socias que hayan votado en contra en el acto de la asamblea, o los que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su disconformidad mediante escrito dirigido a los administradores en el plazo de cuarenta días desde la publicación del último anuncio del acuerdo. Tales personas socias tendrán derecho al reembolso de sus aportaciones al capital en el plazo que, sin exceder del previsto en el artículo 66 y desde la fecha del acuerdo de transformación, determinen los estatutos o acuerde la asamblea, percibiendo el interés legal del dinero por las cantidades aplazadas.

4.- El valor de las dotaciones del Fondo de Reserva Obligatorio y, en su caso, los fondos de reserva voluntarios que estatutariamente tengan el carácter de irrepartibles y los que con tal carácter se hayan acordado expresamente por la asamblea general, se pondrán a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. En cualquier caso, los fondos de reserva voluntarios respecto de los cuales se haya fijado una aplicación o destino concretos se excluirán de la puesta a disposición mencionada.

Para calcular el valor de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, que se pondrán a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, se deducirán de su valor nominal las pérdidas pendientes de compensación que consten en el balance de transformación aprobado por la Asamblea General.

No obstante, en caso de que la legislación aplicable exija el informe de experto independiente y hubiera que registrar una minusvaloración de activos en el balance de la nueva sociedad, dicha minusvaloración se aplicará al valor de los fondos puestos a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, según la proporción que tengan dichos fondos sobre el Patrimonio Neto Total.

La Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público tendrá la aplicación estatutariamente prevista y, en su defecto, la establecida en el apartado a) del número 2 del artículo 98 para el supuesto de liquidación de la cooperativa.

5.- Al aprobar la transformación, la asamblea general podrá optar por convertir las aportaciones al capital social en participaciones económicas de la nueva entidad en proporción directa al capital que tuviere desembolsado cada persona socia en la cooperativa al derecho de voto que ostentaba en la misma cooperativa, o bien combinando ambos criterios.

Artículo 90.- Transformación en cooperativas.

1.- Cualquier sociedad civil, mercantil, asociación, agrupación u otro tipo de entidad de carácter no cooperativo podrán transformarse en cooperativas de alguna de las clases reguladas en la presente ley siempre que no exista precepto legal que lo prohíba expresamente.

2.- La transformación será acordada por la junta general, o mediante el sistema válido equivalente para expresar la voluntad social, con la mayoría exigida por la legislación aplicable, no afectará la personalidad jurídica de la entidad transformada y se hará constar en escritura pública, que expresará necesariamente todas las menciones previstas en esta ley para la constitución de una cooperativa.

3.- La escritura pública de transformación, a la que se incorporará, en su caso, el informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario, se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil y demás procedentes, en su caso, y siempre en el de cooperativas, acompañada del balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.

4.- La transformación en cooperativa no altera el anterior régimen de responsabilidad de las personas socias de la entidad transformada por las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la entidad, a no ser que los acreedores hayan consentido expresamente la transformación.

CAPÍTULO XI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 91.- Causas de disolución.

Serán causas de disolución de la cooperativa:

- 1.- El cumplimiento del término fijado en los estatutos.
- 2.- La conclusión del objeto social o la imposibilidad manifiesta de realizarlo.
- 3.- La paralización o inactividad de los órganos sociales o la interrupción sin causa justificada de la actividad cooperativa, en ambos casos durante dos años consecutivos.
- 4.- La reducción del número de personas socias por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la cooperativa, si se mantiene durante más de doce meses.
- 5.- La reducción del capital social a una cantidad inferior a la cifra de capital social mínimo establecido en los estatutos, sin que se restablezca en el plazo de doce meses.
- 6.- La fusión o la escisión total.
- 7.- La apertura de la fase de liquidación de la cooperativa en el procedimiento concursal.
- 8.- El acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría prevista en el número 2 del artículo 38.
- 9.- Cualquier otra causa establecida en las leyes o en los estatutos sociales.

Artículo 92.- Eficacia de las causas de disolución.

- 1.- El transcurso del plazo fijado operará de pleno derecho, a no ser que con anterioridad hubiese sido expresamente prorrogado, mediante acuerdo adoptado en la asamblea general por la mayoría prevista en el número 2 del artículo 38, e inscrita dicha prórroga en el Registro de Cooperativas de Euskadi. El acuerdo que consista en la ampliación del plazo de duración dará lugar a que, en caso de separación, la

baja de la persona socia sea considerada como justificada, reconociéndose tal derecho en los términos previstos en el artículo 78.4.

2.- Las restantes causas requerirán acuerdo de la asamblea general, tomado por mayoría ordinaria, salvo en los supuestos previstos en los números 6 y 8 del artículo anterior. Producida cualquiera de aquellas causas, los administradores deberán convocar la asamblea general en el plazo de dos meses. La comisión de vigilancia o cualquier persona socia podrán requerir a los administradores para que procedan a la convocatoria.

3.- Si dicha asamblea no fuera convocada, no se reuniese en el plazo estatutariamente establecido o reunida, no pudiera adoptarse tal acuerdo o se adoptase un acuerdo contrario a declarar la disolución, los administradores deberán y cualquier persona interesada podrá solicitar la disolución judicial de la cooperativa. En todo caso, tendrán la condición de personas interesadas el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, y las federaciones más representativas en cuanto a sus asociadas y en su caso, la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

4.- El acuerdo de disolución o la resolución judicial que la declare deberá inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi, publicándose en el Boletín Oficial del País Vasco y en un periódico de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social.

5.- La cooperativa disuelta podrá ser reactivada siempre que se elimine la causa que motivó la disolución y no haya comenzado el reembolso de las aportaciones a las personas socias.

Para ello se precisará acuerdo de la asamblea general adoptado por la mayoría prevista en el número 2 del artículo 38. Dicho acuerdo no producirá efectos hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

En caso de procedimiento concursal, y siempre que se hubiera iniciado la fase de liquidación, la reactivación sólo podrá ser acordada si la cooperativa llega a un convenio con sus acreedores.

Artículo 93.- Proceso de liquidación.

1.- Disuelta la cooperativa, se abrirá el período de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o escisión total. La cooperativa conservará su personalidad jurídica, debiendo añadir a su denominación, durante este período, la expresión «en liquidación».

2.- Durante el período de liquidación se observarán las normas legales y estatutarias aplicables sobre régimen de las asambleas generales, que serán convocadas por los administradores, quienes las presidirán y a las que darán cuenta de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común.

Artículo 94.- Nombramiento de los liquidadores.

1.- La asamblea general elegirá uno o más liquidadores , preferentemente entre las personas socias de la cooperativa, en número necesariamente impar. En caso de que ninguna de las personas socias, acreditando justa causa de excusa, quiera aceptar el cargo, ha de ser nombrado o nombrada entre personas físicas o jurídicas que no sean socias de la cooperativa. Los liquidadores podrán ser retribuidos.

El nombramiento no surtirá efectos frente a terceras personas no socias hasta su inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

2.- Si transcurren dos meses desde la disolución sin que se hubiese efectuado el nombramiento y la aceptación consiguiente, los administradores deberán solicitar al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social el nombramiento de liquidadores, que podrán ser personas no socias de la cooperativa.

También está legitimada para formular esa solicitud cualquier persona interesada, con la precisión señalada en el número 3 del artículo 92.

Artículo 95.- Transmisión de funciones.

Disuelta la cooperativa, los administradores continuarán en sus funciones de representación y gestión, a los solos efectos de evitar posibles perjuicios, cesando en ellas una vez nombrados los liquidadores, con los cuales suscribirán un inventario y balance de la cooperativa, con referencia al día en que se inicie la liquidación y con carácter previo a que los liquidadores comiencen a desempeñar sus funciones.

Además, si fueran requeridos para ello, deberán proporcionar la información y antecedentes que soliciten los liquidadores para la práctica de las operaciones de la liquidación.

Artículo 96.- Funciones de los liquidadores.

1.- Cuando sean varios los liquidadores, la asamblea general determinará el régimen aplicable.

2.- Los liquidadores estarán facultados para realizar cuantas operaciones sean necesarias para la liquidación. Para el cumplimiento de las funciones que se les encomiendan ostentarán la representación de la cooperativa en juicio y fuera de él, obligando a la sociedad frente a terceras personas no socias en los mismos términos que los establecidos para el órgano de administración de la cooperativa.

En particular, deberán:

- a) Suscribir el inventario y balance inicial aludido en el artículo anterior.
- b) Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la cooperativa y velar por la integridad de su patrimonio.
- c) Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias o convenientes para la liquidación de la cooperativa.
- d) Enajenar los bienes sociales.
- e) Reclamar y percibir los créditos pendientes, sea contra terceras personas no socias o contra las personas socias.
- f) Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a los intereses sociales.
- g) Pagar a los acreedores y a las personas socias y transferir el remanente de la cooperativa conforme a lo establecido en el artículo 98.

3.- Los liquidadores terminan sus funciones por haberse realizado la liquidación, por revocación acordada en asamblea general o por decisión judicial mediante justa causa a petición de un grupo de personas socias que represente el veinte por ciento de los votos. Los liquidadores responderán en los mismos términos establecidos para los administradores.

Artículo 97.- Intervención de la liquidación.

1.- El veinte por ciento de las personas socias podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la cooperativa la designación de uno o varios interventores que fiscalicen las operaciones de la liquidación.

2.- Cuando el patrimonio que haya de ser objeto de liquidación sea cuantioso, exista un elevado número de personas socias o la importancia de la liquidación por cualquier otra causa lo justifique, la persona titular del Departamento del

Gobierno Vasco competente en materia de trabajo podrá, de oficio o a instancia de parte interesada, designar una o varias personas que se encarguen de intervenir la liquidación y de velar por el cumplimiento de las leyes y los estatutos sociales.

3.- No tendrán validez los actos de los liquidadores efectuados sin la participación de los interventores.

Artículo 98.- Adjudicación del haber social.

1.- No se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya procedido a su consignación o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.

2.- Satisfechas dichas deudas, el resto del haber social se adjudicará por el siguiente orden:

- a) La Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público se pondrá a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
- b) Se reintegrará a las personas socias el importe de las aportaciones que tuvieran al capital social, actualizadas en su caso, comenzando por las aportaciones voluntarias y siguiendo con las aportaciones obligatorias.
- c) Se reintegrará a las personas socias su participación en los fondos de reserva voluntarios que tengan carácter repartible por disposición estatutaria o por acuerdo de la asamblea general, distribuyéndose los mismos de conformidad con las reglas establecidas en estatutos o en dicho acuerdo y, en su defecto, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de las personas socias con la cooperativa durante los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución.
- d) El sobrante, si lo hubiera, tanto del Fondo de Reserva Obligatorio como del haber líquido de la cooperativa, se pondrá a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, salvo lo dispuesto en el artículo 139 para las cooperativas de segundo o ulterior grado.

3.- Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 60.1 b), los titulares que hubieran causado baja y a los que la cooperativa hubiera rehusado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social, después de la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público y, salvo que los estatutos prevean lo contrario, antes del reintegro de las demás aportaciones.

Artículo 99.- Balance final.

1.- Satisfecha la totalidad de las deudas sociales, los liquidadores confeccionarán un balance final del estado patrimonial de la sociedad y un proyecto de distribución del haber social, elaborado conforme a lo establecido en el artículo anterior.

2.- El balance final y el proyecto de distribución del haber social se someterán a la aprobación de la asamblea general, previo informe de la comisión de vigilancia o, en su caso, de los auditores y de los interventores. Dicha aprobación deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y en un periódico de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social, haciéndose constar en el anuncio que la documentación relativa a aquellos acuerdos se encuentra depositada en el domicilio social a disposición de las personas interesadas.

3.- El acuerdo de aprobación podrá ser impugnado en el plazo de cuarenta días, a contar desde su publicación y conforme al procedimiento establecido para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general, por cualquier persona socia que se sienta agraviada y por los acreedores cuyos créditos no hubieran sido satisfechos o garantizados.

4.- En tanto no haya transcurrido el plazo para su impugnación o resueltas por sentencia firme las reclamaciones interpuestas, no podrá procederse al reparto del activo resultante. No obstante, los liquidadores podrán proceder a realizar pagos a cuenta del haber social siempre que por su cuantía no hayan de verse afectados por el resultado de aquellas reclamaciones.

Artículo 100.- Cancelación registral.

Finalizada la liquidación y distribuido el haber social conforme a lo estipulado en los artículos anteriores, los liquidadores, en escritura que incorporará la aprobación del balance final y las operaciones de aquélla, deberán solicitar del Registro de Cooperativas de Euskadi la cancelación de los asientos referentes a la cooperativa y depositar los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes concernientes al tráfico de la sociedad, salvo que en dicha escritura los liquidadores hubieran asumido el deber de conservación de dichos libros y documentos durante el plazo de seis años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la sociedad, o manifestado que la sociedad carece de ellos.

Artículo 101.- Concurso de la cooperativa.

A las cooperativas les será aplicable la legislación concursal, debiéndose inscribir en el Registro de Cooperativas de Euskadi las resoluciones judiciales de publicidad registral que se dicten.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO I

CLASES DE COOPERATIVAS

SECCIÓN 1ª

NORMAS COMUNES

Artículo 102. Clasificación y normativa aplicable.

1.- Las cooperativas pueden constituirse acogiendo a cualquiera de las clases reguladas en el presente capítulo. Esa clasificación no obstará a la libre configuración estatutaria de otras cooperativas, con tal de que quede claramente determinada la correspondiente actividad cooperativa y la posición jurídica de las personas socias que deben participar en ella, en cuyo caso el Registro y las personas interesadas aplicarán la normativa legalmente prevista para la clase de entidades con las que aquéllas guarden mayor analogía.

2.- La delimitación legal de cada clase o tipo de cooperativas sólo impedirá la constitución de una entidad de segundo grado, de la clase respectiva, cuando las personas socias cooperadoras tengan que ser, necesariamente y en su mayoría, personas físicas.

3.- Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios configuradores de esta sociedad en el marco de la presente ley, se regirá por las disposiciones especiales aplicables a la clase respectiva, y en lo no previsto en la sección correspondiente, por las normas de carácter general.

SECCIÓN 2ª

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Artículo 103.- Objeto y normas generales.

1.- Son cooperativas de trabajo asociado las que asocian principalmente a personas físicas que, mediante su trabajo, a tiempo parcial o completo realizan cualquier actividad económica o profesional para producir en común bienes y servicios para terceras personas no socias .

La relación de la persona socia trabajadora con la cooperativa es una relación societaria.

2.- Podrán ser personas socias trabajadoras quienes legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. Las personas extranjeras podrán ser personas socias trabajadoras de acuerdo con lo previsto en la legislación específica sobre su prestación de trabajo en el Estado español.

3.- La pérdida de la condición de persona socia trabajadora provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa.

4.- Aun cuando la finalidad de las cooperativas de trabajo asociado es la de prestación del trabajo de las personas socias, proporcionándoles empleo, podrán realizar contratos de trabajo por cuenta ajena, cuyo número de horas/año no podrá ser superior al 30 por 100 del total de horas/año de trabajo realizadas por las personas socias trabajadoras. Si las necesidades objetivas de la empresa obligaran a superar este porcentaje, ello será válido para un período que no exceda de tres meses. Para superar dicho plazo deberá solicitarse autorización motivada al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, que ha de resolver en un plazo de quince días y en caso de silencio se entenderá concedida la autorización.

No se computarán en este porcentaje:

- a) Las horas/año de trabajo realizadas en centros y unidades de trabajo de carácter subordinado o accesorio.

Se entenderá, en todo caso, como trabajo prestado en centro de trabajo subordinado o accesorio el prestado por las personas trabajadoras por cuenta ajena que contraten las cooperativas para prestar servicios de

duración determinada en los locales del cliente o su beneficiario y para la Administración Pública. También aquellas actividades que deba realizar la cooperativa en obras, montajes o actividades auxiliares, siempre que éstas no constituyan el objeto social principal de la cooperativa y que se presten fuera de los locales de la cooperativa por exigencias propias de la actividad, y siempre que la relación con la cooperativa no tenga carácter claramente estable y de duración indefinida.

- b) El trabajo realizado por las personas trabajadoras por cuenta ajena integradas en las cooperativas por subrogación legal, así como por aquellas que se incorporen en actividades sometidas a estas subrogaciones.
- c) El trabajo desempeñado por personas trabajadoras que sustituyan a personas socias trabajadoras o asalariadas en situación de excedencia e incapacidad temporal, baja por maternidad, adopción o acogimiento, o por conciliación familiar.
- d) El trabajo desempeñado por personas trabajadoras que se negasen explícitamente a ser personas socias trabajadoras.
- e) Las personas trabajadoras contratadas para ser puestas a disposición de empresas usuarias cuando la cooperativa actúa como empresa de trabajo temporal.
- f) El trabajo realizado por el alumnado de cooperativas dedicadas a la formación, orientación e intermediación laboral en programas de empleo y formación.
- g) Las personas trabajadoras con contratos en prácticas y para la formación.
- h) El trabajo desempeñado por personas con deficiencias físicas, psíquicas y/o sensoriales reconocidas como mínimo del treinta y tres por ciento excepto en las cooperativas de trabajo asociado que hayan sido calificadas y reconocidas como centros especiales de empleo.
- i) Las personas trabajadoras incorporadas como consecuencia de un contrato de la cooperativa con la administración o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

No obstante lo dispuesto en este número, las cooperativas con menos de ocho personas socias trabajadoras podrán emplear hasta un máximo de dos personas trabajadoras con contrato de trabajo por cuenta ajena.

5.- Los estatutos podrán fijar el procedimiento por el que las personas trabajadoras asalariadas pueden acceder a la condición de personas socias. En las cooperativas reguladas en este artículo que rebasen el límite de trabajo asalariado establecido, la persona trabajadora con contrato de trabajo por tiempo indefinido y más de un año de antigüedad en la cooperativa deberá ser admitida como persona socia trabajadora, sin período de prueba, si reúne los demás requisitos y así lo solicita en el plazo de los doce meses siguientes, desde que pudo ejercitar tal derecho.

Las personas asalariadas que no tengan opción a ser personas socias, o mientras no puedan ejercitarla, participarán en los resultados de la cooperativa, cuando éstos fueran positivos, en la proporción que han de definir los estatutos, que en ningún caso será inferior al veinticinco por ciento del retorno cooperativo reconocido a las personas socias de igual o equivalente clasificación profesional. Cuando el asalariado o asalariada cause baja dicha participación podrá calcularse sobre las últimas cuentas anuales aprobadas por la asamblea general. Esta participación en resultados tendrá el carácter que señala el artículo 70.5 de esta Ley.

6.- Las personas socias trabajadoras, por la prestación de su trabajo, tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos laborales en cuantía no inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

7.- Serán de aplicación a los centros de trabajo de estas cooperativas y a sus personas socias las normas generales sobre prevención de riesgos laborales.

Asimismo, las personas socias trabajadoras menores de dieciocho años estarán sujetas a las limitaciones para trabajos nocturnos o para trabajos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos que establezca la legislación laboral para personas trabajadoras menores de 18 años.

8.- A efectos de la Seguridad Social, las personas socias trabajadoras están asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena o a personas trabajadoras autónomas. Los estatutos optarán por uno u otro régimen.

Las Cooperativas de trabajo asociado que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, hubieran optado en sus estatutos por asimilar a sus personas socias trabajadoras a trabajadores o trabajadoras autónomos o autónomas del régimen especial correspondiente, asumirán, en el caso de que así se hubiera establecido en sus estatutos, la obligación del pago de las cuotas y obligaciones de las personas socias trabajadoras durante su período activo en las cooperativas, sin perjuicio del sometimiento a la normativa rectora del régimen correspondiente de la Seguridad Social. Las cuantías abonadas no

formarán parte del anticipo y tendrán la consideración de partida deducible para la determinación del excedente neto definido en el artículo 69 de la Ley.

9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciese cargo de ésta, las personas socias trabajadoras que vinieran desarrollando su actividad en la misma tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido, de acuerdo con la normativa vigente, si hubieran prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de personas trabajadoras por cuenta ajena.

Las personas trabajadoras que se hallaran en la situación del párrafo anterior tendrán, durante un plazo de cinco años, derecho preferente de reingreso en su cooperativa de origen si en ésta se crearan nuevos puestos de trabajo de contenido similar al que ocupaban.

Artículo 104.- Período de prueba.

1.- Los estatutos podrán establecer un período de prueba como requisito para la admisión como persona socia.

El período de prueba no excederá de seis meses. No obstante, para ocupar los puestos de trabajo que fijen los administradores, salvo atribución estatutaria expresa de esta facultad a la asamblea general, cuyo desempeño exija especiales condiciones profesionales, el período de prueba podrá ser de hasta dieciocho meses. El número de los referidos puestos de trabajo no podrá exceder del veinte por ciento del total de los de la cooperativa.

2.- Los o las aspirantes a personas socias trabajadoras, durante el período en que se encuentren en situación de prueba, tendrán los mismos derechos y obligaciones que las demás personas socias, con las siguientes particularidades:

- a) Podrán resolver la relación por libre decisión unilateral, facultad que también se reconoce a los administradores de la cooperativa.
- b) No podrán ser elegidas para los cargos de los órganos de la sociedad.
- c) No estarán obligadas ni facultadas para hacer aportaciones al capital social ni para desembolsar la cuota de entrada.
- d) No les alcanzará la imputación de las pérdidas que se produzcan en la cooperativa durante el período de prueba, ni tendrán derecho al retorno cooperativo, sin perjuicio de su derecho a percibir de los resultados positivos la misma cuantía que se reconozca a las personas asalariadas.

3.- No procederá el período de prueba si la persona trabajadora ya hubiera estado en situación de prueba y la hubiera superado sin incorporarse como socia desde que se resolvió la relación

Artículo 105.- Régimen de trabajo.

1.- Los estatutos, el reglamento de régimen interno o, en su defecto, la asamblea general establecerán el marco básico de régimen de trabajo de las personas socias trabajadoras.

2.- Podrán regularse como materias de dicho régimen la organización del trabajo, las jornadas, el descanso semanal, las fiestas, las vacaciones, los permisos, la clasificación profesional, la movilidad funcional y geográfica, las excedencias o cualquier otra causa de suspensión o extinción de la relación de trabajo cooperativo, y, en general, cualquier otra materia directamente vinculada con los derechos y obligaciones derivados de la prestación del trabajo por la persona socia trabajadora.

Artículo 106.- Régimen disciplinario.

1.- Los estatutos, el reglamento de régimen interno, o en su defecto la asamblea general, establecerán el marco básico del régimen disciplinario de las personas socias trabajadoras.

2.- El régimen disciplinario regulará los tipos de faltas que puedan producirse en la prestación del trabajo, las sanciones, los órganos y personas con facultades sancionadoras delegadas, y los procedimientos sancionadores con expresión de los trámites, recursos y plazos; respetando, en todo caso, las garantías de defensa de las personas socias expedientadas a través de sus pliegos de descargos, audiencias preceptivas previas y en su revisión, en el caso de faltas graves o muy graves, siempre que medie recurso, por parte del comité de recursos o en su defecto, por la asamblea general.

3.- La expulsión de las personas socias trabajadoras sólo podrá ser acordada por los administradores, contra cuya decisión la persona socia podrá recurrir, en el plazo de quince días desde la notificación del mismo ante el comité de recursos o, en su defecto, ante la asamblea general. Aunque el acuerdo de expulsión sólo será ejecutivo desde que sea ratificado por el correspondiente órgano o haya transcurrido el plazo para recurrir ante el mismo, la cooperativa podrá suspender a la persona socia trabajadora en su empleo, conservando ésta provisionalmente su derecho al anticipo laboral como si estuviera prestando trabajo.

Artículo 107.- Cuestiones contenciosas.

1.- Los órganos jurisdiccionales de orden social conocen de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre las cooperativas de trabajo asociado y sus personas socias trabajadoras por su condición de tales. En consecuencia, los conflictos no basados en este especial vínculo sociolaboral y que sean análogos a los que puedan surgir entre cualquier persona socia y las cooperativas de otras clases siguen sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales mercantiles.

2.- A estos efectos, se considerarán materias que afectan exclusivamente a la relación típica entre la cooperativa de trabajo asociado y sus personas socias trabajadoras las relativas a:

- a) la percepción de los anticipos laborales o de las prestaciones complementarias o sustitutivas de los mismos en la medida que sean exigibles.
- b) los recursos por sanciones impuestas por infracción de normas de disciplina sociolaboral, incluida la de expulsión por tal motivo.
- c) las situaciones de suspensión del trabajo y excedencias.
- d) materias de Seguridad Social.
- e) acceso de la persona trabajadora asalariada a la condición de persona socia trabajadora.
- f) en general, a los derechos y obligaciones derivados precisamente de las normas internas de régimen del trabajo cooperativo.

3.- En todo caso, estas cuestiones litigiosas se resolverán aplicando esta ley, los estatutos sociales y demás acuerdos internos de la cooperativa, y en general los principios cooperativos. Solo en su defecto, se aplicarán por analogía las disposiciones de la legislación laboral.

SECCIÓN 3ª

COOPERATIVAS DE CONSUMO

Artículo 108.- Objeto y función social.

1.- Las cooperativas de consumo tienen como objeto procurar bienes o prestar servicios para el uso o consumo de las personas socias y de quienes con ellas convivan, así como la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios. Pueden ser personas socias de estas cooperativas las personas físicas y las entidades u organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales.

2.- Las cooperativas de consumo podrán suministrar dentro de su ámbito territorial bienes o servicios a personas o entidades no socias cuando lo prevean los estatutos.

SECCIÓN 4ª

COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA

Artículo 109.- Objeto y modalidades.

1.- Son cooperativas de enseñanza las que desarrollan actividades docentes en sus distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades, en cualesquiera ramas del saber o de la formación. Podrán realizar también actividades extraescolares y conexas, así como prestar servicios escolares complementarios y cuantos faciliten las actividades docentes.

2.- Cuando asocien a los padres o madres de los alumnos o alumnas, a sus representantes legales o a los propios alumnos o alumnas, les serán de aplicación las normas de la presente ley sobre cooperativas de consumo, además de lo recogido en el artículo 36.2. El profesorado y restante personal del centro podrán incorporarse, bien como personas socias de trabajo, bien como personas socias colaboradoras. Esta última posición también podrán asumirla, entre otras personas interesadas, los ex-alumnos o ex-alumnas.

3.- Cuando la cooperativa de enseñanza asocie al profesorado y a personal no docente y de servicios, se aplicarán, además de lo recogido en el artículo 36.2, las normas de esta ley reguladoras de las cooperativas de trabajo asociado, excluido lo regulado por el artículo 30, pudiendo asumir la posición de personas socias colaboradoras, entre otras personas interesadas, los alumnos o alumnas, sus padres o madres o sus representantes legales, así como los ex-alumnos o ex-alumnas.

4.- La cooperativa de enseñanza, si lo prevén los estatutos, podrá tener carácter integral o intersectorial cuando, como mínimo, agrupe a la mayoría de quienes imparten la enseñanza y del personal no docente, por un lado, y a la mayoría de quienes reciben las prestaciones docentes o representan a los alumnos o alumnas, por otro, o bien cuando, sin concurrir esas mayorías, se alcance un número de personas socias de ambos colectivos que sea suficiente, según los estatutos, para configurar esta modalidad.

Artículo 110.- Especialidades de las cooperativas de enseñanza integrales.

1.- En relación con las cooperativas a que se refiere el número 4 del artículo anterior, además de lo recogido en el artículo 36.2, los estatutos podrán:

- a) Establecer períodos de prueba, para las personas socias de los dos colectivos integrados, por un período máximo de hasta un curso escolar.
- b) Prever el funcionamiento de cada uno de los órganos sociales necesarios por mayorías reforzadas que no excedan de las tres cuartas partes del quórum de constitución respectivo.
- c) Para el caso de que no se alcance la mayoría reforzada prevista para adoptar acuerdos, o con carácter independiente de ello, fijar de modo general el número máximo de consejeros y el de votos en la asamblea general que, respectivamente, podrán atribuirse al colectivo de personas socias usuarias, con objeto de evitar una situación de desequilibrio insalvable respecto a las personas socias de trabajo.
- d) Regular, con o sin medidas equilibradoras, el ejercicio de los derechos de asistencia y voz en las asambleas, incluso mediante la previa celebración de una o varias juntas especiales de personas socias usuarias, para que éstas elijan a sus representantes en la asamblea general inmediata y, en su caso, en las sucesivas que se celebren dentro del plazo que también señalen los estatutos.
- e) Prever presidentes rotatorios de forma que, por períodos de igual duración, las presidencias de cada órgano colegiado sean ocupadas, alternativamente, por personas socias pertenecientes a cada uno de los dos colectivos existentes en la cooperativa.
- f) Regular una comisión dirimente, de composición paritaria y con posible asistencia de expertos, para resolver situaciones de empates no superados en el seno de los órganos necesarios, a cuyo fin éstos podrán delegar en dicha comisión la facultad de decidir sobre aquellas materias, sea cual fuere su contenido, en que no fue posible el acuerdo del órgano ordinario correspondiente.

2.- Las medidas enunciadas en el número precedente tendrán carácter alternativo o acumulativo, siempre que ello sea posible, según señalen los estatutos. Estos también podrán establecer, en su caso, reglas especiales para la adecuada participación de las personas socias colaboradoras.

3.- Los estatutos podrán, asimismo, determinar las pautas o criterios básicos para decidir cuándo por la imposición sistemática de un colectivo de personas socias sobre el otro, por la parálisis o entorpecimiento notable y frecuente de los órganos sociales o por otras causas debidamente fundadas, procederá reconducir la cooperativa a una de las modalidades reguladas en los números 2 y 3 del artículo anterior, con o sin escisión societaria.

Artículo 111.- Personas socias de naturaleza o de utilidad pública.

1.- Las entidades e instituciones públicas y las privadas de utilidad pública, incluidas las benéficas, sin perjuicio de su eventual admisión como socias colaboradoras, podrán asumir, incluso simultáneamente, la condición de socias usuarias cuando ejerzan la guarda y protección legal de escolares menores o incapaces, o cuando representen a alumnos o alumnas adultas que, estando acogidas en centros, residencias o establecimientos regidos por aquéllas, les hayan otorgado expresamente su representación.

Las consecuencias de la eventual acumulación de la cualidad de persona socia colaboradora y de persona socia usuaria serán objeto de expresa regulación estatutaria, dentro del marco de la presente ley y de las disposiciones vigentes sobre el sistema educativo.

2.- Tales entidades e instituciones podrán realizar, por cualquier título jurídico, aportaciones patrimoniales de toda clase, incluida la cesión de terrenos, edificios y otros bienes inmuebles, equipados o no, que sean necesarios para el establecimiento o el adecuado desarrollo de la cooperativa.

3.- Si los estatutos lo prevén, dichas personas socias institucionales tendrán reservados puestos en el consejo rector y en su condición de usuarias podrán asistir a las asambleas generales con un número de votos proporcional al de alumnos o alumnas que representen, sin las limitaciones señaladas en el número 2 del artículo 37.

SECCIÓN 5ª

COOPERATIVAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

Artículo 112.- Objeto y actividades.

1.- Son cooperativas agrarias y alimentarias las que asocian a titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas y que tienen por objeto comercializar, proporcionar suministros, equipos productivos y servicios o realizar operaciones encaminadas a la mejora, en cualquier área o vertiente económico-social, de las explotaciones de las personas socias, de sus elementos o componentes, de la propia cooperativa o de la vida en el medio rural, entre otras, la prestación de servicios por la cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores agrarias u otras análogas en las mencionadas explotaciones y a favor de las personas socias de la misma.

En el caso de titularidad compartida que cumpla los requisitos de la legislación que regula dicha institución, ostentará la condición de persona socia la propia entidad de titularidad compartida, inscrita en el registro específico, pudiendo ser representada por cualquiera de las dos personas integrantes de la misma, mediante su acreditación por certificación del mismo.

Asimismo, en el caso de que una entidad de titularidad compartida sea designada para ocupar un cargo del órgano de administración, la entidad de titularidad compartida deberá comunicar mediante certificación cuál de las dos personas integrantes será quien desempeñe las funciones propias del cargo en el órgano de administración. Este último requisito deberá ser satisfecho igualmente en el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes y cualquier otra entidad sin personalidad jurídica.

Los estatutos de la cooperativa podrán exigir, como requisito para adquirir y conservar la condición de persona socia, un compromiso de actividad exclusiva correspondiente a su objeto social.

2.- Para el cumplimiento de su objeto social las cooperativas agrarias y alimentarias podrán desarrollar, además de las actividades propias de aquél, determinadas en los estatutos, aquellas otras que sean presupuesto, consecuencia, complemento o instrumento para la mejora económica, técnica, laboral, ecológica o social de la cooperativa, de las explotaciones de las personas socias, de los elementos de éstas o del medio rural.

Artículo 113.- Operaciones con terceras personas no socias.

1.- Las cooperativas agrarias y alimentarias, sean polivalentes o especializadas, con actividad comercializadora podrán desarrollar esta actividad y las conexas a ella, llegando incluso directamente al consumidor o consumidora, con productos agrarios que no procedan de las explotaciones de la cooperativa o de sus personas socias en los siguientes casos:

- a) En cada ejercicio económico hasta un cinco por ciento, cuantificado dicho porcentaje independientemente para cada una de las actividades en que la cooperativa utilice productos agrarios de terceras personas no socias.
- b) Si lo prevén los estatutos, el porcentaje máximo en cada ejercicio económico podrá llegar hasta el cuarenta y nueve por ciento.
- c) Cuando, por circunstancias no imputables a la cooperativa, ésta pueda rebasar los límites anteriores por haber obtenido la autorización prevista en el artículo 5 de la presente ley.

Cuando existan normativas sectoriales específicas, u otras dictadas en aplicación de aquellas, que sean aplicables a la cooperativa por razón del sector de su actividad agroalimentaria, y que establezcan o permitan límites más elevados de porcentajes de producciones de terceras personas no socias que los anteriormente indicados, dicha cooperativa podrá reflejar en los estatutos dichos límites sin necesidad de requerir la autorización prevista en el apartado anterior, pero debiendo hacer constar expresamente en los estatutos la disposición que legitima dicho porcentaje.

2.- Las cooperativas agrarias y alimentarias con actividad suministradora, única o diferenciada, dirigida a sus explotaciones o a las de sus miembros, podrán ceder a terceras personas no socias productos o servicios dentro de los límites y en los supuestos equivalentes a los apartados a) y b) del número anterior, sin perjuicio de poder hacerlo en todo caso cuando se trate de los remanentes ordinarios de la actividad cooperativa.

SECCIÓN 6ª

COOPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN COMUNITARIA

Artículo 114.- Objeto y ámbito.

1.- Estas cooperativas asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de bienes susceptibles de explotación agraria que ceden tales derechos, prestando además, o no, su trabajo personal, así como a quienes, sin ceder derechos de disfrute, van a trabajar en la entidad. Tienen por objeto poner en común tierras u otros medios de producción para crear y gestionar una única empresa o explotación agraria, en la que también podrán integrarse bienes que posea la cooperativa por cualquier título.

Podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su objeto social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de productos agrarios como las operaciones preparatorias que tengan por finalidad constituir o perfeccionar la explotación en todos sus elementos, funciones y procesos, así como las de recolección y distribución y las conexas y complementarias, y, en general, cuantas resulten propias de la actividad agraria o sean antecedente, complemento o consecuencia directa de la misma.

2.- La actividad cooperativa de comercialización de productos procedentes de terceras personas no socias se regirá por lo previsto en la presente ley para las cooperativas agrarias y alimentarias. El número de personas trabajadoras con contrato laboral no podrá ser superior al treinta por ciento del total de personas socias de trabajo de la cooperativa.

3.- En estas cooperativas su ámbito estatutario determina el espacio geográfico en el que las personas socias de trabajo pueden desarrollar habitualmente su actividad cooperativa y dentro del cual también han de estar situados la mayor parte de los bienes inmuebles integrantes de la explotación.

Artículo 115.- Régimen de las personas socias.

1.- La eventual acumulación de la doble cualidad de persona socia de trabajo y persona socia cedente del uso y aprovechamiento de bienes a la cooperativa no permitirá atribuir más de un voto.

2.- Serán de aplicación a las personas socias de trabajo las normas establecidas en la presente ley para las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado, con las salvedades contenidas en esta sección.

3.- Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de bienes, sin exceder de quince años, así como las normas sobre transmisión de los derechos de sus respectivos titulares a la sociedad.

4.- Las personas arrendatarias y demás titulares de un derecho de goce podrán ceder el uso y aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título jurídico, sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo.

En tales supuestos la cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo estatutario de permanencia obligatoria, siempre que la persona titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por todo el tiempo de duración del vínculo jurídico correspondiente.

Artículo 116.- Estructura económica.

1.- Se diferenciarán las aportaciones patrimoniales efectivas, dinerarias o no dinerarias, que integrarán el capital social, de las prestaciones consistentes en la obligación de aportar trabajo, servicios o asistencia técnica, que no podrán integrar el capital social.

2.- Las rentas por la cesión del uso de los bienes y los anticipos por el trabajo serán análogas al nivel de rentas y de retribuciones salariales usuales en la zona.

Los retornos se acreditarán a las personas socias, según su respectiva actividad con la cooperativa, en proporción a los anticipos laborales y a las rentas que deba abonar aquélla por la cesión del uso de los bienes.

3.- La imputación de las pérdidas a las personas socias se realizará aplicando los criterios utilizados para acreditar los retornos, pero los estatutos o la asamblea general determinarán lo necesario para garantizar a las personas socias de trabajo una compensación mínima igual al setenta por ciento de las retribuciones satisfechas en la zona por igual trabajo, y en todo caso no inferior al importe del salario mínimo interprofesional.

4.- Los estatutos señalarán el procedimiento para valorar los bienes susceptibles de explotación en común, y podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que puedan afectar a los bienes cuyo goce haya sido cedido y sean consecuencia del plan de explotación comunitaria de los mismos. También podrán establecer normas por las que las personas socias que hayan cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de bienes queden obligados a no transmitir a terceras personas no socias derechos sobre dichos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de los mismos por la cooperativa, durante el tiempo de permanencia obligatoria de la persona socia en la misma.

SECCIÓN 7ª

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS

Artículo 117.- Objeto, operaciones y ámbito.

1.- Las cooperativas de viviendas tienen por objeto procurar a sus personas socias viviendas o locales, edificaciones e instalaciones complementarias; mejorar, conservar y administrar dichos inmuebles y los elementos, zonas o edificaciones comunes; crear y prestar los servicios correspondientes, así como rehabilitar viviendas, locales y edificaciones e instalaciones destinadas a unos y otros.

En todo caso, el objeto social habrá de ser desarrollado, al menos en los aspectos básicos, directamente por la propia cooperativa sin perjuicio de que pueda ser facilitado o complementado de cualquier forma por terceras personas no socias con los que aquella contrate. Dichos contratos deberán ser dictaminados favorablemente por el letrado o letrada asesora de la Cooperativa.

2.- Podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Asimismo, y siempre que lo acuerde la asamblea general, podrán enajenar o arrendar a terceras personas no socias, los locales comerciales y los terrenos, las instalaciones y edificaciones complementarios de su propiedad que sean disponibles una vez cubiertas las necesidades de la cooperativa.

También podrá la cooperativa enajenar a terceras personas no socias las viviendas promovidas, cuando ello sea necesario para la financiación de la promoción cooperativa, una vez que la totalidad de las personas socias tenga garantizado su acceso a la vivienda. En este caso, al menos el setenta por ciento de las viviendas promovidas se adjudicará a las personas socias. La enajenación del resto de viviendas a terceras personas no socias requerirá la homologación por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que verifique dicha necesidad.

3.- Las cooperativas de viviendas sólo podrán realizar la promoción de viviendas y locales, que en todo caso será única por cada cooperativa, en el territorio a que alcance el ámbito de las mismas, establecido estatutariamente. Dentro del mismo residirán habitualmente la mayoría de las personas socias, salvo que la cooperativa estuviese orientada al servicio exclusivo o preferente de personas socias de la tercera edad o a la promoción de una segunda residencia. En estos casos, la convocatoria de las asambleas generales se cursará por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hayan señalado a tal efecto las personas socias.

Artículo 118.- Régimen de adjudicación o cesión.

1.- La propiedad o el uso y disfrute, habitual o por temporadas, de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a las personas socias mediante cualquier título admitido en derecho.

2.- Adjudicada la propiedad de viviendas y locales promovidos, la cooperativa deberá disolverse pero siempre y cuando haya transcurrido el plazo de garantía y el legal previsto para responder de los vicios ocultos como entidad promotora a contar desde la fecha de su adjudicación, salvo que los estatutos o convenios de colaboración suscritos con entidades públicas establezcan un plazo superior.

3.- Cuando la cooperativa promueva o adquiera un conjunto de viviendas y locales, todo ello como inmueble único, para su cesión a las personas socias, el conjunto inmobiliario será propiedad de la cooperativa en pleno dominio u otro derecho, con carácter indefinido o de duración determinada si así se prevé en los estatutos.

En tal caso, las personas socias cooperadoras ostentarán un derecho de uso sobre la vivienda y locales que le sean adjudicados por la cooperativa conforme a sus estatutos y normas de organización interna que regularán sus derechos y obligaciones.

En este tipo de cooperativas de cesión de uso, para adquirir la condición de persona socia habrá de suscribirse una aportación al capital siendo su importe máximo el que le corresponda en función de los costes de promoción o adquisición del inmueble. Las personas socias abonarán además las cuotas periódicas que fijen los órganos de la cooperativa para el mantenimiento, mejora y conceptos asimilables correspondientes al inmueble residencial.

En caso de baja de la persona socia, su derecho de uso se pondrá a disposición del consejo rector que lo adjudicará a una nueva persona socia. El derecho de uso es transmisible mortis causa a los causahabientes de la persona socia fallecida previa su admisión como personas socias, de conformidad con los requisitos generales, si así lo solicitan en el plazo de tres meses. En otro caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito correspondiente.

4.- Será de aplicación al importe de reembolso lo regulado en los párrafos segundo y tercero del número 6 del artículo 119 de la presente ley.

Artículo 119.- Régimen de las personas socias.

1.- Las cooperativas de viviendas se constituirán por al menos, el cincuenta por ciento del total de las personas socias a las que se refiere el artículo 117.1 precedente, en función del proyecto promovido, que deberá contener la escritura de constitución.

Este porcentaje no será exigible para las cooperativas de viviendas que vayan a:

- a) Realizar una promoción concertada impulsada por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- b) Realizar una promoción convenida con una o varias administraciones, o entidades con participación pública.
- c) Adquirir terrenos de dichas administraciones o entidades con participación pública, bien por enajenación directa o por concurso.

2.- En el momento de la constitución, a efectos de lo regulado en el párrafo tercero del número 1 del artículo 19 de la presente Ley, podrán computarse las personas socias colaboradoras, sin perjuicio de la posterior incorporación de las personas socias adjudicatarias o cesionarias de las viviendas, de conformidad con las normas vigentes en materia de promoción de viviendas de protección pública.

Las personas socias que promuevan una cooperativa de viviendas de protección pública únicamente podrán adoptar los acuerdos que resulten estrictamente necesarios hasta la calificación provisional de la promoción; si bien los acuerdos a que se refiere el artículo 121.2 de esta Ley serán adoptados cuando la cooperativa esté conformada por las personas socias adjudicatarias o cesionarias del proyecto promovido.

3.- Las cooperativas de vivienda asociarán mayoritariamente a personas físicas y a entidades cooperativas. El cumplimiento de los requisitos para adquirir la condición de persona socia deberá ser dictaminado favorablemente por el letrado o letrada asesora, excepto en las promociones de viviendas de protección pública.

4.- En el supuesto de que se soliciten por parte de la cooperativa cantidades anticipadas a cuenta de edificación a las personas adjudicatarias, las referidas cantidades deberán estar garantizadas mediante el correspondiente contrato de aval o seguro que indemnice en caso de incumplimiento de contrato, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

5.- En las cooperativas en que se adjudica la propiedad, ninguna persona física podrá ser titular de más de dos viviendas en régimen cooperativo, salvo los derechos reconocidos a las familias numerosas.

6.- En caso de baja de la persona socia, si lo prevén los estatutos, podrán aplicarse a las cantidades entregadas por ésta para financiar el pago de las viviendas y locales las deducciones a que se refiere el número 1 del artículo 66, hasta un máximo del cincuenta por ciento de los porcentajes que en el mismo se establecen.

Las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, así como las aportaciones de persona socia al capital social, deberán reembolsarse a éste en el momento en que sea sustituido en sus derechos y obligaciones por otra persona socia o un tercero no persona socia.

La persona socia que cause baja de la Cooperativa antes de la adjudicación de su vivienda o local, deberá seguir haciendo frente a los compromisos asumidos para su edificación, con el límite máximo que resulte del precio final para su adjudicación, todo ello hasta que no sea sustituida en sus derechos y obligaciones por persona socia o una persona tercera no socia, en la vivienda o local que tuviese adjudicado, manteniéndose sus obligaciones cuando se incorporase una nueva persona socia o una persona tercera no socia al que se le asignase otra vivienda o local diferente al suyo.

7.- La responsabilidad de las personas socias de las cooperativas de viviendas es de carácter mancomunada simple, siendo su límite máximo el que se corresponda con el importe de sus aportaciones obligatorias y voluntarias al capital social, así como las cantidades entregadas a cuenta para hacer frente a la edificación y las que tuviese que realizar para cubrir el precio de adjudicación de su vivienda o local, salvo que tuviese un precio máximo fijado por la Administración, en cuyo caso ese será su límite de responsabilidad a todos los efectos ante la cooperativa, sus personas socias y terceras personas no socias.

Artículo 120.- Consejo rector.

1.- Ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente el cargo de administrador en más de una cooperativa de viviendas, salvo que los estatutos lo admitan de modo expreso.

Las personas titulares de dichos cargos en ningún caso podrán percibir remuneraciones por el desempeño de su función, sin perjuicio de su derecho a ser resarcidos de los gastos que ello les origine.

2.- El consejo rector podrá delegar u otorgar los apoderamientos necesarios para facilitar el cumplimiento del objeto social, que en ningún caso se extenderán a actos o contratos que abarquen la totalidad del mismo ni las decisiones básicas sobre edificación y financiación y contratos con terceras personas no socias. Dichos poderes deberán inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi, previo dictamen favorable de letrado o letrada asesora.

Artículo 121.- Obligación de auditar las cuentas y de disponer de letrado o letrada asesora.

1.- Las cooperativas de viviendas, antes de presentar sus cuentas anuales a la asamblea general ordinaria para su estudio y aprobación, han de someterlas a una auditoría de cuentas. Esta obligación legal subsistirá en tanto no se produzca la adjudicación o cesión a las personas socias de las viviendas o locales.

2.- Las cooperativas de viviendas deberán disponer de un letrado o letrada asesora que dictaminará al menos, sobre los acuerdos a los que se refieren los artículos 117, 118 y 119, así como sobre los acuerdos siguientes:

- a) De admisión de personas socias o de adhesión.
- b) De sustitución de personas ex socias por nuevas personas socias o por personas no socias.

- c) Contratos con la Gestora.
- d) Contratos de edificación.
- e) Los que se fijen en los estatutos de las cooperativas de viviendas.

Artículo 122.- Promoción de viviendas de protección pública y transmisión de derechos.

1.- Cuando la cooperativa de viviendas promueva viviendas de protección pública, se sujetará, en todo caso, a la normativa reguladora de este tipo de viviendas.

2.- La transmisión intervivos de la vivienda o local de las personas socias estará sujeta a las limitaciones y derechos de adquisición preferente previstos en el correspondiente régimen administrativo y, en su defecto, por la normativa general supletoria sobre cooperativas de dicha clase.

Para las cooperativas de viviendas no incluidas en el párrafo anterior, los estatutos o el reglamento de régimen interno, determinarán las condiciones y límites para enajenar o arrendar la vivienda o local de una persona socia, así como los derechos de las personas socias expectantes.

SECCIÓN 8ª

COOPERATIVAS FINANCIERAS

Artículo 123.- Cooperativas de crédito.

1.- Son cooperativas de crédito aquellas que tienen por objeto social servir las necesidades financieras activas y pasivas de sus personas socias, pudiendo también actuar con terceras personas no socias, mediante el ejercicio de las actividades y servicios propios de las entidades de crédito de ámbito operativo general.

2.- Podrán utilizar la expresión Caja Rural aquellas cooperativas crediticias orientadas, tanto estatutaria como operativamente, hacia el servicio preferente al medio rural y a sus moradores .

3.- Las entidades reguladas en este artículo se ajustarán en su constitución, estructura, funcionamiento y actividad a la normativa sobre cooperativas de crédito y demás legislación sectorial sobre entidades crediticias.

4.- El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de hacienda y finanzas ejercerá las funciones de propuesta, regulación, información, estadística, inspección y disciplina que le corresponden sobre cooperativas de crédito, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 124.- Cooperativas de seguros.

1.- Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora en cualquiera de sus ramos, pudiendo organizarse y funcionar como entidades a prima fija, a prima variable o de trabajo asociado.

2.- Estas cooperativas, en cuanto entidades aseguradoras, se regirán por la normativa ordenadora del seguro privado que tenga carácter básico, y por la regulación de desarrollo que apruebe la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo la presente ley carácter supletorio.

3.- El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de hacienda y finanzas ejercerá, respecto de las cooperativas de seguros, las funciones previstas en el párrafo 4 del artículo anterior.

SECCIÓN 9ª

COOPERATIVAS SANITARIAS

Artículo 125.- Cooperativas de asistencia sanitaria.

1.- Son aquellas cooperativas de seguros cuya actividad empresarial consiste en cubrir riesgos relativos a la salud de sus personas socias o de las personas aseguradas y sus beneficiarias .

2.- Cuando estas cooperativas tengan por objeto la cobertura de los riesgos relativos a la salud de sus personas socias y sus beneficiarias, les serán de aplicación las normas establecidas para las cooperativas de seguros a prima fija.

3.- Cuando la cooperativa asocie a profesionales de la salud y a personal no sanitario, para atender a terceras personas no socias aseguradas , se aplicarán las normas reguladoras de las cooperativas de seguros de trabajo asociado.

Artículo 126.- Cooperativas de instalaciones sanitarias.

1.- Son también cooperativas sanitarias, a efectos de la presente ley, las constituidas por personas físicas y jurídicas a fin de promover, equipar, administrar, sostener y gestionar hospitales, clínicas y establecimientos análogos, destinados a prestar asistencia sanitaria a sus personas socias beneficiarias y familiares y, en su caso, a sus personas trabajadoras.

2.- Se aplica a estas cooperativas, además de la legislación hospitalaria, la normativa sobre las cooperativas de consumo, con las adaptaciones que, en su caso, puedan fijarse reglamentariamente atendiendo a la especialidad del servicio que prestan y al sector en el que actúan.

SECCIÓN 10ª

COOPERATIVAS DE SERVICIOS

Artículo 127.- Cooperativas de servicios profesionales.

1.- Son cooperativas de servicios profesionales las que, estando constituidas por artesanos, profesionales o artistas que desarrollan su actividad respectiva por cuenta propia, tienen por objeto proporcionar suministros, servicios y prestaciones o realizar operaciones que faciliten, garanticen o complementen dichas actividades de las personas socias o los resultados de las mismas, en la vertiente económica, técnica, laboral, ecológica, organizativa o funcional.

2.- Cuando las personas socias sean profesionales liberales o artistas, la formación de una cooperativa de la clase regulada en el presente artículo no afectará al régimen de ejecución y de responsabilidad de los proyectos o tareas correspondientes, que se desarrollará de acuerdo con las normas aplicables a la profesión respectiva.

Artículo 128.- Cooperativas de servicios empresariales.

1.- Son aquellas cooperativas que, con un objeto social análogo al regulado en el número 1 del artículo anterior, asocian a empresarios o empresarias individuales o sociales de los sectores pesquero, industrial, comercial o de servicios, sea cual fuere su respectiva forma jurídica, en orden a facilitar, garantizar o completar las funciones empresariales, la actividad o los resultados de las explotaciones de las personas socias.

2.- Podrán acogerse a lo previsto en el número anterior las comunidades de bienes o de derechos, y otras organizaciones sin personalidad jurídica, siempre que tengan aptitud para ser centro de imputación de derechos y obligaciones y hayan designado un o una representante de sus respectivos miembros en la cooperativa.

Artículo 129.- Cooperativas de transportes.

1.- Son cooperativas de transportes las que tienen por objeto organizar y/o prestar servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho objeto.

2.- Podrán adoptar las formas siguientes:

- a) Cooperativa de transporte de trabajo asociado o de transportes propiamente dicha que asocian a transportistas, conductores u otro personal, que mediante la aportación de su trabajo en común, prestan servicios de transporte.

A estas cooperativas les será de aplicación la regulación de las cooperativas de trabajo asociado cuyas personas socias trabajadoras no serán titulares de empresas de transporte ni podrán facturar por la prestación de su trabajo. En caso de baja de estas personas socias el reembolso de sus aportaciones será en metálico.

- b) Cooperativa de transportistas que asocia a titulares de empresas del transporte que puedan ejercer la actividad de transportistas y tiene por objeto facilitar la actividad empresarial de sus personas socias, prestando servicios y suministros así como cualquier operación encaminada al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de aquellos.

Artículo 130.- Cooperativas de servicios institucionales.

Las corporaciones y los organismos públicos, las fundaciones, los sindicatos y las asociaciones de toda índole pueden constituir cooperativas de esta clase para resolver, en pie de igualdad, cualesquiera problemas o necesidades organizativas o funcionales, sin afectar a la respectiva autonomía y peculiaridad institucional de cada persona socia.

Artículo 131.- Normas complementarias.

1.- No podrán constituirse cooperativas de servicios para actuar en sectores o para alcanzar fines económicos que sean propios de cooperativas de otras clases según la presente ley.

2.- Los estatutos determinarán el nivel de colaboración exigible a las personas socias y el alcance e intensidad de las facultades coordinadoras reconocidas en favor de la cooperativa; asimismo establecerán si ésta puede participar financieramente en las actividades, empresas o explotaciones de las personas socias.

3.- Las cooperativas pertenecientes a cualquiera de las clases reguladas en esta sección pueden incluir en su denominación términos alusivos al sector, actividad profesional o rama económica en que actúan las personas socias o a la naturaleza de éstos.

SECCIÓN 11ª

JUNIOR COOPERATIVAS

Artículo 132.- Junior Cooperativas.

1.- Son Junior Cooperativas las promovidas por estudiantes que tienen por objeto la aplicación práctica de las habilidades y conocimientos adquiridos en los centros de enseñanza en los que se encuentran matriculados, mediante el desarrollo de actividades económicas destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios.

2.- La duración de la cooperativa tendrá carácter indefinido. No obstante, cuando de todas sus personas socias, únicamente dos personas socias cumplan el requisito de ser estudiantes, la cooperativa perderá su consideración de Junior Sociedad Cooperativa. Una vez producida esta circunstancia, se comunicará en un plazo máximo de 30 días a contar desde el siguiente en que se produzca al Registro de Cooperativas de Euskadi a los efectos de su clasificación.

SECCIÓN 12ª

COOPERATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Artículo 133.- Cooperativas de integración social.

Las cooperativas de integración social estarán constituidas, al menos mayoritariamente, por personas afectadas por diversidad funcional física, psíquica y/o sensorial, y podrán basarse en el trabajo asociado para organizar, canalizar y comercializar los productos y servicios del trabajo de las personas socias o ir dirigidas a facilitar la provisión de bienes y servicios de consumo general o específicos.

Artículo 134.- Régimen de las personas socias.

1.- En las cooperativas de integración social podrán participar como socias entidades públicas responsables de la prestación de cualesquiera servicios sociales mediante la correspondiente aportación y la designación de una persona representante de las entidades públicas. Esta representante prestará su trabajo personal de asistencia técnica, profesional y social junto a las personas socias de la cooperativa y asistirá con voz a las reuniones de todos los órganos sociales.

2.- Las Cooperativas de integración social podrán realizar contrataciones por cuenta ajena con los colectivos que le otorgan su carácter, en las mismas condiciones que otras empresas, no siéndoles de aplicación los límites que establece el párrafo primero del apartado 4 del artículo 103 de la presente Ley respecto a dichas personas trabajadoras.

CAPÍTULO II

INTEGRACIÓN Y AGRUPACIÓN COOPERATIVA

SECCIÓN 1ª

COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO

Artículo 135.- Objeto y características.

1.- La cooperativa de segundo o de ulterior grado tiene por objeto completar, promover, coordinar, reforzar o integrar la actividad económica de las entidades miembros y del grupo resultante en el sentido y con la extensión o alcance que establezcan los estatutos.

Los estatutos deberán incluir la enumeración de las facultades esenciales que, por ser precisas para el desarrollo de aquel objeto, quedan transferidas a los órganos de dicha cooperativa. Tales facultades tendrán la misma permanencia que el propio objeto social y su ejercicio no podrá ser revisado ante los órganos de las sociedades integradas, sin perjuicio de la tutela judicial que, en su caso, proceda.

Cuando la cooperativa se constituya con fines de integración empresarial, los estatutos determinarán las áreas de actividad empresarial integradas, las bases para el ejercicio de la dirección unitaria del grupo y las características de éste.

2.- Los estatutos regularán, además, las materias o áreas respecto de las cuales las propuestas de las entidades asociadas serán meramente indicativas, y no

vinculantes, para la cooperativa de segundo o ulterior grado. En caso de duda al respecto se presumen transferidas a esta cooperativa todas las facultades directamente relacionadas con su objeto social, teniendo prioridad los acuerdos e instrucciones de la misma frente a las decisiones de cada una de las entidades agrupadas.

Artículo 136.- Capacidad, ingreso y baja de personas socias.

1.- Podrán ser miembros de pleno derecho de estas sociedades, además de las cooperativas de grado inferior y las personas socias de trabajo, cualesquiera entidades y personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre que exista la necesaria convergencia de intereses o necesidades y que el estatuto no lo prohíba. En ningún caso el conjunto de estas últimas entidades podrá ostentar más de la mitad del total de los votos existentes en la cooperativa de segundo o ulterior grado. Los estatutos podrán establecer un límite inferior.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, tales cooperativas podrán admitir personas socias colaboradoras con arreglo al artículo 19.5 de esta ley.

2.- La admisión de cualquier persona jurídica como persona socia requerirá acuerdo favorable del consejo rector por mayoría de al menos dos tercios de los votos presentes y representados, salvo previsión de otra mayoría en los estatutos; éstos también podrán regular períodos de vinculación provisional o a prueba de hasta dos años, y atribuir la decisión sobre la admisión a la asamblea general.

3.- La persona jurídica socia que pretenda darse de baja habrá de cursar, salvo exoneración del consejo rector, un preaviso de al menos un año, y antes de su efectiva separación estará obligada a cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de segundo o ulterior grado o a resarcirla económicamente, si así lo decide el consejo rector de ésta. Asimismo, salvo previsión estatutaria en contra, la entidad separada deberá continuar desarrollando, durante un plazo no inferior a dos años, los compromisos que hubiera asumido con anterioridad a la fecha de la baja.

Artículo 137.- Régimen económico.

1.- Las aportaciones obligatorias al capital social de una cooperativa de segundo o ulterior grado se realizarán en función de la actividad cooperativa comprometida con aquélla por cada persona socia, conforme establezcan los estatutos, bien en razón del número de personas socias o bien conforme a los criterios establecidos para las cooperativas de primer grado en el artículo 61.1 de esta Ley.

2.- La distribución de resultados, tanto si son positivos como si registran pérdidas, se acordará en función de la actividad cooperativa comprometida estatutariamente, después de haber realizado la imputación que proceda a los fondos de reserva y, en su caso, a la Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público

3.- Los estatutos fijarán los criterios o módulos que definen la actividad cooperativa.

Artículo 138.- Estructura orgánica y derecho de voto.

1.- La asamblea general estará formada por un número de representantes de las personas jurídicas socias proporcional al derecho de voto de cada entidad socia, pudiendo fijarse en los estatutos sociales límites máximos y mínimos, y, en su caso, por los representantes de las personas socias de trabajo. A su vez, el derecho de voto de las entidades será proporcional a la participación en la actividad cooperativa o al número de personas socias. El número de votos de una entidad que no sea sociedad cooperativa no podrá ser superior a un tercio de los votos sociales, salvo que hubiese menos de cuatro personas socias.

2.- Las cooperativas de segundo o ulterior grado serán administradas por un consejo rector que tendrá, salvo previsión estatutaria en contra, un número máximo de quince miembros, y en él estarán representadas, directa o indirectamente, todas las entidades socias. En el caso de que el número de entidades socias supere el máximo legal o estatutario de miembros, las que tengan menor número de votos podrán agruparse a efectos de designar sus representantes, observando las previsiones estatutarias o reglamentarias internas al respecto.

El derecho de voto en el seno del consejo podrá ser proporcional a la actividad cooperativa o al número de personas socias de la entidad o entidades a las que representan los consejeros, con el límite señalado para la asamblea general.

Los estatutos podrán prever que hasta un tercio de los miembros del consejo rector puedan ser designados, por los rectores electos, entre personas capacitadas que podrán ser o no miembros de alguna cooperativa del grupo.

Artículo 139.- Liquidación.

En caso de disolución con liquidación de una cooperativa de segundo o ulterior grado, el activo sobrante será distribuido entre las personas socias en proporción al importe del retorno percibido en los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución. En su defecto, se distribuirá en proporción a la participación de cada persona socia en la actividad cooperativa o, en su caso al número de miembros de cada entidad agrupada en aquella cooperativa.

Artículo 140.- Normativa supletoria.

En lo no previsto por los artículos anteriores de esta sección, se estará a lo establecido en los estatutos y en el reglamento de régimen interno y, en su defecto, en cuanto lo permita la específica función y naturaleza de las cooperativas de segundo o ulterior grado, a lo establecido en la presente ley sobre cooperativas de primer grado.

SECCIÓN 2ª

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN ECONÓMICA

Artículo 141.- Agrupaciones empresariales.

1.- Con independencia de las formas de integración reguladas en la sección anterior, las cooperativas de cualquier clase y nivel podrán constituir sociedades, asociaciones, agrupaciones, consorcios y uniones de empresas, de cualquier clase, entre sí o con otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas.

2.- Asimismo las cooperativas podrán poseer participaciones en cualquiera de las entidades mencionadas en el número anterior, para el mejor cumplimiento, desarrollo o garantía de su objeto social.

3.- Las cooperativas de crédito y de seguros, para realizar las operaciones previstas en el presente artículo, respetarán, ante todo, la normativa que les es aplicable.

Artículo 142.- Acuerdos intercooperativos.

Las cooperativas podrán suscribir con otras acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa y sus personas socias podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios en las otras cooperativas firmantes del acuerdo, teniendo tales hechos la misma consideración que las operaciones cooperativizadas con las propias personas socias.

Artículo 143.- Grupos cooperativos.

1.- Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo, que ejerce facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una

unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades. El grupo deberá ajustar su funcionamiento a los principios cooperativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la presente Ley.

2.- En función del grado de integración económica, los grupos cooperativos se clasificarán en grupos cooperativos por integración y grupos cooperativos por colaboración.

Se entenderán por grupos cooperativos por integración aquellos en los que se cumplan estos dos requisitos:

- a) Que el grupo cooperativo en su conjunto disponga de una dirección general común.
- b) Que el nivel de centralización efectiva de las facultades de gestión económica permita entender que, a pesar del mantenimiento de las entidades jurídicamente diferenciadas, nos encontramos ante una verdadera unidad económica.

En otro caso, se entenderá que el conjunto de entidades constituye un grupo por colaboración.

3.- Se presumirá que existe unidad económica cuando, junto a la dirección general común, se cumpla alguno de los siguientes supuestos:

- a) Existencia de relaciones de hecho comerciales, financieras o patrimoniales que supongan una dependencia efectiva de alguna de las entidades del grupo.
- b) Existencia de un acuerdo de responsabilidad solidaria frente al exterior por operaciones que realicen directamente con terceras personas no socias las sociedades cooperativas integradas en el grupo siempre que tengan carácter de permanencia y que se trate de operaciones necesarias y no auxiliares para la realización de su actividad empresarial.
- c) Existencia de compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de la cuenta de resultados de la respectiva cooperativa, cuando las cuantías a aportar superen el cincuenta por ciento de los excedentes netos previos de cada cooperativa.
- d) Existencia, entre dos o más sociedades del grupo cooperativo, de relaciones que cumplan los requisitos que generan la obligación de consolidar cuentas, tal como se regulan en los artículos 42.1 y 43 del Código de Comercio.

Cuando alguno de estos supuestos se produjese únicamente con respecto a algunas de las cooperativas integradas en el grupo, serán exclusivamente estas sociedades cooperativas las que se considerarán como parte de un grupo cooperativo de integración.

4.- El régimen de grupos cooperativos previsto en el presente artículo será efectivo desde el momento en que se cumplan los requisitos previstos en el mismo.

La pertenencia a un grupo, y su separación del mismo, se anotarán en la hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

La anotación de la pertenencia o separación a un grupo cooperativo se realizará a petición de la cooperativa interesada. La ausencia de dicha inscripción no afectará a la plena vigencia y efectividad de este precepto.

5.- La emisión de instrucciones podrá afectar a distintos ámbitos de gestión, administración o gobierno, entre los que podrá incluirse:

- a) El establecimiento en las cooperativas de base de normas estatutarias y reglamentarias comunes.
- b) El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.
- c) Compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su respectiva evolución empresarial o cuenta de resultados.

No obstante, el carácter obligatorio de las instrucciones emitidas o de las facultades a ejercer deberá tener soporte en los compromisos generales asumidos ante el grupo y, en cualquier caso, no podrán ser exigibles en caso de que una o varias cooperativas del grupo hayan sido expresamente exoneradas del sometimiento a determinadas normas o compromisos.

6.- La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo precisará el acuerdo inicial de cada una de las entidades de base conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento.

7.- Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito en los estatutos de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o mediante otro documento contractual si no lo es, formalizado en escritura pública, que necesariamente deberán incluir la duración del mismo, caso de ser limitada, el procedimiento para su modificación, el procedimiento para la separación de una sociedad cooperativa y las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo. La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados podrá efectuarse, si así se ha establecido, mediante acuerdo del órgano máximo de la entidad cabeza de grupo.

8.- La responsabilidad derivada de las operaciones que realicen las sociedades cooperativas integradas en un grupo directamente con terceras personas no socias no alcanzará al grupo ni a las demás sociedades cooperativas que lo integran.

Artículo 144.- Cooperativas mixtas.

1.- Son cooperativas mixtas aquellas en las que existen personas socias minoritarias cuyo derecho de voto en la asamblea general se podrá determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado, que estará representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta, sometidos a la legislación reguladora del mercado de valores.

Las cooperativas mixtas deberán ubicarse dentro de alguna de las clases legamente establecidas y, a efectos de los derechos y obligaciones de sus personas socias cooperadoras, inactivas o no usuarias o colaboradoras, se someterán a las normas reguladoras de la específica clase de cooperativa en que se encuentre.

2.- En estas cooperativas el derecho de voto en la asamblea general respetará la siguiente distribución:

- a) Al menos el cincuenta y uno por ciento de los votos se atribuirá, en la proporción que definan los estatutos, a personas socias cooperadoras.
- b) Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del cuarenta y nueve por ciento de los votos se distribuirá en partes sociales con voto, que, si los estatutos lo prevén, podrán ser libremente negociables en el mercado.

3.- En el caso de las partes sociales con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de las aportaciones se regularán por los estatutos y, supletoriamente, por lo dispuesto en la legislación de sociedades de capital para las acciones.

4.- La participación de cada uno de los dos grupos de personas socias en los excedentes anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos ostente según lo previsto en el número 2.

Los excedentes imputables a los poseedores de partes sociales con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado. Los excedentes imputables a las restantes personas socias se distribuirán entre éstas según los criterios generales definidos en esta ley para las cooperativas de régimen ordinario.

5.- La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los dos colectivos de personas socias requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la asamblea general o en junta especial y parcial.

6.- En el momento de la configuración, constitutiva o por modificación, de estas cooperativas, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi podrá autorizar la previsión estatutaria de repartibilidad del Fondo de Reserva Obligatorio en caso de liquidación, con arreglo a los criterios señalados en el número 4 anterior y respetando las demás normas de adjudicación del haber social establecidas en el artículo 98.

TÍTULO III

DE LAS COOPERATIVAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 145.- Interés social, utilidad pública e iniciativa social.

1.- Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco asumen como función de interés social la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades cooperativas y sus estructuras de integración empresarial y representativa.

Asimismo, reconocen como agente social específico para la interlocución representativa del conjunto del Cooperativismo Vasco, y sin perjuicio de las reglas vigentes sobre representatividad empresarial, a la entidad que asocie a más del sesenta por ciento de las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Euskadi, con actividad acreditada ante el mismo, o cuando el número de personas socias de las dichas cooperativas sea superior a idéntico porcentaje respecto al total de personas socias de las cooperativas activas e inscritas en el citado Registro.

El Gobierno Vasco, que recabará al efecto la colaboración del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, fomentará la información sobre las posibilidades aplicativas del sistema cooperativo, en especial para generar nuevos empleos y ante los problemas de las pequeñas y medianas empresas de Euskadi, e impulsará la elaboración de programas divulgativos, formativos y orientadores en orden a favorecer aquella información ante los diversos interlocutores sociales.

2.- Las entidades cooperativas que contribuyan a la promoción del interés general de Euskadi mediante el desarrollo de sus funciones serán reconocidas de utilidad pública por el Gobierno Vasco conforme al procedimiento, régimen y requisitos establecidos reglamentariamente.

Las sociedades cooperativas que obtengan la declaración de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:

- a) Utilizar la mención «Declarada de utilidad pública» en todos sus documentos, a continuación del nombre de la entidad.
- b) Ser oídas, a través de las Federaciones o Confederaciones correspondientes, en la elaboración de disposiciones generales relacionadas directamente con las materias de su actividad y en la elaboración de programas de trascendencia para las mismas.
- c) Gozarán de las exenciones, bonificaciones, subvenciones y demás beneficios de carácter económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden.

3.- Las entidades cooperativas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tengan por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado, se calificarán como cooperativas de iniciativa social, de conformidad con el procedimiento, régimen y requisitos establecidos reglamentariamente.

4.- El Gobierno Vasco actuará en materia de cooperativismo a través del departamento competente en materia de trabajo, al que dotará de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones de promoción, difusión, formación, inspección y registral, sin perjuicio de las facultades que otros departamentos tengan reconocidas en relación al cumplimiento de la legislación específica que les corresponde aplicar.

Artículo 146.- Medidas de fomento y difusión del cooperativismo.

1.- Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el estudio y difusión de los principios y valores propios del cooperativismo y favorecerán entornos sociales y económicos que fomenten el desarrollo actividades económicas a través de cooperativas, facilitando su acceso a la innovación tecnológica y organizativa así como impulsando las iniciativas que surjan desde las propias sociedades cooperativas.

2.- Especialmente, se adoptarán las siguientes medidas de fomento:

- a) Se asegurará la representatividad institucional del movimiento cooperativo vasco, en los términos a que se refieren los artículos 145.1 y 152.2 de esta ley, propiciando la presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y decisión y organismos de representación institucional correspondientes y su progresiva consolidación normativa.

- b) Las cooperativas, independientemente de su calificación fiscal, tendrán la condición de mayoristas, por lo que les serán aplicables los precios o tarifas correspondientes, y podrán detallar como minoristas en la distribución o venta.

No tendrán la consideración de ventas las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen las cooperativas a sus personas socias, ya sean producidos por ellas o adquiridos a terceras personas no socias para el cumplimiento de sus fines sociales.

- c) Las cooperativas que concentren sus empresas, mediante cualquiera de las figuras jurídicas reconocidas legalmente, gozarán de todos los beneficios otorgados en la legislación sobre agrupación y concentración de empresas.
- d) Las Administraciones Públicas vascas y los entes dependientes de ellas promoverán que, entre los criterios de desempate que se recojan en los pliegos de cláusulas administrativas, figure el derecho preferente de las sociedades cooperativas en la adjudicación de contratos de obras, servicios y suministros convocados por las mismas, en los términos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- e) Las cooperativas de consumo, sin perjuicio de la condición de mayoristas prevista en el número 2 de este artículo, tendrán también, a todos los efectos, la condición de consumidores directos para su abastecimiento o suministro por terceras personas no socias de productos o servicios necesarios para desarrollar sus actividades.
- f) Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y alimentarias y las de segundo o ulterior grado que las agrupen, con productos o materias, incluso suministrados por terceras personas no socias, se considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas con el carácter de operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de sus personas socias.
- g) Las cooperativas de viviendas declaradas de utilidad pública, para el cumplimiento de sus fines sociales, podrán adquirir terrenos de titularidad pública por el sistema de adjudicación directa.
- h) En materia educativa, y en el ámbito de su competencia, el Gobierno Vasco impulsará la realización de convocatorias específicas para ayudar en la financiación de las inversiones realizadas en dichos centros y la incorporación, mediante la promoción de programas educativos, a los currículos educativos de todos los niveles del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la formación universitaria de los valores y principios propios del cooperativismo.

- i) La Administración Pública Vasca adoptará medidas tendentes a fomentar la presencia, cuantitativa y cualitativa, de las entidades cooperativas en sectores como el desarrollo rural, la dependencia, la integración social y la actividad prestacional; favoreciendo su participación en los procedimientos de contratación pública, en el ejercicio de sus competencias.

3.- Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de desarrollar y mejorar los servicios públicos, estimularán la creación de cooperativas y su participación en la gestión de los servicios públicos.

En tal sentido, los mencionados poderes podrán prever que la prestación de éstos se haga mediante la constitución de sociedades cooperativas de servicios públicos, de conformidad con las disposiciones de carácter legal y reglamentario que regulan el régimen de contratación pública; excluyendo, en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio de autoridad pública. En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras la entidad o entidades públicas competentes y, en su caso y de acuerdo con los principios generales de contratación pública, entidades privadas con experiencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las personas usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así como las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la sociedad. No obstante, las entidades públicas promotoras conservarán el control en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos

Artículo 147.- Inspección cooperativa.

1.- Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo ejercer la función inspectora en relación con el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio de las funciones inspectoras que correspondan a los distintos departamentos del Gobierno Vasco o a otras Administraciones públicas conforme a sus respectivas competencias.

2.- La función inspectora se realizará preferentemente con carácter preventivo y coadyuvante al mejor cumplimiento de esta Ley. Cuando las circunstancias de cada supuesto así lo aconsejen y siempre que puedan evitarse daños y perjuicios directos a titulares de derechos legítimos, la Inspección podrá advertir y aconsejar, con carácter previo a cualquier otra actuación.

3.- La subsanación y reparación de la conducta objeto de inspección dará lugar a la conclusión del expediente inspector en términos exculpatorios.

Artículo 148.- Infracciones cooperativas.

1.- Son sujetos responsables de las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la presente Ley, las sociedades cooperativas, los administradores, los directores y gerentes, apoderados, miembros de la comisión de vigilancia y liquidadores en cuanto les sea personalmente imputable.

2.- Son infracciones muy graves:

- a) No destinar al Fondo de Reserva Obligatorio y a la Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público los porcentajes mínimos de los excedentes disponibles señalados en la presente Ley.
- b) No aplicar la Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y Otros Fines de Interés Público según las determinaciones de la presente Ley.
- c) Repartir entre las personas socias los fondos sociales obligatorios, los fondos de reserva irrepartibles o el haber líquido resultante de la liquidación vulnerando lo previsto en esta Ley.
- d) La transgresión manifiesta de los principios cooperativos reconocidos en esta Ley o la utilización instrumental o ficticia de la figura cooperativa para encubrir finalidades ajenas a las que son propias de estas entidades.

3.- Son infracciones graves:

- a) La vulneración generalizada o reiterada de los derechos de información, participación y propuesta de las personas socias.
- b) La vulneración de las disposiciones legales sobre imputación de pérdidas.
- c) El incumplimiento de las normas reguladoras del destino del resultado de la regularización del balance de la cooperativa, cuando esta tenga pérdidas sin compensar.
- d) El devengo de un interés a las aportaciones al capital social vulnerando las disposiciones legales.
- e) La realización de operaciones con terceras personas no socias en los casos expresamente prohibidos por la Ley.
- f) La resistencia o la negativa a la labor inspectora acreditada mediante el correspondiente escrito de denuncia administrativa por obstrucción.

- g) Contratar personas trabajadoras por cuenta ajena excediendo los límites legalmente regulados.

4.- Son infracciones leves las trasgresiones de las prohibiciones establecidas en esta Ley que no supongan un conflicto entre las partes y no sean susceptibles de calificarse como graves o muy graves.

Artículo 149.- Sanciones cooperativas.

1.- Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 euros hasta 1.000 euros; las graves con multa de 1.001 euros a 3.000 euros y las muy graves con multa de 3.001 euros a 30.000 euros y la posibilidad de descalificación de la cooperativa de acuerdo con lo regulado en el artículo siguiente.

2.- Las infracciones, ya sean leves, graves o muy graves, se graduarán a efectos de aplicarles la correspondiente sanción en grado mínimo, medio o máximo, atendiendo a su importancia, a las consecuencias económicas y sociales, a la eventual concurrencia de mala fe, falsedad, engaño o reincidencia de las personas infractoras, así como la capacidad económica o volumen de operaciones y número de personas afectadas, socias o no, de la cooperativa sancionada. También se tendrá en cuenta para la graduación de la sanción el incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos correctores de la inspección o de los compromisos incumplidos por la cooperativa en la fase inspectora.

3.- En caso de reincidencia podrá calificarse la infracción en un grado superior. Se considerará reincidencia la comisión de una infracción de igual o superior gravedad a otra que haya sido previamente sancionada en un procedimiento sancionador cooperativo y haya adquirido firmeza.

No se considerará reincidente la nueva infracción cometida transcurridos dos años desde la firmeza de la sanción antecedente. En todo caso, la persistencia en la infracción podrá acarrear una sanción adicional de hasta un veinte por ciento diario del importe de la multa que se haya impuesto como sanción principal.

4.- Las infracciones establecidas en esta Ley prescribirán: las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

5.- las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

6.- La potestad sancionadora se ejercerá por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, de conformidad con las siguientes atribuciones:

- a) Corresponde a la persona titular de la dirección competente en materia de economía social la imposición de sanciones por infracciones leves y graves.
- b) Corresponde a la persona titular de la Viceconsejería de la que dependa la dirección competente en materia de economía social la imposición de sanciones por infracciones muy graves.

7.- Corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo proponer la aprobación del reglamento que regule el procedimiento de sanción cooperativa de conformidad con la legalidad de aplicación sobre régimen sancionador de la Administración y sus principios y garantías. En ningún caso podrá imponerse sanción de ningún tipo si previamente no se ha instruido el oportuno expediente conforme a dichos principios y garantías.

Para la resolución de los expedientes sancionadores por presunta infracción muy grave será preceptivo el informe previo del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que deberá emitirlo en el término de sesenta días desde la solicitud, teniéndose por evacuado si no lo hiciese en dicho plazo.

Artículo 150.- Descalificación de la cooperativa.

1.- Podrán ser causas de descalificación de una cooperativa:

- a) La comisión de cualesquiera infracciones de las consideradas como muy graves por el artículo 148.2 de esta Ley cuando provoquen o puedan provocar perjuicios económicos o sociales o que supongan vulneración reiterada y relevante de los principios cooperativos.
- b) La inactividad de los órganos sociales necesarios o la no realización del objeto social durante más de tres años consecutivos.
- c) En general, la pérdida o incumplimiento de los requisitos necesarios para la calificación como cooperativa, salvo que fuese causa de nulidad de ésta.
- d) Por resolución firme derivada de expediente sancionador de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior.

2.- Una vez que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo tenga conocimiento de que una cooperativa incurre en causa de descalificación, requerirá a la misma para que lo subsane en un plazo no superior a los seis meses desde la notificación o la publicación de dicho requerimiento. El incumplimiento de lo requerido originará la incoación del expediente de descalificación.

3.- El procedimiento de descalificación cooperativa tendrá las siguientes especialidades en relación con las normas generales reguladoras del procedimiento administrativo común:

- a) Acordará la descalificación la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, tras el oportuno procedimiento contradictorio y previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que habrá de emitirlo en el plazo de sesenta días desde que se le requiera formalmente, teniéndose por evacuado si no lo hubiese emitido en plazo. A los efectos del procedimiento de descalificación los informes del Consejo Superior de Cooperativas no tendrán carácter vinculante.
- b) En cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia la cooperativa se personará a través de sus administradores o, en su defecto, un número de personas socias no inferior a tres. Si no se produjese comparecencia por parte de la cooperativa, el trámite se entenderá cubierto mediante la publicación del correspondiente aviso en el Boletín Oficial del País Vasco al menos en dos ocasiones, y otras tantas en un periódico de gran circulación en la localidad del domicilio social de la cooperativa.
- c) La resolución administrativa de descalificación que ponga fin a la vía administrativa será revisable en vía judicial, no pudiéndose ejecutar de ningún modo hasta que recaiga sentencia firme confirmatoria.

4.- Una vez firme la descalificación surtirán efectos registrales de oficio e implicará la disolución de la cooperativa o su transformación en el plazo de seis meses desde que sea ejecutiva la resolución administrativa. Transcurrido dicho plazo, la descalificación implicará la disolución forzosa de la cooperativa. Desde ese momento los administradores, los directores-gerentes y, en su caso, los liquidadores responderán personal y solidariamente entre sí y con la cooperativa de las deudas sociales, sin perjuicio de la posible comisión de otro tipo de infracciones de las tipificadas en esta Ley.

Artículo 151.- Intervención temporal de las cooperativas.

1.- Cuando como consecuencia de irregularidades en el funcionamiento de una cooperativa se den circunstancias que aconsejen la adopción de medidas urgentes para evitar que puedan lesionarse gravemente intereses de las personas socias o de terceras personas no socias, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo podrá adoptar, de oficio o a petición razonada de cualquier interesado, las siguientes medidas de intervención temporal:

- a) Nombrar uno o más interventores con la facultad de convocar la asamblea general, establecer el orden del día de la misma y presidirla.

- b) Nombrar uno o más interventores para la supervisión y control de los órganos de la cooperativa, cuyos acuerdos no tendrán validez y serán nulos de pleno derecho si no cuentan con la aprobación de dichos interventores.
- c) Suspender temporalmente la capacidad de actuación de los administradores de la cooperativa, nombrando uno o más administradores provisionales para que asuman las funciones de aquéllos.

2.- Las anteriores medidas se adoptarán previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi que deberá emitirse en un plazo improrrogable de quince días, pasado el mismo se tendrá por evacuado dicho trámite.

3.- La intervención temporal y el levantamiento de tal medida una vez eliminadas sus causas será adoptada por la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo. Dichos acuerdos serán ejecutivos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

TÍTULO IV DEL ASOCIACIONISMO COOPERATIVO

CAPÍTULO I ASOCIACIONES COOPERATIVAS

Artículo 152.- Principios generales.

1.- Para la defensa y promoción de sus intereses en cuanto sociedades cooperativas, éstas podrán asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder acogerse a cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.

2.- Las cooperativas, sus uniones, federaciones, y confederaciones, así como el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, integran el movimiento cooperativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.- Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptarán las medidas necesarias para fomentar el asociacionismo de entidades cooperativas, así como las relaciones de intercooperación, y promoverán programas de revisión, actualización y depuración técnica de los censos de las cooperativas de la Comunidad Autónoma Vasca.

Artículo 153.- Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.

1.- Dos o más cooperativas del mismo sector de actividad económica podrán constituir una unión de cooperativas.

2.- Las sociedades cooperativas de la misma clase, inscritas o domiciliadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán constituir federaciones, entre sí o con uniones de cooperativas.

Cuando asocien más del cincuenta por ciento de las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Euskadi, con actividad acreditada ante el mismo, o cuando el número de personas socias de las entidades federadas sea superior a idéntico porcentaje respecto al total de personas socias de las cooperativas activas e inscritas en el citado Registro, deberán añadir a su denominación social las palabras «de Euskadi».

Las Federaciones de Cooperativas de Euskadi de distintas clases podrán fusionarse entre sí para crear Federaciones representativas de diversas clases de Cooperativas.

3.- Las federaciones de cooperativas podrán constituir confederaciones.

Cuando una confederación agrupe al menos, al sesenta por ciento de las federaciones de cooperativas de Euskadi registradas, se denominará Confederación de Cooperativas de Euskadi.

4.- Corresponde a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas:

- a) Representar a los miembros que asocien de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.
- b) Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas o entre éstas y sus personas socias.
- c) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus asociadas.
- d) Fomentar la promoción y formación cooperativa.
- e) Colaborar con el Registro de Cooperativas de Euskadi en las tareas de actualización y depuración del censo de sociedades inscritas en aquél.
- f) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

5.- Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, constituidas al amparo de esta ley para adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores, en el Registro de Cooperativas de Euskadi, el acta de constitución, que habrá de contener:

- a) Relación de las entidades promotoras.
- b) Certificación del acuerdo de asociación.
- c) Composición de los órganos de representación y gobierno de la entidad.
- d) Certificaciones del Registro de Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Registro de Cooperativas de Euskadi, de que no existe otra entidad con idéntica denominación.
- e) Los estatutos asociativos, que contendrán:
 - 1. La denominación de la entidad.
 - 2. El domicilio y el ámbito territorial y funcional de actuación de la entidad.
 - 3. Los órganos de representación y administración y su funcionamiento, así como el régimen de elección de sus cargos.
 - 4. Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada, así como el régimen de modificación de estatutos, fusión y disolución de la entidad.
 - 5. El régimen económico de la entidad, estableciendo el carácter, procedencia y el destino de sus recursos, así como los medios que permitan a las asociadas conocer la situación económica.
 - 6. Las actuaciones del Registro de Cooperativas de Euskadi respecto a las entidades reguladas en este artículo no tendrán carácter constitutivo y se acomodarán al régimen registral sobre asociaciones.
 - 7. Será de aplicación a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas lo regulado en la presente ley sobre contabilidad y auditoría de cuentas. Además, en lo no regulado expresamente en los estatutos asociativos, se estará a lo dispuesto por la presente ley con carácter general.

CAPÍTULO II

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

Artículo 154.- Naturaleza, composición y funciones.

1.- El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, constituido como máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo, se configura como una entidad pública de carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas vascas para todos los temas que afecten al cooperativismo.

Gozará de personalidad jurídica propia, distinta de la de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones.

2.- Corresponden al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi las funciones siguientes:

- a) Difundir los principios del movimiento cooperativo, facilitar y colaborar en la investigación, planificación y ejecución de los programas de desarrollo y fomento del cooperativismo, y promover la educación y formación cooperativa.
- b) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones legales y reglamentarias que afecten directamente a las cooperativas o a sus organizaciones, así como realizar estudios, proposiciones y dictámenes sobre materias de su competencia. Informará así mismo las bases reguladoras de las subvenciones que afecten directamente a las cooperativas o a sus organizaciones.
- c) Colaborar con la Administración en orden a la difusión y cumplimiento de lo previsto en la presente ley y, en especial, de los principios cooperativos. En concreto, velará por el cumplimiento de los principios cooperativos, especialmente el control democrático y la participación económica de las personas socias, sin perjuicio de las funciones inspectoras que corresponden al Gobierno Vasco o a otras Administraciones públicas, de conformidad con el artículo 147.1.
- d) Organizar servicios de interés común para las federaciones de cooperativas y, en su caso, para estas últimas.
- e) Contribuir al perfeccionamiento del régimen legal e institucional del ordenamiento socioeconómico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y participar en las instituciones y organismos existentes para su logro.
- f) Intervenir por vía de arbitraje en las cuestiones litigiosas que se susciten entre las cooperativas, entre éstas y sus personas socias, o en el seno de las mismas

entre personas socias, cuando ambas partes lo soliciten o estén obligadas a ello a tenor de sus estatutos, reglamento interno o por cláusula compromisoria. En todo caso, la cuestión litigiosa debe recaer sobre materias de libre disposición por las partes conforme a derecho y afectar primordialmente a la interpretación y aplicación de principios, normas, costumbres y usos de naturaleza cooperativa.

- g) Las personas socias de las cooperativas, cualquiera que sea su clase, antes de acudir para la resolución de los conflictos que se puedan suscitar entre ellas y la cooperativa, derivados de su condición de tal, a la Jurisdicción competente o a la resolución extrajudicial, deberán agotar previamente la vía interna cooperativa establecida en la presente Ley, en sus normas de desarrollo, en los estatutos sociales o en las normas internas de la Cooperativa.
- h) Las demás que le encomienda la presente ley.

3.- El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi estará integrado por representantes de las cooperativas, del Gobierno Vasco y de las Universidades del País Vasco.

La representación de las cooperativas, que será mayoritaria en el Consejo, se realizará a través de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

4.- La estructura, composición y funciones de los órganos del Consejo, el sistema de elección y atribuciones del presidente o presidenta y del secretario o secretaria general técnica, así como el régimen laboral de su personal, se determinarán reglamentariamente.

5.- Bajo el principio de autonomía económico-financiera, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi aprueba y ejecuta su presupuesto, financiándose éste con:

- a) las cantidades que le sean asignadas en los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- b) las cantidades definidas en el artículo 98.2, párrafos a) y d)
- c) las aportaciones del movimiento cooperativo.
- d) los productos de sus actividades y bienes.
- e) cualquier otro ingreso que tenga reconocido normativamente o que reciba, ya sea de origen público o privado, a título oneroso o lucrativo.

6.- El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi someterá a auditoría externa las cuentas anuales que apruebe, las cuales habrán sido formuladas de conformidad con el marco normativo de información financiera que le resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Cómputo de plazos.

En los plazos señalados en la presente ley por días se computarán los hábiles, excluyéndose los feriados, y los fijados por meses o años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Cooperativas de transporte de trabajo asociado.

No se aplicará lo previsto en el artículo 129.2.a) respecto del reembolso de las aportaciones a las cooperativas de transporte de trabajo asociado ya constituidas a la entrada en vigor de la presente ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Especialidad en el supuesto de descalificación de una sociedad cooperativa pequeña.

En el supuesto de descalificación de una sociedad cooperativa pequeña, se aplicará supletoriamente el artículo 150 de esta Ley, con la siguiente especialidad: en el trámite de audiencia que la misma regula en su número 3.b), en defecto de administradores, será suficiente que se persone una persona socia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo.

El Gobierno Vasco elaborará y llevará a cabo programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo, previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, especialmente dirigidos a la creación de empleo cooperativo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.- Igualdad de trato en materia de fomento y consolidación de empleo.

Queda prohibida toda discriminación de las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado y de las personas socias de trabajo de otra clase de cooperativas, en la regulación y ejecución de normas sobre incentivos que tengan por objeto la creación o consolidación de empleo, siéndoles de aplicación todas las normas e incentivos establecidos para las personas trabajadoras por cuenta ajena por la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de sus competencias con objeto de crear y consolidar empleos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.- Igualdad de género.

Las sociedades cooperativas y sus estructuras asociativas procurarán la presencia equilibrada de las personas socias en los órganos de que dispongan, así como el establecimiento de medidas de igualdad de género, especialmente, las dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.- Utilización de las lenguas oficiales.

1.- Se garantiza el ejercicio efectivo del derecho a utilizar la lengua oficial que elijan quienes se relacionen con el Gobierno Vasco y con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en aplicación de la presente norma, así como el correlativo deber de estos de atenderles en la lengua escogida; para lo cual adoptarán las medidas necesarias.

2.- Así mismo, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi utilizará ambas lenguas en sus relaciones con cualquier otra Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.- Previsión Social Voluntaria.

Las sociedades cooperativas podrán promover la adopción de acuerdos sobre previsión social voluntaria para las personas socias de las mismas en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Expedientes en tramitación.

Los expedientes en materia de cooperativas iniciados antes de la vigencia de esta ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Aplicación de los actuales estatutos.

El contenido de los estatutos de las cooperativas no podrá ser aplicado en contradicción con lo dispuesto en la presente ley y se entenderá modificado y completado por cuantas normas imperativas o prohibitivas se contienen en esta ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Derogación de legislación precedente.

Queda derogada la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley; así como el número 5 del artículo 3 de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Ámbito de aplicación.

1.- La presente Ley es de aplicación a todas las sociedades cooperativas con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 A) de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, desarrollen con carácter principal su actividad cooperativizada en dicho territorio.

2.- Así mismo, esta ley de cooperativas y sus normas de desarrollo también se aplicarán supletoriamente a las sociedades cooperativas pequeñas, reguladas por la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Otras clases de cooperativas.

El Gobierno Vasco, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de trabajo, previo informe preceptivo del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, podrá regular nuevas clases de cooperativas y establecer las normas especiales que vengan determinadas por las peculiaridades socioeconómicas que concurran en aquéllas, respetando los principios y caracteres establecidos en la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Modificación del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi .

Se modifica la letra a) del artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

“a) Para fines de utilidad pública o interés público o social a favor de administraciones públicas, otras entidades de naturaleza jurídico-pública, entidades integrantes del sector público y fundaciones, asociaciones o cooperativas declaradas de utilidad pública. Así mismo, y con los mismos fines, a favor de sociedades cooperativas de viviendas declaradas de utilidad pública en el caso de terrenos destinados a la construcción de viviendas para las personas socias”.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- Actualización de importes cuantitativos

El Gobierno Vasco, a propuesta de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, podrá modificar la cuantía de las sanciones y de los demás importes fijados en esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.- Aplicación y desarrollo de la ley.

- 1.- El Gobierno Vasco, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de trabajo, podrá dictar normas para la aplicación y desarrollo de la presente ley.
- 2.- En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno Vasco aprobará un nuevo Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas que prevea expresamente y regule la tramitación electrónica de expedientes registrales y simplifique la operatoria registral, salvaguardando la necesaria seguridad jurídica a efectos de facilitar las relaciones con los interesados, especialmente la inscripción y depósito de los actos sujetos al mismo, así como la resolución de consultas y la publicidad formal.
- 3.- En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Vasco aprobará el procedimiento de sanción cooperativa de conformidad con la legalidad de aplicación sobre régimen sancionador de la Administración y sus principios y garantías, previsto por el artículo 149 de esta Ley.

- 4.- Los órganos competentes de la Administración vasca podrán dictar normas relativas a la petición de datos a las cooperativas a efectos estadísticos, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de estadística, previa coordinación con el Registro de Cooperativas de Euskadi y con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.



EAE-KO KOOPERATIBEN LEGE-PROIEKTUA

ZIOEN AZALPENA

I.- Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatibei buruzko legeria aldatzea eta bateratzea: aurrekariak eta justifikazio orokorra

Lan elkartuko kooperatiben eskutik euskal kooperatibagintza lortzen ari zen garapenak, konplexutasunak eta, batez ere, potentzialtasunak eraginda, euskal legegileek goiz ekin zioten euskal kooperatibagintza babestu eta sustatzeko tresna juridiko propio eta egoki bat garatzeari, hau da, legeria egoki bat garatzeari, hartara bultzatzen baititu botere publikoak Konstituzioaren 129.2 artikulua. Horretarako, Autonomia Estatutuak 10.23 artikuluan eskusiboki aitortua duen eskumena garatu zuten –Autonomia Estatutua, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartu zen.

Kooperatibei buruzko otsailaren 11ko 1/1982 Legeak helburu hori bete zuen; izan ere, lege horrek eskaintzen zuen konfigurazio juridiko kooperatiboaren babesean enpresa-proiektu garrantzitsuak garatu ziren, eta, horrekin batera, lanpostu asko finkatu eta sortu; aldi berean, segurtasun juridikoa eman zitzaion sistema osoari.

Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legea (hemendik aurrera 4/1993 Legea) indarrean egon den hogeita bost urteotan erabakigarria izan da eredu juridiko kooperatiboa finkatzeko; eredu horri esker, EAEko kooperatibek egun dituzten premiei erantzun ahal izan zaie, eta, aldi berean, arau berriak garatu ahal izan dira, beharrezkoak baitira kooperatibak lehiatu behar diren merkatu gero eta globalizatuagoetan finkatzeko.

Legeria egoki bat eduki beharrak berekin dakar legeria etengabe egokitu beharra. Horregatik, hainbatetan aldatu behar izan da 4/1993 Legea, alderdi espezifiko batzuk egokitzeko presak eraginda:

- . 1/2000 Legea, ekainaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legea aldatzen duena.
- . 8/2006 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Kooperatiben Legea bigarren aldiz aldatzen duena.
- . Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikien ekainaren 25eko 6/2008 Legearen laugarren xedapen gehigarria, zeinaz aldatzen baitira 4/1993 Legeren 67 eta 68. artikulua.

Gainera, Legearen garapen orokorrerako erregelamendu bat argitaratu da, martxoaren 29ko 58/2005 Dekretuaren bidez onartua, zeinaren edukiak merezi baitu, zenbait alderditan, lege-mailara igotzea. (Horretaz gain, beste batzuk ere onartu dira: Euskadiko Kooperatiba Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena, martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuz onartua; otsailaren 2ko 64/1999 Dekretua, onura publikoko kooperatiba-sozietateei dagozkien prozeduren eta betekizunen araudia onartzen duena; eta apirilaren 4ko 61/2000 Dekretua, Gizarte Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituen).

Lege berri honen helburua da 4/1993 Legea denboran zehar aldatu duten arau horiek testu bakar batean bateratzea eta sistematizatzea, indarreko araua erraz identifikatu eta aplikatu ahal izateko, hau da, kooperatibei buruzko araua interpretatzeko eta aplikatzeko behar besteko segurtasun juridikoa bermatuko duen testu juridiko bat izateko.

Testu bakar honek baditu, Euskal Autonomia Erkidegoaren legeriaren mende dauden kooperatibei ezar dakizkiekeen xedapen orokor guztiak jasotzeaz gainera, beste helburu batzuk ere: batetik, harmonizazio-helburua du, batez ere terminologiari eta oinarri berbera izateari eta konponbide juridikoari dagokienez; bestetik, zehaztasun-falta duten edo aplikatzeko orduan zalantzak sor litzaketen arau-elementu batzuk argitu nahi ditu. Horrek araua gehiago garatu beharra ekarri du batzuetan, zuzen interpretatzen laguntzeko, betiere aldatu gabe jatorrizko zentzua eta helburua.

Edozein kasutan, aurreko guztiak ez du baztertzen Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legea, ezaugarri bereziak dituzten kooperatibak arautzen dituen, beren lege propioa eta berezitua behar baitute kooperatiba horiek. Beraz, lege hau haren osagarri da, antolaketa-egitura konplexu bati erantzuten diona, barnean hartuz, oreka sistematiko batean, kooperatiba mistoak ez ezik, mota eta maila ezberdinetako kooperatibak. Kooperatiba-sozietate txikien erregulazio-araua lege honetan txertatuz gero, oreka hori apurtu egingo litzateke.

Testu bakar batek eskaintzen duen sistematizazioa dela eta, esan behar da hori oso garrantzitsua dela euskal kooperatiba-legeriak egun duen bilakaeraren barruan, une honetan beharrezkoa delako kooperatiba-sozietateen garapena, batez ere kooperatiba-mota batzuen, bideratuko duen araudi bat garatzea, betiere aldatu gabe jatorrizko legeriaren gutxieneko oinarriak.

Aldaketen barruan, berriz, azpimarratzekoak dira Administrazioaren esku-hartzearen arloan egindakoak, argitu egin baita nola eta zenbateraino sustatu behar dituen kooperatibak eta zer neurri ezarri behar dituen kooperatibek legea betetzen ote duten kontrolatzeko.

Hala, honako hauek lortu nahi dira testu honetan emandako arauen bidez: zaharkituta geratutako hainbat alderdi gainditzea, kontuan harturik horien kostua eta aplikatzeko erakusten duten zailtasuna; kooperatiben autonomia indartzea, proiektu kooperatibo

bakoitza ondoen dagokion moduan erregulatzeko, betiere errespetatuz sozietate bati kooperatiba-izaera ematen dioten identifikazio-lerroak; kooperatiben funtzionamendu demokratikoa eta parte-hartzailea bermatzea, eta, aldi berean, kudeaketa eta kontrolen eraginkortasuna bermatzea eta publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren indartzea. Funtsean, segurtasun juridikoa eranstea lortu nahi da, barne nahiz hirugarren ez-bazkideekiko harremanetan, hau da, kooperatibei buruz EAEn dagoen legeria tresna egokia izatea kooperatiben barne-harremanak eta kanpoko trafikoa juridikoa finkatzeko.

Hori guztia indarreko araudiaren egituraren txertatu da; arau gehienek bere horretan dira, eta bat egiten dute araudi-diseinuen lerro nagusiekin: kudeaketa-organismo profesionalizatzea, erabakiak azkar hartzea, eta finantza-baliabideak eta barne-lankidetzaren indartzea. Horrela, enpresek baldintza berberekin lehiatzea lortu nahi da, baina alde batera utzi gabe sozietatearen identitate kooperatiboa, baita haren funtzionamendu demokratikoa bermatzea eta erantzukizun soziala sustatzea ere.

Helburu hori lortzeko, kontuan hartu da: batetik, zer egoera eta bilakaera duen, egun, merkataritzako araudi orokorrak, eta, horrekin batera, zer araudi eta irtenbide eman zaizkien kooperatibei zuzenbide konparatuan; eta, bestetik, zer neurri eta tresna ezarri diren oraintsu ekintzaileentzat. Hori guztia kooperatibek auto-antolakuntzarako duten autonomiarekiko orekari eutsiz egin nahi izan da, bat etorritik haien tradizioarekin eta orokorrean onartuta dauden printzipio eta parametroekin.

Esandako guztia kontuan, eta helburu horiek betetzeko beste tresna hobeagorik ezean, esan daiteke erregulazio hau ezinbesteko minimoa dela adierazitako helburuak betetzeko; izan ere, saihesten dira beharrezkoak ez diren administrazio-kargak, babestu beharreko interesak bermatzen ez dituztenak, eta eusten zaie Euskal Autonomia Erkidegoan kooperatibei aplikagarri zaien araudi-esparruaren oinarritzeko alderdiei, eta segurtasun juridiko handiagoa ematen zaio araudi-esparruari. Esandako guztiagatik, arau honek betetzen ditu erregulazio onaren printzipioak, Administrazio-prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan ezarritakoak.

Lege honek 154 artikulua, 8 xedapen gehigarri, 2 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta 6 azken xedapen ditu, 4 titulu, 15 kapitulu eta 18 ataletan egituratuak.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.23 artikuluen babesean ematen da, zeinean Euskal Autonomia Erkidegoari eskumen eskusiboa ematen baitzaio kooperatibei eta Gizarte Segurantzaren sartu gabeko mutualitateei eta positoei buruz, bat etorritik merkataritza-gaietan indarrean dagoen legeria orokorrearekin. Bestalde, Estatutuaren 10.5 artikulua Euskal Autonomia Erkidegoari eskumen eskusiboa ematen dio Euskal Herria osatzen duten lurralde historikoen foru-zuzenbide zibil eta berezia, dela idatzia ala ohiturazkoa, gorde, aldatu nahiz garatzeko, eta indarra zein lurraldetan izango duen finkatzeko.

II. Xedapen orokorrak

Kontuan hartuta egungo egoera, komenigarri ikusi da espresuki aipatzea Nazioarteko Kooperatiba Aliantzaren jasotako printzipioak, lagungarri gerta daitezkeelako bai kooperatiba-sozietatearen kontzeptua hobeto zehazteko eta ulertzeko, bai hari buruzko araudia hobeto interpretatzeko eta aplikatzeko, betiere eutsiz 4/1993 Legean kooperatiba-sozietatearen kontzeptuari buruz egiten den formulazioari eta horrek eskaintzen duen legezko bermeari.

Sekzioei dagokienez, esan behar da arlo horrek aurretik ere egokitzapen asko izan dituela, beti azpimarratuz kooperatiben erantzukizunak batasun-izaera duela eta haien organoak sekzioetako gainetik daudela. Lege honetan, malgutu da sekzioen barne-funtzionamendua, aipaturiko izaera horri eutsiz, batez ere hirugarren ez-bazkideekiko harremanetarako.

Eutsi egin zaio, oro har, hirugarren ez-bazkideekiko eragiketen erregulazioari, bazkideekiko eragiketek lehentasuna izaten jarraitzen baitute; alderdi hori, alabaina, malgutu da nekazaritzako eta elikagaien kooperatiben kasuan, eta espezifikoki erregulatu da zein diren malgutzeko arrazoiak eta gorde beharreko kautela. Lehen bezala erregulatu da, halaber, gutxieneko sozietate-kapitala: enpresa-izaera duten kooperatibei erantzuteko adinakoa izan behar du, eta ekintzailatza-mota guztien eskura egoteko modukoa ere bai.

III. Kooperatibak eratzea

Kooperatibak eratzeko arauak ez dira aldatu, bakarrik harmonizaziorako doikuntza tekniko batzuk egin dira: diru-itzulketa ez da beti eskubide bat izango; organo batzuk ez dira nahitaezkoak; sozietate anonimoen legera igorri orde, indarrean dagoen kapital-sozietateen legera bidaltzen du (Kapital Sozietateen Legearen testu bategina, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua), edo Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena daukan sailera, eta ez legegintzaldi bakoitzean aldatu ohi den izen zehatzera.

IV. Euskadiko Kooperatiba Erregistroa

Aldatu gabe geratzen dira Euskadiko Kooperatiba Erregistroaren oinarritzko printzipioak: publizitate formala eta materiala, legalitatea, legitimitatea, lehentasuna eta segidako traktua. Ordea, argitu da zein kasutan aurkaratu daitekeen merkataritzako

bide judizialean, eta zein kasutan administrazioarekiko auzibidean; eta eransten da, praktikotasunagatik, inskribatzeko titulua aurkezten den eguna hartuko dela kooperatiben eratze-datatzat.

Era berean, espresuki aipatzen da zer bide erabil daitezkeen inskripzio-prozesuetan: bide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak.

V. Bazkideak

Indarrean dauden baldintza beretan erregulatu da bazkideen egoera juridikoa, bereziki estatutuetan finkatu beharra, nahitaez, zein diren lan-bazkideen parte-hartzeari buruzko irizpideak, eta argitzen da parte hartu ahal izango dutela beste entitate batzuetan ere, baldin eta kooperatibak lankidetzan badihardu entitate horiekin, edo partaidetza badute haietan. Parte-hartze hori, dagoeneko aurreikusita eta garatuta zegoena erregelamendu bidez, egiturazkoa edo koiunturala izan daiteke, eta mugatua izango da kopuruari dagokionez, salbu eta enpresa-premiaren kasuan.

Berdin erregulatu da bazkideen informazio-eskubidea: eskubidea izango dute sozietatearen dokumentazio garrantzitsuena izateko; informazioa mugatu ahal izango zaie, kooperatibentzat oso kaltegarritzat jotzen den kasuan edo bazkideen eskaera nabarmen abusuzkotzat jotzen denean; informazioa ukatzen denean motibatu egin beharko da, eta batzar orokorrak du azken erabakia hartzeko eskubidea. Era berean, bazkide guztiek gorde beharko dute isilpekoa, sozietatearen interesei kalterik ez egiteko, eta proposamenak egiteko eskubidea izaten jarraituko dute.

Nolanahi ere, bazkideen informazio-eskubide hori zabaldu egin da zaintza-batzordeak kontu auditatuei buruzko txostena ematen duen kasuan, hura aztertzeko eskubidea izango baitute.

Bere horretan utzi dira honako alderdi hauek ere: zenbat bazkide behar diren gutxienez kooperatiba bat eratzeke (hiru); zer prozesu bete bazkideak onartzeko; nola aurkaratu ez onartzeko erabakia, eta zer ondorio dituen aurkaratzeak; zenbat dirauen probaldiak; zer eratako bajak dauden eta zer epe dauden pertsona juridikoei aurreabisua emateko; zenbat denboran izan behar den gutxienez bazkide; zer eskubide duen kooperatibak kooperatiba uzten duen bazkideari exijitzeko ezen bete ditzala lehendik finkatuta dauden betebeharrak; nola bereizten diren, legez, baja arrazoituak eta arrazoitu gabeak, eta zer kasutan bilakatzen den baja bat nahitaezko baja. Sozietate-diziplina ere ez da ukitu: zer zehapen-mota dauden; noiz preskribatzen duten faltek eta zein diren prozedura-arauak; noiz eteten diren bazkideen eskubideak; zer epe dauden ebazteko, eta zein une zehatzetan landuko den gaia batzar orokorrean.

Sistematizazioaren mesedetan, bazkideei buruzko kapituluaren lehen artikuluan azaltzen da sozietate-modalitate ezberdinak –aurreko legean sakabanatua agertzen ziren-, eta definitu egiten dira, erregelamenduz egin zen moduan. Ildo horretan, aipatzekoa da lehengo baldintza beretan erregulatu direla iraupen mugatuko bazkideek sozietatearekin dituzten harremanak, praktikan ikusi delako beharrezkoak direla eta bat datozela kooperatiba-sozietatearen kooperatiba-izaerarekin, unean uneko premia ekonomikoak bete ahal izateko; berdin erregulatu dira, halaber, iraupen mugagabeko bazkide izateko iraupenari eta prozedurari dagozkion alderdiak.

Lehen bezala erregulatu dira jardunean ez dauden bazkideei edo ez-erabiltzaileei buruzko alderdiak ere, haien botoa bazkideen boto guztien bostena izatera mugatuta; berrikuntza bezala, bazkide-egoera berri bat aurreikusi da: eszedentziadunena. Bazkide horien eskubide eta betebeharrak estatutuetan erregulatuko dira.

Azkenik, espresuki erregulatu da lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileen etetearen eta nahitaezko bajaren kasuak berdin aplikatuko zaizkiela beste mota batzuetako kooperatibetako lan-bazkideei ere. Horretarako, terminologia egokitu da, eta jatorrizko erregulazioa kapitulu honetan jaso da sistematikoki, honako doikuntza tekniko hauek eginda: batetik, dagokion erabakia zein organok hartu behar duen, hori malgutu egin da, eta aurrerantzean Artezkaritza Kontseiluaren eskumena ere izango da, betiere hala badago aurreikusita estatutu sozialetan, eta, bestetik, zehaztu da zer epe ezarri behar den bazkideari itzultzeko sozietatearen kapitalari egindako ekarpenak baldin eta nahitaezko baja ematen bazaio arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako eta ekoizpenekoak direla-eta, edo ezinbestezko arrazoiengatik; hala, nahitaezko ekarpenak 2 urteko gehienezko epean itzuli beharko dira (periodifikatuta), eta borondatezkoak, berehala.

VI. Sozietatearen organoak

Sozietatearen organoen araubidean, aldaketa orokor batzuk egin dira, alderdi espezifiko batzuk garatzeko; azpimarragarriak, administrazio- eta kudeaketa-organoen egin direnak, gehiago arautu baita arlo hori.

Ildo horretan, eta kontuan harturik sistematizazioak duen garrantzia, lehendabizi kooperatiba-organok identifikatu dira, haiek banan-banan erregulatzeari ekin baino lehen; antolaketaren erregulazioa, berriz, kooperatiba bakoitzaren esku utzi da, sozietatearen funtzionamendu egokiagoa bermatzeko.

Batzar orokorrari dagokionez, lehen bezala utzi dira: konfigurazioa eta funtzioak, ondo bereizita gainerako organoen funtzioetatik, enpresa modu eraginkor eta efizientean kudeatzeko eta segurtasun juridikoa eskaintzeko; araubide juridikoa (1993an berritua, bazkide askoko kooperatiben deialdietarako publizitate indartuari dagokionez); bi herenez osaturiko gehiengo indartuak, hainbat erabaki hartzeko behar direnak

(gutxiago dira kasu horiek); boto plurala emateko aukera, pertsona juridiko jakin batzuek dutena; bazkideen boto-eskubide mugatua, partziala denean beren jarduera kooperatibizatua; interes-gatazkak eta haien ondorioen erregulazioa, baita akta idazteari eta onartzeari dagozkion alderdi formalak ere.

Merkataritza-legeriaren ildoari jarraikiz, berrikuntza bat sartu da ohiko batzar orokorra egiteko epeari dagokionez: batzar orokorrerako deialdiarekin lotu ordez, ekitaldi soziala itxi ondorengo lehen sei hilabeteetan egin beharra ezarri da, batzar orokorra egiteko epea gehiago zehazteko.

Berrikuntza bat sartu da irakaskuntza-kooperatiben batzar orokorra hirugarren deialdian baliozkotasunez egiteari dagokionez, zeina onartua baitzegoen kontsumo-kooperatibentzat eta nekazaritzako eta elikagaien kooperatibentzat; horretarako, aldatu da hasierako erregulazioa, bigarren deialdirako bertaratuen quorum jakin bat eskatzen zuena; betiere, baldintza berberetan: batzarra bigarren deialdian egiten saiatu, eta lortzen ez bada. Aldaketa hori egiteko erabilitako arrazoiak, lehenengo aldaketa egiteko erabilitako berberak dira: batetik, parte-hartzea, eta, bestetik, errealtate soziologikoa, behar bezala kontrastatua.

Era berean, batzar orokorraren deialdiak egiteko informazioko eta komunikazioko teknologia berriak erabili ahal izateko aukera sartu da; izan ere, aurreikusten da bazkideek errazago parte hartu ahal izango dutela sozietateak hartu beharreko erabakietan, gutxieneko informazioa bermatuz.

Bada, azkenik, azpimarratu beharreko beste berrikuntza bat: erabakiak aurkaratzeko, kapital-sozietateei buruz oraintsu erregulatutako legean ezarritako irizpideak ezarriko dira: kasuak, legitimazioa, epeak eta iraungipena. Hala egin da kooperatiba-enpresen trafikorako segurtasun juridikoa bermatzeko eta ulertzen delako ez diela eragingo kooperatiben ezaugarri espezifikoak.

Kooperatibak administratzeari eta ordezkatzeari dagokionez, mantentzen dira: administratzaile eta ordezkarien funtzioen araubidea, bai eta haien jardunak hirugarren ez-bazkide onustedunengan dituen ondorioak xede sozialari dagokionez; haien izaera, kideanitz edo kidebakarra, eta ez-bazkideek beren profesionalizazioa errazteko parte-hartze mugatua izateko aukerak; gehiengo indartuak, garrantzi handiko erabakiak hartzeko; ezgaitasunen eta debekuen araubidea, eta batzorde betearazleak eta kontseilari delegatuak izendatzeko aukera.

Kooperatiba bakoitzak bere errealtatearen eta beharren arabera hartutako erabakien arabera, arauak gradualki aldatu dira, edo malgutu; hala, kide anitzeko organoetan zenbat kide egon behar duten gehienez eta zenbat gutxienez, hori estatutuetan erregulatu ahal izango da, eta batzar orokorraren esku utziko da zenbat kide egongo diren kasu bakoitzean; profesionalizazioa bultzatzeko, igo da organo horretan bazkide ez direnek parte hartzeko muga (heren bat, gehienez ere); gizon- eta emakume-kopurua orekatzen saiatu beharko da; idazkari-kargua betetzeko, profesional bat jarri

ahal izango da kontseilari baten orde; kargugabetutako kontseilariaren ordezkorik ez badago, kontseilu-errektoreak berak hautatu ahal izango du ordezkaria, aldi baterako, hau da, batzar orokorrak beste bat izendatu bitartean; kontseilariak arrazoitu egin beharko dute zergatik egin duten uko, eta administrazio-organoak uko-egiteari buruzko kalifikazioa eman beharko du; zehaztu da zer prozedura jarraitu behar duten kontseilariak uko egiteko, eta zein diren uko egitearen ondorioak; parte-hartzea bermatzeko, funtzionamenduan informazio- eta komunikazio-teknologia berriak sartzea aurreikusi da, eta, bukatzeko, argitu da zer araubide aplikatuko den botoak zenbatzeko, batzar orokorraren irizpide bera ezarrita.

Baina, aldaketa handienak administratzaileen gaia arautzean egin dira: administratzaileen diligenza- eta leialtasun-betebeharra eta erantzukizun korrelatiboa, eta erantzukizun hori exijitzeko bazkideek gauzatutako erantzukizun-ekintza, bat etorritik sozietate-araubidean gai horri buruz ezartzen ari diren joera berriekin. Goian esandakoarekiko koherentziaz, administratzaileen ordainsaria ere arautu da, betiere kooperatibak berak erabakitzen duenean haren lana ordaintzea; ordainsaria zenbatekoa izango den, hori batzar orokorrak erabakiko du, baina beti egongo da kooperatibaren egoerari eta egindako lanari lotuta, eta gardentasunez jokatu beharko da alderdi horri dagokionez.

Zaintza-batzordearen erregulazioan ere ez da aldaketarik egin, izaera demokratikoa duelako eta administrazio-organoa eta batzar orokorra lotzen dituelako, eta ez duelako eragozten administrazio-organoaren kudeaketa efizientea. Bai egin dira, ordea, doikuntza batzuk: batzordea nola osatuko den –lan-izaeraren arabera osatu orde sozietate-izaeraren arabera osatuko da–, zer funtzio izango dituen eta zer ondorio izango dituen kooperatiben kontuei buruz batzordeak egiten duen txostenak kanpoko auditoretza batek ere parte hartzen duenean.

Sozietate-kontseiluari dagokionez, ikusi da baliagarria dela euskal kooperatibagintzaren barruan; beraz, kooperatiba-mota guztietan horrelako organo bat sortzeko aukera aurreikusi da lege honetan, alde batera utzita zenbat bazkide dituen kooperatibak.

Errekurtso-batzordearen erregulazioan ez da aldaketarik sartu, hark erakutsitako eraginkortasunagatik, duen antolaketa demokratikoagatik eta kooperatibek duten autokontrol-izaeragatik. Organo hori ere aukerakoa da.

VII. Araubide ekonomikoa

Lege honetan, argiago eta zedarrituago azaltzen da zer erantzukizun duten sozietateak eta bazkideek hirugarren ez-bazkideekiko, eta nori egotzi behar zaizkion kooperatiban sortutako galerak; kasu horretan, malgutu da nahitaezko erreserba-funtsari egotz dakiokeen gehieneko kopurua. Funts horri, gehienez, soberakin positiboak izandako

azkenengo bost urteetan nahitaez legezko funtsetara bideratu diren diru-kopuruaren batezbestekoa egotziko zaio, edo, kooperatiba bost urte horiek baino berriagoa bada, eratze-unetik beretik bideratutakoen batezbestekoa. Nolanahi ere, nahitaezko erreserba-funtsak kooperatibaren sozietate-kapitalaren ehuneko berrogeita hamarra gainditzeko badu, galerak konpentsatzeko erabili ahal izango da portzentaje horretatik gorako zenbatekoa.

Edozein kasutan, enpresen kaudimenik eza gertatzen den kasuetan eta horren ondorioetarako konkurtso-legeriara joko da.

Gainera, bi doikuntza tekniko sartu dira: batetik, urtebetera zabaldu da bazkideak bere galerei aurre egiteko aldia, errazago bete ahal izateko kooperatibarekiko duen betebeharra; bestetik, espresuki jaso da ezen, batzar orokorrak adostutako ekarpen berriei gain, dagoeneko ezarrita dauden ekarpenak ere egin daitezkeela, kooperatibak finkatuta baitauka zein den kapitalari egin beharreko gutxieneko ekarpena bazkide izaten jarraitzeko.

Erantzukizuna mugatua izango da, halaxe izan da-eta 1993az geroztik.

Gainerakoan, ez da aldaketarik egin kooperatiben araubide ekonomikoan: finantzatzeko hainbat aukera daude, 1993ko legean kooperatibetako enpresa-proiektuak garatu ahal izateko aurreikusitako sozietate-kapitalaz bestelakoak, kapital-sozietateek darabiltzaten tresna finantzarioekiko korrelazioan; nolanahi ere, erabaki da finantzaketa modu horiek kooperatiban orokorrean aurreikustea, eta erregelamenduz egitea garapen espezifikoak.

Produktu finantzarioetan inbertitzen duten inbertitzaile eta kontsumitzaileak babesteko ordenamendu juridikoan hainbat arauen bidez garatutako espirituari jarraikiz, batez ere, finantza-sektoreko arauari, lege honetan gogora ekartzen da nahitaezkoa dela inbertitzaile eta kontsumitzaile horiei informazio egokia, argia eta ulargarria ematea. Era berean, gogorarazten da indarrean dauden betekizunak bete beharko direla lege honetan erregulatutako mendeko ekarpen finantzarioak harpidetzeko, eta emandako informazioa nahikoa, argia eta ulargarria izan dadin bermatu behar dela. Inbertsio-zerbitzuak ematen dituzten entitateek nahitaez bete beharko dute informazio-betebehar hori, aipaturiko tresna finantzarioak eskuratu nahi dituzten kontsumitzaileei informazio gardena eta zuzena emateko errekerimenduak betez.

Lehenengo erregulazioari eutsi zaio sozietate-kapitalari, balioespenari, ohikoak ez diren bazkide-kopuruaren mugei eta ekarpenen ordainketei dagokienez, baina hiru aldaketa sartuta: batetik, likidaziorik egiten ez den kasuan diruaren interes legala baino ordainketa handiagoa egiteko aukera jaso da; bestetik, zehaztu da ekarpena itzuli daitekeela sozietatearen kapitala edo bazkidearen jardura kooperatibizatua murrizten den kasu espezifikoetan; eta, azkenik, bi doikuntza tekniko sartu dira, segurtasun juridiko handiagoaren ondorioetarako: baatetik, exijitzen da estatutuak aldatzea baldin eta itzultzeko eskubidea duten ekarpenak nahitaez bihurtu nahi badira kooperatibak

baldintza gabe ukatuz gero itzultzeko eskubiderik ez duten ekarpen; bestetik, ekarpenak itzultzea ukatzea enpresa-jardueraren bilakaerarekin zerikusia duen irizpide ekonomiko objektibo batekin lotu da, sozietatearen estatutuetan oinarrituz betiere.

Nahitaezko erreserba-funtsera eta kooperatiba-heziketa eta -sustapenera eta interes publikoko beste helburu batzuetara soberakinetatik egin beharreko ekarpenak 2008ko legean sartutako erregulazioaren arabera erregulatu dira.

VIII. Sozietatearen dokumentazioa eta kontabilitatea

Kooperatibaren kontabilitatearen erregulazioan, erreferentzia bat erantsi da ondare garbiaren aldaketen eta, hala badagokio, efektibo-fluxuen egoerari buruz, kontu-araudira egokitzeko; baina indarreko erregulazioari eutsi zaio sozietatearen dokumentazioari eta kontu- auditoretzari eta kontabilitateari dagokienez, arau hauetara egokitu beharko baitira: Kontabilitate Plan Orokorra, sozietate-kooperatiben kontabilitate-arau espezifikoak, Kontabilitate Plan Orokorra garatzeko Kontabilitatearen eta Kontu-auditoretzaren Institutuak onartutako arauak, nahitaez bete beharrekoak, eta kontabilitateari buruz aplikagarri zaien gainerako araudia.

Era berean, izaera teknikoko hainbat alderdi zehaztu dira, merkataritza-legeria orokorraren ildoari jarraikiz. Hala, informazio finantzariarako araudi-esparrua definitu da, kooperatibek aplikatu behar dutena urteko kontuak formulatzeko orduan, eta epe bat zehaztu da ekitaldia ixten denetik aurrera kooperatibaren gobernu-organoak urteko kontuak formulatzeko.

Ez da beharrezkotzat jo beste alderdi batzuk definitzea; esate baterako, kudeaketa-txostenaren edukia definitu beharra uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzaldi Dekretuz onartutako Kapitalaren Sozietateen Legearen testu bateginaren 262. artikulua arabera, ulertzen delako merkataritza-legeriara igorritik haren baitan subsumituta geratzen dela. Antzeko zerbait gertatzen da batzar orokorrak urteko kontuak onartzeko epea zehazteari dagokionez, legearen 34. artikulua 35.1 artikuluari lotuta aplikatzen baita.

Aitzitik, komenigarritzat jo da argitzea noiz egin behar den kontu-ikuskapena tamaina dela-eta.

IX. Estatutuen aldaketa eta kooperatiben bat-egitea eta zatitzea.

Estatutuen aldaketaren eta kooperatiben bat-egitearen eta zatitzearen arloan, izaera operatiboko beste alderdi tekniko batzuez gain, lehen ere irizpide bezala finkatuta zegoen alderdi bat aurreikusi da espresuki bat-egite berezien kasuetarako: kooperatiba-sozietateek bat egin ahal izatea beste sozietate-mota batzuekin, zibilekin

edo merkataritzakoekin, baldin eta ez badago hori espresuki eragoz lezakeen bestelako legezko agindurik. Kooperatiba transformatzen den kasurako proposatutako aldaketen ildoari jarraikiz, tratamendu bera aurreikusten da 89.4 artikuluan finkatutako funtsetarako, bat-egite prozesu batean sozietate ez-kooperatibo batek kooperatiba-sozietate bat bereganatzen duenean.

Ildo berean, espresuki erregulatzen dira, aipaturiko bat-egite bereziak ez ezik, kooperatiba-sozietatek entitate ez-kooperatibo baten alde zatitzea edo banantzea ere; praktika kooperatiboan, beharrezkoa ikusi da aukera hori, eta, beraz, sozietate-arauak aukera hori ahalbidetu behar du, kooperatiba-legeria autonomikoan eta merkataritza-legerian gertatzen den bezala.

Bere horretan utzi dira estatutuak aldatzeko 1993an ezarritako berrikuntzak: estatutuen publizitatea, bazkideen eskubidea dokumentazioa eta publizitate berezia izateko eta aztertzeko, edo baja arrazoitua emateko; bat-egitea (bat-egitearen aurretiko erabakia eta bat egiteko dauden epeak eta gorde beharreko kautelak; publizitate indartua; bazkideen eta hartzekodunen informazio-eskubidea edo inplikaturiko kooperatibak inskribatzeko mekanismoak zein inskripzioaren ondorioak), eta zatitzeari buruzkoak (zein kasutan zatitu daitezkeen kooperatibak eta zer proiektu aurkeztu behar duten, izenpetuta, kooperatibako administratzaileek, edo zer erantzukizun duten –solidarioa eta mugatua– banandu diren kooperatibek).

X. Kooperatibak transformatzea

Sozietate-motak birmoldaketa-bideen bitartez berregituratzeko prozesuak, esku hartzen duten kooperatiben izaera kooperatibista kontrolatzen dutenak eta sozietateen zuzenbidearen araugintza-teknikak aprobetxatzen dituztenak, indarreko terminoetan formulatu dira, salbu eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak transformazio-prozesuan izan beharreko esku-hartzeari dagokionez eta, hala badagokio, zaintza-batzordeak prozesuan izan beharreko esku-hartzeari dagokionez.

Ildo horretan, eta kooperatibei buruzko lege autonomiko ezberdinen erregulazioarekin bat, aztertu da zergatik eta zertarako esleitu zaion Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari homologazio-funtzioa, eta nolakoa eta zenbatekoa den aipatutako organo horren esku partaidetza-kontu gisa jarri beharreko ondarea.

Azterketa horren ondorioz, erregulazioa aldatu da, transformatzeko betekizun gisa aipaturiko homologazioa behar izatea bertan behera utziz, ulertzen delako ezen, nahiz eta Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legea aitzindari izan zen kooperatiben transformazio erregulatzen, hartan ezarritako betekizun batzuk gehiegizko bihurtu direla, denboraren joanean, kautelazko neurri gisa. Hala, homologazioaren ordeztu aipaturiko organoari informazioa eman beharra ezarri da, eta, gainera, malgutu da funtsa banaezinak organo horretara transferitzeko modu

operatiboa; argitzen da ezen aplikazio zehatzen mende dauden helburu-izaerako erreserbak ez direla sartzen mugimendu kooperatiboa sustatzeko atxiki beharreko ondarearen barruan; bestalde, doitzen da funtsa horien benetako balioa, kontuan hartuz balantzean agertu diren eta konpentsatu gabe dauden galerak, edo aditu independente baten txostenaren ondorioz aktiboaren elementuen gainean ager litezkeen minusbalioak.

Modu berean, zaintza-batzordeari buruz aurreikusitako esku-hartzea ez da, erregulatu zenetik, gertatu; beraz, ez da egoki jotzen lege berri honetan sartzea, araugintza-teknika egoki baten mesedetan.

XI. Kooperatibak desagitea eta likidatzea

Funtsean, ez da aldatu kooperatibak desagiteko arrazoiei buruzko erregulazioa; bakarrik, berrikuntza bat sartu da: kaudimengabeziagatik desagiten bada, egungo konkurtso-araudira egokitu beharko da prozedura. Orobat geratu da aldatu gabe kooperatiba berrindartzeko aukera.

Aldiz, asko aldatu da likidatzaileen lege-araubidea. Aurreko legean, bazkide izan behar zen likidatzaile izateko. Baina, lege honen arabera, orain ez da betekizun hori bete beharko, baldin eta ez badira betetzen dena delako sozietatea modu ordenatuan likidatzeko eta azkentzeko baldintzak, dela kooperatiba erabat desagituratuta dagoelako, dela bazkiderik ez duelako edo haiek ez direlako gai likidazioa gauzatzeko edo ez dutelako halakorik egin nahi. Ildo horretan, batzar orokorrari ematen zaio ahalmena likidatzaileen funtzionamendu-araubidea ezartzeko.

Bestalde, lehen bezala erregulatu dira sozietatearen ondasunaren esleipenari eta onartutako azken balantzearen publizitateari buruzko alderdiak, baina aldaketa bat eginez: aurkaratzeko epe espezifiko bat erantsi da, segurtasun juridikoa bermatzeko, zuzenbide konparatuan ezarritakoaren antzekoa eta ondorio berberekin.

Azkenik, formazko aldaketa bat egin da erregistroa ezerezteko araubidean: likidatzaileek sei urtez kontserbatu ahal izango dituzte liburuak eta gainerako dokumentazioa.

XII. Kooperatiba-motak

Oro har, modu irekian sailkatu dira kooperatibak, orain arte bezala; horretarako, kontuan hartu da zer xede duten kooperatibek eta zer egoera juridiko duten bazkideek; espezifikoki erregulatu gabeko alderdietarako, kooperatiba-mota bakoitzari dagozkion berariazko alderdiak lehenetsi dira arau orokorren gainetik.

Lan elkartuko kooperatibetan, beraiek ezarri ahal izango dute, orain arte bezala, hala lan-araubidea –barne-araubideko erregelamendu baten bidez arautu ahal izango da– nola diziplina-araubidea, betiere kooperatibon sozietate-izaera –eta ez-laborala– azpimarratuz, nahiz eta gutxieneko lansari-aurrerakin bat aurreikusten jarraitzen den. Besteren konturako langileen kasuan, berariaz azpimarratzen da kooperatiben helburua dela lana bazkide langileei ematea, hori baita lan elkartuko kooperatiben sortzetiko helburua, baina, kooperatiba-enpresaren zirkunstantziek hala eskatzen dutenean, ez da baztertzen besteren konturako langileei ere ematea, eta mota horretako langileak kontratatzeko muga bazkideen ehuneko hogeita hamarrera igo da. Kopuru hori urteko orduen arabera kalkulatu da, arrazoi operatiboak direla eta.

Kopuru hori zenbatzeko, ez dira aintzat hartuko areagotuz joan diren kasu espezifikoak, pilaturiko esperientziak erakutsi baitu gehitu egin behar direla halako kontratuak: esgaitasunak dituzten pertsonen egindakoak; praktika- eta prestakuntzakoak; hezkuntza-kooperatibek egindakoak, helburutzat integrazioa edo kontziliazio familiarra dutenak, edo kooperatibak aldi baterako laneko enpresa gisa jarduten duenean beste enpresa batzuentzako egindako langile-kontratuak. Bazkide izateko prozeduran, doitu da soldatapeko langile bezala eduki beharreko antzintasuna, eta saihestu da bazkidetza zuzenean lortzea: segurtasun juridikoa bermatzeko, bazkide izateko eskaria hamabi hilabete lehenago egin beharko da, espresuki.

Era berean, langile autonomoen araubide bereziaren arabera diharduten langileak dituzten kooperatibek beren estatutuetan espresuki jaso dezakete eurek ordainduko dizkiotela Gizarte Segurantzari bazkide langilearen kuotak, sozietate-betebeharrak betetze aldera, hargatik eragotzi gabe dagokion sektore-araudiarekiko mendekotasuna. Hala eginez gero, lege-maila izango du hori aurreikusi zuen erregelamendu-erregulazioak. Kasu horretan, ordainketa horiek ez lirateke izango lansari-aurrerakinaren zati, eta soberakin garbia zehazteko partida kengarritzat hartuko lirateke.

Espresuki eta soil-soilik araua argitzeko asmotan egin dira honako ñabardura hauek: batetik, lana kooperatiban egiten duten bazkideen lanaldi partzialaren edo osoaren araubidea, eta, bestetik, lan-arriskuen prebentziorako arau orokorren aplikazioa, aurreko laneko segurtasun- eta higiene-nomenklatura egokituz.

Nekazaritzako eta elikagaien kooperatibetan ere egokitzen batzuk egin dira, izenez aparte: egokitu da bazkideak aldi baterako ordezkatzeko dituzten langileek kooperatibaren bitartekoekin egindako nekazaritza-lanei buruzkoa, eta argitu da titulartasun partekatuko entitate diren bazkideen edo nortasun juridikorik gabeko edozein entitatereko egoera juridikoa –egoera hori oso ohikoa baita sektore honetan–, baita, segurtasun juridikoa dela eta, haiek kooperatibarekin duten harremana ere. Horrekin, lehendik ere aurreikusita dagoen ikuspegi komunitario batekin lotuago legokeen erantzun bat eman nahi zaio, kooperatiba-mota hauek nekazaritza-inguruaren zerbitzurako dauden entitateak diren heinean, komunitatearekin duten

erantzukizun soziala azpimarratuz. Ildo berean, egokitu egin nahi da hirugarren ez-bazkideekiko eragiketei buruzko erregulazioa: gaur egun, bazkideek dute lehentasuna, eta ekitaldi ekonomiko bakoitzean ehuneko berrogeita bederatziko muga ezartzen da hala jasota badago estatutuetan. Beraz, egungo arauketa bateratu nahi da sektoreari lotutako Batasunaren xedapen espezifikoekin, zeinen helburua baita hirugarren ez-bazkideen ekoizpenak nekazaritzako ustategietan integratzea, modu horretan nekazaritzako eta elikagaien kooperatibak xedapen horietara atxikitzeak aukera izan dezaten, gehieneko portzentaje hori gaindituz.

Gainerako kooperatiba-motak sailkatzeko orduan, etxebizitzaren, garraioen eta junior kooperatibetan egin dira aldaketa gehienak.

Ildo horretan, etxebizitzaren kooperatibei buruz egindako aldaketen helburua da kooperatibistek eurek hartzea eraikitzeak eta kudeatzeko oinarrizko erabakiak, demokratikoki, kooperatiba eratzen den une beretik, betiere eutsiz kooperatiba-mota hauei dagokien eta oraintsu erregulatu den legegintza-diseinuaren oinarrizko egiturari, bat etorri kooperatiba-mota hauetarako gainerako autonomietan eta estatuan ezartzen den legeriarekin. Nolanahi ere, kontuan harturik nolako profesionaltasuna eskatzen duen higiezinaren sustapenak, nola elkartzen diren kooperatiba-mota hauetako bazkideak –normalean ez dute elkar ezagutzen– eta zenbat diren, gerta liteke entitate kudeatzaile bat kontratatu behar izatea, aholkularitza eskainiko duena eraikuntzari eta kooperatibaren finantzaketari buruz.

Horretaz gain, beti kontrolatu beharko da kudeaketa-eragiketa guztiei buruzko informazioa eta gardentasuna, delegatuak izan edo ez izan.

Halaber, baimentzen da eragiketak egitea hirugarren ez-bazkideekin. Eragiketa horien balioa, gehienez, etxebizitzaren ehuneko hogeita hamarrekoa izango da, 4/1993 Legean araututako gainerako kooperatiba-motetarako ezarritako araudiarekin bat. Ordezko etxebizitza emateko jarduketak gertatuta ere, muga hori ez da aldatuko.

Kontu-auditoretzak nahitaezko izaten jarraitzen du, eta, benetako parte-hartzea eta kudeaketa demokratikoa ziurtatzeko, legelari aholkulariaren figura ezarri da, eta haren irizpena beharko da funtsezko eragiketa juridiko-ekonomikoak gauzatzeko.

Bestalde, kontuan hartuta zer lotura duen gai honek eraikuntzari eta babes publikoko etxebizitzaren sustapenari buruzko araudiarekin, legea erregelamenduz garatu beharko da.

Edonola ere, babes publikoko etxebizitzak erregulatzen dituen araudia lehentasunez aplikatuko da kooperatibei buruzko araudiaren aldean. Kooperatibei buruzko araudiak, hain zuzen, etxebizitzaren sustapen pribatuari buruzko hainbat zehaztapen jasotzen ditu, etxebizitzaren izaerari eta prozedurazko alderdiei erreparatuta.

Azpimarratu behar da, halaber, zehaztasun handiz erregulatu direla erabilera lagatzeko

etxebizitza-kooperatibak, alternatiba bat emanez jabetzazko esleipenari. Izan ere, indargabetutako legeak aukeratzat baino ez zuen jasotzen etxeak esleitzeko modu hori.

Azkenik, bazkideen erantzukizuna dela-eta adierazi behar da izaera mankomunatua duela, ez bakarrik kapitalari egiten dioten ekarpenari dagokionez, baizik eta baita eraikuntzarako eta etxebizitzaren edo lokalaren esleipen-salneurria estaltzeko egindako entreegi dagokienez ere.

Garraio-kooperatiben kasuan, espresuki aurreikusi da nola eratu daitezkeen: zerbitzu-kooperatiba gisa –enpresen zerbitzu-kooperatibak erregulatu zirenean bezala– edo lan elkartuko kooperatiba gisa. Edozein kasutan, egitura eta araubide juridiko ezberdinen arabera erregulatu dira bi eraketa-mota horiek, ez daitezzen biak nahastu; izan ere, nahasketa horrek arazoak eta gatazkak sortzen zituen araudia aplikatzerakoan. Beraz, kooperatibok garraio integratuko kooperatiben identitatea bermatuko duten estatutu zehatz batzuen arabera erregulatuko dira, kontuan hartuta betiere kooperatibei oro har aitortzen zaien izaera integrala.

Junior kooperatibak kooperatiba-mota berri bat dira, espezifikoki identifikatu eta erregulatu behar direnak, kontuan hartuta hezkuntzari lotua dagoela sozietate-kontratu horren helburua: kooperatiba bat eratuz eta abian jarritz, ikasleek praktikan jartzea unibertsitatean lortutako ezagutzak. Horrek esan nahi du sozietate horiek epe jakin baterako sortzen direla eta, kasu batzuetan, kooperatiba arrunt bihurtu daitezkeela.

Azkenik, irakaskuntzako kooperatibek lehengo konfigurazio juridikoa izaten jarraituko dute: hiru modalitatekoak izango dira, eta erregulazio malgua izango dute, beraiek ezarritako arauarekin; izaera edo onura publikoko bazkideak izan ahalko dituzte, baina aldaketa batekin: irakasleak eta irakasleak ez diren langileak bazkidetzen dituztenean, lan elkartuko kooperatiben arau erregulatzailerak aplikatuko zaizkie, salbu eta 31. artikuluan erregulatutakoa. Salbuespen horren arrazoia da kooperatiba horiek ezaugarri bereziak dituztela: hezkuntza-proiektuak garatzen dituzte, alderdi soziala nabarmenduz –ia gehienak irabazi-asmorik gabeko onura publikoko entitatetzat jotzen dira–, eta, ondorioz, kooperatiba horietan garatzen diren lanek ere ezaugarri bereziak dituzte, gainerako kooperatiba-motetako lan-bazkideek edo langile bazkideek egiten duten lanarekin guztiz parekatu ezin direnak, ez behintzat kooperatiba-mota horien gaur egungo enpresa-bilakaeraren barruan.

Gainerako kooperatiba-moten erregulazioa ez da aldatu edo osatu, eta ez zaie ezer erantsi. Hona kooperatiba horiek: zerbitzu-kooperatibak (lehen bezala jarrai dezakete eragiketak egiten bazkide ez direnekin); profesional- eta enpresa-kooperatibak (koordinazio-entitate edo sozietate-zentro erkide bezala jardun dezakete); finantza-kooperatibak (estatuari dagokio horien oinarritzko erregulazioa); osasun-kooperatibak, oraindik ere ia praktikan jarri gabeak (etorkizuneko kooperatiba-aukera gisa); edo kooperatiba komunitarioak (gizarteratze-kooperatibak).

XIII. Kooperatiba integratzea eta taldekatzea

Kooperatiba-taldeek dituzten premiei erantzuteko moduan konfiguratu dira bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibak, lankidetzan jarduteko arau-esparru egoki bat behar dutelako, aukera emango diena benetako kooperatiba-egitura izateko eta beren burua integratzeko modua erregulatzeko (parte-hartzaileek kooperatibak izan behar dute gehienak, baina ez denak).

Modu berean, ahalik eta modurik irekienean erregulatu dira lankidetzak ekonomikorako beste modalitate batzuk, izaera instrumentalagoa dutenak, lankidetzan diharduten kooperatiben benetako premiei eta unean unekoei erantzun ahal izateko. Kooperatiba horiek, bestalde, aukera dute kontratuzko tresna eta loturetan nahiz tresna eta lotura pertsonifikatuetan parte hartzeko, edo dagoeneko eratuta dauden taldeetan integratzeko. Aukera hori onartuta dago juridikoki, eta erabiltzen da.

Horregatik, eta kontuan hartuta nola garatzen ari den kooperatibagintza une honetan, kendu egin dira kooperatiba-korporazioak erregulatzen zituzten arauak, bitariko administrazioa ezartzen zutenak. Izan ere, erregulazio hori orain arte baliagarria izan bada ere, une honetan ez da egokitzat jotzen, mugatzailea izan daitekeelako.

Aldiz, eta segurtasun juridiko handiagoa emateko, lege-mailara ekarri da kooperatiba-taldeen erregulazioaren garapena, tresna bereziki egokia delako kooperatibek elkarrekin lankidetzan jarduteko eta merkatuetan eraginkortasunez esku hartzeko.

Azkenik, kooperatiba mistoak daude (berez, legeak arautzen dituen kooperatiba guztiak izan daitezke mistoak). Kooperatiba horiek 1993ko Legeak ezarri zituen, berrikuntza garrantzitsu gisa, eta, gero, erregelamenduz garatu ziren enpresa- eta kooperatiba-proiektuak finantzatzen laguntzeko.

XIV. Kooperatibak eta Administrazioa

Kooperatiben gaian, bi alderdik justifikatzen dute Administrazioaren esku-hartzea: sustapen-jarduera eta kooperatiben legalitatea betetzen dela bermatzea.

Lehenengo eremuari dagokionez, osatu egin da publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak sektoriala. Lehengo legean, lan elkartuko, kontsumoko, nekazaritzako eta elikagaien kooperatiben edo etxebizitza-kooperatiben kasuan aurreikusten zen lankidetzak hori, baina, lege honetan, beste arlo batzuetara zabaltzeko da, hain zuzen ere hezkuntzaren, landa-garapenaren, dependentziaren eta integrazio sozialaren arloetara. Horretaz gain, kooperatiben mugimenduaren ordezkartza instituzionala azpimarratu nahi izan da, kontsulta eta erabaki-esparruetan eta dagokien erakunde-ordezkaritzako

organismoetan parte har dezaten eta solaskide izan daitezen bultzatuz, bat etorritz Gizarte Ekonomiari buruzko 5/2011 Legearen ildoekin.

Bigarren eremuari dagokionez, beharrezkotzat jotzen da nahiko zaharkituta geratu diren hainbat alderdi berritzea, hala eskatzen baitu euskal kooperatibek gaur egun daukaten garapenak. Alderdi garrantzitsuetako bat, Administrazioak duen "polizia" zereginagatik, arau-hausteak (dagokion ikuskaritza-funtzioarekin) eta zehapenak dira, Euskadiko kooperatiben legeria sustantiboa ez betetzeagatik.

Helburu hori dela eta, 1993an beharrezkotzat jo zen zehapen-prozedura espezifiko bat arautzea, nahiz eta halakorik ez den garatu gaur arte.

Esandakoa gauzatzeko, beharrezkoa da arau-hausteen eta zehapenen araubideari heltzea —4/1993 Legearen 139. eta 140. artikuluetan xedatuta daude arlo horiek; ez bakarrik haiek garatzeko, baizik eta alor horretako politika legegilea berrikusteko, 4/1993 Legea aspalditik baitago indarrean. Horren arrazoia da, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatibek enpresa- eta sozietate-garapen handia izan dutela denbora horretan, eta, bestetik, arau-hausteen eta haiei dagokien zehapenen egungo tipifikazioa Administrazioaren babesarekin eta ikuskapenarekin lotutako ikuspegi batean oinarritutako erregulaziotik datorrela, eta beharrezkoa dela hori berrikustea.

Izan ere, ulertzen da kooperatiben funtsezko alorretara mugatu behar dela Administrazioaren zeregina —partaidetza (hau da, demokrazia kooperatiboaren egikaritze efektiboa: bazkideek parte hartzea eta erabakiak hartzea) eta elkartasuna (funts banaezinak, aplikazioak)—, eta Administrazioak alde batera utzi behar dituela beste alderdi formal edo operatibo batzuk, merkatuan diharduten gainerako sozietateen antzekoak direnak eta zuzeneko loturarik ez dutenak kooperatiben berezko eta kooperatibak bereizten dituzten gaiekin. Hau da, enpresa-mota hori "gizarte-intereseko" bihurtzen duten alderdiak landu behar dira, horrek legitimatzen baitu esku-hartze publikoa.

XV.- Kooperatiben elkartegintza

Kooperatiba-elkartek gutxi erregulatu dira lege honetan, bultzatu nahi delako, batetik, elkartzeko askatasuna, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek sustatzea hala kooperatiben arteko harremanak nola ordezkaritza aitortzeko eta hori kooperatiba-elkarteen izenean aplikatzeko irizpideak.

Bakarrik aldatu da, euskal kooperatibismoaren elkartegintzaren garapenera egokitzeko, zein den gutxieneko kooperatiba-moten kopurua horien federazioan "Euskadiko" izendapena erabili ahal izateko. Era berean, kontabilitate- eta auditoretza-arloko betebeharrak zehazten dira, eta, bestalde, osatzen da zuzenbideko iturrien

araubidea, bat-egite, federazio, eta kooperatiben konfederazioei aplikatzekoa dena segurtasun juridikoaren ondorioetarako.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari dagokionez, lege honetan argitzen da bere urteko kontuak informazio finantzarioari aplikagarri zaion araudi-esparruaren arabera formulatu behar dituela.

Lehen bezala erregulatu dira gainerako alderdi organikoak: Eusko Jaurlaritzaren parte-hartzea, edo kooperatiba-elkarteen integrazio-entitateena, haien konfederazioaren eta Euskal Herriko unibertsitateen bidez, eta haien funtzioak. Arbitraje-funtzioari buruz, erantsi da ezen estatutuetan erregulatutako kooperatiba-barneko bidea agortu behar dela kooperatibaren eta bazkideen artean sortutako gatazkak konpontzeko, interesen autokonposizioaren adierazgarri, hargatik eragotzi gabe arbitraje-bidea.

XVI. Xedapen gehigarriak, iragankorrak, indargabetzailea eta azkenak

Araua ixten duten xedapenen artean, azpimarratzekoa da seigarren xedapen gehigarria, kooperatiba-sozietate guztien organoetako genero-berdintasunari buruz diharduena, zeinaren helburua baita organo horiek guztiak modu orekatuan eratzea.

Ilido berean, aipatzekoak dira xedapen hauek (bata gehigarria, eta bestea azkena):

- Zortzigarren xedapen gehigarria, gizarte-aurreikuspenari buruzko erabakiak hartzeari buruzkoa.
- Azken xedapenetako hirugarrena, onura publikoko deklarazioa lortzen duten fundazio eta elkarteak eta deklarazio hori bera lortua duten kooperatibak parekatu nahi dituen, ondasunen eta eskubideen gainean doan xedatzeko egintzei dagokienez, zeinak Ondarearen Legearen testu bateginean erregulatzen baitira. Era berean eta helburu berberekin, onura publikoko deklaraturako etxebizitza-kooperatiben aldekoa denean, bazkideentzako etxebizitzak eraikitza bideratutako lursailen kasuan.

I. TITULUA

KOOPERATIBA-SOZIETATEA

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Kontzeptua

1. Kooperatiba da enpresa bat garatzen duen sozietatea, zeinaren lehentasuneko helburua baita bere kideen jarduera ekonomiko eta sozialak sustatzea eta haien beharrak beren parte-hartze aktiboaren bitartez asetzea, kooperatibagintzaren oinarriak betez eta inguruko komunitateari erantzunez.

2. Kooperatibak Nazioarteko Kooperatiba Aliantzaren kooperatiba-irizpideetara egokitu beharko ditu bere egitura eta funtzionamendua; irizpide horiek lege honen esparruan aplikatuko dira.

Lege honen barruan, bestelako edozein antolakunde eta entitate publiko edo pribaturekiko autonomia eta askatasun osoz jardungo du.

3. Kooperatibek edozein jarduera ekonomiko edo sozial gauzatu ahal izango dute, salbu eta kooperatibagintzaren oinarritzko eskakizun eta printzipioekin bat ez etortzeagatik legean espresuki bestelakorik adierazten bada.

2. artikulua. Izena

1. Kooperatibek beren izenean nahitaez sartu beharko dituzte «Kooperatiba Sozietatea» hitzak edo «Koop. S.» laburdura.

2. Ezin izango da lehendik dagoen sozietate baten izen bera jarri. Sozietatearen izena baliozkoa izateko, beste baldintza batzuk ezarri ahal izango dira, erregelamenduz.

3. Beste inolako entitatek ezin izango du erabili «Kooperatiba» hitza edo «Koop.» laburdura, edozein dela ere kooperatibaren mota edo izaera, publikoa edo pribatua, salbu eta xedapenen batek espresuki hartara behartu edo hartarako baimena ematen dion kasuan.

3. artikulua. Sozietatearen egoitza

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldearen barruan egongo da kooperatibaren egoitza, bere bazkideekiko jarduera gehienak egiten dituen lekuan edo administrazio-kudeaketa eta enpresa-zuzendaritza zentralizatzen den lekuan.

4. artikulua. Sozietatearen gutxieneko kapitala

Sozietatearen gutxieneko kapitala ezin izango da izan hiru mila euro (3.000 €) baino gutxiago, eta eurotan neurtuko da. Kooperatiba eratzen den une beretik ordainduta egon beharko da gutxieneko legezko kapital horri dagokion kopuru osoa.

5. artikulua.- Hirugarren ez-bazkideekiko eragiketak

1.- Kooperatibek hirugarren ez-bazkideekiko kooperatiba-jarduerak egin ahal izango dituzte, betiere lege honetan eta sozietatearen estatutuetan ezarritakoaren arabera.

2. Kooperatibari baimena eman ahal izango zaio hirugarren ez-bazkideekiko jarduerak edo zerbitzuak hasteko edo lehendik dituenak handitzeko, baldin eta bazkide eta ez-bazkideekiko eragiketak legearen baldintza edo mugen barruan egin beharrak enpresaren jardura gutxitzea edo okertzea ekartzen badu eta, ondorioz, arriskuan jartzen badu bideragarritasun ekonomikoa, salbu eta egoera horren erantzukizuna kooperatibarena denean. Baimen horrek epe eta muga batzuk izango ditu, egoera bakoitzari dagozkionak. Kooperatibak baimen hori eskatu eta hilabetera ez badu jasotzen Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen sailaren erantzun espresurik, eskatutako baimena eman dela ulertuko da.

3. Edozein kasutan, kreditu- eta aseguru-kooperatibek dagozkien betekizun eta mugak bete beharko dituzte ez-bazkideekiko eragiketetan, hain zuzen ere beren finantza- eta aseguratzeko-jardueraren arloko araudian ezarritakoak.

6. artikulua. Sekzioak

1. Estatutuetan, jardura ekonomiko eta sozial espezifikokoak –xede sozialaren barrukoak– egiten dituzten sekzioen sorrera eta funtzionamendua erregulatu ahal izango dira; sekzio horiek kudeaketarako autonomia izango dute, hargatik eragotzi gabe kooperatibaren erantzukizunaren izaera orokorra eta bateratua. Kontabilitate independentea eramango dute beti, nahiz eta kontabilitate orokorra kooperatibari dagokion.

2. Sozietatearen estatutuetan, honako hauek zehaztuko dira:

- a) Zer arlo edo jardura sartu diren sekzioaren barruan.
- b) Zenbat denbora jardungo duen sekzioak modu berezitan, baldin eta denbora hori mugatua bada.
- c) Zer irizpide ezarri diren sekzio bakoitzari dagokion ondarea zehazteko.
- d) Hala badagokio, zer irizpide erabili diren kontabilitate bereizia ezartzeko.
- e) Zer irizpide erabiliko diren jardura kooperatibizatua neurtzeko, sekzio horretako soberakin positibo eta negatiboen banaketa bereizia egin behar denean.
- f) Zein den araubide organikoa eta zer harreman duen horrek kooperatibaren administratzaileekin.

3. Hala badagokio, estatutueta ehunekotan zehaztuko da zer soberakin bereizi eta banatu behar diren sekzioen arabera.

4. Sekzioak erregulatzerakoan, politika bereizi bat ezarri ahal izango da kapital-interesei, lan-aurrerakinei edo bazkideekin egindako eragiketen prezioei dagokienez.

5. Batzar orokorrak erabaki ahal izango du berehala etetea sekzio bateko bazkide-biltzarrak hartutako erabakiak, baina zehaztu beharko du zergatik diren lege edo estatutueta esaten denaren aurkakoak edo kooperatibaren interes orokorren aurkakoak, hargatik eragotzi gabe batzar orokorraren erabakiak ere lege honen 41. artikuluan aurreikusitakoaren arabera aurkaratzea.

Sekzio bat edo batzuk egoteak ez dakar administratzaileek dituzten ahalmenen araubidea aldatzea, baina sekzioaren barruan zuzendariak edo ahalmenak izendatu ahal izango dira sekzio horren jardun eta eragiketaz ardura daitezen. Kooperatibaren administratzaileek sekzioan hartu diren erabakiak berehala etetea erabaki dezakete, bazkide-biltzarrean hartzen diren erabakietarako ezarritako baldintza beretan.

Estatutueta edo barne-araubideko erregelamenduan erregulatuko da sekzio bateko bazkide-biltzarraren eta kooperatibako administratzaileen arteko harremana.

6. Kreditu-sekzioa edo bestelako sekzioak dituzten kooperatibei kontu-auditoretza izan dezatela eskatuko zaie, haiekin kontratuak egiten dituztenak babesteko.

II. KAPITULUA

KOOPERATIBA ERATZEA

7. artikulua. Batzar eratzailea

1. Sustatzaileek osatuko dute batzar eratzailea; batzar horrek kooperatibaren estatutuak onartuko ditu, eta batzarra eratzeke beharrezko diren gainerako erabakiak hartuko.

Sustatzaileek kasuan kasuko kooperatiba-motako bazkide izateko behar diren betekizunak bete beharko dituzte.

2. Batzarrera joandako sustatzaileen artetik aukeratuko dituzte batzar eratzaileko lehendakaria eta idazkaria.

3. Batzar eratzailearen aktan, gutxienez jaso beharko dira bilera-tokia eta -data, partaide-zerrenda, eztabaiden laburpena, bozketen emaitzak eta hartutako erabakien

testua.

4. Batzar eratzailean idazkari-lanetan ari den sustatzaileak egiaztatuko du akta, zeinak lehendakariaren oniritzia izan beharko baitu.

8. artikulua. Eratzealdian den kooperatiba

1. Eratzealdian den kooperatibako sustatzaileek edo haien artetik batzar eratzailean izendatutako kudeatzaileek egingo dituzte, sozietatearen izenean, hala kooperatiba sortzeko ezinbestekoak diren egintza eta hitzarmenak nola batzar eratzaileak espresuki eskatutakoak. Eratzealdian, sozietatearen izenean jarduteko gaikuntza izango dute horretarako aginte espezifikoa emanez izendatutako pertsonak ere.

2. Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu aurretik sozietatearen izenean egintzak gauzatu eta kontratuak egin dituztenek izango dute horien erantzukizun solidarioa, salbu eta egintza edo kontratu horien efikazia dagoenean inskripzioaren eta, hala badagokio, sozietateak egintzok bere gain hartzearen baldintzapean.

3. Eratzealdian den sozietatea izango da artikuluko honen 1. zenbakian aipatutako egintza eta kontratuen erantzule, bazkideen ekarpenek osatzen duten ondarearen bidez. Bazkideek ordaindu behar izan duten ekarpen osoaren mugaraino erantzungo dute, pertsonalki.

4. Kooperatiba inskribatuta, berak egin beharko die aurre aurreko apartatuan aipatzen diren egintza eta kontratuei. Orobat egin beharko die aurre inskribatu eta hurrengo hiru hilabeteetan onartzen dituen egintza eta kontratuei. Bi kasu horietan, bertan behera geratuko da sustatzaile, kudeatzaile edo agintarien erantzukizun solidarioa.

5. Sozietatearen ondare-balioa gehi sozietatea inskribatzeko beharrezkoak diren egintzena sozietatearen kapitalaren balioa baino txikiagoa bada, bazkideek estali beharko dute zenbateko bi horien arteko diferentzia.

6. Sozietateak, Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu artean, «eratzealdian» hitza gehitu beharko dio bere izenari.

9. artikulua. Estatutu-proiektuaren alde aurretiko kalifikazioa

1. Eratze-akta eman baino lehen, eta batzar eratzaileak aurkako erabakirik hartu ezear, kudeatzaileek estatutu-proiektuaren aurretiko kalifikazioa egin dezala eskatu ahal izango diote Euskadiko Kooperatiba Erregistroari, zeinak hogeita hamar eguneko epean ebatzi beharko baitu, eskaria egiten denetik aurrera kontaturik.

2. Zuzen daitekeen akatsik aurkituz gero, haien berri emango die Euskadiko

Kooperatiba Erregistroak kudeatzaileei, salbu eta batzar eratzaileak besterik erabakitzen duenean; kudeatzaileek hilabeteko epea izango dute akats horiek konpontzeko.

10. artikulua. Kooperatiba irregularra

1. Sozietatea Euskadiko Kooperatiba Erregistroan ez inskribatzeko borondatea egiaztatzen denean eta, betiere, eskritura egiletsi denetik urtebete igaro denean inskripzioa eskatu gabe, edozein bazkidek eska dezake eratzealdian den sozietatea desegin dadila eta, haren ondarea likidatu eta gero, bere ekarpenak itzul dakizkiola.

2. Egoera horretan, kooperatibak bere eragiketekin hasi edo aurrera jarraitzen badu, sozietate kolektiboetarako buruzko arauak ezarriko dira, edo, hala badagokio, sozietate zibiletarako buruzkoak. Behin kooperatiba inskribatuta, ez da aplikatuko 8. artikuluko 4. zenbakian ezarritakoa.

11. artikulua. Eraketa

1. Eskritura publiko bidez eratuko da kooperatiba. Agiri hori emateko, bi hilabeteko epea izango da, batzar eratzailea eratu denetik aurrera kontaturik, edo, hala badagokio, sozietatearen estatutu-proiektua kalifikatzen denetik aurrera kontaturik. Ondoren, Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatuko da, eta une horretatik aurrera nortasun juridikoa izango du.

2. Eratze-eskritura nahiz kooperatibari lotutako beste edozein egintza inskribatzeko, aldezturik ziurtatu beharko da likidatu direla inskribatu beharreko egintza gainera zergak edo eskatu dela haien likidazioa.

12. artikulua. Eratze-eskritura

1. Eratze-eskritura publikoa sustatzaile guztien izenean egiten ez bada, batzar eratzailean izendatutakoen izenean egin beharko da, batzar horretan hartutako erabakien arabera.

2. Eratze-eskritura publikoan, batzar eratzailearen akta jasotzeaz gainera, honako hauek jaso beharko dira, hala badagokio:

- a) Eskritura egiletsi dutenak eta sustatzaileak pertsona fisikoak izanez gero, haien izen-abizenak, adina, lanbidea eta egoera zibila; pertsona juridikoak izanez gero, berriz, sozietatearen izena. Kasu batean zein bestean, nazionalitatea, egoitza eta bazkide-mota ere adierazi beharko dira.
- b) Dena delako sozietatea eratze borondatea.
- c) Egilesten adierazpena, adierazten duena sustatzaile guztiek ordaindu dutela estatutuetan bazkide izateko finkatutako nahitaezko gutxienezko ekarpenaren ehuneko hogeita bost gutxienez, edo, hala badagokio, goragoko kopuru bat,

4. artikuluan finkatutako gutxieneko kapitala estaltzeko beharrezko dena. Bestalde, ekarpenaren zati bat ordaintzea atzeratu bada, zati hori nola eta noizko ordainduko den ere zehaztu beharko da.

- d) Sozietatearen estatutuak.
- e) Sozietatean beharrezko diren organoetako karguak betetzeko izendatu dituzten pertsona fisikoen izen-abizenak, lanbidea eta adina, eta pertsona juridikoen kasuan, sozietatearen izena. Kasu batean zein bestean, nazionalitatea eta egoitza ere adierazi beharko dira, baita, hala badagokio, kontu-auditoreei buruzko datuak ere.
- f) Adierazpen-agiri bat, aitortzen duena ez dagoela izen bereko beste kooperatibarik. Adierazpen hori agerkari publikoan jasotzeko, Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioko Kooperatiba Erregistroak eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroak emandako jatorrizko agiriak beharko dira, izen bereko beste kooperatibarik ez dela ziurtatzen dutenak.
- g) Zer balio eman zaien diruzkoak ez diren ekarpenei –halakorik balego–, haien ezaugarriei buruzko deskribapen argia eginez eta ondo zehaztuz zer ekarpen egin dituen sustatzaileetako bakoitzak edo zer ekarpen-betebehar ezarri dizkion bere buruari.
- h) Zenbatekoak izango diren, gutxi gorabehera, kooperatiba eratzekeo gastuak, barne direla dagoeneko eginda daudenak eta inskribatu artean egin asmo direnak.

3. Horretaz gain, eskritura publikoan jaso ahal izango dira sustatzaileek batzar eratzailean egindako itun eta baldintza guztiak, haiek ez badira legearen edo kooperatiba-sozietateak arautzen dituzten printzipioen aurkakoak.

13. artikulua. Estatutuen gutxieneko edukia

1. Kooperatibaren funtzionamendua erregulatuko duten estatutuetan honako hauek agertuko dira gutxienez:

- a) Kooperatibaren izena
- b) Sozietatearen egoitza
- c) Zein den jardueraren xede soziala
- d) Zenbat iraungo duen
- e) Zein lurralde-eremutan gauzatzen den kooperatibaren jarduera nagusia.
- f) Zein diren bazkideei onarpena eta baja emateko betekizunak.
- g) Zer eskubide eta betebehar dituzten bazkideek, zehaztuz zer konpromiso izango duten kooperatibako jardueretan edo zein izango den haien gutxieneko parte-hartzea.
- h) Zein diren sozietatearen diziplina-arauak, falta eta zehapenak, zehapen-

prozedura eta errekursoak.

- i) Zein den kooperatibaren gutxieneko sozietate-kapitala, eta zein den sozietateko bazkideen hasierako nahitaezko ekarpena.
- j) Nola itzuliko diren ekarpenak eta zein den ekarpen horiek eskualdatzeko araubidea.
- k) Zein diren soberakinak banatzeko irizpideak, zehaztuz zer portzentaje bideratu behar diren nahitaezko erreserba-funtsera eta kooperatiba-heziketa eta -sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenetara.
- l) Nola egingo den ohiko batzar orokorraren eta bereziaren publizitatea eta, lege honen 36. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan ezarritakoari jarraikiz, zer epetan egingo diren deialdiak (lehena eta bigarrena, edo hirugarrena kontsumoko, irakaskuntzako eta nekazaritzako eta elikagaien kooperatiben kasuan) eta zein izango den erabakia hartzeko araubidea.
- m) Zer egitura izango duen kooperatibaren administrazioaz arduratuko den organoak eta zein izango den organo horren jarduketa-araubidea.
- n) Nola dauden osatuta zaintza-batzordea eta, hala badagokio, errekurso-batzordea eta sozietate-kontseilua, eta zer funtzio dituzten (batzorde horiek nahitaezkoak izan daitezke edo, bestela, estatutuetan aurreikus daitezke).
- o) Zein diren kooperatiba desagiteko arrazoiak.
- p) Eta lege hau aplikatzeko nahitaezkoak diren gainerako alderdiak.

2. Sozietatearen estatutuak barne-erregelamenduz garatu ahal izango dira.

14. artikulua. Kooperatiba deuseztatzea

Behin sozietatea inskribatu eta gero, deuseztasun-akzioa Kapital Sozietateei buruzko Legean ezarritako arrazoi eta ondorioengatik bakarrik egikaritu ahal izango da, salbuespen batekin: eratze-egintzan bi bazkide sortzaileraren benetako borondatearen orde, lege honetan ezarritako gutxieneko bazkide-kopurua beharko da.

III. KAPITULUA

EUSKADIKO KOOPERATIBA ERREGISTROA

15. artikulua. Antolaketa

Euskadiko Kooperatiba Erregistroa erregistro juridikoa da, Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen sailari atxikia, eta organo-egitura bateratua du.

16. artikulua. Erregistroaren eraginkortasuna

1. Erregistroaren eraginkortasunaren printzipioak dira: publizitate material eta formala, legezkotasuna, legitimazioa, lehentasuna eta segidako traktua.
2. Inskripzioak eraketa-izaera izango du hala kooperatibaren eraketaren, bat-egitearen, zatitzearen, desegitearen eta berrindartzearen kasuan nola izaera horretako sozietate bihurtzen den kasuan, eta dokumentazioa aurkezten den eguna hartuko da inskripzio-datatzat. Gainerako kasuetan deklarazio-balioa izango du.
3. Euskadiko Kooperatiba Erregistroak bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzea bultzatuko du, herritarrekin eta erregistrorako irispidea nahi duten entitateekin dituen harremanak erraztu ahal izateko, batez ere egintzak erregistroan inskribatu eta gordailutzeko, baita kontsultak ebazteko eta ziurtagiriak emateko ere.

17. artikulua. Funtzioak

Euskadiko Kooperatiba Erregistroak funtzio hauek izango ditu:

- a) Indarrean dagoen legeriaren arabera erregistroan jaso beharreko egintzak kalifikatu, inskribatu eta ziurtatzea, hain zuzen ere honako hauenak: lehen eta bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibenak; kooperatiben batasun eta federazioenak eta federazio-elkarteenak edo batik bat lege honetan erregulatutako kooperatiba-motez osaturiko beste entitate juridiko batzuenak.
- b) Nahitaezko diren liburuak gaitu eta legeztatzea.
- c) Goiko a) apartatuan aipatzen diren kooperatiben urteko kontuen eta erabakien egiaztapenen gordailua izatea. Bere ardura bakarra izango da aztertzea ea aurkezturiko dokumentuak legez eskatzen direnak diren, batzar orokorrak behar bezala onartu dituen, eta izenpetu behar duten guztiek izenpetu dituzten.
- d) Kooperatiba-entitateen izenari buruzko ziurtagiriak ematea.
- e) Egiten zaizkien galderei erantzutea, beren eskumenekoak badira.
- f) Lege honen edo berau garatuko duten arauen bidez emandako beste edozein.

18. artikulua. Arau osagarriak

1. Euskadiko Kooperatiba Erregistrorako, administrazio-prozedurako arauak ezarriko dira epeei, espedientean pertsonatu beharrari eta ordezkapenari dagokienez, baita

lege honetan eta berau garatzen duten arauen bidez erregulatzen ez diren gainerako alderdi formalei dagokienez ere.

2. Demanda judiziala jarri nahi izanez gero zuzenbide substantibo kooperatiboa aplikatuz emandako egintzen aurka, merkataritza-arloko epaitegi eta auzitegietara jo beharko da, bat etorriz Botere Judizialaren Lege Organikoarekin eta ezar daitekeen prozedura-araudiarekin.

IV. KAPITULUA

BAZKIDEAK

19. artikulua. Zein izan daitekeen bazkide

1. Lehen mailako kooperatibetako bazkide izan daitezke: pertsona fisiko zein juridikoak, publiko nahiz pribatuak, betiere kontuan izanda lege honetako II. tituluaren ezarritako salbuespenak.

Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibei dagokienez 136. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

Kooperatiba eratzen den unean, lehen mailako kooperatibetan gutxienez hiru bazkide izan beharko dira, eratutako kooperatiba-motakoak. Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibek gutxienez bi kooperatiba-sozietate izan beharko dituzte beren bazkide sortzaileen artean.

2. Kooperatibetako bazkideak honako modalitate hauetakoren batean sartuko dira:

- a) Bazkide kooperatzaileak.
- b) Jardunean ez dauden bazkideak edo erabiltzaile ez direnak eta eszedentziadun bazkideak.
- c) Bazkide laguntzaileak.
- d) Kooperatiba mistoetan, sozietate-zatien titular izanik boto-eskubidea duten bazkideak.

3. Bazkide kooperatzaileak dira pertsona fisiko edo juridikoak, kooperatibaren jardueran langile edo erabiltzaile gisa benetan parte hartzen dutenak.

4. Jardunean ez dauden bazkideak edo erabiltzaile ez direnak eta eszedentziadun bazkideak dira legearen 31. artikuluan halakotzat jotzen direnak.

5. Bazkide laguntzaileak izan daitezke pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, kooperatibaren xede soziala bete-betean aurrera eramaterik ez badute ere helburua lortzen lagun dezaketenak. Sozietatearen estatutuetan erabakitakoaren arabera arautuko dira haien eskubide eta betebeharrak; estatutuetan aurreikusi gabeko guztirako, berriz, aldean artean hitzartutakoa beteko da. Bazkide horiek ezin izango dute, ez batzar orokorrean, ez artezkaritza-kontseiluan, botoen herena baino gehiago izan, salbu eta kooperatiba-sozietateak direnean.

Bazkide laguntzaileek eskubidea izango dute partaidetza izateko kooperatibaren emaitzetan, jarduera kooperatibizatuan duten partaidetzaren arabera, betiere estatutuetan espresuki horrela jasotzen bada edo batzar orokorrak hala erabaki, eta artezkaritza-kontseiluak espresuki formalizatzen badu.

Bazkide laguntzaileak kooperatiba mistoekiko bakarrik hartuko dira bazkide kooperatizaitzat.

6. Kooperatiba mistoetako gutxiengoko bazkideak dira sozietate-zatien titular izanik boto-eskubidea duten bazkideak.

7. Nortasun juridikoa duten ente publikoek ere bazkide izateko aukera izango dute, kooperatibaren xedea bada ente horien zerbitzuei lotutako zerbitzuak ematea edo jarduerak egitea, betiere prestazio horiek ez badute ekartzen edo eskatzen agintaritza publikoaren egikaritza.

20. artikulua. Onarpena

1. Estatutuetan finkatuko da zer betekizun bete behar diren bazkide izateko, bat etorritik lege honetan ezarritakoarekin.

2. Bazkide gisa onartzeko edo ez onartzeko arrazoia ezin izango da oinarritu xede sozialarekiko bereizkeria arbitrarioa edo lege kanpokoak dakarren arrazoiren batean.

3. Onartzeko eskaria idatziz egin beharko zaie administratzaileei, eta haiek hirurogei eguneko epea izango dute gehienez ere erantzuna emateko, eskaria jasotzen dutenetik aurrera kontaturik. Ez onartzeko erabakiak arrazoitua izan behar du. Epe hori igaro eta ebazpen espresurik ematen ez bada, onartu dela ulertuko da.

Onartzeko eskariari ezetza ematen bazaio, eskatzaileak errekurtsua jarri ahal izango dio errekurtsu-batzordeari edo, halakorik ez badago, batzar orokorrari, hogei eguneko epean, ezezko ebazpena jakinarazten zaionetik aurrera kontaturik.

Errekurtsu-batzordeak ebatziko du errekurtsu hori, hogeita hamar eguneko epean, edo, hala badagokio, lehenengo batzar orokorrean erabakiko da, isilpeko bozketa bidez. Bi kasu horietan nahitaezkoa izango da interesdunari alde aurretik entzutea.

5. Onartzeko eskariaren onarpena errekurritu ahal izango da, errekurtsio-batzordean edo, halakorik ez badago eta estatutuek finkatutako bazkide-kopuruak hala eskatzen badu, egiten den lehenengo batzar orokorrean. Estatutuetan zehaztu beharko da zer epe dagoen errekurtsioa jartzeko, baina ezin izango da hogeit egun baino gehiago luzatu, erabakia jakitera ematen denetik aurrera kontaturik.

Bazkide izatea etenda geratuko da onarpenaren aurkako errekurtsioak jartzeko epea igaro arte edo, errekurtsioa jarrita badago, errekurtsio-batzordeak edo, hala badagokio, batzar orokorrak ebatzi arte. Errekurtsio-batzordeak hogeita hamar eguneko epea izango du ebazpena emateko; batzar orokorrak, berriz, egiten duen lehenengo bileran ebatzi beharko du, isilpeko bozketa bidez. Bi kasu horietan nahitaezkoa izango da interesdunari alde aurretik entzutea.

21. artikulua. Lan-bazkideak

1. Lan elkartuko kooperatibak ez diren lehen mailako kooperatiben nahiz bigarren edo maila handiagokoen estatutuetan, aurreikusi ahal izango da zer baldintza bete behar dituzten langileek lan-bazkide izateko. Kooperatiban lan pertsonala egitea izango da lan-bazkide horien kooperatiba-jarduera.

2. Lan-bazkideek lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileentzat legeari ezarritako arauak bete beharko dituzte, artikulua honetan finkatutako salbuespenekin.

3. Estatutuetan finkatu beharko dira lan-bazkideek kooperatiban ekitatez eta neurritz parte hartu ahal izateko irizpideak.

4. Estatutuetan probaldiren bat ezartzen bada lan-bazkideentzat, hori ez da aplikatuko baldin eta bazkide berria lehendik ere kooperatiban lanean aritu izan bada besteren konturako langile modura eta probaldiak dirauen beste denbora eman badu lanean. Bazkide bati probaldi hori ezartzea badagokio eta bi aldeetako edozeinek bere kabuz azkentzen badu harreman juridikoa, ulertu beharko da ezen probaldiaren aurretiko lan-harreman juridikoa, epeagatik iraungi gabea, probaldia ezarri baino lehenago zituen baldintza beretan berrituko dela.

22. artikulua. Bazkideen betebeharrak

Bazkideek honako betebeharrak hauek dituzte:

- a) Batzar orokorraren eta deitzen dieten gainerako organoen bileretara joatea.
- b) Karguren baterako izendatu badituzte, onartzea, salbu eta ez onartzeko bidezko arrazoia dagoen kasuetan.

- c) Kooperatibaren xede diren jardueretan parte hartzea. Ondorio horietarako, estatutuetan ezarriko dira parte hartzeko eredu edo gutxieneko arauak. Arrazoi justifikaturik egonez gero, administratzaileek ahalbidea izango dute bazkideren bat betebeharrak hori betetzetik libre uzteko dagokion neurrian.

Honela gauzatu ahal izango da bazkideek kooperatibaren jardueretan izango duten konpromisoa edo gutxieneko partaidetza: kooperatibaren jardueretan zuzenean parte hartuz edo, estatutuetan jasota badator, beste entitate batzuetan parte hartuz, betiere kooperatibak entitate horiekiko lankidetzan jarduten badu edo haietan parte hartzen badu edo xede sozialari lotutako interes berezia badu. Jatorrizko kooperatibako gutxiengo batek izango du partaidetza aipaturiko beste entitate horietan, salbu eta arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako eta ekoizpeneko edo ezinbesteko arrazoen ondoriozko enpresa-premiaren kasuan.

- d) Ez egitea kooperatibaren xede sozialarekin lehian dagoen jarduerarik, eta ez aritzea lankidetzan horrelako jarduerak egiten dituztenekin; salbu eta administratzaileek espresuki horretarako baimena ematen duten kasuetan.
- e) Isilpean gordetzea kooperatibaren jarduerak eta datuak, baldin eta zabalduz gero sozietatearen interesak kaltetzen badira.
- f) Aurreikusitako baldintzetan egitea sozietatearen kapitalari egin behar dizkion ekarpenak.
- g) Galerak beren gain hartzea, batzar orokorrak erabakitako kopuruan.
- h) Legeen eta estatutuen ondorioz sortzen diren gainerako betebeharrak betetzea, eta kooperatibako organoek balio osoz hartutako erabakien ondorioz sortzen direnak betetzea.

23. artikulua. Bazkideen eskubideak

1. Bazkideek eskubide hauek izango dituzte:

- a) Kooperatibako organoetako karguetarako kideak hautatzea, eta kargu horietarako hautatuak izatea.
- b) Batzar orokorrean edo batzarkide diren gainerako organoetan hartzen diren erabaki guztietan proposamenak egitea, eta parte hartzea hitzez eta botoa emanez.
- c) Kooperatibaren jardura guztietan parte hartzea, diskriminaziorik gabe.

- d) Eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko beharrezkoa den informazio guztia jasotzea.
- e) Bidezkoa bada, sozietatearen kapitalera egindako ekarpenak eguneratzea eta itzultzea, baita, hala badagokio, sortutako interesak jasotzea ere.
- f) Kooperatiba-itzulkina jasotzea, hala badagokio.
- g) Lege eta estatutuen ondoriozko gainerakoak.

2. Beren eskubideez baliatzean, bazkideek kontuan izan behar dute zer dioten legeek eta estatutuek nahiz kooperatibako organoek balio osoz hartutako erabakiek.

24. artikulua. Informazio-eskubidea

1. Bazkideek informazioa jasotzeko eskubidea baliatu ahal izango dute, lege honetan, estatutuetan edo batzar orokorraren erabakietan aurreikusitako moduan, zeinetan egoki iritzitako bideak jarri ahal izango baitira bazkideen eskubide hori erraztu eta gauzatzeko.

2. Bazkide guztiek eskubide hauek izango dituzte:

- a) Kooperatibaren estatutuen kopia bat eskatu ahal izango dute, baita, hala badagokio, barne-araubidearen erregelamenduarena ere.
- b) Kooperatibako bazkideen erregistro-liburua eta batzar orokorraren akta-liburua aztertzeko eskubidea izango dute. Hala eskatzen badute, administratzaileek batzar orokorraren aktaren eta han hartutako erabakien kopia ziurtatuak eman beharko dizkiete, baita bazkide-erregistroko liburuan egindako inskripzioen ziurtagiria ere, betiere aurretik eskaera arrazoitua egiten badute.
- c) Administratzaileek hartutako erabakien kopia ziurtatua eskatu ahal izango dute, erabaki horiek bazkideari eragiten badiote.
- d) Kooperatibarekiko duen ekonomia-egoeraren berri jaso ahal izango dute. Informazio hori administratzaileek eman beharko diote, hilabeteko epean gehienez ere, eskatzen denetik aurrera kontaturik.

3. Edozein bazkidek argibide edo txostenak eskatu ahal izango dizkie administratzaileei, idatziz, kooperatibaren funtzionamenduaren edo emaitzen berri izateko. Informazio hori idatzizko eskaria aurkeztu eta hamabost egun igaro ondorengo batzar orokorraren lehenengo bileran eman beharko zaio interesdunari.

4. Batzar orokorraren gai-zerrendaren arabera ekitaldiko kontuez edo proposamen ekonomiko bati buruz eztabaidatu behar bada, kooperatibaren egoitzan bazkideen eskura jarriko dira: urteko kontuen berri ematen duten agiriak, emaitzak ezartzeko proposamenak eta, hala badagokio, artezkaritza-kontseiluak egindako kudeaketa-txostena eta kontuen kanpoko kontu-ikuskatzailearen txostena, zeinak deialdiak dirauen bitartean egongo baitira bazkideen esku, aztertu ahal izan ditzaten. Hala badagokio, zaintza-batzordearen txostena ere, 56. artikuluan aipatzen dena, jarriko da bazkideen esku.

Epe horretan zehar, bazkideek agiri ekonomikoei buruzko azalpenak eta argibideak eskatu ahal izango dituzte, idatziz eta batzar orokorra izan baino bost egun lehenago gutxienez, eta batzarrean emango zaie erantzuna.

5. Aurreko apartatuan ezarritako eskubidea eragotzi gabe, sozietateko boto guztien ehuneko hamar gutxienez ordezkatzen duten bazkideek edozein unetan eskatu ahal izango dute, idatziz, beharrezko iruditzen zaien informazio guztia. Administratzaileek idatziz eman beharko dute eskatu zaien informazioa, hogeita hamar eguneko gehieneko epean.

6. Edozein kasutan, administratzaileek kooperatibaren gorabehera sozioekonomiko nagusien berri eman beharko diete bazkideei edo haien ordezkari, hiru hilean behin gutxienez, horretarako egokien iruditzen zaien bidea erabiliz.

25. artikulua. Informazio-eskubidearen muga eta bermeak

1. Administratzaileek uko egin diezaiokete informazioa emateari, arrazoituta, baldin eta eskaera ausartegia edo oztopatzailea bada, edo informazio hori emateak arrisku larrian jar baditzake kooperatibaren interes legitimoak. Ez da halako salbuespenik izango baldin eta ukatzen den informazioa batzar orokorrean eman beharrekoa bada eta bertaratutako eta ordezkatutako boto guztien erdia baino gehiago azaltzen bada eskatutako informazio hori ematearen alde. Beste kasu guztietan ere ez da halako salbuespenik izango hala erabakitzen badu errekurtsio-batzordeak edo, halakorik ez badago, batzarrak, eskaria egiten duten bazkideek errekurtsioa jarri ondoren.

Dena den, eskatzaileek aurkaratu ahal izango dute administratzaileen ezetza, lege honen 51. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera, eta, gainera, artikulua honen 2. zenbakian ezarritako kasuetan Prozedura Zibilaren Legearen 256. artikuluan aurreikusitako prozedurara jo ahal izango dute.

2. Informazio-eskarian eta hari baiezkua nahiz ezezkoa ematerakoan

bidegabekeriarik izan ez dadin eta inor kaltetua gerta ez dadin, berme-sistema bat eratu ahal izango da estatutuetan, kontuan izango dituen zer berezitasun dituen kooperatibak eta zein den bazkidearen benetako egoera, hala kooperatiba-jarduerari dagokionez nola harekiko eskubide eta betebeharrei dagokienez.

26. artikulua. Borondatezko baja

1. Bazkideak nahi duenean utzi ahal izango du kooperatiba bere borondatez; horretarako, aurretik abisatu beharko ditu administratzaileak, idatziz eta estatutuetan zehaztutako gehienezko epearen barruan: pertsona fisikoentzat 3 hilabete; pertsona juridikoentzat, urtebete.

2. Bazkidea epe-mugarik gabe egon ahal izango da kooperatiban.

Halere, enpresarekiko harremana iraupen jakin batekoa izan liteke, baldin eta estatutuetan horretarako aukera ematen bada eta langilea onartzean hala zehaztu bazen. Baliokide izango dira halako loturen berezko eskubide eta betebeharrak eta gainerako bazkideek dituztenak, eta estatutuetan erregulatuko dira. Mota horretako bazkideak ez dira inola ere izango behin betiko bazkideen eta haiek batzar orokorrean dituzten botoen bostena baino gehiago, bazkideak edozein motatakoak izanda ere. Portzentaje hori gainditu ahal izango da lan elkartuko kooperatibetan edo lan-bazkideak dituzten bestelako kooperatibetan, baina, kasu horietan, urtean egindako lanordu-kopurua, iraupen mugatuko bazkideek eta besteren konturako langileek egindakoa, ez da iritsiko bazkide langileek edo izaera mugagabeko lan-bazkideek urtean egindako lanorduen ehuneko berrogeita hamarrera.

Iraupen mugatuko kontratuak dituzten bazkide langileek edo lan-bazkideek iraupen mugagabeko bazkide izateko aukera izango dute baldin eta hiru urtez jardun badira egoera horretan; bost urtez aritu badira, berriz, berez bihurtuko dira iraupen mugagabeko bazkide, baina, horretarako, estatutuetan halako bazkideentzat ezarri diren baldintza guztiak bete beharko dituzte.

3. Goiko 1. apartatuan erabakitakoa eragotzi gabe, estatutuetan ezarri ahal izango da bazkideak ekonomia-urtealdia bukatu arte geratu behar duela kooperatiban, edo, bestela, gutxieneko egonaldi bat egin behar duela, bost urtekoa, gehienez.

4. Arrazoitu gabeko bajatzat hartuko dira aurretik abisatzeko epea ez betetzea eta gutxieneko egonaldian gertatutako bajak, salbu eta kooperatibaren administratzaileek bestelakorik erabakitzen ez badute kasuaren inguruabarrak aztertu ostean, hargatik eragotzi gabe bazkideari kooperatiban nahitaez egin beharreko lan eta zerbitzu

guztiak betearaztea eta, hala badagokio, dagozkion kalte-ordainak eskatzea.

5. Aurreko apartatuan erabakitakoaz gain, borondatezko bajak arrazoitu gabetzat joko dira kasu hauetan:

- a) Bazkideak kooperatibarenarekin lehian diren jardueretan aritu nahi badu.
- b) Estatutuetan jasotako beste kasu guztietan.

6. Kooperatibak bere jarduera luzatzen duenean, bat egiten duenean edo zatitzen denean, kooperatiba-mota aldatzen denean edo haren xede soziala esanguratsuki aldatzen denean, edo kapitalari ekarpen berriak egitea exijitzen denean, baja arrazoitutzat joko da baldin eta bazkideak dena delako erabakiaren kontra bozkatzen badu, edo, erabaki hori hartu zituen batzar orokorrera joan ez arren, erabaki horrekiko desadostasuna adierazten badu. Transformazio-kasuetan, 89. artikuluan jasotakoa bete beharko da.

27. artikulua. Nahitaezko baja

1. Nahitaez baja hartu beharko dute lege honen edo kooperatibako estatutuen arabera bazkide izateko bete behar diren betekizunak galtzen dituzten bazkideek.

2. Nahitaezko baja administratzaileek erabakiko dute, bai beren kabuz, bai beste edozein bazkidek edo ukitutakoak berak hala eskatuz gero, betiere ukitutakoari entzun ondoren.

3. Administratzaileen erabakia beteko da behin errekurso-batzordearen edo, halakorik ezean, batzar orokorraren berrespena jakinarazi ondoren, edo horiei errekursoa aurkezteko estatutuetan aurreikusitako epea bukatu ondoren. Nolanahi ere, bazkideari berehala eten ahal izango zaizkio, kautelaz, eskubide eta betebeharrak, harik eta erabakia nahitaez bete beharrekoa izan arte, baldin eta horretarako aukera ematen bada estatutuetan, zeinetan zehaztuko baita etenduraren helmena. Erabakia betearazlea ez den bitartean, bazkideak batzar orokorrean botoa emateko eskubidea gordeko du.

4. Bazkide izateko betekizunak galtzen direnean, nahitaezko baja justifikatutzat joko da, salbu eta galdu badira kooperatibarekiko betebeharrak bete nahi ez izateagatik edo nahitaezko bajaz behar ez bezala baliatu nahi izateagatik.

Arrazoitu gabeko nahitaezko baja kasuetan, aurreko artikulua 3 eta 4 zenbakietan ezarritakoa aplikatuko da.

5. Bazkideren bat ez badago ados bere borondatezko bajaren nahiz nahitaezko bajaren kalifikazio edo ondorioei buruz administratzaileek erabakitakoarekin, errekurtsua jartzeko aukera izango du. Halako kasuetan, hurrengo artikulua 2. eta 4. zenbakietan ezarritakoa aplikatuko da.

28. artikulua. Kanporatzea

1. Administratzaileek bazkide bat kanporatzea erabaki dezakete soilik estatutuetan jasotako falta oso astunagatik, horretarako hasitako espedientearen bidez eta interesdunari aurretik entzun ondoren.

2. Bazkideak kanporatze-erabakiaren aurkako errekurtsua jarri ahal izango dio errekurtsu-batzordeari edo, halakorik ez badago, batzar orokorrari, hogeita hamar eguneko epean, jakinarazpena jasotzen denetik aurrera kontaturik.

Errekurtsu-batzordeari aurkeztutako errekurtsua hiru hilabeteko epean ebatzi beharko da, aurkezten denetik aurrera kontaturik, interesdunari aurretik entzun ondoren. Epe hori igaro eta ezer erabaki edo jakinarazten ez bada, errekurtsua onartu dela ulertuko da.

Batzar orokorrari jarritako errekurtsua lehenengo bilerako gai-zerrendan jaso beharko da, eta isilpeko bozketa bidez ebatziko da, interesdunari aurretik entzun ondoren.

3. Errekurtsu-batzordearen edo, halakorik ez badago, batzar orokorraren berrespenaren jakinarazpena jasotzen denetik edo haiei errekurtsua jartzeko epea amaitzen denetik aurrera izango da betearazlea kanporatze-erabakia.

4. Errekurtsu-batzordeak edo batzar orokorrak kanporatze-erabakia berretsi ondoren, erabakiaren aurka jo daiteke, 41. artikuluan aipatzen den auzibidetik, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen denetik aurrera kontaturik.

29. artikulua. Sozietatearen diziiplina-arauak

Kooperatiba bakoitzaren estatutuetan finkatuko dira bazkideen diziiplina-arauak. Bazkideak zehatzekotan, estatutuetan jasotako faltengatik izan beharko du, edo falta arinei dagokienez, barne-araubideko erregelamenduan jasotakoengatik. Bazkideek dena delako faltak direla-eta jaso ditzaketen zehapenak estatutuetan finkatuko dira, eta mota hauetakoak izan daitezke: kargu-hartzeak, ekonomikoak, sozietate-eskubideak etetekoak edo kanporatzekoak.

2. Falta arinak hilabeteko epean preskribatzen dira; astunak, bi hilabeteko epean, eta oso astunak, hiru hilabeteko epean.

Preskripzio-epea administratzaileek arau-haustearen berri duten egunean hasiko da, eta, edozein kasutan, arau-haustea egin zenetik hamabi hilabetera. Epea eteten da zehapen-prozedurari hasiera ematean, eta berriro korritzen hasten da lau hilabetez ebazpenik ematen eta jakinarazten ez bada.

3. Zehapen-prozedurak eta errekurtsioak estatutuetan finkatuko dira, baina betiere jarraian datozen arauok errespetatu beharko dira:

- a) Administratzaileek dute zehapen-eskumena, eta ezin izango dute delegatu.
- b) Nahitaezkoa izango da aldez aurretik interesdunari entzutea.
- c) Falta astunak eta oso astunak direla-eta jasotako zehapenen aurkako errekurtsioak errekurtsio-batzordeari edo, halakorik ez badago, batzar orokorrari jarri ahal izango zaizkio, hogeita hamar eguneko epean, zehapenaren jakinarazpena egiten denetik aurrera kontaturik.
- d) Zehapen-erabakia 52. artikuluan ezarritako izapidearen arabera aurkaratu ahal izango da. Hala badagokio, errekurtsio-batzordearen edo batzar orokorraren berrespina aurkaratu ahal izango da, 41. artikuluan ezarritako izapidearen arabera, hilabeteko epean, jakinarazpena egiten denetik aurrera kontaturik.

4. Estatutuetan, nahitaez zehaztu beharko da zein neurritaraino eteten diren bazkidearen eskubideak.

30. artikulua. Etetea edo nahitaezko baja, arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako eta ekoizpenekoak direla-eta edo ezinbesteko arrazoiengatik.

1. Arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako edo ekoizpenekoak direla-eta edo ezinbesteko arrazoiengatik, lan elkartuko kooperatibek lan egiteko betebeharra eta eskubidea aldi baterako eten ahal izango diote bazkide langileari edo lan-bazkideari; aldi horretan, bazkide horiek lanarekin batera doazen diru-eskubide zein betebeharrak galduko dituzte, eta bazkide izateagatik dagozkien gainerako eskubideak eta betebeharrak gordeko.

Horretarako, batzar orokorrak edo, hala badagokio, artezkaritza-kontseiluak, deklaratu beharko du adierazitako arrazoi horietakoren bat dela-eta etenaldi-egoeran geratuko direla kooperatibako bazkide langile guztiak edo haietako batzuk, ondo zehaztuz zenbat denboran geratuko diren lanik gabe; orobat adierazi beharko du, zehatz-mehatz eta behar bezala justifikatuta, zein diren egoera horretan geratzen

diren bazkide langileak edo lan-bazkideak.

Etenaldi-egoeran egoteko arrazoiak desagertzen direnean, bazkide langileak edo lan-bazkideak bere eskubide eta betebeharrak guztiak berreskuratuko ditu.

2. Kooperatibaren bideragarritasun ekonomikoa arriskuan jar dezaketen arrazoi larriak direla eta —ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak, ekoizpenekoak edo ezinbestekoak— behin betiko murriztu behar bada lanpostu-kopuru orokorra edo lanbide-kolektibo edo -talde jakin batzuen lanpostu-kopuru orokorra, batzar orokorrak edo, hala badagokio, artezkaritza-kontseiluak hala ezartzen bada estatutuetan, erabaki beharko du zenbat bazkideri langileri edo lan-bazkideri eman behar zaion baja kooperatiban, eta nor diren bazkide horiek. Kasu horietan, nahitaezkoztat eta arrazoitutzat joko da baja, eta kooperatiba uzten duten bazkideek eskubidea izango dute itzul diezazkieten sozietate-kapitalari egin dizkioten ekarpenak: borondatezkoak, berehala, eta nahitaezkoak, bi urteko epean, hilabeteka periodifikatuta. Baja hartu eta hurrengo bi urteetan, lehentasun-eskubidea dute kooperatibara itzultzeko, betetzen zuten lanpostuaren antzeko beste lanposturik sortzen bada betiere. Nolanahi ere, kooperatibak objektibatu daitezkeen baliabide ekonomikoak dituenean, nahitaezko ekarpenak aribideko ekitaldi ekonomikoan itzuli beharko ditu.

Kooperatiba uzten duten bazkideak 60. 1b) artikuluan aurreikusitako ekarpenen titularrak badira eta kooperatibak ez badu erabakitzen ekarpen horiek berehala itzultzea, kooperatiban segitzen duten bazkide guztiek berehala eskuratu beharko dituzte ekarpen horiek, batzar orokorrak erabakitzen duen baldintzetan.

31. artikulua. Jardunean ez dauden bazkideak edo bazkide ez-erabiltzaileak eta eszedentziadunak

1. Kooperatibaren estatutuetan, honako hau aurreikusi ahal izango da: justifikatutako arrazoi batengatik, eta behar besteko antzinatasuna izanik —estatutuetan ezarritako gutxienekoa— kooperatibak ematen dituen zerbitzuak erabiltzeari edo kooperatiba-jarduera egiteari uzten dioten bazkideek bazkide izaten jarraitzea jardunean ez dauden bazkide edo bazkide ez-erabiltzaile bihurtuz.

2. Bazkide horiek estatutuetan ezarritakoaren ondoriozko eskubide eta betebeharrak izango dituzte, baina haien botoak ezin izango dira sozietateko boto guztien bostena baino gehiago izan.

3. Jarduerarik ez egitea bazkidea erretiratuta egotearen ondorioa bada, lanean diharduten bazkideei dagokiena baino handiagoa izan ahalko da hark sozietatearen kapitalari egindako ekarpenari dagokion interesa, baina 63. artikuluan ezarritako

muga errespetatu beharko da.

4. Sozietatearen estatutuetan, jarduera aldi baterako utzi duen bazkidearen figura erregulatu ahal izango da, hau da, eszedentziadunarena. Bazkide horri dagozkion eskubideak eta betebeharrak estatutuetan ezarriko dira.

V. KAPITULUA

KOOPERATIBAREN ORGANOAK

32. artikulua. Organo-motak

1.- Kooperatibetan beharrezkoak diren organoak:

- a) Batzar orokorra
- b) Administrazio-organoa

2. Sozietatearen estatutuetan, erregulatu ahal izango dira zaintza-batzordearen, sozietate-kontseiluaren eta errekurso-batzordearen sorrera eta funtzionamendua, lege honetan aurreikusitakoaren arabera. Beste batzuk ere sortu ahal izango dira, baina halakoek ez dituzte inolaz ere izango aipaturiko organoen funtzio eta eskumen berak.

3. Kooperatibako organoek lege honetan ezarritakoaren arabera jardungo dute, eta sozietatearen estatutuen arabera osatuko dira, baita barne-erregelamenduz edo funtzionamendu egokia bermatzeko balio osoz hartutako beste erabaki batzuen arabera ere.

I. ATALA

BATZAR OROKORRA

33. artikulua. Batzar orokorra. Kontzeptua eta eskumenak

1. Kooperatibako batzar orokorra bazkideen bilkura da, bere eskumeneko arloez eztabaidatu eta erabakiak hartzeko eratua.

2. Bazkide guztiek bete behar dituzte batzar orokorraren erabakiak

3. Batzar orokorrak baino ez du izango honako erabaki hauek hartzeko eskumena:

- a) Isilpeko boto bidez honako hauek izendatzea eta ezeztatzea: administratzaileak, zaintza-batzordeko kideak, kitatzaileak eta, hala badagokio, errekurso-batzordeko eta sozietate-kontseiluko kideak. Era berean, erantzukizun-akzioa egikaritu ahal izango du horien guztien aurka.
- b) Kontu-auditoreak izendatzea eta ezeztatzea, bakarrik hartarako arrazoi zuzen bat dagoenean.
- c) Sozietatearen kudeaketa aztertzea, eta urteko kontuak eta soberakinen banaketa edo galera-egozpena onartzea.
- d) Nahitaezko beste ekarpen batzuk ezartzea, eta zehaztea zer interes sortuko dituzten kapitalari egindako ekarpenek eta bazkide bihurtzeko edo aldian-aldian egin beharreko ekarpenek.
- e) Jaulkipenak egitea: obligazioak, partaidetza-tituluak eta bereziak edo 68. artikuluan aurreikusitako beste finantzaketa-mota batzuk, hargatik eragotzi gabe 62.2 artikuluan ezarritakoa.
- f) Sozietatearen estatutuak aldatzea.
- g) Bigarren edo maila handiagoko kooperatibak, kooperatiba-taldeak eta antzeko beste entitate batzuk sortzea, bai eta horietara atxikitzea edo horietatik bereiztea ere.
- h) Sozietatearen bat-egitea, zatitzea, transformatzea eta desegitea.
- i) Estatutuen arabera kooperatibaren ekonomiaren, antolaketaren eta funtzioen egituretan oinarritzko aldaketak eragin ditzaketen beste erabaki guztiak hartzea.
- j) Kooperatibaren barne-erregelamendua onartu edo aldatzea.
- k) Legeak ezartzen dituen gainerako erabakiak hartzea.

4. Era berean, batzar orokorrak kooperatibarentzat interesgarriak diren gai guztiez eztabaidatu ahal izango du, baina behartze-indarreko erabakiak hartu, lege honen arabera sozietateko beste organo baten eskumen eskusiboa ez diren arloetan bakarrik hartuko ditu.

5. Ezin izango dira delegatu lege honen arabera batzar orokorraren erabakia eskatzen duten egintzei buruzko eskumenak, salbu eta artikuluko 3. puntuko g) apartatuan adierazten den kooperatiba-integrasioko prozesuetarako aurreikusitakoak.

34. artikulua. Batzar orokor motak

Batzar orokorrak ohikoak edo bereziak izango dira. Ohiko batzar orokorraren helburu nagusia da sozietatearen kudeaketa aztertzea, urteroko kontuak onartzea, beharrezkoa bada, eta, hala badagokio, soberakinak banatzeari edo galerak egozteari buruz ebaztea. Bestalde, gai-zerrendan batzarraren eskumenekoa den beste edozein gai gehitu ahal izango du. Gainerako batzar orokor guztiak bereziak izango dira.

35. artikulua. Deialdia

1. Batzar orokorrerako deia administratzaileek egingo dute.
2. Ohiko batzar orokorrerako deia sozietatearen ekitaldia amaitu eta hurrengo sei hilabeteak igaro baino lehen egin beharko da, nahitaez. Epe hori igaro, eta ez bada ez batzarrik ez deialdirik egiten, edozein bazkidek, notario bidez edo bestelako edozein bide sinesgarri erabiliz, administratzaileei errekeritu ahal izango die batzarrerako deia egin dezatela. Errekerimendua egin, eta hortik aurrerako hamabost eguneko epean administratzaileek deirik egiten ez badute, bazkideak batzarrerako deia egin dezala eskatu ahal izango dio sozietatearen egoitza dagoen lekuko merkataritzako epaitegiari, zeinak, deia egin, eta erabakiko baitu nor izango den batzarreko burua. Batzar orokor hori, epez kanpo deitutakoa izanda ere, ohikoa izango da.
3. Batzar orokor berezia edozein unetan bilduko da, administratzaileek beren aldetik eskatuta, zaintza-batzordeak eskatuta edo boto guztien ehuneko hoge gutxienez ordezkatzen duten bazkideek eskatuta. Horretarako, administratzaileei agiri sinesgarri baten bidez egin beharko zaie eskaria, eztabaidarako gaien eta proposamen gai-zerrenda jasotzen duena. Eskaria jaso eta hortik aurrerako hogeita hamar eguneko epean ez bada egiten batzar orokorra biltzeko deirik, epailearen bidez egin ahal izango da eskaria, aurreko zenbakian erabakitako moduan.
4. Deialdia egin eta hurrengo bost egunak igaro baino lehen, boto guztien ehuneko hamar baino gehiago ordezkatzen duten bazkideek gai-zerrendan gai bat edo gehiago sartzeko eskatu ahal izango diete administratzaileei, idatziz. Administratzaileek gai horiek kontuan hartu eta gai-zerrenda berria legeak eskatzen duen bezala argitaratu beharko dute, batzar orokorra izan baino lau egun lehenago gutxienez. Batzarraren bilera-eguna ezin izango da inola ere atzeratu.
5. Batzar orokorra biltzeko deialdia sozietatearen egoitzan eta kooperatibak bere jarduera garatzen duen leku guztietan jarriko da jendaurrean modu nabarmenean; era berean, estatutuetan hala jasotzen bada, banakako eta idatzizko beste edozein

komunikazio-prozeduraren bidez ere zabalduko da.

Kooperatibak bostehun bazkide baino gehiago baldin baditu edo estatutuek hala eskatzen badute, sozietatearen egoitzaren lurralde historikoan hedapen handia duen egunkari batean –idatzizkoa edo digitala– ere iragarriko da deialdia.

Kooperatibak web orri korporatibo bat duenean, sozietatearen web orrian iragarriko da batzar orokorraren deialdia, betiere hark hartu badu web orria sortzeko erabakia eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan irekitako orrian jasota badago erabaki hori.

Deialdia bazkide guztiengana helduko dela bermatzeko, lege honetan aurreikusitakoez bestelako mekanismo batzuk ezarri ahal izango dira sozietatearen estatutuetan, eta sozietateari exijitu ahal izango zaio alerta-sistema telematiko bat ezar dezala bazkideentzat batzarrerako deialdia sozietatearen web orrian egiten duenean.

6. Hau izango da deialdia jendaurrean jartzeko epea: bilera egin baino hamar egun lehenago gutxienez eta hirurogei egun lehenago gehienez.

7. Deialdian zehaztu beharko da, gutxienez, zein egunetan, zein ordutan eta non izango den bilera, bai lehenengo eta baita bigarren deialdian ere, eta bion artean ordu erdiko tarteak utzi beharko da gutxienez. Horretaz gain, garbi eta zehaztasunez eta behar bezala sailkatuta jaso beharko dira gai-zerrenda osatzen duten gaiak.

Datu horiez gainera, orobat adieraziko da bazkideek eskubidea dutela gai-zerrendari buruzko dokumentu guztiak sozietatearen egoitzan aztertzeko, baita, izatekotan, sozietatearen intranetean ere.

8. Artikulu honetako aurreko zenbakietan ezarritakoa eragotzi gabe, deialdi gabeko batzarra osatu ahal izango da, baldin eta bazkide guztiak bilduta edo ordezkaturik egonik aho batez erabakitzen badute batzar unibertsala eratzea. Horretarako, denek onartu eta izenpetu behar dute gai-zerrenda eta bertaratutakoena, nahiz eta gero ez duten denek batzarrean geratu beharrik izango.

36. artikulua. Funtzionamendua

1. Batzar orokorra, unibertsala ez bada behintzat, sozietatearen egoitza dagoen herrian egin beharko da. Bestela egitea justifikatzen duen arrazoiren bat dagoenean, estatutuetan finkatu ahal izango da, oro har, bilera beste leku batzuetan egin ahal izatea, edo administratzaileek erabili beharreko irizpideak bilera zein lekutan egingo

den erabakitzeko.

Estatutuetan, ezarri ahal izango da geografikoki urruti dauden bazkideek parte hartu dezaketela erabakiak baliozkotasunez hartzeko eta beren nahiak adierazteko unean. Horretarako, bideokonferentzia edo antzeko sistemaren bat erabili ahal izango da, irudi- eta soinu-komunikazioa bi noranzkoko eta aldiberekoa izan dadin eta ikusizko, entzumenezko eta ahozko elkarrekintza egon dadin bermatuko duena.

Bazkideren batek goian adierazitako moduan parte hartzen badu batzar orokorrean, batzarraren idazkariak, hartutako erabakiak baliozkoak izateko exijituriko baldintza guztiekin batera, espresuki jasoko du hori aktan, baita bazkide horren izen-abizenak eta parte hartzeko erabili den bidea ere.

2. Batzar orokorra baliozkoa izango da lehen deialdian, baldin eta bildutako edo ordezkaturako bazkideek botoen gehiengoa badute; eta bigarren deialdian, baldin eta bildutakoak edo ordezkaturakoak ehuneko hamarrera iristen badira edo ehun bazkidera iristen badira. Estatutuetan bestelakorik esaten ez bada, nahikoa izango da quorum hori bileraren hasieran lortzea. Ordea, kontsumo, irakaskuntza eta nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek –esklusiboki– hirugarren deialdi bat aurreikusi ahal izango dute; kasu horretan, berdin dio zenbat bazkide dauden bilduta edo ordezkatura, baina estatutu sozialetan ezarritako tartea errespetatuko da, gutxienez, bigarren eta hirugarren deialdien artean.

3. Batzar orokorrerako deialdia egin zen datarako, gutxienez, bazkide zirenek izango dute batzarrera joateko eskubidea.

4. Estatutuetan ez bada zehazten batzarretara pertsonalki joan beharra, bazkide batzuek beste batzuk ordezkatu ahal izango dituzte; horretarako, ordezkari gisa parte hartzen duten bazkideek idatzizko baimen bat izan beharko dute batzar bakoitzeko. Batzar unibertsalaren kasuan, aurreikusitako gai-zerrenda ere jaso beharko da ordezkari gisa parte hartzen dela egiaztatzen den idatzian.

Bazkideek ezin izango dute, bakoitzak bereaz gainera, bi baino gehiago ordezkatu. Ordezkaritza ezeztatu ahal izango da. Ordezkaritza beste norbaiti eman dion pertsona batzar orokorrera joateak ordezkariitza ezeztatze indarra izango du.

5. Estatutuetan hala jasotzen bada, kontsumoko, etxebizitzako, irakaskuntzako, nekazaritzako eta elikagaien kooperatibetan edo familiako beharriazaneiei aurre egitera zuzendutako kooperatibetan, ezkontideak edo familiako besteren batek edo legezko tutoreak ordezkatu ahal izango du bazkidea batzar orokorrean, baldin eta estatutuetan onartzen den ahaidetasun-mailaraino aritzeko gaitasun osoa baldin

badute. Orobat zehaztu beharko da estatutuetan ea ahalorde berezi bat behar den batzar bakoitzerako, edo ordezkaritza-idatziak haietan zehaztutako eperako balio izango duen.

6. Batzar orokorreko lehendakaria estatutuetan izendatutakoa izango da; hark ezin izango balu, administrazio-organoko lehendakaria, eta hark ere ezin izango balu, batzarrak hautatutako bazkidea izango litzateke. Batzarreko lehendakariaren egitekoak izango dira: eztabaidak bideratu, batzarra behar bezala burutu dadin zaindu eta legezko izapideak betearaztea.

7. Lehendakariak idazkari baten laguntza izango du, eta hura ere estatutuek edo batzarrera bildu diren bazkideek izendatuko dute.

8. Bozketa isilpekoa izango da, lege honetan edo estatutuetan aurreikusitako kasuetan eta bertaratutako eta ordezkatuak izan diren bazkideen ehuneko hamarrek hala izan dadila eskatzen duten kasu guztietan.

9. Gai-zerrendan jaso gabeko gaiei buruzko erabakiek ez dute baliorik izango, lege honetan dena delako erabakia hartzea espresuki baimentzen den kasuan izan ezik.

10. Administrazioaileek batzar orokorretara joan beharra izango dute. Estatutuek batzarrera joateko baimena edo agindua eman diezaiekete zuzendari, kudeatzaile eta teknikariei, bai eta sozietate-gaien martxa onaren gaineko interesa dutenei ere. Batzar orokorrak beste edozeini ere eman ahal izango dio batzarrean parte hartzeko baimena.

37. artikulua. Boto-eskubidea

1. Kooperatibetan, bazkideek boto bana izango dute

2. Dena den, estatutuetan honako hau aurreikusi ahal izango da lehen mailako kooperatibei dagokienez: pertsona juridikoak diren bazkideen boto-eskubidea – kooperatiben, kooperatiba horiek kontrolatutako sozietateen eta entitate publikoen bazkideena– kooperatibarekin duten jarduera-mailaren edo kooperatiba horien arteko harremanetan osagarriak diren prestazioen neurriaren arabera izatea.

Kasu horretan, estatutuetan argi zehaztu beharko da zein diren boto-eskubidearen proportzionaltasun-irizpideak.

Kooperatiba-sozietatea ez den bazkide batek izan dezakeen boto-kopurua ezin izango da kooperatibako boto guztien herena baino handiagoa izan.

3. Bigarren edo maila handiagoko kooperatibetan 138. artikuluan ezarritakoa bete beharko da.

Kreditu-kooperatibetan, entitate horiei dagokien araubide berezian ezarritakoa bete beharko da.

4. Bazkide laguntzaileen, jardunean ez dauden edo erabiltzaile ez diren bazkideen, eszedentzian dauden bazkideen eta iraupen mugatuko bazkideen boto-kopurua ezin izango da inoiz ere kooperatibako boto guztien erdia izatera iritsi.

5. Estatutuetan adierazi beharko da zein kasutan abstenituko den bazkidea interes-gatazkak sortzen direnean.

6.- Estatutuetan ezarri ahal izango dira bozketak telematikoki egiteko prozedura, baldintzak eta betekizunak, kontuan hartuta botoaren konfidentzialtasuna bermatuko behar dela nahitaez.

38. artikulua. Gehiengo-araubidea

1. Batzar orokorrean erabakiak hartzeko, baliozkotasunez emandako botoen erdia baino gehiago beharko da. Ondorio horietarako, ez dira zenbatuko ez boto zuriak, ez abstentzioak. Dena den, salbuespen izango dira lege honetan edo estatutuetan gehiengo indartuak eskatzen diren kasuak.

2. Kooperatibaren transformazioa, bat-egitea, zatitzea edo desegitea erabakitzeko, batzarrean dauden edo ordezkaturakoen baliozko botoen bi herenak beharko dira, betiere kooperatibako boto guztien ehuneko hirurogeita hamabost baino txikiagoa baldin bada bertaratu eta ordezkaturakoen boto-kopurua.

39. artikulua. Batzar orokorraren akta

1. Batzar orokorrean hartutako erabakiak aktan jasoko dira. Akta idazkariak idatziko du eta, ondoren, akta-liburuan jasoko, datu hauek adierazita:

a) Bileraren eguna eta lekua

- b) Deialdia noiz eta zein modutan egin den, batzar orokor unibertsalak direnetan izan ezik.
- c) Deialdiaren testu osoa
- d) Zenbat bazkide bertaratu diren, zehaztuz zein etorri diren beren izenean eta zein besterenean, baita batzarra lehenengo deialdian, bigarrenean edo hirugarrenean egin den ere.
- e) Eztabaidatutako gaien eta aktan jaso daitezela eskatutako iritzien laburpena
- f) Hartutako erabakien edukia
- g) Bozketen emaitzak, erabaki bakoitza zenbateko gehiengoarekin hartu den zehaztuta. Aurkako botoa eman duenak hala eskatzen badu, aurkakotza hori ere jasoko da.
- h) Aktaren onespena, bilera bukatu ondoren hala gertatzen bada.

2. Bertaratutakoen zerrenda aktaren hasieran edo beronekin batera jasoko da, lehendakariak oniritzia eman eta idazkariak izenpetutako eranskin batean. Bertaratutakoen zerrenda fitxategi bidez osatu edo euskarri informatikoan jaso ahal izango da, betiere ezaugarri horietako sozietateentzat Merkataritza Erregistroko Araudian finkatutako baldintzak betez.

3. Akta batzarrak berak onartu ahal izango du, batzarra egin ondoren, edo, bestela, lehendakariak eta batzarrak berak izendatutako bi kidek onartuko dute, idazkariarekin batera sinatuta, hamabost eguneko epean.

4. Batzar orokorrera joandako edozeinek eskubidea izango du aktaren edo hartutako erabakien testu osoaren ziurtapenak eskatzeko. Ziurtagiria egiten den egunean idazkari denak emango ditu ziurtapenok, lehendakariaren edo, hala badagokio, administratzaile bakarraren oniritziarekin.

5. Erabakietan esaten direnek onartzen diren unetik aurrera izango dituzte ondorioak.

6. Erregistroan inskribatu daitezkeen erabakiak Euskadiko Kooperatiba Erregistroan aurkeztu beharko dira, hogeita hamar eguneko epean, akta onartu eta hurrengo egunetik aurrera kontaturik.

40. artikulua. Delegatuen batzarra

1. Batzar orokorra prestatze-batzordean aukeratutako bazkide-delegatuen batzar gisa eratzeke aukera jaso ahal izango da estatutuetan, baldin eta kreditu-kooperatibak

bostehun bazkide baino gehiago baldin baditu edo batzar orokorrean bazkide guztiak egotea modu larrian eta etengabe oztopatzen duten gorabeherak gertatzen badira.

2. Estatutuetan berariaz erregulatuta egon beharko dira ondorengo alderdi hauek: bazkideak prestatze-biltzar batera edo bestera joateko irizpideak, deialdien eta osaeraren araubidea, delegatuak aukeratzeko arauak (beti bazkideak izan beharko dute), batzar nagusian bakoitzak izango duen boto-kopurua eta emango zaien agintearen izaera eta iraupena.

3. Prestatze-biltzar bakoitzean zenbat delegatu hautatuko den eta horiek batzar orokorrean zenbat boto izango duten erregulatzeko, estatutuetan proportzionaltasun-irizpideak hartu beharko dira kontuan nahitaez.

4. Artikulu honetan eta estatutuetan prestatze-biltzarrei buruz aurreikusi gabeko alderdiei dagokienez, batzar nagusirako esaten dena bete beharko da, aplikatzekoa den neurrian.

41. artikulua. Batzar orokorrak hartutako erabakiak aurkaratzea

1. Batzar orokorraren erabakiak aurkaratu ahal izango dira, baldin eta legearen nahiz estatutuen aurkakoak badira edo kooperatibaren kaltetan hartu badira bazkide baten edo gehiagoren zein hirugarren ez-bazkideen mesedetan.

2. Erabakia ezin izango da aurkaratu, baldin eta, Kapital Sozietateei buruzko Legean ezarritako baldintzei jarraikiz, hura ondoriorik gabe utzi bada edo beste erabaki batek baliozkotasunez ordeztu badu, ezta aipatu lege horretan aurreikusitako beste kasuetan ere. Aurkaratzeko arrazoia ezaba daitekeenean, merkataritza-arloko epaitegiak zentzuzko epe bat emango du hori konpontzeko.

3. Aurkaratze-akzioa honako hauek egikaritu ahal izango dute: bazkideek, administratzaileek, zaintza-batzordeko kideek edo interes legitimoa duen bazkide ez den edozein hirugarrenek; aurkaratze-akzioa egikaritzeko aukera urtebetean iraungiko da, salbu eta erabaki horien karia edo edukia ordena publikoaren aurkakoak direnean.

4. Artikulu honen iraungipen-epea erabakia hartu zenetik aurrera hasiko da kontatzen; erabaki hori Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu behar bada, berriz, inskribatzen den unetik aurrera.

5. Oro har, Sozietate Kapitalaren Legearen arabera ezarriko da aurkaratze-prozedura, salbuespen batekin: demanda-idatzian, zaintza-batzordeak eskatu

beharko du aurkaratutako erabakia eten dadila; edo, bestela, gutxienez botoen ehuneko hogei ordezkatzan duten bazkideek egingo dute eskaria.

6. Aurkaratze-akzioaren baiespen-epaiak bazkide guztiengan izango du eragina, baina ez die eragingo aurkaratutako erabakiaren ondorioz hirugarren ez-bazkide onustedunek lortutako eskubideei. Aurkaratutako erabakia Euskadiko Kooperatiba Erregistroan jasota badago, epaiak inskripzio horren ezereztea aginduko du.

2. ATALA

KOOPERATIBA ADMINISTRATZEA ETA ORDEZKATZEA

42. artikulua. Administrazioaileak. Izaera eta eskumenak

1. Administrazioaileei bakarrik dagokie kooperatiba kudeatzea eta ordezkatzea; gainera, legeek edo estatutuek sozietateko beste organo baten esku espresuki uzten ez dituzten beste eskumen guztiak ere haienak izango dira.

2. Estatutuetan zehaztu beharko da zein modutan egikarituko den administrazioaileei esleitutako ordezkaritza. Ordezkapen hori xede sozialaren barruan dauden egintza guztietarako izango da, bai epaiketetan eta baita epaiketaz kanpokoetarako ere. Administrazioileen ordezkaritza-ahalmenei estatutuetan jarritako edozein mugak ez die hirugarren ez-bazkideei. Sozietatea betebeharpean jarriko da onustez eta erru larririk gabe jardun duten hirugarren ez-bazkideei begira, nahiz eta estatutuen arabera egintza ez egon xede sozialaren barruan.

43. artikulua. Administrazioaileak hautatzea

1. Administrazioaileek kide anitzeko organoa osatuko dute, eta organo horri artezkaritza-kontseilua deituko zaio. Dena den, kooperatiban hamar bazkide baino gehiago ez baldin badira, administrazioaile bakarria izatea aurreikusi ahal izango da estatutuetan.

Sozietatearen estatutuetan zehaztuko da zenbat izango diren administrazioaileak, edo zenbat izango diren gehienez, eta zenbat gutxienez. Azken kasu horretan, batzar orokorrak erabakiko du administrazioaile-kopuru zehatza.

2. Administrazioaile bakarrak bazkide kooperatzailea izan beharko du. Artezkaritza-kontseiluan, berriz, kideen herena ez-bazkideen artean hautatu ahal izango da, salbu

eta estatutuetan espresuki galarazten bada.

3. Administratzaileak batzar orokorrean hautatuko dira, isilpeko bozketan emandako baliozko botoen kopururik handiena lortuta.

Baldin eta 47.6) artikuluari jarraikiz artezkaritza-kontseiluan postuak erreserbatzen badira, ukitutako bazkide-talde bakoitzak eskubidea izango du kontseilari-kopurua batzarrean zuzenean aukeratzeko, baina dagokion kopurua bakarrik, ez batzarreko kide guztiak; salbu eta estatutuetan ez bada bestelakorik ezartzen.

4. Pertsona juridiko bat izendatuz gero administratzaile-kargu horren funtzioak egikaritzeko lanak egiteko, hark pertsona fisiko bat izendatu beharko du.

5. Onartzen den une beretik izango ditu ondorioak administratzaile-izendapenak, eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu beharko da, 30 eguneko epean, kargua onartzen denetik aurrera kontaturik.

6. Administrazio-organoak ahalorde orokorrak eman ahal izango dizkie zuzendari-gerente bati edo batzuei, eta errebokatu ere bai; haien ahalmenak ahalorde-eskrituran ageri direnak izango dira, kooperatibaren ohiko trafikora mugatuak. Euskadiko Kooperatiben Erregistroan jaso beharko dira bai izendapena, bai ahalmenak ematea eta errebokatzea. Horretaz gain, administrazio-organoak ahalorde bereziak eman ahal izango dizkio edozeini.

7. Kontseilari diharduten epearen barruan postu gutxi batzuk hutsik geratzen badira eta ordezkorik ez badago, artezkaritza-kontseiluak bazkide bat izendatu ahal izango du lehenengo batzar orokorra biltzen den arte.

44. artikulua. Ezgaitasunak eta debekuak

1. Honako hauek ezin izango dira izan administratzaile:

- a) Birgaitu gabeko konkurtsatutakoak, emantzipatu gabeko adingabeak, epaiketa bidez ezgaituak, kargu publikoetan jarduteko desgaitzen duten zigorrek betetzen ari direnak, lege edo gizarteko arauak larriki urratzeagatik zigorren bat jaso dutenak eta beren kargua dela-eta irabazi-asmoko jarduerak egiterik ez dutenak.
- b) Funtzionarioak eta administrazio publikoaren zerbitzuko langileak, dena delako kooperatibaren berezko jarduerekin zerikusia duten funtzioak baldin badituzte.
- c) Beren edo besteren kontura arituz kooperatibarekin lehian dauden jarduerak

egiten dituztenak, edo modu batera edo bestera kooperatibaren interesen aurkako interesak dituztenak.

d) Zaintza-batzordeko eta errekurtsio-batzordeko kideak eta zuzendari-gerenteak.

e) Estatutuetan aurreikusitako kasuetako batean sartuta daudenak.

2. Administrazioaren bati eragiten badio artikulua honetan aipatzen den ezgaitasun edo debekuren batek, berehala utzi beharko du bere kargua. Dena den, bere karguan jarduteari aldi baterako uztera behartu ahal izango du zaintza-batzordeak edo, halakorik ez balego, artezkaritza-kontseiluak, hurrengo batzar orokorra egin arte. Batzar orokorrak administrazioa kargutik kenduko du, baldin eta kargua kautelaz eten bazaio edo bazkide batek eteteko eskatu badu; salbu eta c) apartatuan aurreikusitako kasuan, zeinean batzar orokorrak libreki erabakiko baitu kargutik kendu ala ez.

45. artikulua. Ordainsariak

1.- Administrazioaren kargua doakoa izango da. Baina ordaindu egingo zaie hala jasotzen bada espresuki estatutuetan, zeinetan ordainsariak finkatzeko irizpideak ere ezarriko baitira. Batzar orokorrak finkatuko du zenbat ordaindu behar zaien urtean.

Nolanahi ere, ordainsariak proportzio bat gorde beharko du kooperatibak duen garrantziarekin, haren unean uneko egoera ekonomikoarekin eta, batez ere, administrazioarekin beren karguan dihardutenean emandako benetako prestazioekin.

Hori guztia urteko memorian jasoko da.

2. Edozein kasutan, karguaren ondoriozko gastuak ordaindu beharko zaizkie.

46. artikulua. Iraupena eta kargutik kentzea

1. Estatutuetan finkatuko den eperako hautatuko dira administrazioarekin, bi eta bost urte arteko eperako betiere. Berriz ere hautatu ahal izango dira, denbora tarte bererako, salbu eta estatutuetan kontrakoa ezartzen denean. Izendapenari zegokion epea igaro ondoren ere, karguan jarraituko dute administrazioarekin, behin-behingo, hurrengo batzar orokorra izan arte.

2. Batzar orokorrean, administrazioarekin kargutik kentzea erabaki ahal izango da, gai-zerrendan halakorik agertzen ez bada ere. Gai hori gai-zerrendan ageri ez denean, kargutik kentzearen alde batzarrean dauden botoen eta ordezkarietako bi herenek

bozkatu beharko dute.

3. Administratzailearen bat kargutik kentzen baldin bada, administratzaile berriak hautatu beharko dira, batzar orokorraren saio berean, gai-zerrendan halakorik agertzen ez bada ere.

4. Administratzaile bat kargutik kentzeko arrazoia edozein dela ere, hirugarren ez-bazkideen aurrean Euskadiko Kooperatiba Erregistroan izena ematen denetik aurrera izango ditu ondorioak

47. artikulua. Artezkaritza-kontseilua osatzea eta berritzea

1. Estatutuetan finkatuko da nola osatu behar den artezkaritza-kontseilua, baina ezin izango dira hiru kide baino gutxiago izan. Behin betiko hutsuneak direla-eta titularren ordezkioak jartzea ezartzen bada, erabaki beharko da zenbat izango diren ordezko horiek eta zein izango den hautaketa- eta ordezen-sistema.

2. Artezkaritza-kontseiluak bere kideen artean aukeratuko ditu lehendakari- eta idazkari-karguak, salbu eta estatutuetan aurreikusten denean hori batzar orokorrari dagokiola. Estatutuetan aurreikusi ahal izango da, halaber, idazkariak ez duela izan behar ez kooperatibako bazkide ez kontseilari.

3. Kontseilari batek bere karguari uko eginez gero, arrazoitu egin beharko du bere erabakia, idatziz, eta artezkaritza-kontseiluari jakinarazi; kontseiluak erabakiko du ea justifikatuta dagoen uko egiteko adierazitako arrazoia, eta idatziz jakinaraziko dio interesdunari.

Uko egitearen kalifikazioa batzar orokorrean edo errekurso-batzordean errekurritu ahal izango da, nahitaezko bajarentzat ezarritako baldintza eta epe beretan.

Kontseilari uko-egileak bere jakinarazpenean finkaturiko datan izango ditu ondorioak uko-egiteak; data hori ezin izango da izan jakinarazpena baino lehenagokoa.

Kooperatibaren ustetan uko-egitea ez badago arrazoituta, kalte-galerak ordaintzea eskatu ahal izango zaio, hala badagokio, dena delako administratzaileari.

4. Artezkaritza-kontseilua partzialki berriztatuko da, salbu eta estatutuetan ezartzen denean kide guztiak berritu behar direla.

5. Kontseilariak behin eta berriz hautatu ahal izango dira, salbu eta estatutuetan kontrakorik ezartzen bada.

6. Estatutuetan, artezkaritza-kontseilua osatzean honako hauek kontuan hartzea aurreikus daiteke besteak beste: zer ezarpen geografiko duen kooperatibak, zer jarduera garatzen dituen, zer bazkide-mota dituen eta zein diren mota bakoitzeko portzentajeak, baita alderdi horien arabera ezarri beharreko kontseilari-postuen erreserba ere.

48. artikulua. Artezkaritza-kontseiluaren funtzionamendua

1. Estatutuetan erregulatuko da artezkaritza-kontseiluaren barne-funtzionamendua. Estatutuetan arautu gabeko gaietan, artezkaritza-kontseiluak berak erregulatu ahal izango du bere funtzionamendua.

2. Artezkaritza-kontseilua biltzeko deia lehendakariak egingo du, eta, bilera baliozkoa izateko, kideetako erdiak baino gehiagok egon beharko du bertan. Kontseilariak pertsonalki parte hartuko dute kontseiluaren bileretan, eta betebeharrak hori ezin izango da delegatu.

Estatutuetan, ezarri ahal izango da geografikoki urruti dauden artezkaritza-kontseiluko kideek parte har dezaketela erabakiak baliozkotasunez hartzeko eta beren nahiak adierazteko unean. Horretarako, bideokonferentzia edo antzeko sistemaren bat erabili ahal izango da, irudi- eta soinu-komunikazioa bi noranzkoko eta aldiberekoa izan dadin eta ikusizko, entzumenezko eta ahosko elkarrekintza bermatuko duena.

Artezkaritza-kontseiluko kideren batek goian adierazitako moduan parte hartzen badu batzar orokorrean, batzarraren idazkariak espresuki jasoko du hori aktan, hartutako erabakiak baliozkoak izateko exijituriko baldintza guztiekin batera; era berean, aktan jasoko du zein diren bazkide horren izen-abizenak eta zer bide erabili duen bileran parte hartzeko.

3. Erabakiak hartzeko, bertaratutakoen erdiak baino gehiagoren botoak beharko dira, salbu eta besterik xedatzen bada legean edo estatutuetan. Kontseilariak boto bana izango dute. Ondorio horietarako, ez dira zenbatuko ez boto zuriak, ez abstentzioak.

Artezkaritza-kontseiluak aurreko paragrafoaren arabera emandako bi herenen aldeko botoa beharko du, gutxienez, honako erabaki hauek hartzeko:

- a) Jarduera-zentro nagusi bat edo haren zati garrantzitsu bat itxi edo lekuz aldatzea
- b) Kooperatibaren jarduera murriztu, zabaldu edo nabarmen aldatzea
- c) Kooperatibaren antolamenduan aldaketa garrantzitsuak egitea
- d) Kooperatiba diren edo ez diren beste entitate batzuekin lankidetzatza-harremanak egin edo etetea, betiere lankidetzatza-harreman horiek iraunkorrak eta baliagarriak gertatzen badira kooperatibarentzat.
- e) Legeak hala ezartzen duenean

Berdinketen kasuan, lehendakariaren botoak erabakiko du.

4. Kontseiluaren erabakiak akta-liburu batean jasoko dira. Bileraren aktan, izandako eztabaiden laburpena eta erabakien testua jasoko dira, bozketen emaitzekin batera, eta lehendakariak eta idazkariak izenpetuko dute.

5. Kooperatiba-sozietatearen estatutuetan besterik ezartzen ez bada, artezkaritza-kontseiluak batzorde betearazle bat edo kontseilari delegatu bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu bere kideen artetik.

Ezin izango da inola ere delegatu batzar orokorrari kontuak emateko eta balantzea aurkezteko lana; era berean, ezin izango dira delegatu batzar orokorrak artezkaritza-kontseiluari laga dizkion ahalmenak, salbu batzar orokorrak espresuki ematen duenean hori egiteko baimena.

Batzorde betearazleari edo kontseilari delegatuari artezkaritza-kontseiluaren ahalmenak modu iraunkorrean delegatzeko, eta kargu horiek bete behar dituzten kontseilariak izendatzeko, kontseiluko kideen bi herenek horren aldeko botoa eman behar dute, bat etorritik 3. zenbakian aurreikusitakoarekin; delegatutako ahalmen eta izendapen horiek ez dute ondorioz izango Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu arte.

49. artikulua. Administrazioaren betebeharrak

1. Administrazioaileek beren karguari dagozkion funtzioak eta legeetan eta estatutuetan ezarritako betebeharrak enpresaburu onaren arretaz bete beharko dituzte, kontuan harturik zer izaera duen haien karguak eta zer funtzio esleitu zaizkien, eta behar besteko neurri hartu beharko dituzte kooperatiba behar bezala kudeatzeko eta ordezkatzeko.

2. Era berean, ordezkari leial bati dagokion fideltasunez jardungo dute beren

karguan, onustez eta kooperatibaren onurarako, eta esleitu zaizkien ahalmenak ezarritako helburuetarako baliatuko dituzte, eta ez beste ezertarako.

3. Administratzaileek beren funtzioak amaitu eta gero ere sekretupean gorde behar dituzte isilpeko datuak, legeak bestelakoa ahalbidetzen edo agintzen duenean salbu.

4. Administratzaileek ez dute inongo jarduerarik garatuko, ez bere kabuz ez besteren konturako, baldin eta horrek lehia egiten badio kooperatibari, edo, nola edo hala, gatazka sortzen badu haren interesekiko.

Nolanahi ere, kooperatibak debeku horietatik salbuetsi ahal izango du administratzailea, betiere kasu berezietan eta batzar orokorrak horretarako baimena ematen badu espresuki.

Administratzailea horrelako gatazka-egoera batean inplikatuta badago, horren berri eman beharko dio artezkaritza-kontseiluari edo batzar orokorrari, eta, gainera, administratzaile bakarra bada, ezin izango du parte hartu bozketan.

Aipaturiko baimenik gabe gauzaturiko egintzak, kontratuak eta eragiketak deuseztatu ahal izango dira, salbu eta hirugarren ez-bazkide onustedunek eskuraturiko eskubideen kasuan.

5. Enpresa-diskrezionalitateari atxikitako erabaki estrategikoen eta negozio-erabakien arloan, enpresaburu onaren arretaren estandarra betetzen dela ulertuko da administratzailea onustez jardun denean, erabakiaren xede den gaian interes pertsonalik izan gabe, behar adina informaziorekin eta erabakitzeko prozedura egokiaren arabera jardunez.

Ez dira enpresa-diskrezionalitatearen barruan jasoko kooperatibaren interesekiko gatazka eragiten duten edo eragin dezaketen erabakiak.

50. artikulua. Administratzaileen erantzukizuna

1. Administratzaileena izango da legearen edo estatutuen kontrako egintzen ondorioz sorturiko kalteen erantzukizuna, baita karguari dagozkion funtzioak egikaritzean eragindakoena ere, betiere dolo edo erruz jardun badute.

Erruduntasuna dagoela ulertuko da egintza legearen edo sozietate-estatutuen aurkakoa denean, salbu eta aurkakoa frogatzen bada.

Erruz jardundako egintzen erantzukizuna balioesteko, kontuan hartuko da ea administratzailearen kargua ordainpekoa den ala ez.

2. Erantzukizun solidarioa dute egintza kaltegarria gauzatu edo erabaki kaltegarria hartu duen organoaren kide guztiek, salbu eta honako hau frogatzen dutenak: erabakia hartu edo betearaztean esku ez hartzeaz gain, ez zekitela erabaki hori hartu zenik, edo, jakin arren, kalteak saihesteko beharrezkoa zen guztia egin zutela, edo, gutxienez, espresuki jo zutela erabakiaren aurka.

3. Erantzukizuna berbera izango da egintza edo erabaki kaltegarria batzar orokorrak hartu, baimendu edo berretsi bazuen ere.

4. Administratzaileen erantzukizuna egitezko administratzaileengana ere zabaltzen da. Xede horretarako, egitezko administratzailetzat joko da hala administratzaile izendatu gabe haren funtzioak betetzen dituen, nola sozietateko administratzaileek beren jardunerako jarraitzen dituzten jarraibideak ematen dituen.

Ez da egitezko administratzailetzat joko kooperatibari laguntza finantzarioa baldintza eta errekerimendu batzuk ezarriz eskaintzen dion hartzekoduna, salbu eta kontrakoa frogatzen den kasuan.

51. artikulua. Administratzaileen kontrako erantzukizun-akzioak

1. Administratzaileen aurkako erantzukizun-akzioa kooperatibak egikaritu ahal izango du; aurrez, batzar orokorrak gehiengo soilez erabaki beharko du, nahiz eta eguneko gai zerrendan halakorik agertu ez. Batzar orokorrak edonoiz emango dio baiezkoa nahiz ezezkoa akzioa egikaritzeari.

Gai-zerrendan agertzen ez bada, aldeko botoa eman beharko dute batzarrean daudenen eta ordezkaturakoen botoen bi herenek. Ez dira kontatuko ez boto zuriak, ez baliogabeak.

2. Batzar orokorrak erantzukizun-akzioa bultzatzea edo egikaritzeari baiezkoa ematea erabakiz gero, ukitutako administratzaileak kargutik kanpo geratuko dira berez eta besterik gabe.

3. Erabakia hartu ondoko hiru hilabeteetan kooperatibak berak erantzukizun-akziorik hasten ez badu, edozein bazkidek hasi ahal izango du. Sozietatearen interesaren alde, botoen ehuneko hogeitaz ordezkatzeko dute bazkideek ere hasi ahal izango dute erantzukizun-akzioa, baldin eta administratzaileek ez badute deitzen horretarako

eskaturiko batzar orokorra.

4. Kaltea egin eta sei hilabetera batzarrak edo bazkideek ez badute akzioa gauzatzen, sozietateko edozein hartzekodunek hasi ahal izango du erantzukizun-akzioa, kooperatibaren ondarea berriro osatzeko helburuarekin bakar-bakarrik.

5. Dena den, akzioa iraungita geratuko da baldin eta bi urte igaro badira erantzukizun-akzioa eragin zuten egintzak gertatu edo ezagutu zirenetik.

6. Aurreko zenbakietan erabakitakoa gorabehera, guzti horretatik kanpo geratzen dira bazkide edo hirugarren ez-bazkideei dagozkien norbanako akzioak, hain zuzen ere administratzaileek haien kaltetan egindako egintzen aurkakoak.

7. Leialtasun-betebeharra urratzeak bidegabeki lortutako aberastasuna sozietateari itzultzeko betebeharra ere ekarriko dio administratzaileari, sozietatearen ondareari eragindako kaltea ordaintzeko betebeharraz gain.

52. artikulua. Administratzaileen erabakiak aurkaratzea

1. Erabakiak, artezkaritza-kontseiluarenak, edo hala badagokio, batzorde betearazlearenak, aurkaratu ahal izango dira, baldin eta legearen edo estatutuen aurkakoak badira edo kooperatibaren kaltetan hartu badira bazkide baten edo gehiagoren zein bazkide ez direnen mesedetan.

2. Administratzaileek eta zaintza-batzordeak erabaki horiek aurkaratu ahal izango dituzte, hirurogei eguneko epean, erabakia hartzen denetik aurrera kontaturik.

3. Era berean, edozein bazkidek aurkaratu ahal izango ditu erabakiak, hirurogei eguneko epean, haien berri izan zuenetik aurrera kontaturik, betiere ez bada urtebete igaro erabakia hartu zenetik.

4. Aurkaratzeak zehaztuta dauden ondorioak izango ditu, eta batzar orokorraren erabakiak aurkaratzeko ezarritakoaren arabera izapidetuko da.

3. ATALA

ZAINTZA-BATZORDEA

53. artikulua. Osaera, agintaldia eta izendapena

1. Estatutuetan zehaztuko da zenbat kide titular izan behar dituen zaintza-batzordeak (gutxienez hiru), baita, hala badagokio, zenbat ordezeko kide izan behar dituen eta zenbat iraungo duen haien agintaldiak, zeina ez baita izango administratzaileen agintaldiaren berbera.

Batzorde hori ez da nahitaezkoa izango, baldin kooperatibak ehun bazkide baino gutxiago baditu.

2. Bazkide izan beharko da zaintza-batzordeko kide izateko, salbu eta estatutuetan ez-bazkideak onartzeko aukera aurreikusi bada. Bestelakorik onartzekotan, zuzentasuna, lan-prestakuntza eta esperientzia teknikoa eta enpresariala eskatuko zaizkio, organo horren betebeharren arabera. Bazkide ez diren kide horiek ez dira batzordeko kide guztien erdia baino gehiago izango, erditik azpirantz jota neurtuta.

Kooperatiban berrogeita hamar langile baino gehiago badaude lan-kontratuarekin, horien artetik aukeratutako ordezkari bat kontrol- eta zaintza-batzordeko kide izango da hala aurreikusten bada estatutuetan.

3. Batzordeko kideak aukeratu edo kanporatzeko, batzar orokorrean emandako baliozko boto guztien zatirik handiena beharko da, eta isilpeko bozketa egin beharko da betiere; estatutuetan oztoporik ezartzen ez bada, berriz ere aukeratu ahal izango dira, eta administratzaileentzat lege honek ezarri dituen arauak bete beharko dituzte erantzukizun, lansari, ezintasun, debeku eta erregistroan inskribatzeari dagokienez.

54. artikulua. Informazio-ahalmenak

1. Administratzaileek zaintza-batzordeari kooperatibaren jardueren eta ustez izango duen bilakaeraren berri eman beharko diote, hiru hilabetea behin gutxienez.

2. Batzordeak bere lana egiteko behar beste egiaztapen egiteko eskubidea du, eta hori egiteko agindua bere kideetako bati edo batzuei eman ahal izango die edo, bestela, adituen laguntza eskatu ahal izango du, kideen artean halakorik ez badago

3. Batzordeko kide guztiek izango dute emandako edo jasotako informazio guztia ezagutzeko aukera, baina ez dute ikerketa-lanen edo jasotako informazioaren emaitzen berri ematerik izango estatutuetan zehaztutako eremuetatik kanpo, ez eta kooperatibako kideen aurrean ere.

55. artikulua. Jarduketa-eremua

Zaintza-batzordeak lege honetan zehaztutako funtzioak egikarrituko ditu, baina ezin izango du kooperatibaren kudeaketan zuzenean parte hartu, eta ezingo da kooperatibaren ordezkari izan hirugarren ez-bazkideen aurrean; baina, kooperatibaren ordezkari izango da, kooperatiba beraren administrazio-organoaren edo bere kideetako edozeinen aurrean, baldin eta organo hori auzitara eraman behar bada edo organo horren kideekiko hitzarmenak bukatu egin badira.

56. artikulua. Eskumenak eta funtzionamendua

1. Zaintza-batzordeak honako funtzio hauek betetzeko ahalmena du:

- a) Urteko kontuak aztertzea eta kontu horiei eta soberakinak banatzeko edo galerak egozteko proposamenari buruz nahitaezko txostena egitea, batzar orokorrean azaldu aurretik, salbu eta kooperatibak bere finantza-egoera auditoretzaren baten aurrean aurkeztu behar duenean.
- b) Kooperatibako liburuak aztertzea.
- c) Kooperatibaren onerako beharrezkotzat jotzen duenean, batzar orokorra biltzeko deia egitea, baldin eta administratzaileek ez badiote, epe barruan, kasurik egin bazkideek 35. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan ezarritakoaren arabera egindako eskariari.
- d) Ordezkaritza-idazkiak egokiak diren gainbegiratu eta kalifikatzea, eta, orokorrean, batzarretara sartzeko eskubideari buruzko zalantza eta gorabeherak argitzea.
- e) Lege honetan zehaztutako kasuetan, sozietatearen erabakiak aurkaratzea.
- f) Batzar orokorrari ebazpena emateko aurkeztu dizkion egoera edo arazo zehatzei buruzko informazioa ematea.
- g) Batzar orokorrak gainerako organoetako kideak aukeratzen dituen erabilitako hautaketa- eta izendapen-prozesua zaintzea.
- h) Administratzaileen funtzioak etetea, baldin eta 44. artikuluko ezintasun- edo debeku-egoeraren batean badaude, eta, hala gertatuz gero, beharrezko neurriak hartzea batzar orokorra bildu arte.
- i) Lege honek espresuki agindutako gainerako eginkizun guztiak.

2. Kooperatibak finantza-egoerak auditatu behar dituenean, zaintza-batzordeak kontabilitate-euskarriak aztertu ahal izango ditu —kideek komeni dela uste badute—, eta, beharrezkoa bada, horiei buruzko txostena egin ahal izango du. Dena dela,

txosten hori ez da nahitaezkoa izango kooperatibaren urteko kontu auditatuak onartzeko.

Era berean, eta urteko kontuak auditatzen badira ere, zaintza-batzordeak txosten bat egin ahal izango du soberakinak banatzeko edo galerak egozteko proposamenari buruz.

Deskribaturiko bi kasu horietan, zaintza-batzordeak administratzaileei jakinarazi beharko die asmoa duela kooperatibaren urteko kontuei buruzko eta soberakinak banatzeko edo galerak egozteko proposamenari buruzko txosten bat, ez-nahitaezkoa, aurkezteko, bazkideek txosten hori aztertzeiko aukera izan dezaten ohiko batzar orokorraren deialdia argitaratzen den unean berean.

3. Zaintza-batzordearen funtzionamendu-araubidea estatutuetan, edo, hala badagokio, barne-erregelamenduan erabakitakoaren arabera izango da. Halere, edozein administratzailek edo batzordeko edozein kidek eska diezaioke idatziz bertako lehendakariari organo hori biltzeko deia egin dezala, eskabidea egiteko dituen arrazoiak azalduz. Eskari hori gutxienez artezkaritza-kontseiluaren edo zaintza-batzordearen beraren herenak egiten baldin badu, eta hilabeteko epean osatzeko deirik egiten ez bada, eskatu duten taldeetako edozeinek egin ahal izango du deia.

4. Likidazioaldian, artikulua honetan zehaztu zaizkion funtzioen artetik aldi horretan bidezkoak direnak bakarrik egikaritzeko ditu zaintza-batzordeak.

4. ATALA

BESTE ORGANO BATZUK

57. artikulua. Sozietate-kontseilua. Izaera eta funtzioak

1. Estatutuetan, sozietate-kontseilu bat egotea aurreikusi ahal izango da, kooperatibako bazkideen ordezkotza duen organo bezala oinarritzko funtzio hauek izango dituen: administratzaileei informazioa, aholkuak eta iritziak ematea lan-harremanari dagozkion alderdi guztiei buruz, baita nahitaezko txostenak ematea ere, bereziki 30 eta 105.2. artikuluetan adierazitakoei buruzkoak.

2. Halaber, beren estatutuetan hori jasotzen duten kooperatibetan, nahitaezkoa izango da sozietate-kontseiluari iritzia eskatzea bazkide ez diren soldatapekoekiko lan-harremanari dagozkion alderdi guztiei buruz.

3. Sozietate-kontseilua langile bazkideek edo lan-bazkideek osatuko dute. Estatutueta zehaztuko da sozietate-kontseiluaren osaera, iraupena, desegitea eta funtzionamendua, eta administratzaileek haren bileretan parte hartzeko aukerarik baduten ala ez.

58. artikulua. Errekurtso-batzordea. Osaera eta funtzioak

1. Kooperatibako estatutueta, errekurtso-batzorde bat arautu ahal izango da bazkideen arau-hauste astun edo oso astunengatik enpresan lehen auzialdian hartutako erabaki zehatzaileak berriro aztertzeko, baina bakarrik ukitutakoak hala eskatzen badu. Zehatzaileak ez diren erabakiengatik ere errekurtsoa jarri ahal izango zaio batzorde honi, aukera hori ezarri bada lege honetan edo estatutueta.

2. Organo horretako kide izateko, bazkideek estatutueta eskatzen diren baldintzak bete beharko dituzte: antzinatasuna, kooperatiben arloko esperientzia eta egokitasuna. Kide titularrak eta, hala badagokio, ordezeko kideak, batzar orokorrak aukeratuko ditu, estatutueta agindutako kopuruan, isilpeko bozketan eta sozietatean ardurazko kargurik ez duten eta kooperatibako soldatapeko ere ez diren bazkideen artetik. Haien agintaldia ez da hiru urtetik beherakoa izango, eta berriztatu ahal izango da.

3. Errekurtso-batzordearen eztabaidak baliozkoak izateko bileran kideen erdiek baino gehiagok egon beharko dute, eta ezin izango da botoa delegatu; erabakiak hartzeko, berriz, estatutueta zehaztuko den gehiengo beharko da. Diziplinarekin zerikusia duten erabakiak hartzeko bozketa isilpekoa izango da beti, eta ez da egongo kalitatezko botorik.

4. Errekurtsoei buruzko izapideak egin edo erabakitzerakoan, bazkideek ezin izango dute parte hartu, baldin eta ukitutako bazkidearekiko bigarren gradura arteko odol-ahaidetasuna edo ezkontza-ahaidetasuna badute edo pertsona horrekiko mendekotasuna, adiskidetasun estua edo ageriko etsaitasuna badute.

5. Errekurtso-batzordearen erabakiak, sozietatearen nahiaren adierazpen direnez gero, berehalakoan bete beharko dira eta behin betikoak izango dira. Aurkaratu egin daitezke, batzar orokorrak hartu izan balitu bezala, 41. artikulua ezarritakoaren arabera.

6. Artikulu honetako aurreko zenbakietan aurreikusi gabeko kasuetan, kooperatibaren estatutuek agintzen dutena bete beharko da.

VI. KAPITULUA

ARAUDE EKONOMIKOA

59. artikulua. Erantzukizuna

1. Kooperatibak erantzungo du sozietatearen zorrez, uneko eta geroko ondare guztiarekin, salbu eta kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenari dagokiona, kasu horretan helburu horiek betetzean sorturiko zorrez bakarrik erantzungo baita.
2. Bazkideek ez dute sozietatearen zorren erantzukizun pertsonalik izango. Haien erantzukizuna sozietate-kapitalari egindako ekarpenek mugatuko dute.
3. Itzuli beharreko ekarpenen zenbatekoa zehaztu ondoren, baja ematen duten langileek ez dute inolako erantzukizunik izango baja eman aurretik kooperatibak egin zituen zorrengatik.
4. Baina, bazkideek, baja eman eta gero ere, erantzukizuna izango dute baldin eta kontratuak izenpetu edo betebeharrak hartu badituzte, berariaz eta espresuki, kooperatiba-sozietatearekin, eta betebeharrak ez badira iraungitzen, beren izaera dela-eta, bazkide izateari utzi eta gero.

60. artikulua.- Sozietatearen kapitala

1. Bazkideek kapital horri egiten dizkioten ondare-ekarpenek, nahitaezkoek edo borondatezkoek, osatuko dute kooperatibaren sozietate-kapitala. Ekarpak horiek honelakoak izan daitezke:
 - a) Baja-kasuan itzultzeko eskubidea duten ekarpak.
 - b) Batzar orokorrak edo artezkaritza-kontseiluak, estatutuetan aurreikusitakoaren arabera, baldintza gabe ukatuz gero itzultzeko eskubiderik ez duten ekarpak.

Baja-kasuan itzultzeko eskubidea duten ekarpak nahitaez bihurtu ahal izateko kooperatibak baldintza gabe ukatuz gero itzultzeko eskubiderik ez duten ekarpak, edo alderantzizko bihurketa egiteko, estatutuak aldatzeko erabakia beharko da. Bazkideren bat ez badago ados horrekin, baja eman ahal izango du; baja hori arrazoitutzat joko da.

2.- Estatutuetan aurreikusi ahal izango da ezen, ekitaldi ekonomiko batean itzuli beharreko ekarpenen kopurua estatutu horietan ezarritako sozietate-kapitalari dagokion kopurua baino handiagoa bada, artezkaritza-kontseiluaren aldeko iritzia beharko dela ekarpen berriak itzultzeko.

Bazkideren bat ez badago ados portzentaje hori ezartzearekin edo gutxitzearekin, baja eskatu ahal izango du; baja hori arrazoituztat joko da.

Kasu horretan, honako hauek ere aplikatuko dira: 63. artikuluko 4. apartatuta, 65. artikuluko 1. apartatua eta 98. artikuluko 3. apartatua.

Era berean, estatutuetan espezifikoki aurreikusi ahal izango da aurreko 1b) apartatuko ekarpenen itzulketa ezesteko betebeharra, baldin eta itzulketaren ondorioz kooperatibak ezin badu estali estatutuetan ezarritako ratioa edo erreferentzia.

3.- Sozietate-kapitalari egindako ekarpenak ziurtatzeko, izendun agiriak erabiliko dira, baina ez dira diru-baliozko agiritzat hartuko; edo, bestela, izendun partaidetza-libretak erabiliko dira, non egindako ekarpen eta eguneratze guztiak eta bazkideari egotzitako galerengatik egindako kenketak azalduko baitira, hala badagokio.

4.- Ekarpenak egiteko, legezko dirua erabili beharko da. Sozietatearen estatutuetan baimena ematen bada edo batzar orokorrak hala erabakitzen badu, ondasunak edo eskubideak ere erabili ahal izango dira ekarpenetarako. Halako kasuetan, administratzaileek zehaztuko dute balioa, baina, horretarako, beraiek izendatutako aditu independente batek edo batzuek egindako txosten bat aurkeztu beharko dute, aditu horien erantzukizunez egina, ekarpenaren ezaugarriei eta balioari eta hura kalkulatzeko erabili dituzten irizpideei buruzkoa. Halere, estatutuetan hala jasotzen bada, administratzaileek egindako balioespena batzar orokorrak onartu beharko du.

5.- Lehen mailako kooperatibetan, bazkide bakoitzak egindako guztizko ekarpenek ezin izango dute gainditu sozietateren kapitalaren herena, salbu eta kooperatiba-sozietateen edo bazkide laguntzaileen kasuan. Muga hori ez zaie ezarriko hamar bazkidetik beheragoko kooperatibei.

6. Mendeko finantzaketatzat hartzen dira kooperatibek jaso, eta kredituen lehentasunen hurrenkeran, hartzekodun komun guztien ondoren datozen finantzaketak.

Edozein dela ere sozietatearen kapitalaren izena eta formalizazio juridikoa, sozietatearen kapitaltzat hartuko dira kooperatibak bazkideekin edo hirugarren ez-

bazkideekin kontrataturiko mendeko finantza-ekarpen guztiak, likidazioa onartu ondoren baino itzul ezin daitezkeenak. Kontrakorik hitzartu ezean, ekarpen horiei ez zaie aplikatuko lege honen 62. artikulutik 66. artikuluetara bitarte ezarritakoa. Ekarpen edo partaidetza horiek itzuli edo karteran lortu ahal izango dira hala bermea duten mekanismo finantzarioen bidez, kapital-sozietateetan partaidetzearako edo akzioetarako ezarritakoaren parekoak direnak –barne direla Merkataritza Sozietateen Egiturazko Aldaketei buruzko apirilaren 3ko 3/2009 Legean aurreikusitako aukerak– nola erregelamenduz ezartzen diren baldintzen arabera.

Ekarpen horien ordainsaria finkoa, aldagarria edo partaidetza bidezkoa izan daiteke, eta tituluen edo kontuko idatzoharren bidez adieraziko dira, eta balore higigarritzat hartu ahal izango dira hala aurreikusten denean jaulkipen-erabakian; kasu horretan, horrelako finantza-aktiboei dagokien araudira egokituko da ekarpenon araubide juridikoa.

Ekarpen horiek ez dute inola ere emango batzar orokorrean botoa emateko eskubiderik, ezta administrazio-organoan parte hartzekorik ere.

Ekarpen horien jaulkipenen edo kontratazioaren 100eko 50 gutxienez kooperatibako bazkideei eta soldatapeko langileei eskaini beharko zaie hirugarren ez-bazkideei eskaini baino lehen. Eskaintza horri publikitatea emango zaio, batzar orokorrak deitzeko ezarritako baldintza beretan.

Eskaintza-jaulkipena baimentzeko eskumena duten agintaritza ekonomikoek informazioa gainbegiratu eta onartu ondoren, organo gainbegiratzaile eskudunak ezarritako entitate arduradunak arduratuko dira informazio hori hirugarren ez-bazkideek jaso dutela bermatzeaz.

7. Artikulu honen 1. zenbakitik 5.era bitarte ezarritakoa kreditu-kooperatibei eta aseguru-kooperatibei ere ezarriko zaie, baldin eta kooperatiba horien sektoreko araudietan ez bada horretarako eragozpenik jartzen.

61. artikulua.- Sozietatearen kapitalari nahitaez egin beharreko ekarpenak

1. Estatutuetan zehaztuko da zein den bazkide izateko hasierako nahitaezko ekarpena, zeina desberdina izan daitekeen lege honetan ageri den bazkide-mota bakoitzarentzat, kontua hartuta zer izaera duen, fisikoa ala juridikoa. Ezberdina izan daiteke, halaber, bazkide bakoitzarentzat ere, kooperatibaren jarduerarekiko bakoitzak duen konpromisoaren edo erabileraren arabera.

2. Bazkide izateko hasierako nahitaezko ekarpenaren ehuneko hogeita bost gutxienez izenpetzearekin batera ordaindu beharko da, eta gainerako guztia sozietatearen estatutuetan edo batzar orokorrak erabakitako epean. Epe hori lau

urtekoa izango da, gehienez ere.

3. Bazkideei kooperatibaren galerak egozten zaizkielako edo estatutuetan jasotako diru-zehapena ordaindu behar dutelako, bazkideren batek edo batzuek sozietate-kapitalari egin beharreko ekarpena ez bada heltzen estatutuek edo, halakorik ez badago, batzar orokorrak halakoetarako erabakitako gutxieneko zenbatekora, ukitutako bazkideei berehala errekerituko zaie beste ekarpen osagarri bat egin dezatela bazkide izaten jarraitzeko. Estatutuek edo, halakorik ez badago, batzar orokorrak, finkatuko dute zein den ekarpen hori egiteko epea, baina epe hori ezin izango da inoiz urtebetetik gorakoa izan, errekerimendua egin denetik aurrera kontaturik.

4.- Batzar orokorrak urtero erabakiko du bazkide berrien hasierako nahitaezko ekarpena, eta nahitaezko ekarpen berriak ere erabaki ahal izango ditu, eta zenbatekoa eta ordaintzeko epeak eta baldintzak zehaztu. Zenbateko hori desberdina izan liteke bazkide batentzat edo beste batentzat, 1. zenbakian ezarritako irizpideen arabera. Kapitala nahitaez zabaltzearekin konforme ez dagoen bazkideak baja eman ahal izango du. Baja hori arrazoituztat joko da.

Aurrez egindako borondatezko ekarpenak erabili ahal izango dira nahitaezko ekarpen berriak ordaintzeko.

5. Aurreko apartatuetan ezarritakoaren arabera, eskatutako ekarpenak ordaintzeko berandutzarik badago bazkideren baten aldetik, kooperatibari legezko interesa ordaindu eta berandutzaren ondorioz egindako kalteen ordaina eman beharko dio. Bazkideak bere egoera zuzentzeko agindua jaso eta hurrengo hirurogei egunetan ez badu zuzendu:

- a) nahitaezko baja eman ahal izango diote bazkide izateko hasierako nahitaezko ekarpenaren edo 3. apartatuan ezarritako gutxieneko kopuruaren kasuan.
- b) gainerako kasuetan, kooperatibatik kanporatu ahal izango dute.

62. artikulua.- Sozietatearen kapitalari egindako borondatezko ekarpenak

1.- Batzar orokorrak erabaki ahal izango du bazkideek sozietatearen kapitalari borondatez egindako ekarpenak onartu ala ez, ekarpen horien baldintzak zehaztuta.

2. Administratzaileek edozein unetan onartu ahal izango dituzte bazkideek sozietatearen kapitalari borondatez egindako ekarpenak, baina haien ordainsaria ez da izango batzar orokorrak kapitalarentzat erabakitako borondatezko azken

ekarpenena baino handiagoa, edo, batzar orokorrik ez badago, ez da izango nahitaezko ekarpenena baino handiagoa.

63. artikulua.- Ekarpenen interesa

1. Kapitalari egindako ekarpenek interesa eman dezakete, aurrez batzar orokorrak erabakitako beste, hargatik eragotzi gabe aurreko artikulua 2. zenbakian erabakitakoa.

2. Interes hori ez da diruaren legezko interesa baino sei puntu gehiagokoa izango.

3. Kapitalari egindako ekarpenen ordainsariak emango dira, baldin eta horretarako beharrezkoa den soberakin garbirik edo xedapen askeko erreserbarik badago.

4. Batzar orokorrak erabakitzen badu ekarpenei interesen bat sorraraztea edo erabilgarri dituen soberakinak itzulkinetara edo erreserba banagarrietara bideratzea, ordainsari bat jasotzeko lehentasuna izango dute 60.1b) artikuluan aurreikusitako ekarpenek, baldin eta kooperatibak haiek itzultzea ezesten badu eta titularrek baja ematen badute.

64. artikulua. Ekarpenak eguneratzea

1. Kooperatibaren balantzea zuzenbide zibileko sozietateentzat aurreikusitako baldintza eta onura berekin erregularizatu ahal izango da, hargatik eragotzi gabe erregularizazioaren ondoriozko gainbalioarentzat lege honetan ezarritako xedea.

2. Aipaturiko gainbalio hori kapitala eguneratzeko edo erreserbak, nahitaezkoak zein borondatezkoak, handitzeko erabiliko du kooperatibak; hori ekitaldi bakarrean edo gehiagotan egingo du, kooperatibak berak egoki iritzitako proportzioan. Nolanahi ere, kooperatibak konpentsatu gabeko galerak baldin baditu, erregularizazioaren ondoriozko gainbalioa haiek konpentsatzeko erabiliko da, eta gainerakoa arestian aipaturiko helburuetarako.

65. artikulua. Ekarpenak eskualdatzea

Ekarpenak honela eskualdatu daitezke:

1. Bazkideen eta hurrengo hiru hilabeteetan bazkide izatera engaiatzen diren inter vivos arteko egintzen bidez, estatutuetan ezarritako baldintzetan.

Estatutuetan aurreikusi ahal izango da bazkide berrien hasierako nahitaezko ekarpenak 60.1b) artikuluan aurreikusitako ekarpenak eskuratuz egin behar direla, hau da, kooperatibak itzultzea ukatu dituen ekarpenen bidez, betiere haien titularrek baja egin ondoren. Eskualdaketa ekarpen-mota horien itzulketa-eskarien antzintasunaren arabera egingo da; eskariak data berean egiten diren kasuan, berriz, ekarpenen zenbatekoaren arabera egingo da.

2. Mortis causa oinordetzaren bidez, kausadunei — bazkideak badira eta eskatzen badute, edo, bazkide ez badira, aurretik bazkide gisa onartu ondoren—, 20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Onarpen hori heriotza gertatzen denetik hiru hilabeteko epean egin beharko da. Bestela, sozietate-ekarpenari dagokion kredituaren likidazioa jasotzeko eskubidea izango dute, hurrengo artikuluan aurreikusitako moduan.

Bazkideen hartzekodun pertsonalek ez dute inongo eskubiderik izango kooperatiben ondasunen eta bazkideek sozietatearen kapitalari egindako ekarpenen gainean. Ekarpen horiek ezin izango dira enbargatu. Horrek ez ditu eragotziko hartzekodunek balia ditzaketen eskubideak, hau da, bazkidearenak diren itzulketen, interesen eta itzulkinen gainean dituen eskubideak.

66. artikulua. Ekarpnena itzultzea

1. Estatutuetan erregulatuko da sozietatearen kapitalari egindako ekarpenen itzulketa, eta ezarri ahal izango da kenkariak soilik nahitaezko ekarpenen gainean aplikatuko direla, gehieneko portzentaje hauek aplikatuz: ehuneko hogeita hamarreraino baten bat kanporatzen denean, eta ehuneko hogeiraino arrazoitu gabeko baja bat gertatzen denean.

Estatutuetan aurreikusi ahal izango da ezen, itundutako gutxieneko iraupenaldia bete ezean, ehuneko hamar puntu gehitu ahal izango zaizkiola, gehienez ere, arrazoitu gabeko bajaren kasuan aplikatu beharreko kenkari-portzentajeari.

2. Kasu bakoitzean aplikatu beharreko kenkari-portzentajearen gaineko erabakia administratzaileen eskumenekoa izango da.

3. Arestian aipatutako kenkarien aurka joan gabe, baja ematen duen bazkideari itzuli beharreko ekarpenaren deskontu-ondorioetarako, baja gertatzen den ekitaldiko itxiera-balantzean jasotako galerak zenbatuko dira, direla ekitaldi horri dagozkionak,

direla aurreko beste ekitaldi batzuetatik datozenak edo sozietatearen kapitalari egindako ekarpen osoaren arabera konpentsatu gabe daudenak.

4. Itzulketa-epea bost urtekoa izango da gehienez ere, baja-datatik aurrera kontaturik. Bazkidearen heriotza gertatuz gero, kausadunei egin beharreko itzulketa egitate eragilea izan denetik urtebetetik beherako epean egin beharko zaio.

60.1b) artikuluan aurreikusitako ekarpenetarako, kooperatibak itzulketa erabakitzen duen datatik aurrera zenbatuko dira aurreko zenbakian aipatutako epeak.

5. Itzulketa kooperatibak erabakitzen duen ekarpenetan, itzultzeke dauden kopuruak ezin izango dira, baina eskubidea emango dute gutxienez diruaren legezko interesa jasotzeko.

6. Aurreko apartatuetan ezarritakoa eragotzi gabe, batzar orokorrak sozietatearen kapitala murrizteko erabakia hartuz ere itzuli ahal izango dira ekarpenak, edo, hala badagokio, bazkidearen jardura kooperatibizatua murriztuz, betiere jarraikiz estatutuetan ezarritako baldintzei.

67. artikulua. Partaidetza bereziak

1. Partaidetza berezitzat hartuko dira artikulua honetako arauketaren arabera mendeko finantzaketak, baldintza hauek betetzen dituztenak: harpidedunak ez dira inolaz ere kooperatibak izango, salbu eta artikulua honen 4. zenbakian aurreikusitako bazkideen kasuan; itzulketa ez da gauzatuko partaidetza jaulki eta gutxienez bost urte igaro arte, eta ordainsaria kooperatibaren emaitzen arabera izango da.

2. Partaidetza hauen gainerako ezaugarriak jaulkitzen direnean ezarriko dira, libreki, baina ezin izango zaie aitortu, inolaz ere, batzar orokorrean botoa emateko eskubidea, ezta administrazio-organismoan parte hartzekorik ere.

3. Artikulu honetan ezarritakoa soil-soilik aplikatu ahal izango zaie kreditu-kooperatibei eta aseguru-kooperatibei, baldin eta sektore horretako araudietan ez bada horretarako eragozpenik jartzen.

4. Ekarpene horien jaulkipenen edo kontratazioaren 100eko 50 gutxienez kooperatibako bazkideei eta soldatapeko langileei eskaini beharko zaie hirugarren ez-bazkideei eskaini baino lehen. Eskaintza horri publizitatea emango zaio, batzar orokorrak deitzeko ezarritako baldintza beretan.

5. Artikulu honetan ezarritakoaren arabera erregulatzen ez diren partaidetzarako —

edozein dela ere horien izena— , itun askearen sistema ezarriko da, baita 60. artikuluan sozietate-kapitalarentzat ezarritakoa edo 68.ean bestelako finantzaketei buruz ezarritakoa ere.

68. artikulua. Beste finantzaketa batzuk

1. Estatutuetan, edo hala badagokio, batzar orokorrean, sarrera-kuotak eta aldikakoak ezarri ahal izango dira; horiek ez dira sozietatearen kapitalean sartuko, ezta itzuliko ere. Kuota horiek ezberdinak izan daitezke, honako alderdi hauen arabera: zer bazkide-mota aurreikusten diren lege honetan, zein den haien izaera – fisikoa ala juridikoa—, edo zer konpromiso duen kooperatibarekin edo zer proportziotan jardun dezakeen kooperatiba-jardueran.

2. Sarrera-kuotek ez dute gaindituko sozietatearen kapitalari nahitaez egin beharreko ekarpenaren ehuneko hogeita bost. Sozietatearen kapitala bazkide izateko unean-unean indarrean dagoena izango da.

3. Ez dira sozietatearen kapitalean sartzen bazkideek kooperatibaren kudeaketarako entregatutako ondasunak eta emandako zerbitzuak eta, orokorrean, kooperatiba-zerbitzuak lortzeko egindako ordainketak. Eragiketa horiek kooperatibarekin finkaturiko eta kontrataturiko baldintzen mende egongo dira. Haiek guztiak ez dira sartzen kooperatibaren ondarean, eta sozietatearen hartzekodunek ezin izango dituzte enbargatu.

4.- Kooperatibak jaulkipenak erabaki ahal izango ditu: obligazioak, partaidetza-tituluak, partaidetza-kontuak, baita boto-eskubiderik ez duten bazkideen edo hirugarren ez-bazkideen borondatezko finantzaketak ere, edozein dela ere haien modalitate juridikoa. Kontuan harturik zein diren kooperatibaren emaitzak, eragiketa horien ordainsaria osoa edo partziala izan daiteke, zeina ezartzen diren epe eta baldintzak betez ordaindu beharko baita.

69. artikulua. Soberakin garbiak zehaztea

1. Soberakin garbiak zehazteko, merkataritza-sozietateentzat ezarritako kontabilitate-arau eta -irizpideak ezarriko dira, salbu eta espezifikoki erregulatzen badira kooperatiba-sozietateentzat.

2. Dena dela, soberakin garbiak zehazterakoan honako hauek partida kengarritzat hartuko dira:

a) Kooperatibaren kudeaketarako entregatutako ondasunen zenbatekoa, zeina ez

baita balioetsiko merkatu-preziotik gora, eta bazkide langileen eta lan-bazkideen lan-aurrerakinen zenbatekoa, zeina, oro har, ez baita izango eskualdean bazkide horien jarduera-sektore berean ordaindu ohi dena baino handiagoa.

- b) Sozietatearen kapitalari egindako ekarpenen ondoriozko interesak, lege honen 60. artikuluan arautuak, eta sozietatearen kapitalean sartzen ez diren prestazio eta finantzaketak.
- c) Besteren konturako langileei kooperatibaren emaitzetan ematen zaien partaidetza.

70. artikulua. Soberakinak banatzea

1. Aurreko ekitaldietako galerak konpentsatzeko zenbatekoak eta eskatu daitezkeen zergak kendu ostean, soberakin baliagarri bilakatuko dira soberakin garbiak.

2. Urtero, honela bideratuko dira soberakinak:

- a) Ehuneko hogeita hamar, nahitaezko erreserba-funtserako eta kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenerako. Portzentaje horretatik, gutxienez ehuneko hamar kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenerako bideratuko da, eta ehuneko hogeitaz berriz, nahitaezko erreserba-funtserako.
- b) Gainerakoa, batzar orokorraren esku egongo da: bazkideei itzuli, edo borondatezko-erreserba-funtsetarako eman –funts banagarri edo banaezin bezala, estatutuek ezartzen dutenaren arabera edo, halakorik ez badago, batzar orokorrak erabakitzen duenaren arabera–, edo, hala badagokio, soldatapeko langileek parte hartzea kooperatibaren irabazietan, hargatik eragotzi gabe kontabilitate-gastutzat jotzea.

3. Nahitaezko erreserba-funtsa sozietate-kapitalaren ehuneko berrogeita hamarrera heltzen ez den bitartean, erdiraino murriztu ahal izango da kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenerako ezartzen den gutxieneko ekarpena.

4. Bazkideei itzulkinak esleitzeko orduan, kontuan izango da zer eragiketa, zerbitzu edo jarduera egin duen bazkide bakoitzak kooperatibarekin, eta proportzio berean esleitzeko zaizkie.

5. Kooperatibaren estatutuetan, edo batzar orokorraren erabakiz, onartu eta zehaztu ahal izango da soldatapeko langileek eskubidea dutela soberakin erabilgarrietan parte hartzeko. Parte-hartze hori soldatan islatuko da. Lan-arloan aplikatu behar den

araudian halako osagarriak ezarrita badago, hura ordezkatzeko du osagarri hori baino handiagoa bada. Txikiagoa izanez gero, araudiak ezarritako osagarria aplikatzeko da.

71. artikulua. Nahitaezko erreserba-funtza

1. Kooperatiba finkatu, garatu eta bermatzeko da nahitaezko erreserba-funtza, eta ezin da bazkideen artean banatu, lege honek espresuki aurreikusitako egoeretan izan ezik.

2. Honako diru-kopuru hauek zuzendu beharko dira nahitaezko erreserba-funtsera:

- a) Soberakin baliagarrien portzentaje bat. Batzar orokorrak ezarriko du portzentaje hori, aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera.
- b) Bazkideen bajaren kasuan, sozietatearen kapitalari nahitaez egin beharreko ekarpenen kenkariak.
- c) Sarrera-kuotak.

72. artikulua. Kooperatiba-heziketa eta -sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena

1. Estatutuek edo batzar orokorrak finkatutako oinarrizko ildoak aplikatuz, interes publikoko helburu hauetakoren bat izango du soberakinei 70. 2.a artikuluan ezartzen zaien nahitaezko ekarpenak:

- a) Bazkideak eta langileak prestatzea eta hezteko kooperatibagintzaren eta kooperatiba-jardueren arloan eta lanpostuarekin lotuta ez dauden beste arlo batzuetan.
- b) Kooperatiben arteko harremanak sustatzea. Eremu horretan, gastu hauek ere estaliko dira: kooperatiba guztiak sustatu, lagundu eta zuzentzeko sortutako entitateetan parte hartzearen sortzen diren gastuak edo kooperatibek elkarri laguntzeko jarduerak sortzen dituztenak.
- c) Hezkuntza, kultura, lanbidea eta laguntza sustatzea eta kooperatibagintzaren ezaugarriak zabaltzea kooperatibak lan egiten duen gizarte-inguruan eta gizartean oro har.
- d) Euskararen erabilera sustatzea.
- e) Kooperatiba-enpresa berriak sustatzea. Horretarako, diru-ekarpenak egingo zaizkie kooperatiben euskal mugimenduak sustatzen dituzten irabazteko

asmorik gabeko entitateei.

2. Aurreko apartatuan adierazten diren helburuetara bideratu ahal izango da nahitaezko ekarpen hori, diru-ekarpenak eginez irabazteko asmorik gabeko entitateei edo aurreko 1.b artikuluan adierazten diren lankidetza-entitateei.

Bitartekaritza-entitate horiei diru-ekarpenak egiteko, beharrezkoa izango da adierazitako interes publiko horiek dituzten helburuetara zuzentzea ekarpenok; horretarako, bitartekaritza-entitateak berak egingo ditu jarduerak; bestela, beste pertsona fisiko edo juridiko batzuei zuzenduko dizkie jasotzen dituen baliabideak.

3. Kooperatibak ezin du erabaki ekarpen horren gainean, non eta ez diren interes publikoko helburuetara zuzentzen; ondorioz, ekarpen hori enbargaezina da, eta balantzearen pasiboan azaldu behar da.

4. Ekarpen horretarako aurreikusitako helburuetarako erabiliko dira kooperatibak bazkideei ezartzen dizkien zehapen ekonomikoak.

5. Kooperatibak berak adierazitako interes publikoko helburuetara zuzentzen ez den diru-kopurua, berriz, irabazi-asmorik gabeko entitateei zuzenduko zaie hurrengo ekitaldi ekonomikoan: soberakinak banatzeko erabakitzen den ekitaldian ez, hurrengoan.

73. artikulua. Galerak egoztea

1. Estatutuek finkatu beharko dute zein diren galerak konpentsatzeko irizpideak. Irizpide horiek erregela hauek bete beharko dituzte beti:

- a) Borondatezko erreserba-funtsik badago, galera guztiak egotzi ahal izango dira funts horietara.
- b) Nahitaezko erreserba-funtsera egotziko da, gehienez ere, soberakin positiboak izandako azkenengo bost urteetan nahitaez legezko funtsetara bideratu diren diru-kopuruen bataz bestekoa edo, kooperatiba bost urte horiek baino berriagoa bada, eratze-unetik beretik bideratutakoen batez bestekoa. Nolanahi ere, nahitaezko erreserba-funtsak kooperatibaren sozietate-kapitalaren ehuneko berrogeita hamar gaingaitzen badu, galerak konpentsatzeko erabili ahal izango da portzentaje horretatik gorako zenbatekoa.
- c) Nahitaezko eta borondatezko funtsekin konpentsatzen ez den zenbatekoa bazkideei egotziko zaie. Zer eragiketa, zerbitzu edo jarduera egin duen bazkide bakoitzak kooperatibarekin, proportzio berean egotziko zaio zenbatekoa.

Egindako zerbitzu edo eragiketa horiek bazkide bakoitzak gutxienez egin behar dituenak baino gutxiago badira, aipatutako galera horiek ere proportzionalki egotziko dira nahitaez egin beharreko gutxienerako jarduera kooperatibizatuaren arabera.

2. Bazkide bakoitzari egotzi beharreko galera horiek batzar orokorrak erabakitzen duenaren arabera egotziko dira, era hauetakoren batean:

a) Zuzenean, edo bazkideak sozietate-kapitalari egiten dizkion ekarpenetatik kenduta, edo, hala badagokio, bazkideak kooperatiban egiten duen edozein finantza-inbertsionatik kenduta, baldin eta inbertsio horrek egozpen hori onartzen badu; betiere, galera sortu eta hurrengo ekitaldiaren barruan.

b) Bazkideak hurrengo bost urteetan izan ahal dituen itzulkinen kontura. Konpentsatu gabeko galerarik geratzen bada, bazkideak konpentsatu beharko ditu, gehienez ere urtebeteko epean.

3. Galerak kontu berezi batera egotzi ahal izango dira, etorkizuneko irabazien kontura amortizatzeke. Bost urtekoa izango da, gehienez ere, galerak horrela amortizatzeke epea. Epe hori igaro eta galerarik geratzen bada konpentsatu barik, artikuluko honetako 1. zenbakiko a), b) eta c) letretan ezarritakoaren arabera konpentsatuko dira; azken kasuan, urtebeteko epean, gehienez jota.

4.- Aurreko zenbakietan adierazitako epe horiek guztiak igaro eta galerarik geratzen bada konpentsatu gabe, batzar orokorrak erabakitako ekarpen berriekin konpentsatu beharko dira, edo kooperatibako bazkide izaten jarraitzeko egin beharreko ekarpen berriekin, eta bazkideari baja emango zaio, baldin eta haren ekarpenak estatutuetan ezarritako gutxiengora heltzen ez badira eta ekarpen berririk egiten ez badu. Hori guztia gorabehera, kooperatibak konkurtsoa bultzatu beharko du, konkurtso-legearen arabera.

VII. KAPITULUA

SOZietateAREN DOKUMENTAZIOA ETA KONTABILITATEA

74. artikulua. Sozietatearen dokumentazioa

1. Kooperatibek antolatuta eta eguneratuta izan beharko dituzte liburu hauek:

- a) Bazkideen erregistroa.
- b) Sozietate-kapitalari egiten zaizkion ekarpenen erregistroa.
- c) Akta-liburua: batzar orokorrarena, artezkaritza-kontseiluarena eta, hala badagokio, zaintza-batzordearena, errekurtsio-batzordearena eta prestatze-biltzarrena.
- d) Inbentario- eta balantze-liburua eta liburu egunkaria.
- e) Lege-xedapenek eskatzen dituzten beste guztiak.

2. Liburuak eta kontu-erregistroak koadernatuta eta orrialdekatuta egon beharko dute, eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroak gaitu beharko ditu erabiltzen hasi aurretik.

3. Baliozkoak dira, halaber, nahitaezko liburuak egiteko prozedura informatiko edo elektronikoen bidez egiten diren idazpenak eta idatzioharra.

Liburu horiek, euskarri elektronikoen edo paperean eginak, Euskadiko Kooperatiba Erregistroak legeztatuko ditu, sei hilabeteko epean, ekitaldia ixten denetik aurrera kontaturik.

1. zenbakiko c) apartatuan adierazten diren liburuak legeztatzen ez diren bitartean, akten kopia erkatua bidali beharko zaio Euskadiko Kooperatiben Erregistroari, hilabeteko epean, akta horiek onartu zirenetik aurrera kontaturik.

75. artikulua. Kontabilitatea

1. Kooperatibek kontabilitate ordenatua eraman behar dute, nork bere jarduerari egokitua merkataritza-legeriaren arabera, salbu eta espezifikoki erregulatzen badira haien zat; kontabilitate horrek, bestalde, errespetatu behar ditu kooperatibaren araubide ekonomikoaren berezitasunak.

2. Ekitaldia ixtean, administratzaileek kooperatibaren urteko kontuak formulatu beharko dituzte, hiru hilabeteko epean gehienez ere, sozietatearen ekitaldia ixten denetik aurrera kontaturik. Kontuetan, jaso beharko dituzte balantzea, irabazi-galaren kontua, memoria eta, hala badagokio, ondare garbian izandako aldaketen egoera eta efektibo-fluxuen egoera, bat etorri aplikagarri zaion informazio finantzarioari buruzko araudi-esparruarekin.

Administratzaileek kudeaketa-txostena ere egin beharko dute, baldin eta, hurrengo artikuluen arabera, kooperatiba behartuta badago ekitaldiko kontuak auditatzera.

3. Administratzaileek urteko kontuak aurkeztu beharko dituzte, Euskadiko

Kooperatiba Erregistroan gordailutzeko, hilabeteko epean, kontuak onartzen direnetik aurrera kontaturik. Behar izanez gero, kudeaketa-txostena eta kontu-auditoreena ere aurkeztu beharko dituzte. Administrazioaile guztiek sinatu beharko dituzte urteko kontu horiek eta kudeaketa-txostena; baten baten sinadura falta bada, espresuki adieraziko da zergatik.

76. artikulua. Kontu-auditoretza

1. Kooperatibek kanpo-auditoretza baten mende jarriko dituzte, kontu-auditoretzari buruzko legean eta lege hori garatzen duten arauetan ezarritako baldintzetan, kooperatibetako urteko eta ekitaldiko kudeaketa-txostenak, honako egoeraren bat gertatzen denean:

- a) gainditzen direnean erregelamenduz finkatutako mugak, honako hauei dagozkienak gutxienez: negozio-kopurua, balantzearen araberrako aktiboaren zenbateko osoa eta enpleguen batezbesteko kopurua, aipaturiko legearen edo hura garatzeko arauen aplikazioaren ondoriozkoak.
- b) hala eskatzen duenean batzar orokorraren deialdia egiteko eskatzen den gutxienerako bazkide-kopuru berak, betiere hori eskatzen dutenek aurre egiten badiete auditoretzak dakartzan gastuei, hargatik eragotzi gabe gastuon zenbatekoak itzultzea funtseko akatsik edo irregulartasunik antzematen bada kontabilitatean.
- c) estatutuek aurreikusten dutenean, edo hala erabakitzen duenean batzar orokorrak edo artezkaritza-kontseiluak edo zaintza-batzordeak.

2. Batzar orokorrak izendatuko ditu kontu-auditoreak. Nolanahi ere, batzar orokorrak egokiro izendatzen ez baditu edo izendatutako pertsonak ezin badituzte beren funtzioak bete, administrazioaileek izendatu beharko dituzte auditoreak, eta horren berri emango diote batzar orokorrari hark egiten duen lehenengo bilkuran.

77. artikulua. Legelari aholkularia

1. Administrazioaileek erabakita, kooperatibek legelari aholkulari bat izendatu beharko dute, baldin eta urteko kontuak kanpo-auditoretza baten mende jarri behar badituzte kontu-auditoretzari buruzko legean ezarritakoaren ondorioz.

2. Legelari aholkulariak irizpen bat eman eta sinatuko du, non adieraziko baitu ea zuzenbidearen araberrakoak diren ala ez batzar orokorrak edo artekaritza-kontseiluak hartutako erabakiak, Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatzekoak direnak.

Erabaki horien ziurtagirietan, jasota geratuko da akta-liburuan azaltzen direla legelari aholkulariaren irizpenaz emandako erabaki horiek.

3. Zabarkeria profesionalik izanez gero, legelari aholkulariak arlo zibiletik erantzun beharko du kooperatibaren aurrean, haren bazkideen aurrean eta hirugarren ez-bazkideen aurrean.

4. Legelari aholkulari funtzioa egikaritzuz gero, ezin izango da izan ez zuzendari kudeatzaile, ez administratzaile edo errekurtsio-batzordeko kide, ezta zaintza-batzordeko kide ere.

5. Kooperatibaren eta legelari aholkulariaren arteko harremana izan daiteke: zerbitzu-errentamendukoa (langile profesional gisa edo lan-kontratadun gisa) edo sozietate-harremana (kooperatibako bazkide langile gisa edo lan-bazkide gisa).

Abokaturik izanez gero, zerbitzu hori kooperatiben batasunek edo federazioek eta beste kooperatiba batzuek eman ahal izango dute, eta abokatuak izango dute irizpena emateko eta betearazteko erantzukizun profesionala. Abokatu horien eta aipaturiko entitateen arteko harremanak ez badira profesional liberal gisa emandako zerbitzu-errentamendukoak, entitate horiek arlo zibiletik erantzungo dute, abokatuarekin batera, legelari aholkulari kargua egikaritzean kooperatibari sortutako kalteengatik.

VIII. KAPITULUA

SOZIETATEAREN ESTATUTUAK ALDATZEA

78. artikulua. Estatutuak aldatzea

1. Batzar orokorrak erabakiko ditu sozietatearen estatutuetan egiten diren aldaketa guztiak; horretarako, baina, honako baldintza hauek bete beharko dira:

- a) Proposamenaren egileek txosten idatzi bat aurkeztea, adieraziko duena zergatik egin behar diren aldaketak.
- b) Deialdian argi eta garbi adieraztea zer puntu aldatu behar diren.
- c) Deialdian espresuki azaltzea bazkide guztiek eskubidea dutela sozietatearen egoitzan aztertzeke proposaturiko aldaketaren testu osoa eta hura justifikatzen duen azalpen-txostena, eta dokumentu horiek eskatzeko edo etxean dohainik jasotzeko.

2. Eskritura publikoan idatziko da aipaturiko erabaki hori, eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatuko.

3. Horrez gain, sozietatearen izena, egoitza edo helburua aldatzea erabakitzen bada, sozietatearen egoitza zer lurralde historikotan dagoen, lurralde historiko horretan zabalkunde handia duen egunkari batean iragarriko da proposamena inskribatu baino lehen.

4. Kooperatiba-mota edo haren sozietate-helburua nabarmenki aldatzeko proposamena egiten bada, bazkideek kooperatibatik alde egiteko eskubidea izango dute, baldin eta proposamenaren kontrako botoa ematen badute, edo, batzarrera joan ez arren, administratzaileei idazki bidez zuzentzen badiete beren desadostasuna, berrogei eguneko epean, erabakia Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatzen denetik aurrera kontaturik. Horrelakoetan, arrazoitutzat joko da baja.

79. artikulua. Sozietatearen egoitza aldatzea

Estatutuek besterik xedatu ezean, ez da batzar orokorraren erabakirik beharko udalerrri berean sozietate-egoitzaz aldatzeko. Administratzaileek berek erabaki dezakete hori; eskritura publikoan jaso beharko dute, eta, gero, eskritura publiko hori Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu.

IX. KAPITULUA

KOOPERATIBAREN BAT-EGITEA ETA ZATITZEA

80. artikulua. Bat-egitearen modalitateak eta ondorioak

1. Kooperatibek bat egin ahal izango dute, dela kooperatiba batzuk batu eta beste berri bat sortuta, dela eraturik dagoen kooperatiba batek beste bat edo batzuk irentsita.

2. Kooperatibak desegingo dira beste bat sortzeko edo beste kooperatiba batzuek irents ditzaten, baina ez dira likidatuko; haien sozietate-ondareak osorik eskualdatuko dira, eta kooperatiba berria edo irenslea jabetuko da azkentzen den kooperatibaren eskubide eta betebeharez. Era berean, kooperatiba berrian edo irenslean sartuko dira bat-egitearen ondorioz desegindako kooperatibetako bazkideak.

3. Kooperatiba berria edo kooperatiba irenslea jabetuko da bat-egitearen ondorioz azkentzen diren kooperatiben nahitaezko funts guztiez.

81. artikulua. Bat-egiteari buruzko proiektua

1. Bat-egitean parte hartzen duten administratzaileek kooperatibaren bat-egiteari buruzko proiektu bat idatzi beharko dute, eta aurretiazko hitzarmen gisa sinatu.

2. Bat-egiteari buruzko proiektuak honako aipamen hauek jasoko ditu gutxienez:

- a) Zein den bat-egitearen proiektuan parte hartzen duten kooperatiben izena, mota eta egoitza, eta, halakorik erabakita badago, kooperatiba sortu berriaren izena, mota eta egoitza; Euskadiko Kooperatiba Erregistroko inskripzio-datuak ere inskribatu beharko dira.
- b) Zer sistema erabiliko den zehazteko ea zer partaidetza-zati dagokion azkentzen diren kooperatibetako bazkide bakoitzari, kooperatiba-kapitalari egindako ekarpen modura, kooperatiba berrian edo irenslean; horretarako, kontuan hartuko dira borondatezko erreserba banagarriak, halakorik badago.
- c) Zer eskubide eta betebeharrak onartzen zaizkien desagindako kooperatibako bazkideei kooperatiba berrian edo kooperatiba irenslean.
- d) Kooperatiba berriak edo kooperatiba irensleak zer egunetatik aurrera joko dituen egintzat, kontabilitate-ondorioetarako, desagindako kooperatiben eragiketak.
- e) Zer eskubide izango dituzten desagindako kooperatiben partaidetza berezien titularrek edo partaidetza-tituluen eta antzeko beste titulu batzuen jabeek kooperatiba berrian edo kooperatiba irenslean.

3. Behin bat-egiteari buruzko proiektua onartu eta gero, bat egiten duten kooperatiben administratzaileek ez dute eragozpenik jarriko proiektua onartzeko edo azkendutako kooperatibetako bazkideek kooperatiba berrian edo irenslean duten partaidetza-zatia nabarmen aldatzeko; beraz, ez dute horren kontrako egintzarik gauzatuko, eta ez dute horren kontrako kontraturik sinatuko.

4. Proiektua bertan behera geratuko da, baldin eta hura onartu eta sei hilabetera onartzen ez badute prozesuan parte hartzen duten kooperatiba guztiek.

82. artikulua. Bat-egiteari buruzko informazioa

Bat-egitea onartu behar duen batzar orokorreko deialdia egitean, honako dokumentu

hauek jarri beharko dira bazkideen eskura sozietatearen egoitzan:

- a) Bat-egitearen proiektua.
- b) Bat-egitearen onurak eta ondorioak azaltzen dituzten txostenak, kooperatiba bakoitzaren administratzaileek idatziak.
- c) Bat-egitean parte hartzen duten kooperatiben urteko kontuak, azken hiru ekitaldietakoak, eta, hala badagokio, kudeaketa-txostenak eta kontu-auditoreenak.
- d) Kooperatiba bakoitzaren bat-egitearen balantzea, onartu den azken urteko balantzeaz bestelakoa baldin bada balantze hori. Azken urtean onartutako balantzea jo ahal izango da bat-egitearen balantzetzat, baldin eta bat-egitearen onarpenaren aurreko sei hilabeteren barruan itxi bada.
- e) Kooperatiba berriaren estatutu-proiektua edo kooperatiba irenslearen estatutuetan sartu beharreko aldaketak jasotzen dituen testu osoa.
- f) Bat-egitean parte hartzen duten kooperatiba guztietan indarrean dauden estatutuak.
- g) Bat-egitean parte hartzen duten sozietateetako administratzaileak pertsona fisikoak badira, zein diren haien izen-abizenak eta adina; pertsona juridikoak izanez gero, berriz, zein den administratzaileen nazionalitatea eta egoitza, eta zer egunetatik aurrera betetzen duten kargua. Beste administratzaile batzuk proposatzen badira bat-egitearen ostean administratzaile izateko, administratzaileei buruz adierazitako datu berberak.

83. artikulua. Bat-egiteari buruzko erabakia

1. Bat-egitean parte hartzen duten kooperatiba guztietako batzar orokorrek hartu beharko dute bat-egiteari buruzko erabakia, bat-egiteari buruzko proiektuarekin bat etorritz.
2. Estatutuak aldatzeko legeetan eta estatutuetan bertan ezarrita dauden arauak aintzat harturik, batzar orokorra egiteko deialdian azaldu beharko da bat-egitearen proiektua gordailutu dela Euskadiko Kooperatiba Erregistroan, eta bazkide guztiek eskubidea dutela sozietatearen egoitzan aztertzeko aurreko artikuluan adierazitako dokumentu guztiak, baita dokumentu horien testu osoa eman edo doan helaraz diezaieten ere.
3. Bat-egitearen erabakia 38. artikuluko 2. zenbakian aurreikusitako gehiengoak onartu beharko du, eta erabaki horrek ezin izango du aldatu lehendik hitzartuta dagoen bat-egitearen proiektua.

4. Bat-egitearen erabakian, kooperatiba berri bat eratzeko legez aurreikusten diren aipamenak ere jaso beharko dira; kooperatiba irensleen kasuan, berriz, zer aldaketa egin behar diren estatutuak onartzeko.

5. Prozesu horretan parte hartzen duten kooperatibetako batzar orokorrek proiektua onartuz gero, kooperatiba horiek behartuta egongo dira bat-egitearen prozedurarekin jarraitzeko.

6. Behin kooperatibek bat-egiteari buruzko erabakia hartu eta gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erabaki hori; era berean, zabalkunde handiko bi egunkaritan ere argitaratu beharko da: zer lurralde historikotan dauden bat-egitean parte hartzen duten kooperatiba guztien sozietate-egoitzak, lurralde historiko horietan zabalkunde handia duten bi egunkaritan.

84. artikulua. Bazkidearen eskubidea kooperatiba uzteko

1. Bat-egitean parte hartzen duten kooperatibetako bazkide guztiek eskubidea izango dute kooperatiba uzteko, baldin eta bat-egitearen kontrako botoa ematen badute, edo, batzarrera joan ez arren, bat-egitearen kontra azaltzen badira eta desadostasun horren berri ematen badiete administratzaileei, idazki bidez, berrogei eguneko epean, bat-egiteari buruzko azken iragarkia argitaratzen denetik aurrera kontaturik.

2. Eskubide hori baliatuz gero, arrazoitutzat joko da bazkidearen baja. Bat-egitearen ondorioz kooperatiba azkentzen bada, kooperatiba berriaren edo irenslearen betebeharra izango da bazkideei ekarpenak itzultzea.

85. artikulua. Hartzekodunen aurkajartze-eskubidea

1. Kooperatibek bat egiteko, hilabete igaro beharko da, 83. artikuluko 6. zenbakian aurreikusitako azken iragarkia jartzen denetik aurrera kontaturik. Epealdi horretan zehar, bat-egitean parte hartzen duten kooperatibetakoren baten hartzekodunek idatziz azaltzen badira bat-egitearen kontra, kooperatibak ezin izango dira batu harik eta erabat likidatu arte hartzekodun horiekin dituzten kredituak, edo zorrak dituen sozietateak edo bat-egitearen ondorioz sortzen den kooperatibak nahikoa berme eskaini arte.

2. Hartzekodunek ezingo diote aurka egin ordainketari, nahiz eta epeak amaitu gabe egon.

3. Bat-egiteari buruzko erabakiaren iragarkian, espresuki aipatu beharko da

hartzekodunek aurkajartze-eskubide hori dutela.

86. artikulua. Bat-egitearen eskritura eta inskripzioa

1. Eskritura publiko bakar batean eratuko dira bat-egiteari buruzko erabakiak, eta eskritura horretan azalduko dira: batetik, bat-egitearen erabakia, batzen diren kooperatiben batzar orokorrek hartzen dutena, eta, bestetik, azkentzen diren kooperatiben bat-egitearen balantzeak.

2. Kooperatibek bat egitearen ondorioz kooperatiba berri bat eratuz gero, legez eratze aurreikusten diren aipamenak ere jaso beharko dira eskrituran. Kooperatiba batek beste bat irentsiz gero, kooperatiba irenseak zer aldatzen duen estatutuetan, aldaketa horiek jaso beharko dituzte eskriturek.

3. Bat-egitea eraginkorra izan dadin, ezinbestekoa izango da kooperatiba berria inskribatzea, edo, irenste-prozesu bat izan bada, kooperatiba irentsi dela inskribatzea. Bat-egitearen edo irenstearen ondorioz sortzen den eratze-eskritura Euskadiko Kooperatiba Erregistroan behin inskribatu eta gero deuseztatuko dira azkentzen diren kooperatiben erregistro-idazpenak.

87. artikulua. Bat-egite bereziak

1. Lege-aginduren batek espresuki debekatu ezean, kooperatibek bat egin ahal izango dute sozietate zibilekin, merkataritza-sozietateekin edo bestelako entitateekin; kooperatibak entitate edo sozietate horiek irentsi ahal izango ditu, edo sozietate berri bat eratu ahal izango da. Bestelako entitate batek kooperatiba bat irentsi eta harekin bat egiten duen kasuan, Lege honen 89.4 artikuluan transformazioari buruz erregulatutakoa aplikatuko da, artikulua horretan aipatzen diren funtsei dagokienez.

Horrelako bat-egiteetan, bat egiten duten sozietateen arauak aplikatu beharko dira.

2. Aurreko zenbakian ezarritakoa beteko da nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek eta nekazaritzako transformazio-kooperatibek bat egiteko.

88. artikulua. Kooperatiba zatitzea

1. Honela zatitu daitezke kooperatibak:

a) Azkenduta, aurretiko likidaziorik gabe. Ondarea bi zatitan edo gehiagotan

bereiziko da, eta osorik bideratuko da kooperatiba eratu berri batera edo batzuetara edo lehenagotik eratuta zegoen edo eratuta zeuden beste batzuetara. Bazkideak ere kooperatiba horien artean banatuko dira, eta kooperatiba horiei adskribatuko zaizkie.

- b) Kooperatibako bazkideak eta ondarearen zati bat edo batzuk bananduta, baina kooperatiba bera azkendu gabe, eta berria den edo lehenagotik eratuta zegoen beste kooperatiba batera edo batzuetara edo beste entitate batzuetara adskribatuta bazkideak.
- c) Kooperatibako bazkideak eta ondarearen zati bat edo batzuk bananduta, baina kooperatiba bera azkendu gabe, eta berria den edo lehenagotik eratuta zegoen beste kooperatiba batera edo batzuetara adskribatuta bazkideak.

2. Parte hartzen duten entitateen administratzaileek hitzartutako zatitze-proiektuak proposamen bat jaso beharko du, zehazten duena zein ondare-zati eta, hala badagokio, zenbat bazkide eskualdatuko diren entitate irensleetara edo prozesu horren ondorioz sortzen diren entitateetara.

3. Entitate onuradunak ez badu betetzen zatiketaren ondorioz hartu duen betebeharren bat, gainerako entitate onuradunek izango dute horren gaineko erantzukizun solidarioa, horietatik bakoitzari zatiketan egotzi zaion aktibo garbiaren zenbatekoraino. Zatitzearen ondorioz bereizitako sozietatea desagertzen ez bada, zatitutako sozietateak berak izango du betebeharraren guztiaren erantzukizuna.

4. Kooperatibek bat egiteko aplikatzen diren arau berak aplikatuko dira haiek zatitzeko, aurreko zenbakietan azaltzen diren salbuespenekin; kooperatibak zatitzeko prozeduran parte hartzen duten kooperatibetako bazkide eta hartzekodunek kooperatibek bat egitean izaten dituzten eskubide berak baliatu ahal izango dituzte.

5. Kooperatibaren ondarea edo bazkideak zatitzen direnean kooperatiba ez den entitate baten alde, eta, gainera, zatitzearen ondorioz erabat edo partzialki eskualdatzen badira lege honen 89.4 artikuluan transformaziorako aipatzen diren funtsak, kooperatibaren balantzearen pasiboan erregistratuak izan direnak, artikulua horretan aurreikusitako erregelak aplikatuko dira.

X. KAPITULUA

TRANSFORMAZIOA

89. artikulua. Kooperatiba transformatzea

1. Kooperatibak transformatu, eta sozietate zibil edo merkataritza-sozietate bihur daitezke, betiere betekizun hauek betetzen badira:

- a) Transformazioa bakarrik egin ahal izango da administratzaileen ustez enpresen premietarako sozietate-konponbiderik ez dagoenean kooperatibei buruzko sistema juridikoan; halakoetan, administratzaileek txosten bat egin beharko dute. Txosten hori transformazioaren eskritura publikoan txertatuko da, eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari jakinaraziko zaio, hurrengo b) letran aipatzen den erabakia hartu baino lehen.
- b) Batzar orokorraren erabakia beharko da, espresua eta aldekoa. Hori erabakitzeak, estatutuak aldatzeko dauden betekizun berak bete beharko dira.
- c) Batzarraren erabaki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta hedapen handiko bi egunkaritan ere bai: zer lurralde historikotan duen kooperatibak egoitza, lurralde historiko horretako bi egunkaritan.
- d) Transformazioaren eskritura publikoak hautatzen den sozietate-mota eratzeak legeak eta arauak aurreikusten diren aipamen guztiak bilduko ditu, eta lege honetan ezarritako guztia errespetatu beharko du. Eskritura horri, behar izanez gero, aditu independenteek sozietate-ondare ez-diruzkoari buruz egiten duten txostena erantsiko zaio, merkataritza-legeriak aurreikusten duena.
- e) Eskritura publiko hori, lehenengo Euskadiko Kooperatiba Erregistroan aurkeztu beharko da, dagokion baja inskribatzeko; gero, hala badagokio, merkataritza-erregistroan edo erregistro eskudunean ere aurkeztu beharko da, entitateak hartzen duen forma hartzen duela, haren lehenengo inskripzioa egiteko. Eskriturarekin batera, balantzea aurkeztu beharko da, transformazio-erabakia hartu zen egunaren bezperan itxi zena; bestela, azken ekitaldia amaitzerakoan itxitako balantzea, baldin eta sei hilabete baino gehiago igaro ez badira azken ekitaldia itxi zenetik, hura sozietatearen egoitzan aurkezten bada eta bazkideek aztertzeak moduan jartzen bada batzar orokorreko deialdia egiten den egun beretik aurrera.
- f) Kooperatibaren transformazioa ezin izango da inskribatu harik eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan egiaztatzen den arte ezen bete dela hurrengo 4. paragrafoan erregulatutakoa lege honen 98. 2d) artikuluan xedatutakoari dagokionez.

Halaber, zerrenda batean jasoko da zein bazkide baliatu diren kooperatiba uzteko eskubideak, zer kapital ordezkatzeko duten bazkide horiek, eta zein den azken balantzea, administratzaileek egin eta eskritura egilesten den egunaren bezperan itxia.

2. Kooperatiba transformatu arren, ez da aldatuko haren nortasun juridikoa, sozietate

berriak nortasun juridiko berari eutsiko baitio.

3. Bazkideek kooperatiba uzteko eskubidea izango dute, baldin eta batzarrean ezezko botoa ematen badute, edo, batzarrean azaldu ez arren, bat ez badatoz eta hori adierazten badiete administratzaileei, idazki bidez, berrogei eguneko epean, erabakiaren azken iragarkia argitaratzen denetik aurrera kontaturik. Bazkide horiek eskubidea izango dute kapitalari egindako ekarpenak itzul dakizkien, transformatze-erabakiaren egunetik estatutuek zehazten duten egunera bitartean edo batzarrak erabakitzen duen epean, baina 66. artikuluan aurreikusitako epea luzatu gabe. Atzeratutako diru-kopuruengatik dagozkien legezko interesak ere jasoko dituzte.

4. Nahitaezko erreserba-funtsaren dotazioen balioa eta, hala badagokio, borondatezko erreserba-funtsak, estatutuetan izaera banaezina dutenak eta batzar orokorrak izaera horrekin erabaki dituenak, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarriko dira. Nolanahi ere, ez dira Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarriko aplikazio eta helmuga zehatz bat ezarri zaizkien borondatezko erreserba-funtsak.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarri beharreko funtsen balioa kalkulatzeko, haien balio nominaletik konpentsatu gabe dauden galerak kendu beharko dira. Batzar orokorrak onartutako transformazio-balantzean agertzen dira galera horiek.

Nolanahi ere, aplikatu beharreko legeriaren arabera aditu independente baten txostena aurkeztu behar bada eta sozietate berriaren balantzean aktiboek izandako minusbalioa erregistratu behar bada, minusbalio hori Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarritako funtsen balioari aplikatuko zaio, funts horiek ondare garbi osoaren gainean duten proportzioaren arabera.

Estatutuetan aurreikusitako xedeetarako erabiliko da kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena, eta , halakorik ezean, lege honen 98.2 a) artikuluan kooperatibaren likidazio-kasurako ezartzen den xederako.

5. Kooperatiba transformatzea onartzerakoan, batzar orokorrak entitate berri horren partaidetza ekonomiko bihurtu ahal izango ditu sozietate-kapitalari egindako ekarpenak, bazkide bakoitzak kooperatiban jarri duen kapitalaren arabera, edo kooperatiban duen boto-eskubidearen arabera, edo bi irizpide horiek konbinaturik.

90. artikulua. Kooperatiba bihurtzea

1. Lege-aginduren batek espresuki debekatu ezean, kooperatibak ez diren sozietate zibilak, merkataritza-sozietateak, elkarteak, taldeak edo bestelako entitate-motak lege honetan erregulatzen diren kooperatiba-motetako bat bihurtu ahal izango dira.

2. Batzar orokorrak erabakiko du kooperatiba bihur daitekeen ala ez; bestela, sozietatearen borondatea adierazten duen sistema baliokide batek, aplikatu beharreko legeriak ezarritako gehiengoarekin. Kooperatiba bihurtutakoaren nortasun juridikoak bere hartan jarraituko du, eta hala adieraziko da eskritura publikoan, non ezinbestez jasoko baitira kooperatiba bat eratzeke lege honetan aurreikusten diren aipamen guztiak.

3. Transformazioaren eskritura publikoa inskribatzeko, merkataritza-erregistroan aurkeztuko da, eta, hala badagokio, sozietate-ondare ez-diruzkoari buruz aditu independenteek egindako txostena erantsiko zaio. Eskritura hori, hala badagokio, bidezko diren beste erregistro guztietan ere aurkeztuko da; nolanahi ere, beti aurkeztu beharko da Euskadiko Kooperatiba Erregistroan, transformazio-erabakiaren egunaren bezperan itxitako balantzearekin batera.

4. Kooperatiba bihurtzeak ez du aldatzen transformatutako entitateko bazkideek lehendik zuten erantzukizun-araubidea, kooperatiba bihurtu aurretik sozietateak zituen zorren ondorioa dena, salbu eta hartzekodunek espresuki onartzen dutenean transformazio hori.

XI. KAPITULUA

KOOPERATIBAK DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

91. artikulua. Desegite-arrazoiak

Honako hauek dira kooperatibak desegiteko arrazoiak:

1. Estatutuetan finkatutako epemuga betetzea.
2. Sozietatearen helburua betetzea, edo argi eta garbi ikustea ezin dela hura bete.
3. Bi urtetan jarraian, sozietatearen organoak geldirik edo jarduerarik gabe geratzea, edo, arrazoirik gabe, kooperatiba-jarduera etetea.
4. Kooperatiba eratzeke lege eskatzen den gutxienekotik behera murriztea bazkide-kopurua, baldin eta murrizketa horrek hamabi hilabete baino gehiago irauten badu.
5. Estatutuetan ezartzen den gutxienekotik behera murriztea sozietatearen kapitala, baldin eta hamabi hilabete edo gehiago irauten badu murrizketa horrek.

6. Kooperatiben bat-egitea edo erabateko zatiketa.
7. Kooperatibaren likidazio-fasea irekitzea konkurtso-prozeduran.
8. Batzar orokorrak desegite-erabaki hori hartzea, 38. artikuluko 2. zenbakian ezarritako gehiengoaren erabakiz.
9. Legeetan edo sozietatearen estatutuetan ezarritako beste edozein arrazoi.

92. artikulua. Desegiteko arrazoen eraginkortasuna

1. Finkaturiko aldia amaitzeak erabateko ondorioak izango ditu, salbu eta batzar orokorrak espresuki luzatzen badu epe hori 38. artikuluko 2. zenbakiko gehiengoaren bidez, eta luzapen hori Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatzen bada. Epealdia luzatzea erabakitzen bada, horrek bide emango du: batetik, bazkidearen baja arrazoitutzat jotzeko, baldin eta hark kooperatiba uztea erabakitzen badu, eta, bestetik, 78.4. artikuluan aurreikusitako moduan onar dakion bazkideari eskubide hori.
2. Kooperatibak bestelako arrazoi batengatik desegiteko, ezinbestekoa izango da batzar orokorraren erabakia, ohiko gehiengoaren bidez hartua, salbu eta aurreko artikuluko 6. eta 8. puntuetan aurreikusitako kasuetan. Halakoetan, administratzaileek batzar orokorreko deialdia egin beharko dute bi hilabeteren epean. Zaintza-batzordeak edo edozein bazkidek eskatu ahal izango die administratzaileei deialdia egin dezatela.
3. Administratzaileek eskatu beharko dute kooperatiba judizialki desegiteko, baldin eta batzar-deirik egiten ez bada, batzarrik egiten ez bada estatutuetan ezarritako epean edo, batzarra egin arren, ezin bada desegiteko erabaki, edo kooperatiba ez desegitea erabakitzen bada. Halakoetan, edozein interesdunek ere eskatu ahal izango du kooperatiba judizialki desegiteko. Nolanahi ere, interesdunak izango dira: Eusko Jaurlaritzan enplegu-eskumena duen saila, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, kooperatiben ordezkaritzarik handiena duten federazioak eta, hala badagokio, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa.
4. Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu beharko da desegiteko erabakia edo desegitea deklaratzeko duen ebazpen judiziala, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da, baita sozietatearen egoitza dagoen lurralde historikoko zabalkunde handiko egunkari batean ere.

5. Desegindako kooperatiba berriro jarri ahal izango da jardunean, desegiteko arrazoia desagertzen baldin bada eta bazkideen ekarpenak itzultzen hasi ez bada.

Horretarako, beharrezkoa izango da batzar orokorraren erabakia, 38. artikuluko 2. zenbakian aurreikusitako gehiengoaren bitartez hartua. Erabaki horrek ez du ondorerik sortuko harik eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu arte.

Konkurtsu-prozeduren kasuan, eta likidazio-fasea hasi ez bada, hitzarmen bat sinatu behar da hartzekodunekin kooperatiba berriro jartzeko jardunean.

93. artikulua. Likidazio-prozesua

1. Behin kooperatiba desegin ondoren, likidazioaldia irekiko da, bat-egiteetan edo erabateko zatitzeetan izan ezik. Kooperatibak bere nortasun juridikoari eutsiko dio, baina "likidazioaldian" hitza gehituko dio bere izenari aldi horretan.

2. Likidazioaldian, batzar orokorren araubidearen gaineko lege- eta estatutu-arauak beteko dira. Administratzaileek egingo dituzte batzar orokorren deialdiak, eta batzarburu jardungo dute batzarretan; batzar horietan, likidazioaren berri eman beharko dute, interes erkideari komeni zaiona erabakitzeko.

94. artikulua. Likidatzaileen izendapena

1. Batzar orokorrak likidatzaile bat edo gehiago hautatuko ditu, ahal bada kooperatibako bazkideen artetik, beti kopuru bakoitietan. Bidezko arrazoia adieraziz bazkideetako inork ez badu nahi likidatzaile izan, kooperatibako bazkide ez diren pertsona fisiko edo juridikoen artean izendatu beharko da. Likidatzaileei ordaindu ahal izango zaie.

Izendapenak ez du ondorerik sortuko hirugarren ez-bazkideen aurrean Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu arte.

2. Kooperatiba desegin, eta bi hilabeteren buruan inor ez bada likidatzaile izendatzen eta inork ez badu izendapen hori onartzen, administratzaileek sozietatearen egoitzako merkataritza-arloko epaitegiari eskatu beharko diote likidatzaileak izendatzeko, zeinak kooperatibako bazkide ez diren pertsonak izan ahalko baitira.

Era berean, edozein interesdunek ere egin ahal izango du eskaera hori, kontuan

hartuta zer zehazten den 92. artikulua 3 zenbakian.

95. artikulua. Funtzioak eskualdatzea

Behin kooperatiba desegin eta gero, administratzaileek ordezkatzeko eta kudeatzeko lanetan jarraituko dute, baina kalteak saihesteko baino ez, eta likidatzaileak izendatu bezain pronto utziko dute kargua; aurretik, dena den, kooperatibaren inbentarioa eta balantzea sinatu beharko dute likidatzaileekin batera, eta, balantze horretan, likidazio-egunaren erreferentzia egin.

Horrez gain, eta likidatzaileek argibiderik eskatzen badiete, administratzaileek informazio eta aurrekari guztien berri eman beharko diete likidazio-eragiketak egin ditzaten.

96. artikulua. Likidatzaileen funtzioak

1. Likidatzaileak hainbat direnean, batzar orokorrak erabakiko zu zer araubide aplikatuko den.

2. Likidatzaileek ahalmena izango dute likidazio-eragiketa guztiak egiteko. Esleitzen zaizkien funtzioak betetzeko, kooperatiba ordezkatzeko dute epaiketari eta epaiketatik kanpo, eta sozietatea behartuko dute hirugarren ez-bazkideen aurrean, kooperatibaren administrazio-organoa behartzen den modu berean.

Bereziki, eginkizun hauek izango dituzte:

- a) Aurreko artikuluan aipatzen diren inbentarioa eta hasierako balantzea sinatzea.
- b) Kooperatibaren liburu eta gutunak betetzea eta jagotea, eta ondareak osorik jarrai dezan zaintzea.
- c) Gauzatzeke dauden eragiketak bukatzea, eta kooperatiba likidatzeko egin beharreko zeregin guztiak egitea.
- d) Sozietatearen ondasunak besterentzea.
- e) Gauzatzeke dauden kredituak erreklamatzeko hirugarren ez-bazkideei edo bazkideei, eta kredituok jasotzea.
- f) Sozietatearen interesek hala eskatzen dutenean, transakzioak eta arbitrajeak hitzartzea.
- g) Hartzekodunei eta bazkideei ordaintzea eta kooperatibaren gerakinak transferitzea, 98. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3. Likidatzaileen funtzioak amaituko dira: likidazioa erabat burutzen denean, batzar orokorrak izendapena errebokatzen duenean edo, botoen ehuneko hogeik ordezkatzeko duen bazkide-talde batek bidezko arrazoiengatik eskatuta, ebazpen judiziala ematen denean. Likidatzaileen erantzukizuna kudeatzaileena adinakoa izango da.

97. artikulua. Likidazioan esku-hartzea

1 Likidazio-eragiketak fiskalizatzeko, bazkideen ehuneko hogeik sozietate-egoitzako merkataritza-arloko epaitegiari eskatu ahal izango dio kontu-hartzaile bat edo gehiago izendatzeko.

2. Likidatzen den ondarea handia denean, bazkide asko dagoenean edo likidazioa garrantzitsua denean beste edozein arrazoiengatik, Eusko Jaurlaritzan enplegu-eskumena duen sailburuak pertsona bat edo gehiago izendatu ahal izango ditu, ofizioz edo interesdunen eskariz, likidazioan esku hartzeko eta legeak nahiz sozietatearen estatutuak betearazteko.

3. Likidatzaileen egintzek ez dute baliorik izango, baldin eta kontu-hartzaileek parte hartzen ez badute.

98. artikulua. Sozietatearen ondasunak esleitzea

1. Sozietatearen ondasunak ezin izango dira esleitu sozietatearen zorrak erabat likidatu arte, zorrok kontsignatu arte edo muga-egunera iritsi ez diren kredituak ordaindu direla ziurtatu arte.

2. Zor horiek likidatu ondoren, hurrenkera honetan esleituko dira sozietatearen gainerako ondasunak:

- a) Kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarriko da.
- b) Bazkideek sozietatearen kapitalari egindako ekarpenak (hala badagokio, eguneratuak) bazkideei itzuliko zaizkie: lehenengo eta behin, borondatezkoak, eta gero, nahitaezkoak.
- c) Bazkideek borondatezko erreserba-funtsetan duten partaidetza: bazkideen artean banatuko da, hori egitea zilegi bada estatutuen arabera edo batzar orokorrak erabakitakoaren arabera, eta estatutuetan edo erabaki horretan ezarritako arauak

beteta. Halako araurik ez badago, bazkide bakoitzak azken bost urteetan kooperatibarekin egin dituen eragiketa, zerbitzu edo jardueren proportzio berean banatuko da, edo, bost urtetik beherako kooperatiben kasuan, haiek eratu zirenetik hasita.

- d) Nahitaezko erreserba-funtsetik edo kooperatibaren ondasun likidotik geratzen dena: halakorik geratzen bada, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren esku jarriko da, salbu bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibetarako 139. artikuluan xedatzen dena.

3. Harik eta 60.1.b artikuluan aurreikusitako ekarpenak itzuli arte, bajaran dauden titularrek eta kooperatibak itzulketa ukatu dien bazkideek sozietatearen ondasunen esleipenean parte hartuko dute, kooperatiba–heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenaren ostean, eta, sozietate-estatutuek kontrakorik aurreikusi ezean, gainerako ekarpenak itzuli baino lehenago.

99. artikulua. Azken balantzea

1. Sozietatearen zor guztiak likidatu ondoren, likidatzaileek sozietatearen ondare-egoerari buruzko azken balantzea egingo dute, eta sozietate-ondasunak banatzeko proiektua idatziko, aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Azken balantzea eta sozietatearen ondasunak banatzeko proiektua batzar orokorrean aurkeztuko da, onartzeko, zaintza–batzordeak txostena egin eta gero, edo, hala badagokio, kontu–auditoreek eta –hartzaileek irizpena eman eta gero. Onarpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta sozietatearen egoitzako lurralde historikoan hedapen handia duen egunkari batean argitaratuko da, eta iragarkian jaso beharko da ezen erabaki horiei buruzko dokumentazioa sozietatearen egoitzan dagoela interesdunek eskura dezaten.

3. Iragarki hori argitaratu, eta berrogei eguneko epea egongo da kaltetuta sentitzen diren bazkideek eta kredituak ordainduta edo bermatuta ikusi ez dituzten hartzekodunek erabakia aurkara dezaten, batzar orokorrak horretarako ezarritako prozeduraren arabera.

4. Ondoriozko aktiboa ezin izango da banatu aurkaratzeko epea igaro arte edo erreklamazioak epai irmoz ebatzi arte. Nolanahi ere, likidatzaileek ordainketak egin ahal izango dituzte sozietatearen ondasunen kontura, baldin eta, zenbatekoak direla eta, erreklamazioen emaitzen pentzutari ez badaude.

100. artikulua. Erregistroa ezerezte

Likidazioa amaitu eta sozietatearen ondasunak aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera banatu ostean, likidatzaileek Euskadiko Kooperatiba Erregistroari eskatuko

diote kooperatibaren idazpenak ezerezteko, eta sozietatearen trafikoari lotutako merkataritza-liburuak, korrespondentzia, dokumentazioa eta ziurtagiriak gordailutuko dituzte, eskritura bidez, zeinari azken balantzea eta likidazio-eragiketak erantsiko baitzaizkio, salbu eta eskritura horretan likidatzaileek egin beharra hartu dutenean liburu nahiz agiriak gordetzeko sei urteko epean, sozietatearen ezerezte-idazpenetik aurrera kontaturik, edo adierazi dutenean sozietateak ez duela halakorik.

101. artikulua. Kooperatibaren konkurtsoa

Kooperatibei konkurtso-legeria aplikatuko zaie, eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu beharko dira erregistro-publizitateari buruz ematen diren ebazpen judizial guztiak.

II. TITULUA

XEDAPEN BEREZIAK

I. KAPITULUA

KOOPERATIBA-MOTAK

I. ATALA

ARAU ERKIDEAK

102. artikulua. Sailkapena eta aplikatu beharreko araudia

1. Kooperatibak eratzeko, oinarritzat hartu beharko dira kapitulu honetan arautzen diren kooperatiba-motak. Nolanahi ere, bestelako kooperatibak ere eratu ahal izango dira, estatutu-bidez, baldin eta argi eta garbi zehazten bada zein den kooperatiba-jarduera eta kooperatiban parte hartu behar duten bazkideen posizio juridikoa. Kasu horretan, Erregistroak eta interesdunek zer entitate-motaren antz handiagoa izan, haien zat legez aurreikusitako araudi bera aplikatuko dute.

2. Hona zein den kooperatiba-mota edo tipo bakoitzari legez ezartzen zaion muga bakarra: ezin izango da dagokion motako bigarren mailako entitaterik eratu, baldin

eta bazkide kooperatzaile gehienak pertsona fisikoak izan behar badira nahitaez.

3. Kooperatiba bakoitzak, bestalde, bete beharko ditu, bai lege honetan bere burua eratzeko ezartzen diren printzipioak, bai dagokion motari aplikatu beharreko xedapen bereziak; dagokion atalean aurreikusten ez den guztirako, berriz, arau orokorrak bete beharko ditu.

2. ATALA

LAN ELKARTUKO KOOPERATIBAK

103. artikulua. Helburua eta arau orokorrak

1. Lan elkartuko kooperatibak dira batez ere pertsona fisikoak elkartzen dituztenak lanaldi osoan edo partzialean edozein jarduera ekonomiko edo profesional egiteko, eta elkarrekin hirugarren ez-bazkideentzako ondasunak edo zerbitzuak ekoizteko.

Bazkide langileek sozietate-harremana izango dute kooperatibarekin.

2. Bazkide langile izateko, gai izan behar da nork bere lana legez kontratatzeko. Atzerritarrak ere bazkide langile izan daitezke, betiere Espainiako Estatuan lan egiteko legeria espezifikoan aurreikusitakoaren arabera.

3. Bazkide langile izateari uzteak ekarriko du behin betiko uztea kooperatiban lan egiteari.

4. Lan elkartuko kooperatiben helburua da bazkideei enplegu bat ematea eta haiek lan egitea. Hala eta guztiz ere, kooperatibek besteren konturako kontratuak ere egin ahal izango dituzte, baina kontratu horiek inoiz ezin izango dute gainditu bazkide langileek urtean egiten dituzten orduen 100eko 30. Enpresako premia objektiboak direla-eta, portzentaje hori gainditu ahal izango da, baina hiru hilabeteetan baino ez. Epe hori luzatzeko, baimen arrazoitua eskatu beharko zaio Eusko Jaurlaritzan enplegu-arloko eskumena duen sailari. Sail horrek hamabost eguneko epean ebatzi beharko du, eta, isiltasuna gertatzen bada, baimena onartutzat joko da.

Portzentaje horretan ez dira zenbatuko:

a) Mendeko lan-zentroetan edo ataletan urtean egindako orduak, edo zentro edo

atal osagarrietan eginak.

Nolanahi ere, mendeko lan-zentroan edo lan-zentro osagarrian egindako lantzat joko da kooperatibek kontratatutako besteren konturako langileek egiten dutena, epe mugatu bateko zerbitzuak emateko bezeroen edo onuradunen lokaletan eta Administrazio Publikoarentzat. Halaber, era horretako lantzat joko dira kooperatibak obretan, muntaketa-lanetan edo jarduera laguntzaileetan egin behar dituen jarduerak, betiere jarduera horiek ez badira kooperatibaren xede sozial nagusia, eta, jarduerak berak hala eskatuta, kooperatibako lokaletatik kanpo egin behar badira, eta, horrez gain, kooperatibarekin duten harremana ez bada, argi eta garbi, egonkorra eta iraupen mugagabekoa.

- b) Legezko subrogazioaren ondorioz, kooperatibetan integratuta dauden besteren konturako langileek egiten duten lana, eta subrogazio horien mende dauden jardueretan hasten diren langileek egiten dutena.
- c) Eszedentzian edo aldi baterako ezintasun-egoeretan edo amatasun-, adopzio- edo harrera-egoeretan dauden edo familia eta lana uztartu nahi duten bazkide langileen edo soldatapeko langileen ordezkapenak egiten dituzten langileek egiten duten lana.
- d) Bazkide langile izateari esplizituki uko egiten dioten langileek egiten duten lana.
- e) Kooperatibak aldi baterako laneko enpresa gisa jarduten duenean, enpresa erabiltzaileen esanetara jartzeko kontratatzen diren langileak.
- f) Enplegu eta prestakuntza-programetan prestakuntza, orientazio eta lan-bitartekaritzako kooperatibetako ikasleek egiten duten lana.
- g) Praktika- eta prestakuntza-kontratuak dituzten langileak.
- h) Urritasun fisiko, psikiko edo zentzumenezkoak dituzten pertsonak egiten duten lana, gutxienez ehuneko hogeita hamahiruko urritasuna onartuta dutenena, salbu laneko zentro berezi modura onartu eta kalifikatu diren lan elkartuko kooperatibetan.
- i) Kooperatibak Administrazioarekin edo nagusiki administrazio publikoen partaidetza duten enpresekin, partzuergoekin, fundazioekin eta gainerako entitateekin duen kontratuaren ondorioz lanean hasten diren langileak.

Zenbaki honetan xedatutakoa gorabehera, zortzi bazkide langile baino gutxiago dituzten kooperatibek aukera izango dute gehienez ere bi langile enplegatzeko besteren konturako lan-kontratuaren bidez.

5. Estatutuetan finkatu ahal izango da zer prozedura bete behar den soldatapeko langileak bazkide izatera iristeko. Epemugarik gabeko kontratua izan eta kooperatiban urtebete baino gehiagoko antzinatasuna duen langileak ere bazkide langile modura onartu beharko dira, baldin eta artikulua honetan erregulatzen diren kooperatibek soldatapeko lanetarako ezarritako muga gainditzen badute; horrela sartzen diren bazkide langile berriok ez dute probaldirik egin beharko baldin eta gainerako baldintza guztiak betetzen badituzte eta hala eskatzen badute hurrengo hamabi hilabeteetan, eskubide horretaz baliatzeko aukera dutenetik aurrera.

Aukera horretaz baliatu ezin diren artean, bazkide izateko aukerarik ez duten soldatapekoek ere partaidetza izan ahal izango dute kooperatibaren irabazietan – irabazirik badago–, baina estatutuetan definitzen den portzentajearen. Portzentaje hori, berriz, inoiz ez da izango lanbide-maila bereko edo antzeko bazkideei onartutako kooperatiba-itzulkinaren ehuneko hogeita bosta baino txikiagoa. Soldatapeko langilearen baja gertatzen denean, batzar orokorrak onartutako azken kontuak hartu ahal izango dira oinarritzat partaidetza hori kalkulatzeko. Irabazietako partaidetza horrek lege honetako 70.5 artikuluan adierazten den izaera izango du.

6. Lan egiteagatik, bazkide langileek eskubidea dute aldian-aldian –hilabeteko epean, gehienez ere– lan-aurrerakinak jasotzeko, zeinak ez baitira lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak izango, urteko zenbatekotan.

7. Kooperatiba-mota hauen lan-zentroek eta haien bazkideek lan-arriskuen prebentzioari buruzko arau orokorrak bete beharko dituzte.

Halaber, 18 urte beteta ez dituzten bazkide langileek lan-arloko legeriak langileentzat ezarritako mugak izango dituzte gaueko lanak egiteko edo lan osasungaitz, nekagarri, kaltegarri edo arriskutsuak egiteko.

8. Gizarte Segurantzaren ondorioetarako, besteren konturako langileekin edo langile autonomoekin parekatuko dira bazkide langileak. Estatutuek aukeratuko dute zein araubide aplikatuko den, bata ala bestea.

Lan elkartuko kooperatibek estatutuetan erabakitzen badute beren bazkide langileak kasuan kasuko araubide bereziko langile autonomoekin parekatzea, bat etorritz Gizarte Segurantzaren Lege orokorraren testu bateginaren 14. artikuluekin – urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartua–, beren gain hartuko dute bazkideen kuotak eta betebeharrak ordaintzeko betebeharra, haiek kooperatibetan eta zerbitzaldian dauden bitartean, betiere horrela jasota badaukate estatutuetan, hargatik eragotzi gabe gizarte segurantzari dagokion araubide nagusia

bete beharra. Ordaindutako zenbatekoak ez dira aurrerakinaren parte izango, eta partida kengarritzat joko dira legearen 69. artikuluan definitutako soberakin garbia zehazteko orduan.

9. Kooperatiben uztailaren 16ko 27/1999 Legearen 86.2 artikulua arabera, lan elkartuko kooperatiba batek bertan behera uzten badu zerbitzu-kontrata edo administrazio-emakida bat berari egoztekoak ez diren arrazoiengatik eta beste enpresaburu bat egiten bada haren kargu, kontrata edo emakida horretan lanean diharduten bazkide langileen eskubideak izango dira: indarrean den araudiaren arabera, besteren konturako langileek kooperatiban dituzten eskubide berak.

Aurreko paragrafoan azaltzen den egoeran dauden langileak lehentasun-eskubidea izango dute, bost urtean, jatorrizko kooperatibara itzultzeko, baldin eta lanpostu berriak sortzen bada eta lanpostu berriak haien lanpostuak zuen eduki bera edo antzekoa badu.

104. artikulua. Probaldia

1. Estatutuek probaldia ezar dezakete langile bat bazkide gisa hartzeko baldintzatzat.

Probaldi hori ez da sei hilabete baino gehiago luzatuko. Nolanahi ere, probaldia hamazortzi hilabetera arte luza daiteke administratzaileek —edo batzar orokorrak, hala ezartzen bada espresuki estatutuetan— finkatutako lanpostuak, lanbide-eskakizun bereziak dituztenak, betetzeko. Lanpostu horiek ezin izango dira izan kooperatibako lanpostu guztien ehuneko hogeitabaino gehiago.

2. Probaldian, bazkide langilegaiek bazkideek dituzten eskubide eta betebeharrak izango dituzte, berezitasun hauekin:

- a) Nork bere kabuz ebatzi ahal izango du lan-harremana eten ala ez. Kooperatibako administratzaileek ere ahalmen bera izango dute.
- b) Ezin izango dira hautagai izan sozietatearen organoetako karguak betetzeko.
- c) Ez dute ez betebeharrak ez ahalmenik izango sozietatearen kapitalari ekarpenik egiteko, ezta sarrera-kuota ordaintzeko ere.
- d) Ez diete eragingo probaldian zehar kooperatibak izan ditzakeen galerek, eta ez dute eskubiderik izango kooperatiba-itzulkinak jasotzeko, nahiz eta eskubidea duten irabazien portzentaje bat kobratzeko, soldatapekoei onartzen zaienaren adinakoa izango dena.

3. Ez da probaldirik ezarriko baldin eta langileak probaldia egin eta gainditua badu baina ez bada bazkide bezala sartu harremana ebatzi zenetik.

105. artikulua. Lan-araubidea

1. Estatutuek edo barne-araubideko erregelamenduak ezarriko dute zein den bazkide langileen lan-araubideko oinarritzko esparrua; estatuturik edo erregelamendurik ez badago, batzar orokorrak ezarriko du oinarritzko esparru hori.

2. Araubide horretan erregulatu daitezke: lanaren antolaketa, lanaldiak, asteko atsedenaldia, jaiegunak, oporrak, baimenak, lanpostuen sailkapena, mugigarritasun funtzionala eta geografikoa, eszedentziak, lan-harreman kooperatiboa eten edo azkentzeko arrazoia eta, oro har, bazkide langileak egiten duen lanarekin zerikusia duten eskubide nahiz betebeharrei buruzko gaiak.

106. artikulua. Diziiplina-araubidea

1. Estatutuek, barne-araubideko erregelamenduak edo, halakorik ezean, batzar orokorrak finkatuko dute zein den bazkide langileen diziiplina-araubidearen oinarritzko esparrua.

2. Diziiplina-araubidean erregulatuko dira lana egitean gerta daitezkeen faltak, zehapenak, zehapen-ahalmenak delegatuta dituzten organoak eta pertsonak, baita zehapen-prozedurak ere, izapideak, errekursoak eta epeak adierazita. Edonola ere, beti errespetatuko dira bazkide espedientatuen defentsa-bermeak, hau da, deskargu-orriak eta aurretiazko nahitaezko entzunaldiak baliatzeko aukerak. Halaber, falta astunen eta oso astunen kasuan, eta, errekurtsorik jarri bada, errekurso-batzordeak edo, halakorik ez badago, batzar orokorrak, espedienteak berraztertuko dituzte.

3. Administrazioaileek baino ezin izango dute erabaki bazkide langileak kanporatzea; erabaki horren kontra, berriz, langileek errekurtsua jarri ahal izango diote errekurso-batzorderi edo, halakorik ez badago, batzar orokorrari, hamabost eguneko epean, erabakiaren jakinarazpena jasotzen duten egunetik aurrera kontaturik. Nahiz eta kanporatzeko erabaki horrek ez duen indarrik izango dagokion organoak berretsi arte edo errekurtsua aurkezteko epea amaitu arte, kooperatibak enplegurik gabe utzi ahal izango du bazkide langilea, zeinak bere eskubidea gordeko baitu, behin-behinean, dagozkion lan-aurrerakinak lanean jarraituko balu bezala jasotzeko.

107. artikulua. Auziak

1. Lan-arloko organo judizialek ebatziko dituzte lan elkartuko kooperatiben eta haien

bazkide langileen artean sustatzen diren auziak, kooperatibako bazkide izatearren sortzen direnak. Ondorioz, merkataritza-arloko epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende geratuko dira auziak, baldin eta zerikusirik ez badute lotura sozioraboral berezi horrekin eta beste edozein kooperatibaren eta haren bazkideen arteko auzien antzekoak badira.

2. Ondorio horietarako, honako gai hauek baino ez dute zerikusia lankide-kooperatibaren eta haren bazkide langileen arteko ohiko harremanarekin:

- a) lan-aurrerakinak edo haien prestazio osagarriak edo ordezkioak jasotzea, halakorik eska daitekeen neurrian.
- b) diziplina sozioraboraleko arauak hausteagatik ezarritako zehapenen aurkako errekursoak, arrazoi berberagatik jarritako kanporatze-zehapenen aurkako errekursoa barne.
- c) lan-eteteak eta eszedentziak
- d) Gizarte Segurantzari buruzko gaiak
- e) soldatapeko langile izatetik bazkide langile izatera pasatzea
- f) oro har, kooperatibako lanaren araubidearen barne-arauetan jatorria duten eskubide eta betebeharrak.

3. Edozein kasutan, halako auzigaiak ebazterakoan aplikatuko dira: lege hau, sozietatearen estatutuak eta kooperatibaren gainerako barne-erabakiak eta, oro har, kooperatibagintzaren printzipioak. Soilik halakorik ez badago, lan-legeriaren xedapenak aplikatuko dira, analogiaz.

3. ATALA

KONTSUMO-KOOPERATIBAK

108. artikulua. Xedea eta funtzio soziala

1. Kontsumo-kooperatiben xedea da ondasun nahiz zerbitzuak eskaintzea bazkideei eta haiekin bizi direnei, eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen bidezko eskubide eta interesak defendatzea eta sustatzea. Era honetako kooperatiben bazkide izan daitezke pertsona fisikoak eta azkenengo hartzaileak diren entitateak edo antolakundeak.

2. Estatutuek onartzen badute, kontsumo-kooperatibek bazkide ez diren pertsona edo entitateei ere eskaini ahal izango dizkiete ondasun edo zerbitzuak, beren lurralde-

eremuan.

4. ATALA

IRAKASKUNTZA-KOOPERATIBAK

109. artikulua. Xedea eta modalitateak

1. Irakaskuntza-kooperatibak dira irakaslanak egiten dituztenak jakintza edo prestakuntzako edozein adar, maila, etapa, ziklo, gradu eta modalitatetan. Eskolaz kanpoko ekintzak eta haiekin zerikusia dutenak ere egin ditzakete; era berean, eskola-zerbitzu osagarriak eman ditzakete, eta irakaslanak errazten dituzten zerbitzu guztiak.

2. Ikasleak, haien gurasoak edo haien legezko ordezkariak elkartzen dituztenean, lege honetan kontsumo-kooperatibetarako ezarritako arauak ez ezik, 36.2 artikulua ere aplikatu beharko zaie. Irakasleak eta ikastetxeko gainerako langileak ere sartu ahal izango dira kooperatiban, bai lan-bazkide modura, bai bazkide laguntzaile modura. Beste interesdun batzuen artean, ikasle ohiek ere izan dezakete azken posizio hori.

3. Irakaskuntza-kooperatibek irakasleak, irakasle ez diren langileak eta zerbitzu-langileak elkartzen dituztenean, 36.2 artikuluan adierazitakoa ez ezik, lege honetan lan elkartuko kooperatibentzat ezarritako arauak ere aplikatuko zaizkie, salbu eta 30. artikuluan erregulatutakoa; ikasleak, haien gurasoek edo legezko ordezkariak eta ikasle ohiek ere izan dezakete azken posizio hori, besteak beste.

4. Estatutuetan aurreikusiz gero, integrala edo sektoreartekoa izan daiteke irakaskuntza-kooperatiba; horretarako, batetik, gutxienez irakasle eta irakasle ez diren langile gehienak bildu behar dira, eta, bestetik, ikasle gehienak edo haien ordezkari gehienak; bestela, halako gehiengoetara iritsi gabe, mota horretako kooperatiba bat eratzeko estatutuetan eskatzen den bazkide-kopurura heldu beharko da talde bi horietako kideekin.

110. artikulua. Irakaskuntza-kooperatiba integralen berezitasunak

1. Aurreko artikuluko 4. zenbakian aipatzen diren kooperatibei dagokienez, 36.2 artikuluan jasotakoa ez ezik, honako hau ezar daiteke estatutuetan:

- a) Probaldiak jartzea kooperatiba osatzen duten bi taldeetako bazkideei; gehienez ere, ikasturte osokoak izango dira probaldiok.
 - b) Aurreikustea kooperatibako organo sozial guztiek gehiengo indartuz funtzionatuko dutela, organo bakoitza eratzeke behar den quorumaren hiru laurdenak gainditu gabe.
 - c) Oro har finkatzea, erabakiak hartzeko aurreikusten den gehiengo indartua lortzen ez den kasuetarako edo, horrek ardura ez duen kasuetarako, zenbat izango diren gehienez ere kontseilariak eta zenbat boto esleitu ahal izango zaizkion batzar orokorrean bazkide erabiltzaileen taldeari lan-bazkideekin gorde beharreko oreka gal ez dadin.
 - d) Araztea batzarretara joateko eta haietan hitz egiteko eskubideak, oreka zaintzeko neurriak jarrita edo jarri gabe; aurretik, bazkide erabiltzaileek biltzar berezi bat edo gehiago egin ditzakete hurrengo batzar orokorrean edo ondorengoetan izango dituzten ordezkariak hautatzeko; estatutuetan zehaztuko da zein epetan egin ahal izango diren batzar horiek.
 - e) Kide anitzeko organoetako lehendakariak txandakatzeko sistema bat aurreikustea; hala, kooperatiba osatzen duten bi taldeetako bazkideek aukera izango dute iraupen berbereko aldietan txandakatzeko kide anitzeko organo guztietako lehendakaritzetan.
 - f) Batzorde erabakitzaile bat antolatzea, osaera parekidea izango duena eta adituek parte hartzea onartuko duena, organoetan batzuetan gertatzen diren berdinketak ebazteko; horretarako, batzorde horri delegatu ahal izango zaio dagokion organoak adostu ezin dituen gaiak erabakitzeko ahalmena, berdin delarik zein den gaiaren edukia.
2. Estatutuek aukera ematen badute, gaiak aukeratuta edo denak batera bidali ahal izango dira batzorde horretara. Era berean, estatutuek arau berezi batzuk ezarri ahal izango dituzte bazkide laguntzaileek behar bezala parte har dezaten.
3. Dena delako kooperatiba hori berriro bideratzeko aurreko artikuluko 2. eta 3. zenbakietan araututako kooperatiba-motaren batera –sozietatea zatituta edo zatitu gabe–, estatutuetan ezarri ahal izango da zein jarraibide edo oinarritzko irizpide jarraitu behar diren erabakiak hartzeko bazkide-talde bat sistematikoki eta nabarmenki jartzen denean beste baten gainetik –sozietatearen organoak geldiarazten dituztelako edo organo horiei eragozpen handiak jartzen dizkietelako behin eta berriro– edo behar bezala oinarritutako beste arrazoi batzuk gertatzen direnean.

111. artikulua. Izaera edo onura publikoko bazkideak

1. Onura publikoko erakunde eta entitate publiko eta pribatuak, ongintzakoak barne, bazkide laguntzaile modura onartu ahal izango dituzte kooperatibetan. Bazkide erabiltzaile ere izan daitezke aldi berean, baldin eta ikasle adingabeak edo desgaitasunen bat dutenak zaintzen badituzte edo legez babesten badituzte, edo adinez nagusiak diren ikasleak ordezkatzeko, beren mendeko etxe, egoitza edo establezimenduetan hartu dituztelako eta espresuki eman dietelako ordezkatzeko ahalmena.

Estatutuetan, espresuki erregulatuko da, lege honen esparruan eta hezkuntza-arloan indarrean dauden xedapenen esparruan, zer ondorio duen aldi berean bazkide laguntzaile eta bazkide erabiltzaile izateak.

2. Halako entitate eta erakundeei, zuzenbidezko edozein tituluren bitartez, era guztietako ondare-ekarpenak egin ditzakete kooperatiba eratzeke edo egoki garatzeko; besteak beste, lursail, etxe eta bestelako ondasun higiezinak laga ahal izango dituzte, tresneriaz hornituak edo hornitu gabeak.

3. Estatutuek aurreikusiz gero, entitate-mailako bazkideei lekua gordeko zaie artezkaritza-kontseiluan, eta, bazkide erabiltzaile diren aldetik, ordezkatzeko dituzten ikasleen araberrako boto-kopurua izango dute batzar orokorretan, 37. artikulua 2. puntuko mugarik gabe.

5. ATALA

NEKAZARITZAKO ETA ELIKAGAIEN KOOPERATIBAK

112. artikulua. Xedea eta jarduerak

1. Nekazaritzako eta elikagaien kooperatibak dira nekazaritza-, basogintza- eta abelazkuntza-ustategien edo ustategi mistoen titularrak elkartzen dituztenak hornidurak, ekipoak eta zerbitzuak merkaturatzeko edo eskaintzeko edo honako hauek hobetzeko ekonomiaren eta gizartearen edozein arlotan: bazkideen ustategiak, haien elementu eta osagaiak barne; kooperatiba bera edo landa-ingurunekeo bizimodua, besteak beste, kooperatibak bere langileekin eskaintzen dituen zerbitzuak, dela nekazaritza-lanak egiteko, dela aipatutako ustategietan edo bazkideentzat eskaintzen dituen antzeko beste lan batzuk egiteko.

Instituzio hori arautzen duen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituen

titulartasun partekatuaren kasuan, titulartasun partekatuko entitatea bera izango da bazkidea, berariazko erregistroan inskribatuta. Dena den, hura osatzen duten bi lagunetatik edozeinek ordezkatu ahal izango du, erregistro horretako ziurtagiria aurkeztuta.

Era berean, titulartasun partekatua duen entitatearen bat izendatzen bada administrazio-organoko karguren bat betetzeko, entitate horrek ziurtagiri bidez jakinarazi beharko du kide bietako zeinek beteko dituen administrazio-organoaren berezko funtzioak. Betekizun hori bera bete beharko da, halaber, sozietate zibilen eta ondasun-erkidegoen kasuan eta nortasun juridikorik gabeko entitateen kasuan.

Bazkide izatera iritsi eta hala jarraitu ahal izateko, kooperatibako estatutuen bidez konpromiso bat eskatu ahal izango da sozietatearen xede den jardueran aritzeko, eta ez beste ezertan.

2. Xede soziala betetzeko, nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek, estatutuen arabera bereak dituzten jarduerak ez ezik, beste edozein ere egin dezakete, kooperatibak, bazkideen ustiategiak, haien elementuak edo landa-inguruneko bizimodua hobetzeko aurrebaldintza, ondorio, osagarri edo baliabide direnak, alderdi ekonomiko, tekniko, laneko, ekologiko eta sozialaren onerako diren neurrian.

113. Artikulua.- Hirugarren ez-bazkideekiko eragiketak.

1. Nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek –balioaniztunek zein espezializatuek– jardun ahal izango dute merkataritzan eta jarduera horrekin lotuta dauden jarduera guztietan, eta honako kasu hauetan kontsumitzaileengana ere heldu ahal izango dira zuzenean nekazaritza-produktuekin, nahiz eta produktuok ez izan kooperatibako ustiategietakoak edo bazkideenak:

- a) Ekitaldi ekonomiko bakoitzean, ehuneko bosteraingo; portzentaje hori banan-banan aplikatuko zaio hirugarren ez-bazkideen nekazaritza-produktuak erabiltzen dituen jarduera bakoitzari.
- b) Estatutuek aurreikusiz gero, ehuneko berrogeita bederatziraingo heldu ahal izango da gehieneko portzentajea ekitaldi ekonomiko bakoitzean.
- c) Kooperatibari egotzi ezin zaizkion arrazoiak daudenean, arestian adierazitako muga horiek gainditu ahal izango ditu kooperatibak, baldin eta lege honen 5. artikuluan aurreikusitako baimena lortzen badu.

Kooperatibak honako kasu hauetan azaldu ahal izango ditu estatutuetan muga horiek, aurreko apartatuan aurreikusitako baimena eskatu beharrik gabe: sektore-

araudi espezifikokoak daudenean edo haiek aplikatzeko beste batzuk eman direnean, kooperatibari aplikatu behar zaizkionak nekazaritza-elikagaiei loturiko jarduerengatik, eta arestian adierazitako mugak baino handiagoak ezartzen direnean hirugarren ez-bazkideekiko produktuarentako edo muga horiek handitzeko baimena ematen denean. Halakoetan, estatutuaren espresuki adierazi beharko da zer xedapenak ematen duen bide portzentaje hori aplikatzeko.

2. Beren ustiategiak edo bezeroenak hornitzeko lanetan ari diren nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek –berdin izanik jarduera hori bakartzat edo bereizitzat duten– hirugarren ez-bazkideei eskaini ahal izango dizkiete produktuak edo zerbitzuak, aurreko zenbakiko a) eta b) letretan ezarritako muga barruan eta antzeko kasuetan, hargatik eragotzi gabe kooperatiba-jardueraren ohiko geldikinak izanez gero kooperatibaz kanpoko edonori eskaintzea inolako mugarik gabe.

6. ATALA

ERKIDEGOAN USTIATZEKO KOOPERATIBAK

114. artikulua. Xedea eta eremua

1. Kooperatiba-mota hauek honako hauek elkartzen dituzte: batetik, nekazaritzan ustiatzeko izan daitezkeen ondasunak erabili eta aprobetxatzeko eskubideen titularrak, eskubide horiek kooperatibari lagatzen dizkietenak –han lanik egin gabe edo lan eginez–, eta, bestetik, entitatean lan egiten dutenak, erabiltze-eskubiderik laga ez arren. Haien xedea da lursailak eta bestelako ekoizpen-baliabideak denon eskura jartzea nekazaritzako enpresa edo ustiategi bakar bat sortu edo kudeatzeko eta enpresa edo ustiategi horretan batzeko kooperatibak dituen ondasunak, edozein tituluren ondorioz dituenak.

Xede soziala lortzera zuzendutako edozein jarduera garatu ahal izango dute, hala nekazaritzako produktuak zuzen lortzeko jarduerak, nola ustiategiaren atal, funtzio eta prozesu guztiak eratu eta hobetzeko prestakuntza-lanak egiteko jarduerak; era berean, bilketa- eta banaketa-lanak eta lan horiekin zerikusia dutenak eta osagarri direnak gauzatzeko jarduerak egin ahal izango dituzte, eta, oro har, berez nekazaritzakoak direnak edo jarduera horien aurreko edo osteko lanak eta lan osagarriak egiteko direnak ere bai.

2. Lege honek nekazaritzako eta elikagaien kooperatibetarako aurreikusten duena bete beharko da hirugarren ez-bazkideen produktuak merkaturatzera bideratutako kooperatiba-jarduerak gauzatzeko. Lan-kontratua duten langileak ezingo dira izan kooperatibako lan-bazkide guztien ehuneko hogeita hamar baino gehiago.

3. Kooperatiba hauetan, estatutuek mugatuko dute zein den kooperatibaren lurralde-eremua, hau da, non garatu behar duten lan-bazkideek kooperatiba-jarduera eta non kokatu behar diren ustiapena osatzen duten ondasun higiezin gehienak.

115. artikulua. Bazkideen araubidea

1. Inoiz, bazkide bera, lan-bazkide ez ezik, ondasunak erabili eta aprobetxatzeko eskubideen bazkide lagatzaile ere izan daiteke aldi berean; halakoetan, bazkideak boto bakarra baino ez du izango.

2. Lege honek lan elkartuko bazkide langileentzat ezartzen dituen arau berak aplikatuko zaizkie lan-bazkideei, atal honetako salbuespenak salbuespen.

3. Estatutuetan ezarriko da zenbat denbora eman behar duten bazkideek gutxienez, ondasunak erabili eta aprobetxatzeko eskubideen lagatzaile diren aldetik, kooperatiban (hamabost urte gehienez ere), eta zeintzuk diren titularren eskubideak kooperatibari eskualdatzeko arauak.

4. Errentariak eta gozamen-eskubideren baten gainerako titularrek laga ahal izango dute ondasunak erabili eta aprobetxatzeko eskubidea, kontratuak edo lege-tituluak dirauen artean gehienez ere, baina hori ez da arrazoitzat hartuko maizterra botatzeko edo kontratua desegiteko.

Horrelakoetan, kooperatibak titularra salbuetsi ahal izango du estatutuetan ezarritako gutxienerako epe hori betetzetik, baldin eta erabiltze- eta aprobetxatze-eskubideen titularrak konpromisoa hartzen badu dagokion lotura juridikoaren indarraldia amaitu arte lagako dituela eskubide horiek.

116. artikulua. Egitura ekonomikoa

1. Ekarpen-mota bi bereizi behar dira: benetako ondare-ekarpenak (diruzkoak izan ala ez), sozietatearen kapitala osatzen dutenak, eta bestelako ekarpenak, lana, zerbitzuak edo laguntza teknikoa emateko betebeharrean oinarritzen direnak eta ezin izango direnak izan sozietate-kapitalaren parte.

2. Tokian tokiko errenta- eta lansari-mailaren parekoak izango dira soldata-ordainsarien eta ondasunen erabilera lagatzeagatik sortzen diren errentak.

Bazkideek zer jarduera bete kooperatiban, halako itzulkinak egiaztatuko zaizkie, hain zuzen ere ondasunak erabiltzen uzteagatik kooperatibak ordaindu behar dituen errenten eta lan-aurrerakinen proportzio berekoak.

3. Itzulkinak aitortzeko erabiltzen diren irizpide berak erabiliko dira galerak egozteko ere, baina estatutuek edo batzar orokorrak zehaztuko dute zer bete behar den lan-bazkideei gutxieneko konpentsazio bat bermatzeko: eskualde berean pareko lanaren trukean ordaintzen denaren ehuneko hirurogeita hamarrekoa izango da, gutxienez, eta inoiz ere ez lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa.

4. Estatutuetan erregulatuko da zer prozedura erabili denen artean ustia daitezkeen ondasunak balioesteko, baita gozamenerako utzi diren eta sozietatean erkidegoan ustiatzeko planaren ondorio diren ondasunei eragin diezaieketen obren, hobekuntzen eta zortasunen araubidea ere. Era berean, arau batzuk ezarri ahal izango dira ondasunak erabiltzeko eta aprobetxatzeko eskubidea kooperatibari uzten dioten bazkideek galarazita izan dezaten ondasun horiek hirugarren ez-bazkideei eskualdatzea, bazkideek kooperatiban nahitaez egon behar duten denbora guztian, baldin eta, horren ondorioz, kooperatibak ezin baditu erabili eta aprobetxatu ondasun horiek.

7. ATALA

ETXEBIZITZA-KOOPERATIBAK

117. artikulua. Xedea, eragiketak eta eremua

1. Etxebizitza-kooperatiben xedea da: bazkideei etxebizitzak, lokalak, eraikinak eta eraikin osagarriak eta instalazioak eskaintzea; higiezin horiek eta denek erabiltzen dituzten elementu, zati edo eraikinak hobetzea, zaintzea eta kudeatzea; behar diren zerbitzuak antolatu eta ematea, eta etxebizitzak, lokalak eta eraikinak eta batzuei zein besteei zuzendutako instalazioak birgaitzea.

Nolanahi ere, kooperatibak berak garatu beharko du, zuzenean, xede soziala, gutxienez oinarrizko alderdietan. Hala eta guztiz ere, kooperatibak hirugarren ez-bazkideak kontratatu ahal izango ditu xedea lortzeko edo osatzeko. Kontratu horiek, berriz, legelari aholkulariaren aldeko irizpena jaso beharko dute.

2. Etxebizitza-kooperatibek lursailak erosi, zatikatu eta urbanizatu ahal izango dituzte,

eta, oro har, behar bezainbat jarduera eta lan egin ahal izango dituzte beren xede soziala lortzeko.

Era berean, kooperatibaren premiak bete eta gero, merkataritza-lokalak, lursailak, instalazioak eta eraikin osagarriak besterendu ahal izango dituzte, edo hirugarren ez-bazkideei errentan eman ahal izango dizkiete, betiere hala erabakitzen badu batzar orokorrak.

Horretaz gain, kooperatibak bazkide ez diren hirugarrenei ere besterendu ahal izango dizkie sustatzen dituen etxebizitzak, baldin eta hori egin behar badu kooperatiba-sustapena finantzatzeko, eta, betiere, behin bermatu ondoren bazkide guztiek dutela etxebizitzarako irispidea. Gainerako etxebizitzak bazkide ez diren hirugarrenei besterendu ahal izateko. Kasu horretan, sustatutako etxebizitzak ehuneko hirurogeita hamar, gutxienez, esleituko zaie bazkideei. Gainerako etxebizitzak hirugarren ez-bazkideei besterendu ahal izateko, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren homologazioa beharko da, premia hori dagoela egiaztatzen duena.

3. Etxebizitza-kooperatibek etxebizitza eta lokalak sustatu ahal izango dituzte – sustapen bakarra kooperatiba bakoitzeko– soilik beren jardute-eremuan, zeina estatutu bidez ezarriko baita. Bazkide gehienek eremu horretan bizi beharko dute, salbu eta kooperatiba gehienbat edo soil-soilik hirugarren adineko bazkideei zerbitzua emateko bada edo bigarren bizilekuak sustatzeko bada. Horrelako kasuetan, posta ziurtatu hartu-agiridunarekin egingo dira batzar orokorreko deialdiak, eta bazkideek horretarako adierazitako helbidera bidaliko dira gutunak.

118. artikulua. Esleitzeko edo lagatzeko araubidea

1. Zuzenbidez onarturiko edozein tituluren bidez esleitu edo laga ahal izango zaizkie bazkideei etxebizitza eta lokalen jabetza edo erabilpena, normalean erabiltzeko izan edo denboraldi baterako izan.

2. Kooperatiba desegin beharko da sustatzen dituen etxebizitza eta lokalen jabetza esleitu eta gero, baina, betiere, berme-epea eta ezkutuko akatsak direla-eta entitate sustatzaile modura erantzuteko aurreikusitako legezko epea igaro eta gero, salbu eta estatutuek edo entitate publikoekin sinatutako hitzarmenek epe luzeagoa ezartzen dutenean.

3. Kooperatibak higiezin bakar modura etxebizitza eta lokal multzo bat sustatzen duenean bazkideei lagatzeko, kooperatibaren jabetzakoa izango da higiezin-multzoa, jabari oso edo beste eskubide baten modura, epe mugagabe batean; bestela, estatutuetan hala erabakiz gero, epe mugatu batean.

Halakoetan, bazkide kooperatzaileek eskubidea izango dute kooperatibak esleitzen dizkien etxebizitzak eta lokalak erabiltzeko kooperatibaren estatutu eta barne-antolamenduko arauen arabera, zeinen bidez bazkideen eskubide eta betebeharrak arautuko baitira.

Erabilera lagatzeko kooperatiba-mota hauetan, kapital-ekarpen bat izendatu beharko da bazkide izateko, eta higiezina sustatzeko edo erosteko kostuen arabera izango da ekarpen horren gehieneko zenbatekoa. Bazkideek, gainera, aldian aldiko kuota batzuk ordaindu beharko dituzte, kooperatibako organoek finkatuak, mantentze- eta hobetze-lanetarako eta etxebizitzarako higiezinaren pareko kontzeptuetarako.

Bazkideren baten baja gertatzen bada, artezkaritza-kontseiluaren esku geratuko da haren erabiltze-eskubidea, eta kontseilu horrek bazkide berri bati esleitu dio. Erabiltze-eskubide hori, berriz, *mortis causa* eskualdatu ahal zaie hildako bazkidearen kausadunei, bazkidetzat onartu eta gero, betekizun orokorrekin bat etorri; horretarako, baina, haiek eskatu beharko dute hori egiteko, hiru hilabeteko epean. Bestela, eskubidea izango dute dagokien kreditua likidatzeko.

4.- Itzultzen den zenbatekoari lege honen 119. artikulua 6. zenbakiko bigarren eta hirugarren paragrafoan xedatutakoa aplikatu beharko zaio.

119. artikulua. Bazkideen araubidea

1. Etxebizitza-kooperatibak eratzeko, aurreko 117.1. artikulua aipatzen dituen bazkide guztien ehuneko berrogeita hamar beharko da gutxienez, sustatutako proiektuaren arabera; proiektu horrek, berriz, eratze-eskritura izan beharko du.

Ehuneko hori ez dute bete beharko honako helburu hauetakoren bat duten etxebizitza-kooperatibek:

- a) Euskal Autonomia Erkidegoak bultzatutako itunpeko sustapen bat egitea.
- b) Administrazio edo parte-hartze publikoa duen entitate batekin edo batzuekin hitzartutako sustapen bat egitea.
- c) Administrazio edo partaidetza publikoko entitate horien lursailak eskuratzea, besterentze zuzenaren zein lehiaketaren bidez.

2.- Eratzen den unean, eta lege honetako 19. artikuluko 1. zenbakiko hirugarren paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, bazkide laguntzaileak kontatu ahal izango dira. Dena den, etxebizitzaren esleipen- edo lagapen-hartzaile diren bazkideak gerora gehitu ahal izango dira, babes publikoko etxebizitzaren sustapenaren arloan indarrean

dauden arauekin bat.

Babes publikoko etxebizitzaren kooperatiba bat sustatzen duten bazkideek sustapena behin-behineko kalifikatu aurretik benetan ezinbestekoak diren erabakiak hartu ahal izango dituzte soil-soilik. Edonola ere, lege honetako 121.2 artikuluan adierazitako erabakiak une honetan hartuko dira: sustatutako proiektuaren esleipen- edo lagapen-hartzaile diren bazkideek kooperatiba eratzen dutenean.

3.- Pertsona fisikoak eta kooperatibak elkartuko dira, gehienbat, etxebizitza-kooperatibetan. Legelari aholkulariak aldeko irizpena eman, eta adierazi beharko du bazkide izateko baldintzak betetzen direla, salbu eta babes publikoko etxebizitzaren sustapenetan.

4.- Kooperatibak esleipen-hartzaileei eskatzen badie dirua aurreratzeko eraikuntzaren kontura, diru hori bermatuta egon beharko da, eta, horretarako, abal-kontratua edo aseguruia sinatu beharko da kalte-ordainak ziurtatzeko kontratua betetzen ez den kasuetan, Eraikintza arautzeko azaroaren 5eko 38/1999 Legean ezarritakoari jarraikiz.

5. Jabetza esleitzen den kooperatibetan, pertsona fisikoek ezin izango dute eskuratu bi etxebizitza baino gehiago kooperatiba-araubidean, salbu eta familia ugariei aitorturiko eskubideak dituztenean.

6.- Bazkideren baten baja gertatzen bada, eta estatutuek hala onartzen badute, 66. artikuluko 1. zenbakian finkaturiko kenkariak aplikatu ahal izango zaizkie bazkideak etxebizitzak eta lokalak ordaintzeko jarritako diru-kopuruei; gehienez ere, zenbaki horretan ezarritako portzentajeen ehuneko berrogeita hamarreko kenkariak aplikatu ahal izango zaizkie.

Bazkideari itzuli ahal izateko aurreko paragrafoan aipatzen diren diru-kopuruak eta sozietate-kapitalari egin dizkion ekarpenak, beharrezkoa izango da beste bazkide edo bazkide ez den hirugarren batek bereganatzea haren eskubide eta betebeharrak.

Etxebizitza edo lokala esleitu aurretik bazkideak kooperatiba uzten badu, jarraitu beharko du hura eraikitzeke hartutako konpromisoei aurre egiten, gehienez ere hura esleitzeko azken preziora iritsi arte. Hori guztia egin beharko du beste bazkide edo bazkide ez den hirugarren batek bereganatu arte esleituta dituen eskubideak eta betebeharrak, etxebizitza edo lokalarenak. Dena den, betebeharrak bete beharko ditu bazkide berri edo bazkide ez den hirugarren hori kooperatiban sartzen bada, baina

beste etxebizitza edo lokal bat esleitzen bazaio, ez berarena.

7. Etxebizitza-kooperatibetako bazkideen erantzukizuna mankomunatu sinplea da, eta haren gehieneko muga da: sozietatearen kapitalari egin behar dizkion ekarpenak, nahitaezkoak eta borondatezkoak, gehi eraikitze kontuan sartutako diru-kopuruak eta etxebizitza edo lokalak esleitzeko prezioa osatzeko egin behar dituen guztiak, salbu eta Administrazioak ezarritako gehieneko prezio bat duenean; izan ere, kasu horretan, prezio hori izango da erantzukizun-muga ondorio guztietarako, bai kooperatibaren aurrean, bai bazkide eta hirugarren ez-bazkideen aurrean.

120. artikulua. Artezkaritza-kontseilua

1. Estatutuek espresuki besterik onartu ezean, administratzaile-kargua etxebizitza-kooperatiba bakarrean bete ahal izango da.

Kargu horien titularrek ezin izango dute jaso inongo ordainsaririk beren funtzioa betetzeagatik, hargatik eragotzi gabe lan horretan izandako gastuen kalte-ordaina jasotzeko eskubidea.

2. Artezkaritza-kontseiluak behar beste ahalorde delegatu edo egiletsi ahal izango du xede soziala betetzen laguntzeko. Ahalorde horiek inoiz ere ez dira luzatuko xede sozialerako gauzatzen diren egintza edo kontratuak baino gehiago, ezta eraikitze eta finantzatzeko oinarritzko erabakiak eta hirugarren ez-bazkideekiko kontratuak baino gehiago ere. Ahalorde horiek Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatu beharko dira, legelari aholkulariak aldeko irizpena eman eta gero.

121. artikulua. Kontuak auditatzeko eta legelari aholkularia izateko betebeharra

1. Etxebizitza-kooperatibek kontu-auditoretza baten esku jarri beharko dituzte urteko kontuak, aztertu eta onartzeko ohiko batzar orokorrari aurkeztu baino lehenago. Lege-betebehar horrek indarra izango du bazkideei etxebizitzak edo lokalak esleitu edo laga arte.

2. Etxebizitza-kooperatibek legelari aholkulari bat izan beharko dute 117., 118. eta 119. artikuluek aipatzen dituzten erabakiei buruzko irizpenak emateko, baita honako erabaki hauei buruzkoak ere:

- a) Bazkideak onartzeari edo atxikitzeari buruz
- b) Bazkide ohiak ordezteko bazkide berriekin edo bazkide ez direnekin

- c) Gestorekiko kontratuak
- d) Eraikitze-kontratuak
- e) Etxebizitza-kooperatibaren estatutuetan finkatzen direnak

122. artikulua. Babes publikoko etxebizitzak sustatzea eta eskubideak eskualdatzea

1. Etxebizitza-kooperatibak babes publikoko etxebizitzak sustatzen dituenen mota horretako etxebizitzak erregulatzen dituen araudia bete beharko du beti.

2. Bazkideek etxebizitza edo lokalak *inter vivos* eskualdatzeko, errespetatu beharko dira Administrazioaren araubidean aurreikusten diren mugak eta lehentasunezko eskuratze-eskubideak; halakorik ez badago, mota horretako kooperatibei buruzko ordezkari araudi orokorra ezarriko da.

Aurreko paragrafoan jasotzen ez diren etxebizitza-kooperatibei dagokienez, sustapen bakoitzaren estatutuetan edo erregelamenduan zehaztuko da zer baldintza edo muga dauden bazkide baten etxebizitza edo lokalak besterenganatzeko edo errentan emateko, eta zer eskubide dituzten bazkidegaiek.

8. ATALA

FINANTZA-KOOPERATIBAK

123. artikulua. Kreditu-kooperatibak

1. Kreditu-kooperatiben xedea da bazkideen finantza-premia aktiboak eta pasiboak betetzea; horretarako, hirugarren ez-bazkideekin ere jardun dezakete, eragiketa-eremu orokorrean diharduen beste edozein kreditu-etxeri berez dagozkion jarduerak eta zerbitzuak egikaritzen.

2. Kreditu-kooperatibek Baserritarren Kutxa izena erabili ahal izango dute, baldin eta, beren estatutuen eta antolamenduaren ondorioz, batez ere landa-ingurunean eta ingurune horretako bizilagunei zerbitzua emateko sortzen badira.

3. Artikulu honetan erregulatzen diren entitateek mailegu-kooperatibei eta kreditu-

entitateei buruzko gainerako sektorearteko legeria beteko dute beren eraketa, egitura, funtzionamendua eta jarduera gauzatzeko.

4. Eusko Jaurlaritzan ogasun- eta finantza-eskumenak dituen sailak kreditu-kooperatiben gainean dituen funtzioak egikaritzeko ditu, indarrean dauden legeekin bat etorritik: proposatze-, arautze-, informatze- eta ikuskatze-funtzioak eta estatistika- eta diziplina-funtzioak.

124. artikulua. Aseguru-kooperatibak

1. Aseguru-kooperatiben xedea da aseguru-arlo guztietako aseguru-jarduerak egikaritzea; prima finkoko aseguruen entitate, prima aldakorreko entitate edo lan elkartuko entitate gisa antolatu daitezke lan egiteko.

2. Era honetako kooperatibek, aseguru-entitate diren aldetik, oinarritzko aseguru pribatuari buruzko araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen den araudia bete beharko dute, eta lege hau ere bai, adierazitako araudi bi horien osagarri gisa.

3. Aseguru-kooperatibei dagokienez, Eusko Jaurlaritzan ogasun- eta finantza-arloko eskumena daukan sailari dagokio aurreko artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitako funtzioak egikaritzea.

9. ATALA

OSASUN-KOOPERATIBAK

125. artikulua. Osasun-laguntzako kooperatibak

1. Aseguru-kooperatibak dira, eta bazkideen, asegurudunen edo haien onuradunen osasun-arloko arriskuak babestea da haien enpresa-jarduera.

2. Kooperatiba horien xedea bada bazkideen eta haien onuradunen osasun-arloko arriskuak babestea, prima finkoko aseguru-kooperatibetarako ezarritako arauak aplikatzeko zaizkie.

3. Kooperatiban osasun-arloko profesionalak eta arlo horretakoak ez diren langileak biltzen badira hirugarren ez-bazkide aseguratu batzuk artatzeko, lan elkartuko

aseguru-kooperatibetako araudia aplikatuko zaie.

126. artikulua. Osasun-instalazioetarako kooperatibak

1. Lege honen ondorioetarako osasun-kooperatibak dira, halaber, kooperatiba hauek: pertsona fisiko eta juridikoez osatzen direnak osasun-sorospena emateko bazkide onuradunei eta haien senideei eta, hala badagokio, beren langileei; horri begira, ospitale, klinika eta antzerakoak sustatu, tresneriaz hornitu, administratu, jagon eta kudeatzen dituzte.

2. Era honetako kooperatibei, ospitaleetako legeria ez ezik, kontsumo-kooperatiben araudia aplikatu behar zaie; araudi horri, hala badagokio, erregelamenduz finkatzen diren egokitzapenak egingo zaizkio, zerbitzuaren berezitasunak ikusita eta kooperatiben jardute-sektorea kontuan harturik.

10. ATALA

ZERBITZU-KOOPERATIBAK

127. artikulua. Profesionalen zerbitzu-kooperatibak

1. Profesionalen zerbitzu-kooperatibak dira: beren kontura lan egiten duten artisau, profesional edo artistek eratzen dituztenak hornidurak, zerbitzuak eta prestazioak eskaintzeko, edo beste zenbait jarduera egiten dituztenak bazkideen jarduerak egiten laguntzeko edo jarduera horien eta jarduera horien emaitzen alderdi ekonomikoak, teknikoak, lanekoak, ekologikoak antolakuntzakoak eta funtzionalak erraztu, bermatu edo osatzeko.

2. Bazkideak profesional liberalak edo artistak badira, artikulua honetan arautzen den kooperatiba-mota bat sortzeak ez du inolako eraginik izango dagokien proiektu eta lanei aplikatzen zaien betearazpen- eta erantzukizun-araubidean; izan ere, proiektu eta lanok zein lanbidetakoak diren, lanbide horretako arauak aplikatu beharko dira.

128. artikulua. Enpresen zerbitzu-kooperatibak

1. Enpresen zerbitzu-kooperatibak dira: aurreko artikuluko 1. zenbakian erregulatutako xede soziala izanik, arrantza-, industria-, merkataritza- edo zerbitzu-sektoreetako enpresaburu indibidualak edo enpresaburu-sozietateak elkartzen dituztenak, berdin delarik zein den haien forma juridikoa enpresa-funtzioak eta bazkideen ustiapenen jarduerak edo emaitzak errazteko, bermatzeko edo osatzeko.

2. Aurreko zenbakian aurreikusitakora bil daitezke ondasun- edo eskubide-erkidegoak, eta nortasun juridikorik gabeko bestelako entitateak, baldin eta eskubideak eta betebeharrak bereganatzeko gaitasuna badute eta nork bere kideetatik ordezkari bat izendatzen badute kooperatiban jardun dezan.

129. artikulua. Garraio-kooperatibak

1. Garraio-kooperatibak dira: xedetzat dutenak garraio-zerbitzuak antolatzea edo eskaintzea edo xede hori betetzen laguntzen duten jarduerak egitea.

2. Forma hauetakoren bat hartu ahal izango dute:

- a) Lan elkartuko garraio-kooperatiba edo, besterik gabe, garraio-kooperatiba: garraiolari, gidari edo bestelako langileak elkartzen dituzte, elkarrekin lan egin eta garraio-zerbitzuak emateko.

Lan elkartuko kooperatiben erregulazioa aplikatuko zaie garraio-kooperatibei; kooperatiba-mota horietan, bazkide langileak ez dira garraio-enpresen titular izango, eta ezin izango dute fakturatu lan-prestazioagatik. Bazkide horien baja gertatuz gero, dirutan itzuliko zaizkie egindako ekarpenak.

- b) Garraio-jarduerak gara ditzaketen garraio-enpresen titularrak elkartzen dituen garraio-kooperatiba, xede hau duena: bazkideen enpresa-jarduera erraztea, bazkideen ustiapenen hobekuntza ekonomikoa eta teknikoa lortzera bideratutako zerbitzuak eta hornidurak eskainiz edo bestelako eragiketak eginez.

130. artikulua. Erakundeen zerbitzu-kooperatibak

Korporazio eta organismo publikoek, fundazioek, sindikatuek eta era guztietako elkarteek era ditzakete erakundeen zerbitzu-kooperatibak, berdintasunez jokatuta, antolamendu- edo funtzio-arazo edo -premia guztiak ebazteko ezertan eragin gabe entitate bazkide bakoitzaren autonomian edo berezitasunetan.

131. artikulua. Arau osagarriak

1. Ezin izango da zerbitzu-kooperatibarik eratu lege honen arabera beste kooperatiba batzuenak diren sektoreetan jarduteko edo beste kooperatiba-mota batzuen helburu ekonomikoak lortzeko.

2. Estatutuetan zehaztuko da zein mailatako lankidetza eskatu ahal zaien bazkideei, noraino heltzen diren kooperatibari aitortzen zaizkion koordinazio-ahalmenak eta zer indar duten; halaber, estatutuetan ezarriko da ea kooperatibak parte hartu ahal duen ala ez bazkideen jarduera, enpresa edo ustiapenak finantzatzen.

3. Atal honetan arautzen diren kooperatiba-mota hauetan guztietan, zein sektoretan, jarduera profesionaletan edo adarretan lan egiten duten bazkideek edo zer izaera duten bazkideek, alor horretako terminoak sartu ahal izango dituzte kooperatibaren izenean.

11. ATALA

JUNIOR KOOPERATIBAK

132. artikulua. Junior kooperatibak

1. Ikasleek sustatzen dituzte junior kooperatibak, xede honekin: ikasleek praktikan jartzea matrikulatuta dauden ikastetxeetan bereganatzen dituzten trebetasunak edo jakintzak, jarduera ekonomikoak garatuz ondasunak ekoizteko edo zerbitzuak emateko.

2. Mugagabea izango da kooperatibaren iraupena. Nolanahi ere, bazkide guztietatik bik baino ez dutenean betetzen ikasle izateko betekizuna, junior kooperatiba-sozietate izateari utziko dio kooperatibak. Hori gertatzen denean, eta gehienez ere gertatu eta 30 eguneko epean, horren berri eman beharko zaio Euskadiko Kooperatiba Erregistroari, sailkapenaren ondorioetarako.

12. ATALA

GIZARTERATZE-KOOPERATIBAK

133. artikulua. Gizarteratze-kooperatibak

Batez ere, dibertsitate funtzional fisikoa, psikikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak eratuko dituzte gizarteratze-kooperatibak, eta lan elkartuan oinarritu ahal izango dira bazkideek egindako produktu eta zerbitzuak antolatu, bideratu eta

merkaturatzeko edo orokorrean edo espezifikoki kontsumitzen diren ondasun eta zerbitzuak eskaintzeko.

134. artikulua. Bazkideen araubidea

1. Edozein gizarte-zerbitzu ematen duten entitate publikoek parte hartu ahal izango dute, bazkide gisa, gizarteratze-kooperatibetan, dagokien ekarpena eginez eta entitate publikoen ordezkari bat izendatuz. Ordezkari horrek, kooperatibako gainerako bazkideekin batera, lan egingo du laguntza teknikoa, profesionala eta soziala emateko; sozietatearen organo guztietako bileretara joango da, eta botoa izango du haietan.

2. Gizarteratze-kooperatibek besteren konturako kontratuak egin ahal izango dituzte izaera bereko taldeekin, beste enpresa batzuek egiten dituzten baldintza beretan; dena den, kooperatiba hauei ez zaizkie aplikatuko lege honen 103. artikuluko 4. zenbakiko lehenengo paragrafoak langile horiei ezartzen dizkien mugak.

II. KAPITULUA

KOOPERATIBA INTEGRATZEA ETA TALDEKATZEA

I. ATALA

BIGARREN MAILAKO EDO MAILA HANDIAGOKO KOOPERATIBAK

135. artikulua. Xedea eta ezaugarriak

1. Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiben xedea da: kooperatibak kide modura dituen elkarten eta kidetasun horren ondorioz sortzen den taldearen jardura ekonomikoa osatzea, sustatzea, koordinatzea, indartzea edo integratzea, elkarten estatutuetan ezartzen diren nondik norako berekin edo neurri berean.

Estatutuetan jaso beharko da zein diren kooperatiba horren organoari esleituko zaizkion funtsezko ahalmenak, beharrezkoak direnak aipaturiko xede hori betetzeko. Ahalmen horiek xede sozialak dirauen artean jarraituko dute indarrean, eta bat egiten duten elkarteetako organoek ezin izango dute aztertu nola egikaritzen diren ahalmen horiek, hargatik eragotzi gabe bidezko gerta daitekeen babes judiziala.

Enpresak bateratzeko eratzen bada kooperatiba, haren estatutuetan zehaztuko da

zein diren enpresa-jarduera integratuan sartzen diren arloak, zein diren taldeko zuzendaritza bateratua zuzentzeko oinarriak eta zein diren taldearen ezaugarriak.

2. Estatutuetan arautuko da, gainera, elkartzen diren entitateek egiten dituzten proposamenetatik zein gai edo arlotakoak izango diren aholku soilak –ez-lotesleak– bigarren mailako edo mailako handiagoko kooperatibentzat. Horri buruzko zalantzarik izanez gero, ulertuko da bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiba horri transferitu zaizkiola xede sozialarekin zuzenean lotutako ahalmen guztiak, eta haren erabaki eta jarraibideek lehentasuna dutela taldeko entitate bakoitzaren erabakien gainetik.

136. artikulua. Bazkideen ahalmenak, bazkide bilakatzea eta bazkideen bajak

1. Sozietate hauetako eskubide osoko kide izan daitezke: maila beheagoko kooperatibak eta lan-bazkideak eta izaera publiko edo pribatuko entitate eta pertsona juridikoak, betiere interes edo premia berak badituzte eta estatutuak hori galarazten ez badu. Entitate horiek, guztira, ezin daitezke izan bigarren edo mailako handiagoko kooperatibaren boto guztien erdia baino gehiago. Estatutuetan, muga baxuago bat ezarri ahal izango da.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, halako kooperatibek bazkide laguntzaileak onartu ahal izango dituzte, lege honen 19.5 artikuluaaren arabera.

2. Artezkaritza-kontseiluak erabakiko du ea onartuko duen bazkide modura edozein pertsona juridiko; horretarako, kontseiluan diren kideen eta aurkeztu diren botoen bi heren lortu beharko da gutxienez, salbu eta estatutuetan bestelako gehiengoren bat aurreikusten denean. Estatutuek behin-behingo lotura-aldiak edo bi urtera arteko probaldiak arautu ahal izango dituzte.

3. Pertsona juridikoren batek bazkide izateari utzi nahi badio, eta artezkaritza-kontseiluak salbuespenik onartzen ez badio, aurreabisua aurkeztu beharko du urtebete lehenago. Kooperatibatik bereizi baino lehen, bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibarekin hitzartutako betebeharrak bete beharko ditu, edo, artezkaritza-kontseiluak hala erabakiz gero, kalteordaina eman beharko dio kooperatibari dirutan. Gainera, eta estatutuetan kontrakorik aurreikusi ezean, bereizitako elkartean baja hartu aurretik hartutako konpromisoak bete beharko ditu, bi urtean gehienez ere.

137. artikulua. Araubide ekonomikoa

1. Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiba baten sozietate-kapitalari egin beharreko nahitaezko ekarpenak zehazteko, kontuan izango da zer kooperatiba-jarduera duen hitzartuta bazkide bakoitzak kooperatibarekin, eta estatutuetan ezarriko da, edo bazkide-kopuruaren arabera, edo lege honen 61.1 artikuluan lehen mailako kooperatibetarako ezarritako irizpideen arabera.

2. Erreserba-funtsei eta, hala badagokio, kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpenari egotzi beharrekoak egotzi eta gero, estatutu bidez hitzartutako kooperatiba-jardueraren arabera banatuko dira emaitzak, irabazienak zein galerenak.

3. Estatutuek finkatuko dute zer irizpide edo moduluk definitzen duten kooperatiba-jarduera.

138. artikulua. Egitura organikoa eta boto-eskubidea

1. Zenbat bazkide pertsona juridikok duten botoa emateko eskubidea entitate sozial bakoitzean, hainbat bazkide pertsona juridikok izango du botoa emateko eskubidea batzar orokorrean –gutxieneko eta gehieneko mugak finkatu ahal izango dira–, eta, hala badagokio, lan-bazkideen ordezkariak ere izango dute botoa emateko eskubidea. Aldi berean, entitateen boto-eskubidea kooperatiba-jardueran duten partaidetzaren proportzio berekoa izango da, edo bazkide-kopuruaren proportzio berekoa. Kooperatiba–sozietatea ez den entitate baten botoak, berriz, ezin izango dira, inoiz, bazkideen botoak baino gehiago izan, lau bazkide baino gutxiago daudenean izan ezik.

2. Artezkaritza-kontseilu batek administratuko ditu bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibak, zeinek, estatutuek kontrakorik aurreikusi ezean, hamabost kide izango baititu gehienez ere; kontseilu horretan, entitate sozial guztiek izango dute ordezkariaren bat, zuzenean edo zeharka. Bazkide diren entitate horiek lege edo estatutuz ezartzen dena baino gehiago badira, boto gutxiaren dutenak beren artean elkartu ahal izango dira ordezkariak izendatzeko, baina zaindu beharko dute horren inguruan estatutuek edo barne-erregelamenduek aurreikusten dutena.

Kontseiluan izango den boto-eskubidea, berriz, kooperatiba-jardueraren proportzio berekoa edo kontseilariak ordezkatzeko dituzten entitateetako bazkideen proportzio berekoa izan daiteke, batzar orokorrak ezarritako mugarekin.

Estatutuetan aurreikusi ahal izango da artzarki hautatuek adituak izendatu ahal izango dituztela harik eta artzkaritza-kontseiluko kideen hereneraino iritsi arte; adituok kooperatibaren bateko kide izan daitezke, edo ez.

139. artikulua. Likidazioa

Bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiba bat desegiten eta likidatzen bada, bazkideen artean banatuko da soberako aktiboa, azken bost urteetan jasotako itzulkinen proportzio berean, edo, bizitza laburragoa izan duten kooperatibetan, eratze-unetik hasita jasoriko itzulkinen proportzio berean. Bestela, bazkide bakoitzak zer neurrian parte hartu duen kooperatiba-jardueran, proportzio berean; osterantzean, hala badagokio, taldean sartutako entitate bakoitzak kooperatiban duen bazkide-kopuruaren proportzio berean.

140. artikulua. Araudi osagarria

Atal honen aurreko artikuluetan aurreikusten ez den kasuetan, estatutuetan eta barne-araubideko erregelamenduan ezarritakoa bete beharko da; halakorik ez badago, berriz, lege honetan lehenengo mailako kooperatibetarako ezarritakoa bete beharko da, bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatiben izaerak eta funtzio espezifikoek uzten duten neurrian.

2. ATALA

LANKIDETZA EKONOMIKORAKO BESTE MODALITATE BATZUK

141. artikulua. Enpresa-taldeak

1. Aurreko atalean kooperatibak taldekatzeko araututako moduak gorabehera, edozein mota eta mailatako kooperatibek edozein motatako sozietate, elkarte, talde, kontsortzio eta enpresa-talde eratu ahal izango dute beren artean edo beste pertsona fisiko edo juridiko pribatu edo publiko batzuekin.

2. Era berean, xede soziala bete, garatu edo bermatzeko, aurreko zenbakian adierazitako edozein entitatetan eduki ahal izango dute partaidetza kooperatibek.

3. Artikulu honetan aurreikusitako eragiketak egiteko, kreditu- edo aseguru-kooperatibek aplikatu behar zaien araudia errespetatu beharko dute beste ezer baino lehen.

142. Kooperatiben arteko lankidetzak-akordioak

Kooperatibek lankidetza-akordioak sinatu ahal izango dituzte beste kooperatiba batzuekin, beren xede sozialak betetzeko. Akordio horien ondorioz, kooperatibek eta beren bazkideek hornidura-eragiketak eta produktu- zein zerbitzu-entregak egin ahal izango dituzte beraiekin akordioa sinatzen duten kooperatibekin. Eragiketa horiek kooperatiba-jardueratzat joko dira, kooperatibek beren bazkideekin egiten dituzten jarduerak bezala.

143. artikulua. Kooperatiba-taldeak

1. Lege honen ondorioetarako, kooperatiba-taldea da: edozein motatako kooperatiba-sozietate batzuek eta taldearen buru den entitateak osatutako multzoa, nahitaez bete beharreko ahalmenak gauzatzen dituen edo kooperatiba horiek nahitaez bete beharreko jarraibideak ematen dituen; ondorioz, aipatutako ahalmenen esparruan batasuna agertzen du erabakiak hartzeko orduan. Taldeak kooperatiba-printzipioen arabera jardun beharko du, lege honen 1.2 artikuluan aurreikusten denarekin bat.

2. Integrazio ekonomikoaren mailaren arabera, integrazio bidezko kooperatiba-taldeak edo lankidetza bidezko kooperatiba-taldeak izango dira kooperatiba-taldeak.

Integrazio-talde kooperatiboek bi betekizun hauek beteko dituzte:

- a) Kooperatiba-taldeak zuzendaritza nagusi bat izatea taldeko kooperatiba guztientzat.
- b) Ekonomia kudeatzeko ahalmenen zentralizazio-mailari esker, kooperatibek benetako batasun ekonomiko bat lortzea, nork bere nortasun juridikoa izan arren.

Horrela ez bada, kooperatiba-taldeak lankidetza-talde bat osatuko du.

3. Batasun ekonomikoa egoteko, ez da nahikoa izango zuzendaritza nagusi bat amankomunean izatea; honako egoera hauetakoren bat ere gertatu beharko da:

- a) Egitatezko harreman komertzialak, finantzarioak edo ondarezkoak egotea, taldeko entitateren baten mendekotasuna, benetakoa, dakartenak.
- b) Taldeko kooperatibek hirugarren ez-bazkideekin zuzenean egiten dituzten eragiketak direla-eta, erantzukizun solidarioko akordio bat izatea kanpoarekiko; betiere, eragiketa horiek iraunkorrak eta beharrezkoak —ez osagarriak— badira enpresa-jarduerarako.
- c) Konpromisoa izatea aldian-aldian baliabide-ekarpena egiteko nork bere

kooperatibaren emaitza-kontuen arabera, betiere egin beharreko ekarpenak kooperatiba bakoitzaren aurreko soberakin garbien ehuneko berrogeita hamar baino gehiago badira.

- d) Kooperatiba-taldeko bi sozietatek edo gehiagok harremanak izatea beren artean, eta, harreman horien bidez, kontuak finkatzeko betebeharra sortzea, Merkataritza Kodearen 42.1 eta 43. artikuluetan arautzen den bezala.

Kasu hauetakoren bat bakarrik gertatzen bazaie taldeko kooperatiba batzuei, kooperatiba-sozietate horiek baino ez dira izango integrazio-talde kooperatibo bateko kide.

4. Artikulu honetan kooperatiba-taldeentzat aurreikusten den araubidea eraginkorra izan dadin, araubide horretan aurreikusitako betekizunak bete behar dira.

Euskadiko Kooperatiba Erregistroan kooperatiba-sozietate bakoitzari dagokion orrian egingo da idatzoharra, kooperatiba talde batekoa dela edo taldetik bereizten dela adierazten duena.

Interesa duen kooperatibak eskatu beharko du idatzoharra egiteko, kooperatiba-talde batekoa dela edo taldetik bereizten dela adierazten duena. Inskripzio hori egin ez arren, agindu horrek erabateko indarra eta eraginkortasuna izango du.

5. Jarraibideak eman ahal izango dira kudeaketa, Administrazio edo gobernuko hainbat eremutarako; honetarako, besteak beste:

- a) Kooperatibetan, estatutu- eta erregelamendu-arauen oinarriak ezartzeko.
- b) Oinarri-entitateen artean, sozietate-harremanak ezartzeko.
- c) Aldian-aldean ekarpenak egiteko konpromisoak ezartzeko; ekarpen horiek kalkulatzeko, kontuan izango da norbere enpresaren bilakaera edo emaitza-kontua.

Nolanahi ere, taldearekin hartutako konpromiso orokorretan oinarritu beharko dira emandako jarraibideak edo bete beharreko ahalmenak; dena den, ezin izango dira inoiz exijitu baldin eta kooperatiba bat edo gehiago espresuki salbuetsi badira zenbait arau edo konpromiso betetzeko betebeharretik.

6. Kooperatiba-taldera sartzea onartzeko, oinarri-entitateen baten hasierako erabakia beharko da, entitate horren eskumen- eta funtzionamendu-arauen arabera hartua.

7. Taldearen aurrean norbereganatutako konpromiso orokorrak idatziz gauzatu behar

dira taldeburu den entitatearen estatutuetan, kooperatiba-sozietatea bada, edo beste kontratu-agiriren batean, halakoa ez bada, eskritura publikoaren bidez gauzatuta, eta idazki horietan nahitaez jaso behar dira honako hauek: kontratuaren iraupena, mugatua bada; kontratua aldatzeko prozedura; kooperatiba-sozietateren bat banatzeko prozedura, eta taldeburu den entitateari eman zaizkion ahalmenak bera horiek egikaritzeko. Taldeburu den entitatearen organo gorenaren erabakia beharko da, hala ezarri bada, konpromiso horiek aldatu, handitu edo amaitzeko.

8. Talde bateko kooperatiba-sozietateek hirugarren ez-bazkideekin zuzenean egiten dituzten eragiketen erantzukizuna euren izango da, eta ez taldearena edo taldea osatzen duten beste kooperatiba-sozietateena.

144. artikulua. Kooperatiba mistoak

1. Kooperatiba mistoetan, gutxiengoko bazkideak daude, batzar orokorrean botoa emateko eskubidea dutenak; eskubide hori bazkideek jarritako kapitalaren arabera zehaztu ahal izango da, eskusiboki edo lehentasunez, eta balore-merkatua arautzen duten legeen mende dauden titulu edo kontu-idazpen bidez azalduko da.

Legez ezarritako kooperatiba-motaren baten barruan sartu behar dira kooperatiba mistoak; bazkide kooperatzaileen eskubide eta betebeharren ondorioetarako, zein kooperatiba-motatakoak izan, kooperatiba-mota horretako arauak bete beharko dituzte.

2. Kooperatiba horietan, honela banatuko da batzar orokorrean botoa emateko eskubidea:

- a) Boto guztien ehuneko berrogeita hamaika, gutxienez, bazkide kooperatzaileei emango zaie, estatutuek zehazten duten proportzioan.
- b) Boto guztien ehuneko berrogeita bederatziko kuota, gehienez ere, boto-eskubidea duten sozietate-zatien artean banatuko da, eta estatutuetan zehaztuko; estatutuek hala onartzen badute, aukera egongo da boto horiek merkatuan libreki negoziatzeko.

3. Boto-eskubidea duten sozietate-zatien kasuan, estatutuek ezarriko dute zein diren haien titularren eskubide eta betebeharrak eta zein den ekarpenak egiteko araubidea; osagarri modura, sozietate anonimoei buruzko legeria bete beharko da akzioetarako.

4. Bazkide-talde bakoitzak urteko soberakinetan duen partaidetza zehazteko (berdin delarik soberakinak positiboak edo negatiboak diren), kontuan izango da zer boto-portzentaje duen talde bakoitzak 2. zenbakian aurreikusitakoaren arabera.

Boto-eskubidea duten sozietate-zatien jabeei egotzi beharreko soberakinak, berriz, haietako bakoitzak jarritako kapitalaren arabera banatuko dira euren artean. Gainerako bazkideei egotzi beharreko soberakinak, berriz, bazkide horien artean banatuko dira, lege honek araubide arrunteko kooperatibentzat definitzen dituen irizpide orokorren arabera.

5. Talde bi horietakoren baten eskubideak eta betebeharrak beste era batera arautzeko, dagokion taldearen gehiengoaren adostasuna eskatuko da; adostasun hori lortzeko, taldeok nork bere botazioa egin ahal izango dute batzar orokorrean edo biltzar berezian eta partzialean.

6. Era honetako kooperatibak sortzen direnean –bai eratzen direlako edo bai aldatzen direlako–, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak baimena eman ahal izango du estatutu bidez aurreikusteko ezen, likidatuz gero, nahitaezko erreserba-funtsa banatu ahal izango dela, aurreko 4. zenbakian azaltzen diren irizpideen arabera eta sozietatearen ondasunak banatzeko 98. artikuluan ezarritako gainerako esleitze-arauak beteta.

III. TITULUA

KOOPERATIBAK ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOA

145. artikulua. Interes soziala, onura publikoa eta ekimen soziala

1. Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek beren gain hartzen dute, interes sozialeko funtzio modura, kooperatibak eurak eta kooperatibek enpresa integratu eta ordezkatzeko dituzten egiturak sustatu, bizkortu eta garatzeko lana,

Era berean, eta betiere enpresa-bitartekaritzarako indarrean dauden erregelak eragotzi gabe, euskal kooperatibismo osoaren bitartekaritza eta ordezkartzarako agente sozial berezitzat jotzen da entitate bat, baldin eta elkartzen baditu Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatuta dauden eta jarduera egiaztatuta duten kooperatiben ehuneko hirurogei gutxienez, edo kooperatiba horietako bazkide-kopurua handiagoa edo berdina bada erregistro horretan inskribatuta dauden eta jardunean ari diren kooperatibetako bazkide guztiekiko.

Horretarako, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren laguntza eskatuko dute; kooperatiba-sistema aplikatzeko aukerei buruzko informazioa ematea sustatuko dute, batez ere enplegu berriak sortzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa txiki eta ertainen arazoei aurre egiteko, eta zabalkunde-, prestakuntza- eta orientazio-programak egitea bultzatuko dute, eta informazio hori guztia gizarte-solaskide guztiei zabalduko diete.

2. Eusko Jaurlaritzak onura publikoko kooperatibatzat joko ditu beren funtzioak garatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko interes orokorra sustatzen laguntzen duten kooperatibak, betiere erregelamenduz ezartzen diren prozedura, araubide eta betekizunen arabera.

Eskubide hauek izango dituzte onura publikoko deklarazioa lortzen duten kooperatibek:

- a) Dokumentu guztietan, «onura publikokoa» aipamena erabiltzeko entitatearen izenaren ondoan.
- b) Dagokien federazio edo konfederazioen bidez entzun diezaieten beren jarduerari zuzenean lotutako xedapen orokorrak edo beraientzako programa garrantzitsuak prestatzen direnean.
- c) Salbuespenak, hobariak, diru-laguntzak eta erabakitzen diren beste onura batzuk izateko: ekonomikoak, fiskalak eta administratiboak.

3. Alde batera utzita zer motatakoak diren, irabazi-asmorik gabeko kooperatiba-entitateak gizarte-ekimeneko kooperatibatzat joko dira, baldin eta xede sozialtzat badute asistentzia-zerbitzuak ematea osasun-, hezkuntza- eta kultura-jardueren edo gizarte-izaerako bestelako jarduera batzuen bidez, edo helburutzat badute gizarte-bazterketa jasaten duten pertsonen laneratzea eta, oro har, merkatuak erantzuten ez dituen gizarte-premiak asetzea; betiere erregelamenduz ezarritako prozedura, araubidea eta betekizunen arabera.

4. Lan-arloko eskumena duen sailaren bidez jardungo du Eusko Jaurlaritzak kooperatibagintzako arloan, eta sail horri behar dituen baliabide pertsonal eta materialak jarriko dizkio dituen sustapen-, zabalkunde-, prestakuntza-, ikuskaritza- eta erregistro-funtzioak bete ditzan, hargatik eragotzi gabe beste sail batzuek ere betetzea beren eskumenak, aplikatu beharreko legeri espezifikoak onartzen dizkienak.

146. artikulua. Kooperatibagintza sustatu eta zabaltzeko neurriak

1. Euskal Autonomia Erkidegoko botere publikoek, nork bere eskumen-eremuan, kooperatiba-printzipio eta -balioak aztertzea eta zabaltzea sustatuko dute, eta, kooperatiben bidez, jarduera ekonomikoak garatzen dituzten ingurune sozialak eta ekonomikoak bultzatuko; horretarako, teknologia- eta antolamendu-berrikuntzetarako irispidea erraztuko diete, eta kooperatiba-sozietateek dituzten ekimenak bultzatuko dituzte.

2. Bereziki, sustapen-neurri hauek hartuko dituzte:

- a) Ziurtatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-mugimenduak erakunde-ordezkaritza izatea lege honen 145.1 eta 152.2 artikuluetan aipatutako terminoetan, eta bultzatuko da kooperatibagintzak ordezkariek eta solaskideak izatea kontsulta- eta erabakitze-eremuetan eta erakunde-ordezkaritzako organismoetan, baita hori pixkanaka araudian kontsolidatzea ere.
- b) Zerga-kalifikazioa gorabehera, kooperatibak handizkariak izango dira; beraz, haiei dagozkien prezioak eta tarifak aplikatuko zaizkie, eta txikizkari gisa zehaztu ahal izango dituzte banaketak edo salmentak.

Ez dira salmentatzat joko kooperatibek bazkideei entregatzen dizkieten ondasunak eta zerbitzuak, kooperatibek berek sortzen dituztenak edo beren helburuak betetzeko hirugarren ez-bazkideei erosten dizkietenak.

- c) Legez onartutako edozein sailkapen-motaren bitartez beren enpresak kontzentratzen dituzten kooperatibek enpresa-taldekatzeari eta enpresa-kontzentrazioari buruzko legeriak eskaintzen dituen onurak izango dituzte.
- d) Euskal administrazio publikoek eta haren mendeko enteek zera bultzatuko dute eurek deitutako obra-, zerbitzu- eta hornidura-kontratuetako esleipenetan, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoaren bat: administrazio-baldintzen orrietan, berdinketa hausteko irizpideen artean jaso dadila kooperatiba-sozietateen lehenespen-eskubidea.
- e) Artikulu honetako 2. zenbakian zehaztutako handizkari-izaera eragotzi gabe, kontsumo-kooperatibak kontsumitzaile zuzentzat joko dira ondorio guztietarako, betiere hirugarren ez-bazkide batzuek zuzkitu edo hornitzen badizkiete beren eginkizunak garatzeko behar dituzten produktu edo zerbitzuak.
- f) Ondorio guztietarako, kooperatiba barneko lehen mailako transformazio-jardueratzat joko dira nekazaritzako eta elikagaien kooperatibek eta haiek taldean biltzen dituzten bigarren mailako edo maila handiagoko kooperatibek produktu edo gaien bitartez gauzatzen dituzten eragiketak baldin eta produktu edo gai horiek bazkideen ustategietarako baino ez badira bideratzen. Kasu horretan, berdin izango da eragiketa horiek gauzatzeko erabiltzen dituzten produktu edo gaiak hirugarren ez-bazkide batzuek hornitzen dizkieten edo ez.
- g) Beren xede soziala betetzeko, onura publikokoak deklaritutako etxebizitza-kooperatibek kudeaketa publikoko lursailak erosi ahal izango dituzte zuzeneko

esleipen-sistemaren bidez.

- h) Hezkuntza-arloan, Eusko Jaurlaritzak deialdi espezifikoak bultzatuko ditu, bere eskumenen eremuan, ikaskuntza-kooperatibetan egindako inbertsioak finantzatzen laguntzeko, eta, hezkuntza-programak sustatuz, kooperatibismoaren balioak eta printzipioak sartzeko hezkuntza-sistemako maila guztietako hezkuntza-curriculumetan, haur-hezkuntzatik hasi eta unibertsitate-prestakuntzara iritsi arte.
- i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak neurriak hartuko ditu kooperatiben presentzia kuantitatiboa eta kualitatiboa sustatzeko hainbat sektoretan; esate baterako, landa-garapenean, mendekotasunean, gizarteratzeko sektorean eta laguntza-jardueretan. Horretarako, bere eskumenak egikaritu, eta kooperatibek kontratazio publikoko prozeduretan parte hartzea sustatuko du.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoek kooperatibak sortzea eta haiek zerbitzu publikoen kudeaketan parte hartzea bultzatuko dute, zerbitzu publikoak garatzeko eta hobetzeko.

Illo horretan, botere publikoek aurreikusi ahal izango dute zerbitzu publikoko kooperatiba-sozietateak eratzea zerbitzu publiko horiek emateko, kontratazio publikoko araubidea erregulatzen duten legezko eta erregelamenduzko xedapenen arabera; zerbitzu horietatik kanpo utziko dira agintaritza publikoa erabiltzea eskatzen duten zerbitzu publikoak. Kooperatiba-sozietate horietan, bazkide sustatzaile modura parte hartuko dute eskumena duten entitate publikoek, baita, hala badagokio, sektorean esperientzia dutela erakusten duten entitate pribatuak ere; era berean, kooperatibaren xede sozialaren parte diren zerbitzuen erabiltzaileek eta sozietatean lan egiten duten bazkide langileek ere parte hartu ahal izango dute. Nolanahi ere, entitate publiko sustatzaileek kontrolatuko dituzte zerbitzu publikoak emateko baldintzak.

147. artikulua. Kooperatiba-ikuskaritza

1. Eusko Jaurlaritzan lan-eskumena duen sailari dagokio ikuskaritza-funtzioak egikaritzea lege hau garatzeko, hargatik eragotzi gabe Eusko Jaurlaritzako sailek edo beste administrazio publiko batzuek ere funtzio horiek bete ahal izatea nork bere eskumenen arabera.

2. Batez ere, prebentziorako eta lege hau hobeto betetzen laguntzeko egikaritutako da ikuskaritza-funtzioa. Ikuskaritzak, bestelako jarduketak egin baino lehenago, ohartarazi eta aholkatu ahal izango du, betiere kasu bakoitzeko egoerek aholkatzen

dutenean eta eskubide legitimoen titularrei kalterik eta galerarik eragin gabe.

3. Ikuskaritzaren xede den jokaera zuzendu eta konpontzeak errugabetzea eta ikuskaritza-espedienteak amaitzea eragingo du.

148. artikulua. Kooperatiben arau-haustea

1. Lege honetan arau-hauste gisa tipifikatutako ekintzen eta ez-betetzeen erantzule dira: kooperatiba-sozietateak, administratzaileak, zuzendari eta kudeatzaileak, ahaldunak eta zaintza-batzordeko kideak eta likidatzaileak, betiere dena delako arau-hauste edo ez-betetzea pertsonalki egotzi ahal zaien neurrian.

2. Arau-hauste oso astunak dira:

- a) Soberakin baliagarrien inguruan lege honek aipatzen dituen gutxieneko portzentajeak ez zuzentzea nahitaezko erreserba-funtsera eta kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena.
- b) Kooperatiba-heziketa eta –sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena ez aplikatzea lege honek zehazten duen moduan.
- c) Bazkideen artean banatzea nahitaezko gizarte-funtsak, erreserba-funts banaezinak edo likidazioaren ondorioz geratzen den ondasun garbia, eta, horrela, lege honek aurreikusitakoa haustea.
- d) Lege honetan aitortutako kooperatiba-printzipioak nabarmenki haustea, edo kooperatibaren figura tresna modura edo faltsuki erabiltzea kooperatibarekin zerikusirik ez duten helburuak ezkutatzeko.

3. Arau-hauste astunak dira:

- a) Orokorrean edo behin eta berriro urratzea bazkideen eskubideak, proposamenak egiteari, informazioa jasotzeari eta parte hartzeari buruzkoak.
- b) Galerak egozteari buruzko lege-xedapenak urratzea.
- c) Kooperatibak konpentsatu gabeko galerak dituenean, ez betetzea kooperatibako balantzearen erregularizazio-emaitzaren helmugari buruzko arauak.
- d) Lege-xedapenak urratzea eta sozietatearen kapitalari egin beharreko ekarpenen interesak sortaraztea.

- e) Legeak espresuki debekatzen dituenen hirugarren ez-bazkideekiko eragiketak, halako eragiketak egitea.
- f) Objekzioak jartzea eragozpenak jartzearen Administrazioak jarritako salaketa-idazkiaren bidez egiaztatutako ikuskatze-lana egin ez dadin, edo ez onartzea halako lanik egitea.
- g) Besteren konturako langileak kontratatzean, legeak araututako mugak gainditzea.

4. Arau-hauste arinak dira: lege honetan ezarritako debekuak urratzea, betiere gatazkarik sortzen ez badute alderdien artean eta ezin badira jo astuntzat edo oso astuntzat.

149. artikulua. Kooperatiben zehapenak

1. Isun hauekin zehatuko dira arau-haustea: arinak, 300 eurotik 1.000 eurora arte; astunak, 1.001 eurotik 3.000 eurora arte; eta oso astunak 3.001 eurotik 30.000 eurora arte, eta bide emango dute kooperatiba deskalifikatzeko, bat etorritik hurrengo artikuluan erregulatzen denarekin.

2. Arau-hauste arinak, astunak eta oso astunak mailakatu egingo dira gutxieneko zehapena aplikatzeko, erdikoa aplikatzeko edo zehapenik handiena aplikatzeko; horretarako, kontuan izango da zer garrantzi duten, zer ondorio duten ekonomian eta gizartean, eta nola jokatu duten arau-hausteei (asmo txarrez, faltsukeriaz, engainatzeko asmoz edo arau-haustean berreroriz), eta zein den zehatutako kooperatibaren ahalmen ekonomikoa edo eragiketa-bolumena, eta zenbatekoa den ukitutako pertsonen kopurua, berdin izanik pertsona horiek bazkideak diren ala ez. Zehapenak mailakatzeko, bestalde, kontuan hartuko da ea aurretik ikuskatzealdian egindako ohartarazpenak eta errekerimenduak bete diren ala ez, edo kooperatibak bete dituen ala ez hartutako konpromisoak.

3. Arau-haustean berreroriz gero, goragoko mailan kalifikatu ahal izango da arau-haustea. Berrerortzetat joko da lehendik zehapen-prozedura operatibo batean zehatuta dagoen eta maila bera edo handiagoa duen beste arau-hauste bat egitea, irmo bilakatu dena.

Aurreko zehazpena irmo bilakatu eta bi urte igaro ostean, ez da berrerortzetat joko beste arau-hauste bat egitea. Nolanahi ere, arau-haustea behin eta berriro eginez gero, zehapen gehigarri bat ere ezarri ahal izango da, isun nagusi modura ezarri denaren ehuneko hogeira artekoa izan daitekeena.

4. Epe hauetan preskribatuko dira lege honetan ezarritako arau-haustea: arau-hauste arinak, sei hilabetera; astunak, urtebetera, eta oso astunak, azkenik, arau-

haustea gertatzen denetik bi urtera. Arau-hausteen preskripzio-epea arau-haustea egin zen egunetik aurrera hasiko da kontatzen.

5. Epe hauetan preskribatuko dira ezarritako zehapenak: oso astunengatik ezarritakoak, bi urtera; astunengatik ezarritakoak, urtebetera, eta arinengatik ezarritakoak, sei hilabetera. Zehapenen preskripzio-epea hasiko da kontatzen zehapena ezartzen duen ebazpena gauzatu daitekeen egunetik aurrera edo hura errekurritzeko epea igarotzen denetik aurrera.

6. Eusko Jaurlaritzan kooperatiba-arloko eskumenak dituen sailari dagokio zehapen-prozedura egikaritzea, honako hauei jarraikiz:

- a) Ekonomia sozialaren arloko zuzendaritza eskudunaren titularrari dagokio arau-hauste arin eta astunengatiko zehapenak ezartzea.
- b) Ekonomia sozialaren arloko zuzendaritza eskuduna bere mende duen sailburuordetzaren titularrari dagokio arau-hauste oso astunengatiko zehapenak ezartzea.

7. Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumenak dituen sailari dagokio proposamena egitea kooperatiba zehatzeko prozedura arautzen duen erregelamendua onartzeko, Administrazioaren zehapen-araubidea eta haren printzipio eta bermeak aplikatzeko legeriaren arabera. Ezin izango da, inoiz, zehapenik ezarri baldin eta aurretik ez bada egin dagokion espedientearen arestian adierazitako printzipio eta bermeen arabera.

Arau-hauste oso astunengatik egindako zehapen-espedienteak ebazteko, aurretiko txostena eman beharko du Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak, eskaera egin ondorengo hirurogei egunetan; epe horretan eman ezean, egintzat joko da izapidea.

150. artikulua. Kooperatiba deskalifikatzea

1. Honako hauek dira kooperatibak deskalifikatzeko arrazoiak:

- a) Lege honen 148.2 artikuluan oso astuntzat jotzen diren arau-hausteak egitea, baldin eta ekonomian edo gizartean kalteak eragiten badituzte edo eragin ahal badituzte, edo kooperatiba-printzipioak behin eta berriro eta nabarmenki urratzen badituzte.
- b) Kooperatiben organo sozialek jarduerarik ez izatea, edo haien xede soziala ez betetzea hiru urtean jarraian.
- c) Oro har, sozietatea kooperatiba moduan kalifikatu ahal izateko beharrezkoak diren baldintzak galtzea edo haiek ez betetzea, salbu eta kooperatiba deuseztatzeko arrazoiak daudenean.

- d) Zehapen-espediente baten ondorioz emandako ebazpen irmoa, aurreko artikuluan adierazten denaren ondorioz emana.

2. Eusko Jaurlaritzan kooperatiba-arloko eskumena duen sailak jakiten duenean kooperatiba bat deskalifikatzeko arrazioa dagoela, errekerimendua egingo dio kooperatiba horri, zuzendu beharrekoa zuzen dezan, gehienez ere sei hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen duenetik edo errekerimendu hori argitaratzen den unetik aurrera kontaturik. Errekeritutakoa ez betetzeak deskalifikazio-espedientea hastea ekarriko du.

3. Kooperatiba deskalifikatzeko prozedura horrek honako berezitasun hauek izango ditu administrazio-prozedura erkidea zuzentzen duten arau orokorren aldean:

- a) Eusko Jaurlaritzan kooperatiba-arloaren eskumena esleituta duen sailburuak izango du deskalifikatzeko erabakia hartzeko eskumena, dagokion kontraesan-prozedura bete eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak txostena eman eta gero. Txosten hori formalki eskatu beharko da, eta, hirurogei eguneko epean igortzen ez bada, izapide hori egintzat joko da. Deskalifikatzeko prozeduraren ondorioetarako, lotesleak izango dira Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostenak.
- b) Entzunaldiaren nahitaezko izapidea betetzean, administratzaileen bidez pertsonatuko da kooperatiba, edo, halakorik ez badago, gutxienez hiru bazkide pertsonatuko dira. Kooperatiba pertsonatzen ez bada, betetzat joko da izapidea, eta ohar bat argitaratuko da, gutxienez bitan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta beste bitan egunkari batean: zein udalerritan dagoen kooperatibaren sozietate-egoitza, udalerrri horretan zabalkunde handia duen egunkari batean.
- c) Bide judizialetik berrikusi ahal izango da deskalifikatzeko administrazio-ebazpena, administrazio-bidea amaitzen duena, eta ezin izango da inola ere betearazi harik eta epai hori berresten duen epai irmoa eman arte.

4. Behin deskalifikatzeko ebazpena irmoa denean, ofizioz izango ditu erregistro-ondorioak, eta horrek ekarriko du kooperatiba desagitea edo transformatzea, sei hilabeteko epean, administrazio-ebazpena betearazlea denetik aurrera kontaturik. Epe hori amaitu eta gero, deskalifikazioak kooperatiba desagitea ekarriko du nahitaez. Une horretatik aurrera, administratzaileek, zuzendari kudeatzaileek eta, hala badagokio, likidatzaileek, pertsonalki eta solidarioki erantzungo dute sozietatearen zorrengatik, beren artean eta kooperatibarekin, hargatik eragotzi gabe

lege honek tipifikatzen dituen beste arau-hauste batzuk.

151. artikulua. Kooperatibetan aldi batean esku hartzea

1. Kooperatiba baten funtzionamenduan diren irregulartasunen ondorioz premiazko neurririk hartu behar bada bazkideen edo hirugarren ez-bazkide batzuen interesak larriki ez lesionatzeko, Eusko Jaurlaritzan kooperatiba-arloko eskumena esleituta duen sailak honako neurri hauek hartu ahal izango ditu –ofizioz, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak eskatuta edo edozein interesdunek arrazoiak eman eta eskatuta– kooperatiban esku hartzeko aldi batean:

- a) Kontu-hartzaile bat edo gehiago izendatzea; Kontu-hartzaile horrek ahalmena izango du batzar orokorreko deia egiteko eta haren eguneko gai-zerrenda ezartzeko eta batzarburu jarduteko.
- b) Kontu-hartzaile bat edo gehiago izendatzea kooperatibako organoak gainbegiratu eta kontrolatzeko; kontu-hartzaile horiek onartu ezean, kooperatibaren erabakiek ez dute baliorik izango, eta erabat deusezak izango dira.
- c) Aldi baterako etetea kooperatibako administratzaileen jardute-ahalmena, eta behin-behineko administratzaile bat edo gehiago izendatzea haien funtzioak beregana ditzaten.

2. Neurri horiek hartu aurretik, txostena eman beharko du Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak, luzatu ezineko hamabost eguneko epean; epe hori igaro eta gero, izapide hori egintzat joko da.

3. Neurri hori ezartzeko arrazoia desagertu eta gero, Eusko Jaurlaritzan lan-arloko eskumena duen sailburuak erabakiko du ea kendu behar den ala ez aldi batean esku hartzeko neurri hori. Erabaki horiek indarra izango dute Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen diren egunetik aurrera.

IV. TITULUA

KOOPERATIBEN ELKARTEGINTZA

I. KAPITULUA

KOOPERATIBA-ELKARTEAK

152. artikulua. Printzipio orokorrak

1. Kooperatiba-sozietateak diren aldetik, kooperatibek askatasunez eta beren borondatez elkartu ahal izango dira kooperatiba-batasun, -federazio eta -konfederazioetan beren interesak defendatzeko eta sustatzeko, hargatik eragotzi gabe beste moduren batean ere elkartu ahal izatea, elkartze-eskubidea arautzen duen legeria orokorraren arabera.
2. Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-mugimendua osatzen dute hala kooperatibek nola kooperatiba-batasunek, -federazioek eta -konfederazioek eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak.
3. Euskal Autonomia Erkidegoko aginte publikoek hartu beharreko neurri guztiak hartuko dituzte kooperatiba-entitateen arteko elkartegintza eta haien arteko lankidetzak sustatzeko, eta programak sustatuko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-errolak berrikusi, eguneratu eta teknikoki arazteko.

153. artikulua. Kooperatiba-batasunak, -federazioak eta -konfederazioak

1. Jarduera ekonomikoko sektore bereko kooperatiba bik edo gehiagok kooperatiba-batasun bat eratu ahal izango dute.
2. Mota bereko kooperatiba-sozietateek federazioak eratu ahal izango dituzte beren artean edo kooperatiba-batasunekin, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan errolatuta badaude edo han badute egoitza.

Kooperatiba-batasunek "Euskadiko" hitza gehitu beharko diote sozietatearen izenari baldin eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroan inskribatuta dauden eta jarduera egiaztatuta duten kooperatibetatik gutxienez ehuneko berrogei elkartzen badira edo federatutako entitateetako bazkide-kopurua handiagoa bada erregistro horretan izena emanda duten eta jardunean ari diren kooperatibetako bazkide guztien portzentaje berari dagokion bazkide-kopurua baino.

Euskal Autonomia Erkidegoan, mota desberdinetako kooperatiba-federazioek bat egin ahal izango dute kooperatiba-mota desberdinak ordezkatzeko dituzten federazioak sortzeko.

3. Kooperatiba-federazioek konfederazioak eratu ahal izango dituzte.

Konfederazio batek Euskal Autonomia Erkidegoan errolatuta dauden kooperatiba-federazioen ehuneko hirurogei elkartzen badu gutxienez, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa izango da haren izena.

4. Hona zein diren kooperatiba-batasun, -federazio eta -konfederazioen eginkizunak:

- a) Elkartzen diren bazkideak ordezkatzeari, estatutuetan ezarritakoaren arabera.
- b) Adiskidetze-funtzioak egikaritzea, elkartzen dituzten entitateen artean sortzen diren gatazketan edo entitate eta bazkideen artean sortzen direnetan.
- c) Bazkideentzako zerbitzuak antolatzea: aholkularitza, laguntza juridikoa, teknikoa eta kontabilitatekoa eta haien intereserako komenigarriak izan daitezkeen guztiak.
- d) Kooperatiba-sustapena eta -prestakuntza bultzatzea.
- e) Euskadiko Kooperatiba Erregistroarekin lankidetzan jardutea erregistro horretan inskribatuta dauden sozietateen zentsua eguneratzeko eta arazteko lanak egiteko.
- f) Antzeko beste edozein jarduera egitea.

5. Lege honen babesean eratutako kooperatiba-batasun, -federazio eta -konfederazioek nortasun juridikoa eta jarduteko ahalmen osoa izateko, eratze-akta aurkeztu beharko dute, beren sustatzaileen bidez, Euskadiko Kooperatiba Erregistroan, zeinak honako hauek jaso beharko baititu:

- a) Entitate sustatzaileen zerrenda.
- b) Elkartzeko erabakiaren egiaztagiria.
- c) Entitatearen ordezkaritza- eta gobernu-organoen osaera.
- d) Enpleguko eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Kooperatiben Erregistroaren eta Euskadiko Kooperatiba Erregistroaren egiaztagiriak, izen bera duen beste entitaterik ez dagoela ziurtatzen dutenak.
- e) Sozietatearen estatutuak, honako hauek jasoko dituztenak:
 - 1. Entitatearen izena.
 - 2. Entitatearen helbidea eta lurralde- eta jardute-eremua.

3. Ordezkaritza- eta administrazio-organoak, nola jarduten duten organo horiek, eta zein den kargudunak hautatzeko araubidea.
4. Zer betekizun eta prozedura bete behar diren elkartutako entitate izateko eta izaera hori galtzeko, eta zein den estatutuak aldatzeko eta entitateak batzeko eta desegiteko araubidea.
5. Zein den entitatearen araubide ekonomikoa, adieraziz zein den baliabideen izaera, jatorria eta helburua eta zer baliabide dituzten entitate elkartuek egoera ekonomikoa ezagutzeko.
6. Artikulu honetan erregulatzen diren entitateekin Euskadiko Kooperatiba Erregistroak egin behar dituen jarduerak ez dute eratze-izaerarik izango, eta elkarteen gaineko erregistro-araubidea bete beharko dute.
7. Kooperatiba-batasun, -federazio eta -konfederazioei lege honetan kontabilitateari eta kontu-auditoretzari buruz erregulatutakoa aplikatuko zaie. Gainera, sozietatearen estatutuetan espresuki erregulatu ez den kasuetan, lege honetan izaera orokorrarekin ezarritakoa bete beharko da.

II. KAPITULUA

EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

154. artikulua. Izaera, osaera eta funtzioak

1. Kooperatibagintza sustatu eta hedatzeko organo goren gisa eratu zen Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua; entitate publiko bat da, eta bere eginkizuna da Euskal Autonomia Erkidego administrazio publikoek kooperatibagintzaren arloko gaiei buruz egiten dituzten kontsultak jasotzea eta administrazio publiko horiei aholkuak ematea.

Nortasun juridiko propioa izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarenaz bestelakoa; era berean, ahalmen osoa izango du bere funtzioak betetzeko lan egiteko.

2. Hona zein diren Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren funtzioak:

- a) Kooperatiba-mugimenduaren printzipioak zabaltzea; erraztasunak ematea eta

lankidetzaz eskaintzea kooperatibak garatu eta sustatzeko programak ikertu, planifikatu eta betetzeko, eta kooperatibei buruzko heziketa eta prestakuntza bultzatzea.

- b) Kooperatibei edo haien elkarteei zuzenean eragiten dieten lege- edo erregelamendu-xedapenetako proiektuei buruz nahitaez txostenak egitea, eta azterlanak eta proposamenak egitea eta irizpenak ematea bere eskumeneko gaiei buruz. Era berean, kooperatibei edo haien erakundeei zuzenean eragiten dieten diru-laguntzen oinarri erregulatzaileri buruzko txostenak egitea.
- c) Administrazioarekin lankidetzan jardutea lege honetan aurreikusitakoa zabaldu eta betetzeko; bereziki, kooperatiba-printzipioak. Hain zuzen ere, kooperatiba-printzipioak betetzen direla zainduko du (bereziki kontrol demokratikoa eta bazkideen partaidetza ekonomikoa), hargatik eragotzi gabe Eusko Jaurlaritzaren edo beste administrazio publiko batzuen ikuskaritza-funtzioak, bat etorritik 147.1 artikuluan xedatutakoarekin.
- d) Interes erkideko zerbitzuak antolatzea kooperatiba-federazioentzat, eta, hala badagokio, kooperatibentzat.
- e) Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen eta ekonomiaren antolamenduari buruzko lege- eta erakunde- araubidea hobetzen laguntzea, eta, hori lortzeko, dagoeneko existitzen diren erakunde eta organismoetan parte hartzea.
- f) Arbitraje-bidez esku hartzea kooperatiben artean, kooperatiben eta haien bazkideen artean edo kooperatiben barruan bazkideen artean sor daitezkeen auziak ebazteko, baldin eta alderdi biek eskatzen badute edo alderdiok hori egitera behartuta badaude beren estatutuen, barne-erregelamenduaren edo konpromiso-klausula baten arabera. Auzigaiok, nolana ere, alderdiek askatasun osoz eta zuzenbidearen arabera erabakitako gaiei buruzkoak izan beharko dute; batez ere, kooperatiben printzipio, arau, ohitura eta jokabideak interpretatu eta aplikatzeari buruzkoak.
- g) Edozein delarik ere kooperatiba-mota, kooperatibetako bazkideen eta kooperatiben artean sortzen diren auziak ebazteko, kooperatibako barne-bidea –lege honetan eta berau garatzeko arauetan, sozietate-estatutuetan edo kooperatibaren barne-arauetan ezartzen dena– agortu beharko da gatazkak ebazteko bidetik jo baino lehen; hau da, barne-bidea agortu beharko dute jurisdikzio eskudunera edo epaiketaz kanpoko bidera jo baino lehen.
- h) Lege honek gomendatzen dizkion gainerako guztiak.

3. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua osatuko dute: kooperatiben ordezkariak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ordezkariak.

Kooperatiben ordezkaritza, Kontseiluan gehiengoa izango dena, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren bidez gauzatuko da.

4. Erregelamenduz zehaztuko da zein diren Kontseiluko organoen egitura, osaera eta funtzioak, zein den lehendakaria eta idazkaritza nagusi teknikoa hautatzeko sistema eta zein diren haien eskumenak eta langileen lan-araubidea.

5. Ekonomia- eta finantza-autonomiako printzipioan oinarrituta, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak bere aurrekontua onartu eta betearaziko du; aurrekontu hori finantzatzeko, honako diru-iturri hauek erabiliko ditu:

- a) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan izendatzen zaizkion diru-kopuruak.
- b) 98.2 artikuluko a) eta d) letretan definitutako diru-kopuruak
- c) Kooperatiba-mugimenduaren ekarpenak
- d) bere jarduera eta ondasunen produktuak
- e) beste diru-sarrera publiko edo pribatu batzuk, arau bidez onartuta dituenak edo kostu-bidez edo irabazte-xedez jasotzen dituenak.

6. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak kanpoko auditoretza baten mende jarriko ditu onartzen dituen urteko kontuak, aplikagarri zaion informazio finantzarioari buruzko araudi-esparruaren arabera formulatuko direnak.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.- Epeak zenbatzea.

Lege honetan zehaztutako epeetan, egun baliodunak joko dira eguntzat, eta kanpoan utziko dira jaiegunak; hilabeteka edo urteka finkatutako epeak, berriz, data-egunetik data-egunera neurtuko dira. Muga-eguneko hilean hasierako egunaren baliokiderik ez bada, hilaren azken egunean bukatuko da epea.

Epearen azken eguna egun baliogabea bada, hurrengo egun balioduna arte luzatuko da epea.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Lan elkartuko garraio-kooperatibak.

Lan elkartuko garraio-kooperatibetan itzuli beharreko ekarpenei dagokienez, 129.2.a artikulua ez zaie lan elkartuko garraio-kooperatibei aplikatuko, baldin eta dagoeneko eratuta badaude.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Kooperatiba-sozietate txiki bat deskalifikatzen den kasuan aplikatu beharreko berezitasuna.

Kooperatiba-sozietate txiki bat deskalifikatzen den kasuan, osagarri gisa Lege honen 150. artikulua aplikatuko da, espezialitate honekin: artikulua horrek 3.b) zenbakian erregulatzen duen entzunaldi-izapidean administratzailearik ez badago, nahikoa izango da bazkide bat pertsonatzea.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Urteko programak, kooperatibagintza indartu, bultzatu eta sustatzekoak

Kooperatibagintza indartu, bultzatu eta sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak urteko programak prestatu eta gauzatuko ditu, batez ere kooperatibetako enplegua sortzeko, betiere Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak aurretiko txostena eman ondoren.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Tratu-berdintasuna enpleguaren sustatze- eta finkatze-arloan.

Enplegua sortzeko edo finkatzeko pizgarriei buruzko arauak ezartzean eta betearaztean, debekatuta dago lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak eta beste edozein kooperatiba-motatako lan-bazkideak bereiztea: EAEk, enpleguak sortzeko eta finkatzeko dituen eskumenetan oinarrituta, besteren konturako langileentzat ezartzen dituen arau eta pizgarri guztiak aplikatuko zaizkie.

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Genero-berdintasuna.

Kooperatiba-sozietateek eta beren elkarte egiturek ahaleginak egingo dituzte emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izan dadin beren organo guztietan. Halaber, genero-berdintasuneko neurriak ezarriko dituzte, eta, bereziki, bizitza pertsonala, familia eta lana bateratzeari begirakoak.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Hizkuntza ofizialen erabilera.

1.- Arau hau aplikatuta, nahi duten hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidea dute Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin harremanetan jartzen direnek. Bestalde, entitateen betebeharra da aukeratutako hizkuntzan ematea arreta, eta, horretarako, hartu beharreko neurriak hartuko dituzte.

2.- Era berean, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak bi hizkuntzak erabiliko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio publikoekiko harremanetan.

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Borondatezko gizarte-aurreikuspena.

Kooperatiba-sozietateek borondatezko gizarte-aurreikuspenei buruzko erabakiak hartzera bultzatzea beren bazkideak, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.- Izapidetzen ari diren espedienteak.

Orain arte indarrean izan diren xedapenak aplikatuko dira lege hau indarrean sartu aurretik hasita zeuden espedienteak izapidetzeko eta ebazteko.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Egungo estatutuak aplikatzea.

Kooperatiben estatutuen edukia ezin izango da ezarri lege honetan ezarritakoaren kontrakoa bada, eta ulertuko da lege honetako agindu- edo debeku-arauek eduki hori aldatzen eta osatzen dutela.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.- Aurreko legeria indargabetzea.

Indargabetuta geratuko dira 4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko Kooperatibena, eta lege honetan ezarritakoaren kontra dauden maila bereko edo apalagoko gainerako arauak, baita Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legearen 3. artikuluko 5. zenbakia ere.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA.- Aplikazio-eremua.

1. Kooperatiba-sozietate guztiei aplikatuko zaie lege hau, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan badute sozietatearen egoitza eta batez ere lurralde horretan betetzen beren jardura kooperatibizatua kooperatiba-jardura Kooperatiben uztailaren 16ko 27/1999 Legearen 2 A) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.- Era berean, kooperatiben lege hau eta berori garatzeko arauak berdin aplikatu zaizkie kooperatiba-sozietate txikiei, zeinak erregulatzen baitira Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikien ekainaren 25eko 6/2008 Legearen bidez.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.- Beste kooperatiba-mota batzuk.

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak nahitaezko txostena eman eta gero, Eusko Jaurlaritzan lan-arloaren eskumena duen sailburuak proposatuta, kooperatiba-mota berriak erregulatu ahal izango ditu, eta, haien berezitasun sozioekonomikoetan oinarrituta, arau bereziak ezarri ahal izango ditu, lege honetan ezarritako printzipioak eta ezaugarriak errespetatuz.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.- Aldatzea azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza-Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare-Legearen Testu Bategina onartzen duena

Aldatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuaren 102. artikulua a) letra, eta honela geratzen da:

“a) Helburua onura publikokoa edo interes publikokoa edo gizarte-interesekoa izanik, herri-administrazioen, izate juridiko-publikoko beste entitate batzuen, sektore publikoa osatzen duten beste entitate batzuen eta onura publikokotzat deklaraturiko fundazioen, elkarteen edo kooperatiben aldekoa denean”. Era berean eta helburu berberekin, onura publikoko deklaraturiko etxebizitza-kooperatiben aldekoa denean, bazkideentzako etxebizitzak eraikitza bideratutako lursailen kasuan”.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.- Zenbatekoak eguneratzea.

Eusko Jaurlaritzan lan-arloaren eskumena duen sailburuak proposatuta, Eusko Jaurlaritzak lege honetan finkatutako zehapenen eta gainerako kopuruen zenbatekoak aldatu ahal izango ditu.

AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA.- Legea aplikatzea eta garatzea.

1. Eusko Jaurlaritzan lan-arloaren eskumena duen sailburuak proposatuta, Eusko Jaurlaritzak arauak eman ahal izango ditu lege hau aplikatzeko eta garatzeko.
2. Lege hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean, Eusko Jaurlaritzak Kooperatiba Sozietateen Erregistroari buruzko erregelamendu berri bat onartuko du. Erregelamendu horrek espresuki aurreikusi eta erregulatuko du nola izapidetu elektronikoki erregistro-espedienteak, eta erregistro-eragiketak sinplifikatuko ditu, betiere zaindu beharreko segurtasun juridikoa zainduz interesdunekiko harremanak errazteko; batez ere, inskripzioak eta inskripzioekin lotutako egintzen gordailua, kontsultei erantzuteko modua eta publizitate formala errazteko.
3. Lege hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, Eusko Jaurlaritzak kooperatibak

zehatzeko prozedura onartuko du, Administrazioaren zehapen-araubidea aplikatzeko legeriaren eta haren printzipio eta bermeen arabera (lege honen 149. artikuluan aurreikusten da).

- 4.- Euskadiko Kooperatiba Erregistroarekin eta Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin koordinatu eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioako organo eskudunek arauak eman ahal izango dituzte kooperatibei datuak eskatzeko estatistika-ondorioetarako, betiere estatistika-arloko legerian ezarritakoaren arabera.

AZKEN XEDAPENETAKO SEIGARRENA.- Indarrean jartzea.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hogeita hamar egunera jarriko da indarrean lege hau.

III

MEMORIA FINAL DEL PROCEDIMIENTO / PROZEDURAREN AMAIERAKO MEMORIA

**EAE-ko KOOPERATIBEN LEGE-
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **Ispizua Zuazua, Alfredo**
Fecha de la firma: **12/12/2018 16:17:54**Validación de la firma:  **Correcta**Firmante: **JOAQUIN DIAZ ARSUAGA**
Fecha de la firma: **12/12/2018 16:24:01**Validación de la firma:  **Correcta**

MEMORIA FINAL RELATIVA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

La presente Memoria, junto con las realizadas durante la tramitación del proyecto normativo, se emite en ejecución del art. 10,2 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante, Ley 8/2003), acomodándose al carácter, estructura y contenido que la misma prevé.

I.-ANTECEDENTES

Entre las políticas de fomento cooperativo, una política legislativa adecuada que regule su forma jurídica y actividad para hacer frente a las necesidades económicas y empresariales actuales y, sobre todo, de futuro, posibilitando su desarrollo y expansión resulta de vital importancia.

En concreto, la vigente Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi (en adelante, Ley 4/1993) ha servido eficazmente durante estos 25 años de soporte jurídico para el desarrollo cooperativo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, actualmente para mantener dicho grado de eficiencia necesita ser revisada en determinados aspectos.

A tales efectos, se elaboró y aprobó por el Consejo de Gobierno Vasco en la Legislatura precedente un proyecto normativo, que posteriormente en el trámite parlamentario decayó, debido a la disolución de la Cámara Vasca.

Manteniéndose vigentes las causas determinantes de tal iniciativa legislativa, en la presente Legislatura se ha retomado el proceso de elaboración, incluso desde su inicio, para reconsiderar las soluciones planteadas e incluso incorporar algunas otras modificaciones que han surgido en el período referido, no obstante la brevedad del mismo

Como entonces se exponía, la nueva norma responde fundamentalmente a los siguientes retos:

- * Refundir e integrar en un solo texto normativo las modificaciones posteriores a 1993.
- * Clarificar cuestiones nucleares determinantes de la eficacia y validez de este tipo societario como alternativa, democrática y solidaria, de hacer empresa, como es el supuesto de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
- * Revisar la configuración legal de determinadas clases de cooperativas para garantizar, no solo posibilitar, su acomodo al régimen orgánico y funcional cooperativo; como es el caso de las cooperativas de viviendas y las de transporte,
- * Acomodar la actividad de la Administración, de fomento y de control, en materia cooperativa al entorno jurídico, económico e institucional general actuales; así como al grado de desarrollo de las propias cooperativas vascas como sociedades, identificando, fomentando y garantizando lo específico de la identidad de estas sociedades, aquello que legitima su consideración como de interés social.
- * Incorporar las líneas directrices generales del derecho de sociedades, en constante y rápida evolución; como es el caso de la regulación del gobierno corporativo.
- * Posibilitar la autorregulación de determinados aspectos vía estatutaria en Reglamento de Régimen Interior o en su caso, dentro del Movimiento cooperativo.
- * Realizar ajustes y mejoras jurídico - técnicas que contribuyen a la coherencia de la norma así como a su interpretación y aplicación prácticas.

La propuesta normativa que se realiza no pretende sustituir la estructura básica, material y formal, de la vigente Ley 4/1993, modificada; ni la interpretación realizada de la identidad

cooperativa, alineada con los principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional, 1995, a los que expresamente se remite, artículo 1.

Con carácter general, el proyecto normativo responde a los siguientes objetivos:

1. Incrementar la seguridad jurídica tanto en las relaciones cooperativas internas como en las externas, en el tráfico mercantil en que interviene; agilizando la operatoria societaria.
2. Ampliar la funcionalidad y prestaciones cooperativas
3. Garantizar el reconocimiento del cooperativismo como colaborador en el análisis, diseño y ejecución de políticas de interés social general.

En relación con su ámbito de aplicación: personas jurídicas y sus socios a las que va a afectar el texto normativo, así como respecto de la importancia económica y social de dichas entidades, en términos de establecimientos, empleo, valor añadido al PIB, facturación, exportación inversión en I+D y demás parámetros básicos, se hallan recogidos en la Memoria justificativa oportuna.

Ha de resaltarse también, con el carácter compilador que corresponde a este memoria, que han participado en su elaboración las tres universidades vascas: EHU/UPV, Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea; y que cuenta con la aprobación del sector.

Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto y en relación con lo prevenido en el Acuerdo de del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010 (acuerdo primero, punto 9), la nueva regulación propiciando la utilización de las NTICs, no solo en el funcionamiento societario sino también en la actividad administrativa, especialmente registral, reducirá razonablemente, las cargas administrativas

II.- TRAMITACIÓN DEL PROYECTO

En relación a la tramitación y el procedimiento, se ha dado cumplimiento a la Ley 8/2003 y al Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación de disposiciones de carácter general.

En tal sentido y siguiendo la estructura de la Ley 8/2003:

Fase de iniciación, y en aplicación del artículo 5 de la Ley 8/2003:

Con fecha 26 de julio de 2017 por la Consejera de Trabajo y Justicia, la Orden correspondiente por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi.

Con fecha 9 de octubre de 2017, Trámite de consulta pública previa a la elaboración de la norma, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 133 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, publicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con la Resolución 132/2017, de 12 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueban Instrucciones sobre aplicación del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General.

Ha de mencionarse en esta fase inicial de la tramitación, que se dispone y considera para la elaboración del anteproyecto, una Propuesta para una reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, elaborado por las tres universidades vascas, consistente en una propuesta de acomodación del marco jurídico regulador del cooperativismo vasco como respuesta a las actuales demandas, con incorporación de los avances e instrumentos jurídicos más recientes.

Fase de tramitación:

Comienza, en aplicación del artículo 7.1 de la Ley 8/2003, con la Orden de 19 de febrero de 2018 de la Consejera, de aprobación previa del anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi, en la que se incluye un primer borrador del texto de la norma en bilingüe.

Simultáneamente, se realizan por el órgano gestor, concretamente con fecha 31 de enero de 2018, sendas memorias: Técnica justificativa del anteproyecto, económica y de género.

Posteriormente, se recaban los siguientes informes, alegaciones y observaciones; artículos 7.3, 8, 9 Y 11 de la Ley 8/2003.

- Informe jurídico de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo y Justicia, de 2 de marzo de 2018, elaborado por la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios; artículo 7.3 de la Ley 8/2003.
- Informe de impacto en la empresa, de fecha 13 de marzo de 2018, elaborado por la Dirección de Economía Social.
- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (en adelante, DACIMA) de fecha 14 de marzo de 2018.
- Alegaciones de la Federación de EPSV de Euskadi, de 16 de marzo de 2018.
- Alegaciones de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, de 21 de marzo de 2018; solicitado en su calidad de representante de los interesados; artículo 8.3 de la Ley 8/2003 y Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, Primero, número 7.
- Informe 2/2018 del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, de 23 de marzo de 2018; artículo 8 de la Ley 8/2003.
- Observaciones al proyecto del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de 26 de marzo de 2018.
- Informe de fecha 3 de abril de 2018 emitido por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

- Observaciones al proyecto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 13 de abril de 2018.
- Informe 4/2018, de 11 de abril, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública.
- Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de la Viceconsejería de Política Lingüística, de 26 de abril de 2018.
- Observaciones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de 7 de mayo de 2018.
- Informe 270/2018 de la Autoridad Vasca de la Competencia de 27 de junio de 2018.
- Dictamen 13/18 del Consejo Económico y Social Vasco(CES), de 27 de junio de 2018.
- Alegaciones de Auditores BNFIX, de fecha 17 de julio de 2018.
- Informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación de 1 de octubre de 2018
- Informe de la Oficina de Control Económico de fecha 2 de octubre de 2018

Así mismo, art. 9 de la Ley 8/2003, se solicitan pero no se obtienen los informes o alegaciones correspondiente de: las tres Diputaciones Forales, requeridos el 6 de marzo de 2018; así como tampoco de la Asociación de Municipios Vascos/Euskadiko Udalen Elkartea, EUDEL, requerido el 7 de marzo de 2018.

Se han realizado sendas Memorias de tramitación, con ocasión de la instrucción del expediente de elaboración normativa, justificativas de las respectivas modificaciones del texto de anteproyecto, que constituyen las versiones sucesivas que resultan ser:

1ª.- Primera versión del anteproyecto, contenida en la Orden de 19 de febrero de 2015 de la Consejera, de aprobación previa del anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi. Se acompaña Memoria técnica justificativa del anteproyecto y Memoria económica, ambas de

31 de enero de 2018, así como un Informe de impacto en función del género, de 31 de enero de 2018. Se realizó además, el trámite de consulta pública previa a la elaboración de la norma, de 9 de octubre de 2018, realizado por la Dirección de Economía Social.

Para su elaboración se tuvo en cuenta, además, el documento de propuesta para una reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, elaborado por las tres universidades vascas.

2ª.- **Segunda versión** del anteproyecto y Memoria de tramitación justificativa, de fecha 25 de mayo de 2018, consecuencia de los cambios introducidos después de: **i) el trámite de audiencia pública**, realizado a través de la Confederación de Cooperativas de Cooperativas de Euskadi, y el informe del **Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi**; **ii) de los informes departamentales** evacuados: Informe jurídico departamental, de 2 de marzo de 2018, elaborado por la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios; las observaciones al proyecto del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de 26 de marzo de 2018; las observaciones al proyecto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 13 de abril de 2018; así como las Observaciones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de 7 de mayo de 2018; **iii) los preceptivos informes de género e idioma**: Informe de fecha 3 de abril de 2018 emitido por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; e Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de la Viceconsejería de Política Lingüística, de 26 de abril de 2018; **iv) los recabados de**: la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, Informe de fecha 14 de marzo de 2018 y de la Junta Asesora de Contratación Pública, Informe del Pleno de 4/2018, de 11 de abril; **v) finalmente**, se han tenido en cuenta también para esta segunda versión del anteproyecto, Alegaciones de la Federación de EPSV de Euskadi, de 16 de marzo de 2018.

3ª.- **Tercera versión** del anteproyecto y Memoria de tramitación justificativa correspondiente, de fecha 20 de julio de 2018. Se realiza como consecuencia del Informe 270/2018 de la Autoridad Vasca de la Competencia de 27 de junio de 2018; del Dictamen 13/18 del Consejo Económico y Social Vasco (CES), de 27 de junio de 2018; y de las Alegaciones de Auditores BNFIX, de fecha 17 de julio de 2018.

4ª.- **Cuarta versión** del anteproyecto y Memoria de tramitación justificativa correspondiente, de fecha 10 de octubre de 2018. Realizado con posterioridad al Informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación de 1 de octubre de 2018 y al Informe de la Oficina de Control Económico de fecha 2 de octubre de 2018.

Todo ello se documenta oportunamente en el expediente de tramitación, por lo que no procede reiterar en la presente Memoria, que ha de pronunciarse sobre las observaciones vertidas por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, de la que deriva una **quinta versión** del anteproyecto.

III.- MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TEXTO DEL PROYECTO A CONSECUENCIA DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS EMITIDOS, JUSTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES NO ACEPTADAS Y AJUSTE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL TEXTO QUE FINALMENTE SE ADOPTA.

Efectivamente, en fase de consulta al sector afectado y administraciones también potencialmente afectadas por la nueva norma, se han realizado las oportunas Memorias de tramitación, con ocasión de la instrucción del expediente de elaboración normativa, en ejecución de los artículos 7.3, 8, 9 y 11 de la Ley 8/2003, en las que se anticipa y da cumplimiento, en cada momento procedimental, a lo exigido por el artículo 10.2 de la reiterada Ley 8/2003, respecto de las modificaciones que se han ido introduciendo en el texto del anteproyecto desde su aprobación previa, así como las consideraciones jurídicas sobre las observaciones planteadas por los diversos informantes que no se han aceptado, con la concreción y detalle que el precepto aludido exige.

En consecuencia, resta pronunciarse sobre lo dictaminado por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (en adelante, COJUA) en relación con este anteproyecto. En tal sentido, **con fecha 28 de noviembre de 2018, la COJUA emitió su preceptivo Dictamen (nº 176/2018) en que se concluye que una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del mismo, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia.**

Procede en consecuencia, en esta fase final, considerar las observaciones formuladas, fijando el texto definitivo

La COJUAE divide su análisis al contenido del anteproyecto en tres tipos de observaciones: generales, otras observaciones al articulado y observaciones de técnica legislativa.

I.- OBSERVACIONES GENERALES.

A) Sobre la técnica normativa empleada:

Sobre la posibilidad de una nueva y parcial modificación de la Ley 4/1993 por el Parlamento Vasco con delegación legislativa para la refundición de cuantas ya dictadas la modifican.

Concluye la COJUAE, como lo hizo con ocasión del informe emitido en 2016, respecto de esta cuestión, que en el supuesto dictaminado hubiera estado justificado acometer previamente la modificación planteada sobre la Ley 4/1993, autorizando al Gobierno, en la misma norma modificativa, para ejecutar la refundición que ahora se plantea, dado las amplias facultades que se puede otorgar mediante dicha técnica de delegación.

Efectivamente, compartimos con el órgano consultivo en que se trata de una opción. Habitualmente es necesario regularizar, aclarar y armonizar lo refundido, por una parte y por otra, no se oculta la dificultad de la precisión del objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio a que se refiere el meritado artículo 52 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, que obliga, en todo caso, a la aprobación del texto gubernativo por el procedimiento de lectura única ante el Pleno del Parlamento para su debate y votación de totalidad.

Esta opción utilizada en la práctica con regularidad, por razones operativas, es también regularmente criticada en sede doctrinal por su proliferación, y corregida, en ocasiones en sede

judicial. Por ello, se ha optado por someter al Parlamento la integridad del texto normativo, lo cual faculta además de garantizar su legitimidad y seguridad jurídicas, ratificar expresamente la validez de la normativa acordada 25 años antes.

B).- Sobre la competencia en derecho civil foral vasco: introducción, en la parte expositiva del anteproyecto, del título competencial derecho civil propio, artículo 10.5 EAV.

El título competencial propio, específico y suficiente es el de "COOPERATIVAS", ex art. 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que atribuye a esta Comunidad Autónoma competencia exclusiva en la materia, conforme a la legislación general en materia mercantil. La suficiencia de dicho título competencial se halla acreditada y consolidada, tanto legislativa como jurisprudencialmente; no habiéndose detectado, no obstante los procesos contenciosos en que se ha considerado, problemas de seguridad jurídica.

En este orden de cosas, la consideración de que esta materia “no pueda ser excluida del concepto de derecho civil “ o que pueda calificarse como tal toda norma aprobada por la asamblea legislativa en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 149.1-8ª de la CE, ha de matizarse convenientemente en el sentido de que es referido a una Comunidad Autónoma que carece del nivel competencial propio o exclusivo en esta en la materia (artículo 28 de la L.O. 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia), y se realiza a efectos de competencia casacional.

No es el supuesto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, más allá de la necesidad estricta o pertinencia de la invocación del título competencial en materia de derecho civil propio, puede resultar conveniente, complementariamente, hacer referencia al mismo en la parte expositiva del anteproyecto que se elabora.

c) Sobre la sociedad cooperativa pequeña.

1.- No obstante la referencia expresa en la Ley 6/2008, de 25 de junio, que regula la Sociedad Cooperativa Pequeña a la norma general cooperativa, como supletoria y la mención en el anteproyecto en su parte expositiva a la relación entre ambas, puede convenir, además, incluir en la disposición final primera número 2 dicha referencia en los siguientes términos:

“2.- Así mismo, esta ley de cooperativas y sus normas de desarrollo también se aplicarán supletoriamente a las sociedades cooperativas pequeñas, reguladas por la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi.”

2.- En orden aplicar estrictamente el criterio de regulación propia de ambos tipos de sociedad cooperativa, la denominada y regulada por la Ley mencionada, 6/2008, sociedad cooperativa pequeña y el resto de sociedades cooperativas, en normas propias (aunque relacionadas en los términos de supletoriedad antedichos), procede, como se propone por la entidad informante, extraer el contenido del artículo 150.3.b) relativo a personación de administradores en el trámite de audiencia que regula a una disposición adicional.

Disposición Adicional Tercera

“En el supuesto de descalificación de una sociedad cooperativa pequeña, se aplicará supletoriamente el artículo 150 de esta Ley, con la siguiente especialidad: en el trámite de audiencia que la misma regula en su número 3.b), en defecto de administradores, será suficiente que se persone una persona socia.”

D)- Sobre la modulación de la responsabilidad en función de la remuneración, artículo 50.1.1er. párrafo.

Se halla ya regulada en la actual norma en vigor, art. 47.1 de la Ley 4/1993 y no consta que haya ocasionado una problemática específica suapreciación por el juzgador.

Ha de considerarse en todo caso:

1) que el desempeño del cargo de administrador es en principio y carácter general, gratuito; art. 45.1, y la práctica ordinaria de las cooperativas;

2) que en la gran mayoría de casos, no son gestores profesionales – en términos de la propia sentencia aludida por la entidad informante. “personas poco acostumbradas a la actividad comercial o mercantil” “con más voluntad que otra cosa”, que no actuaron con “la más elemental prudencia exigida a un administrador” (lo cual es significativo del carácter gradual de dicha prudencia incluso teniendo en cuenta las circunstancias objetivas de actuación negligente, daño causado y relación decausalidad)-,

3) El ejercicio de la actividad gestora deriva del principio cooperativo de gestión democrática, y constituye no solo un derecho, art.23.1.a), sino incluso un deber, art. 22.b).

A ello, debe añadirse que el propio informe de la COJUAE admite la posibilidad de modulación o matización (independientemente de su problemática o complejidad práctica) de la responsabilidad en base el artículo 1103 del C.c., remitiéndolo a la “facultad discrecional” del tribunal que conozca del caso. Al respecto, deben realizarse sin embargo, dos matizaciones:

1º.- Los propios tribunales civiles, históricamente, han establecido que dicha modulación no puede ser en absoluto discrecional ni arbitraria, sino que habrán de atenderse las circunstancias y normas que les afectan.

2º.- La inclusión de tal modulación en relación con la “diligencia debida” se introdujo en la Ley 4/1993, inspirado en el C.c. pero en su artículo 1726, relativo al mandato; institución en tiene su origen la función del administrador; reproduciendo su dicción.

En todo caso, para una mayor precisión y seguridad jurídica, cabría extractarlo del párrafo primero del artículo 50.1 y añadir un párrafo tercero, referido expresamente a la culpa, en los siguientes términos:

“La responsabilidad por actos en que haya intervenido culpa se estimará con más o menos rigor en función del carácter retribuido o no del cargo”

E) La consideración como agente social de la Confederación de Cooperativas de Euskadi

1. Procede reconsiderar la atribución a la Confederación de Cooperativas de Euskadi, *intuitu personae*, de la condición de agente social descansa en la legitimidad democrática representativa construida en base a la arquitectura del artículo 153.3 del anteproyecto. Ha de advertirse que el reconocimiento debatido a que se refiere el artículo 145.1 del anteproyecto no lo es en abstracto (esto es, puede haber otros agentes sociales representativos a niveles inferiores de subsectores, por ejemplo, en materia de educación, etc.) sino que lo es precisamente en su interlocución representativa del conjunto del Cooperativismo Vasco. Es en esa representación integrada y mayoritaria del cooperativismo vasco donde dicha entidad asociativa, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, encuentra su legitimidad, en coherencia con el reiterado artículo 153 del anteproyecto.

2. Ello no obsta para que puedan existir, efectivamente, en un momento determinado de desarrollo del asociacionismo cooperativo, otras entidades que cumplan, materialmente, la función explicitada, siempre que cumplan determinada mayoría, toda vez que representan al “conjunto del cooperativismo vasco”. En consecuencia, es procedente sustituir la mención concreta a Confederación de Cooperativas de Euskadi por los criterios de representatividad que se estiman necesarias que debe cumplir la entidad asociativa cooperativa a efectos de dicha interlocución del conjunto del cooperativismo vasco.

3. Por otra parte, en línea con el carácter empresarial subrayado por la COJUA en su informe, procede hacerlo constar explícitamente, cohonestándolo con las normas propias de representatividad que rigen en los ámbitos decisionales o de consulta y en los organismos de representación institucional correspondientes.

En su virtud:

1º.El artículo 145.1.2º párrafo del anteproyecto queda redactado como sigue:

“Asimismo, reconocen como agente social específico para la interlocución representativa del conjunto del Cooperativismo Vasco, y sin perjuicio de las reglas vigentes sobre representatividad empresarial, a la entidad que asocie a más del sesenta por ciento de las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Euskadi, con actividad acreditada ante el mismo, o cuando el número de personas socias de las dichas cooperativas sea superior a idéntico porcentaje respecto al total de personas socias de las cooperativas activas e inscritas en el citado Registro.”

2º.- El artículo 146.2.a) del anteproyecto queda redactado como sigue:

“Se asegurará la representatividad institucional del movimiento cooperativo vasco, en los términos a que se refieren los artículos 145.1 y 152.2 de la presente Ley, propiciando la presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y decisión y organismos de representación institucional correspondientes y su progresiva consolidación normativa.”

II.- OTRAS OBSERVACIONES AL ARTICULADO

Respecto del artículo 18.2, relativo a la remisión a los jueces y tribunales competentes del orden civil sugerido, derivado de su conexión con la apelación al título competencial de derecho civil propio, art. 10.5 del Estatuto de Autonomía, por coherencia con lo expuesto y razonado en el

párrafo anterior, **estimamos conveniente seguir manteniendo la remisión a los jueces y tribunales de lo mercantil, por claridad.**

Adviértase que las normas societarias homólogas mercantiles, en concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, realiza similar remisión explícita.

Recuérdese que la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de cooperativas, artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, dispone la competencia exclusiva de la misma, “conforme a la legislación general de carácter mercantil”; conformidad que en el caso analizado cabe interpretar aplicable a la jurisdicción competente debatida.

Respecto del artículo 48.2, especificación del lugar de adopción de acuerdos en el supuesto de videoconferencia.

De conformidad con el Artículo 39.1.a) del anteproyecto que regula el Acta de asamblea general, en la misma sean de consignar, respecto de cada acta, el lugar de la reunión de la misma, se haya realizado por videoconferencia o no. En todo caso, la participación por videoconferencia de determinados socios será, habitualmente, minoritaria. Y en todo caso, el lugar de celebración se fijará en la convocatoria correspondiente, art. 35.5 del anteproyecto, por lo que no se considera necesario especificarlo en el artículo 48.2 del anteproyecto.

Artículo 100, cancelación registral, utilización de medios electrónicos.

Dependerá del soporte electrónico en que consistan los libros y documentos a conservar. Se ha de advertir que los libros y los demás registros contables irán encuadernados y foliados, y antes de su uso serán habilitados por el Registro de Cooperativas de Euskadi, artículo 74.2 del anteproyecto; pero también son válidos los asientos y las anotaciones realizados por procedimientos informáticos o electrónicos para formar los libros obligatorios, número 3 de dicho precepto.

Artículo 118.3.- cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso.

La Disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, del País Vasco, regula la promoción o adquisición de conjuntos residenciales por asociaciones sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso, lo es sin perjuicio de otras modalidades de autopromoción o de promoción a través de cooperativas.

En cualquier caso, la regulación de ambas entidades resulta básicamente coincidente.

En concreto, la prevención sobre la inexistencia de lucro o beneficio especulativo en una enajenación controlada por el consejo rector resulta innecesaria respecto de este tipo de entidades, por su propia naturaleza y finalidad, artículo 117 y concordantes del anteproyecto; toda vez que la cesión de uso no es más que una modalidad de la adjudicación.

Disposición transitoria segunda. Sobre la necesidad de adaptación estatutaria y las consecuencias de su incumplimiento.

Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

- No se trata de una modificación sustancial o radical y total de la norma en vigor, como ocurrió con la Ley 4/93 respecto de la Ley 1/82, de cooperativas. Es básicamente una refundición con modificaciones puntuales y no todas con necesario reflejo o consecuencias de modificación estatutaria.
- Tampoco las sucesivas modificaciones legislativas cooperativas posteriores a 1993 y que se refunden, aun cuando pudieran afectar a una determinada regulación estatutaria, obligaron a una modificación estatutaria respecto de los extremos regulados de forma novedosa.
- Por su parte, en el ámbito mercantil, la reciente ley 31/2014, -tenida en cuenta para la emisión del dictamen- solo y respecto de determinados artículos, obliga a que las modificaciones introducidas por la misma se acuerden en la primera junta general que se celebre con posterioridad al 1 de enero de 2015, fecha de entrada en vigor de las mismas. No establece consecuencia alguna expresa para el caso de su incumplimiento. Y todo

ello a diferencia de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y de la Ley de Sociedades Limitadas de 1995.

- Tampoco lo exige el texto refundido de las sociedades de capital, RDL 1/2010, de 2 de julio (no obstante su extensión, 541 artículos); precisamente, en este caso, por su carácter de refundición.

Por todo ello, consideramos que debe mantenerse la redacción originaria.

III.- OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.

Realizadas en base a las Directrices para la elaboración de proyectos de ley aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993 y que corresponden con los párrafos 148 a 166 del Dictamen, **todas ellas, con la excepción que se señalará a continuación, se han incorporado en la proposición normativa, que se adjunta a la presente Memoria**, por considerar que: clarifican su redacción; añaden seguridad jurídica; lo ajustan al entorno normativo concurrente; y suponen, finalmente, mejoras de estilo.

Exposición de motivos, último inciso del apartado XIII.

Revisado, para mayor claridad se introduce expresamente la locución: “su regulación”:

“Por último, respecto de las cooperativas mixtas, calificación que puede atribuirse a cualquier clase de las reguladas por la Ley, **su regulación** constituyó una importante innovación incorporada en 1993 que ha sido desarrollada posteriormente de forma reglamentaria, con la finalidad de facilitar la financiación de proyectos empresariales cooperativos”

Artículo 32.1.b).- explicitar, en la parte dispositiva, que puede haber dos clases de órgano de

administración.

El artículo 43.1.primer párrafo fija las clases de órgano de administración. Por lo que resulta reiterativo incluirlo también en el artículo 32, que pretende diferenciar las clases de órganos por su naturaleza, no lo subtipos dentro de cada uno de ellos, como tampoco se extiende en las clases de asambleas (de delegados, universales, celebrados en primera, segunda o tercera convocatoria,...)

Artículos 88.5; 103.4.h) 129.1 y 133- “y/o”

Efectivamente, aquellos supuestos respecto de los que se establezca simultáneamente una adición (“y”) y una alternativa (“o”) carecen de sentido.

Sin embargo, no es el caso del **artículo 88.5**, donde no hay un solo supuesto sino dos. Así, un supuesto es el que se segrega el patrimonio y las personas socias de la cooperativa en favor de una entidad no cooperativa y otro, el que se segrega el patrimonio o las personas de la cooperativa a favor de una entidad no cooperativa.

Por lo tanto, en aras de una economía elemental de lenguaje y en evitación de reiteraciones innecesarias se propone y mantiene “y/o”.

De forma similar, **artículo 103.4.h)** del anteproyecto: un persona trabajadora puede padecer deficiencias o disfuncionalidades psíquicas y sensoriales a la vez, o por el contrario, solo psíquicas o solo sensoriales.

Así también, **artículo 129.1** del anteproyecto, una cooperativa de transporte puede tener por objeto organizar y prestar servicios de transporte; organizar pero no prestar servicios de transporte, y finalmente, prestar pero no organizar servicios de transporte.

Finalmente, también al artículo 133 del anteproyecto, es aplicable lo expuesto en relación con el artículo 103.4.h).

Artículo 132.2., cooperativas junior.

Lógicamente, si la comunicación de pérdida del carácter de junior cooperativa es a efectos de su clasificación, significa que lo es a efectos de “oportuna” o “nueva” clasificación; toda vez que estaba clasificada como “junior cooperativa”.

Disposición Final Segunda.- ámbito de aplicación.

En realidad, se refiere al título competencial que habilita al legislador vasco para normar sobre determinadas cooperativas (ámbito de competencia). Está relacionado con la materia principal pero no regula ella misma la materia principal, expresa la legitimidad para hacerlo.

Disposición Final tercera.- otras clases de cooperativas.

Efectivamente, se trata en este caso de un mandato de actuación –no regula la materia en sí– dirigido al Gobierno, para en su caso, regular nuevas clases y **establecer las normas especiales en función de peculiaridades socioeconómicas también novedosas**; puesto que la clasificación de una sociedad cooperativa con carácter ordinario se halla recogido en el artículo 102 del anteproyecto. Dicho precepto parte de la libre configuración estatutaria las cooperativas, para las que deberá aplicarse la normativa legalmente prevista para la clase de entidades con las que aquéllas guarden mayor analogía.

2.- En relación con la clasificación interna de los artículos:

1.- Se mantiene como criterio básico el de la vigente ley (vg, Art. art. 19.1 de la Ley 4/1993) de forma que se respeta la clasificación existente de los artículos no modificados y se aplica el mismo criterio en la clasificación de los que sí lo han sido.

2.-Así, cuando se ha introducido un nuevo párrafo,(vg. Art. 36.1) y no se halla numerado, es porque corresponde a un concepto o idea básica (en el caso anticipado, el lugar de celebración de la asamblea general); correspondiendo el siguiente párrafo numerado a otro concepto y así sucesivamente, de todos los que integran el tema a regular (el funcionamiento de la asamblea general); siendo todos ellos ítems de la misma clase. Por su parte, la asignación de letras u dígitos ordinales corresponde a listas o numeraciones (vg. Art. 44.1), que solo cuando actúan como componentes o partes de un todo, es decir, subdivisiones del párrafo, procede asignar.

3.- Esto es, por su contenido significativo, no todos los así denominados indistintamente "párrafos" son idénticos a efectos sistemáticos y de clasificación del contenido de los artículos.

Finalmente, se ha procedido, una vez más, a revisar la redacción del anteproyecto desde la perspectiva de género.

Como resultado de cuanto se ha expuesto y razonado, el órgano de tramitación considera ultimado el procedimiento de elaboración del proyecto de ley de cooperativas de Euskadi, realizado de conformidad con la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, regulador del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general; debiéndose someter al mismo su aprobación final en los términos del artículo 12 de dicha norma procedimental.

Fdo. electrónicamente: Jesús Alfredo Ispizua Zuazua	Fdo. electrónicamente: Joaquín Díaz Arsuaga
Responsable de asesoría jurídica, DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL	Director de Economía Social. DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

EUSKADIKO KOOPERATIBEN LEGEAREN PROIEKTUAREN PRESTAKUNTZA: AZKEN MEMORIA

Memoria hau, araugintzako proiektuaren izapideetan egin diren guztiak bezala, abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, xedapen orokorrak egiteko prozedurarenak (hemendik aurrera 8/2003 Legea), 10.2 artikuluan xedatzen duena betetzeko egin da; memoriaren izaera, egitura eta edukia lege horretan ezartzen direnak dira.

I.- AURREKARIAK

Kooperatibak sustatzeko politiketan, erabateko garrantzia dauka haien forma juridikoa eta jarduna arautzen dituen legegintza-politika egokia izateak, horren bidez aurre egin behar baitzaie ekonomiaren eta enpresen gaur egungo eta, batez ere, etorkizuneko beharrezaneiei, aurrera egiteko eta zabaltzeko gauza izan daitezen.

Hain zuzen ere, indarrean dagoen legea (4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko kooperatibena; hemendik aurrera 4/1993 Legea) oso euskarri juridiko eraginkorra izan da azken 25 urteetan Euskadiko Autonomia Erkidegoko kooperatibentzat. Hala ere, orain alderdi batzuk eraberritu behar zaizkio, eraginkortasunari eutsiko badio.

Horretarako, aurreko legealdian Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak araugintzako proiektua prestatu eta onartu zuen, baina gero, Legebiltzarreko izapidean, indargabetuta geratu zen hura desegin ondoren.

Legegintzako ekimen hori eragin zuten arrazoiek bere hartan segitzen dutenez gero, oraingo legealdian berriz ere prestakuntza-lanei ekin zaie, hasiera-hasieratik ekin ere, planteatutako soluzioak berriro aztertzeko eta, harrezkero, aldia laburra izan bada ere, gertatu diren aldaketa batzuk txertatzeko.

Orduan azaldu zen bezala, lege berriak erronka hauek dauzka:

* 1993az geroztik egin diren aldaketak arau-testu bakar batean bateratzea eta biltzea.

* Mota honetako sozietateen eraginkortasuna eta balioa ziurtatzen duten funtsezko arazoak argitzea, enpresa sortzeko aukera demokratiko eta solidario gisa; adibidez, gizarte-zorreatatik bazkideek dituzten erantzukizunen kasuan.

* Kooperatiba mota jakin batzuen legezko konfigurazioa berrikustea, kooperatiben araubide organiko eta funtzionalera egokitu ahal izateko, eta egokitzapen hori bermatzeko; esate baterako, etxebizitza- eta garraio-kooperatiben kasua.

* Administrazioak kooperatiben arloan egiten duen sustapen- eta kontrol-jarduna egungo ingurune juridiko, ekonomiko eta instituzional orokorrera egokitzea; era berean, jardun hori Euskadiko kooperatibek sozietate gisa duten garapen-mailara egokitzea, sozietate horien nortasunaren berezitasunak identifikatuz, sustatuz eta bermatuz, hots, kooperatibak interes sozialekotasunak jotzea zilegitzeko duen hura.

* Sozietateen zuzenbidearen ildo orokorrak sartzeko, etengabe eta bizkor aldatzen direnak eta eboluzionatzen dutenak; adibidez, gogoratu korporatiboaren arauetarenak.

* Alderdi jakin batzuk estatutuen bidez autoerregulatzeko aukera ematea barne-erregulamenduan, edo, hala badagokio, korporazio-mugimenduaren barruan.

* Doikuntza eta hobekuntza juridikoak eta teknikoak egitea, arauaren koherentziari laguntzen diotenak edo hura interpretatzeko eta praktikan aplikatzeko lagungarri direnak.

Oraingo araugintzako proposamenaren xedea ez da indarrean dagoen 4/1993 Legearen (aldatua) oinarritzako egitura, materiala eta formala ordeztzea, ez eta kooperatiben izaeraz egindako interpretazioa ere, Nazioarteko Kooperatiba Aliantzaren printzipioekin eta balioekin (1995) bat datorrena, berariaz aipatzen baita 1. artikuluan.

Oro har, araugintzako proiektuak honako helburu hauek dauzka:

1. Segurtasun juridikoa areagotzea barneko eta kanpoko kooperatiba-harremanetan, eta hari dagokion merkataritza-trafikoan, sozietate-lanak arintzeko.
2. Kooperatiben egitekoak eta prestazioak zabaltzea.

3. Bermatzea onartzen dela kooperatibak lagungarriak direla gizarte osoaren onurarako politikak aztertzeko, antolatzeko eta betearazteko.

Aplikazio-eremua, hau da, araugintzako testuaren eraginpeko pertsona juridikoak eta beren bazkideak, eta kooperatibek ekonomian eta gizartean duten garrantzia (establezimenduak, enplegua, BPGd-ari eranstean dioten balioa, fakturazioa, esportazioa, inbertsioa I+Gn, eta oinarritzko gainerako parametroak) justifikazio-memorian zehazten dira.

Gainera, azpimarratu behar da memoria honen prestakuntzan EAEko hiru unibertsitateek hartu dutela parte (EHU/UPV, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragón Unibertsitateak) eta sektorearen onarpena jaso duela.

Azkenik, azaldu dena kontuan edukita, eta Gobernu Kontseiluak 2010eko abenduaren 28ko bilkurako 1. Erabakiko 9. puntuari dagokionez, lege berriak sustatzen du IKTbak sozietate-jardunean ez ezik administrazio-jardunean ere erabiltzea, batez ere erregistroen ingurukoan, eta horrek nahikoa murriztuko ditu administrazio-kargak.

II.- PROIEKTUAREN IZAPIDEAK EGITEA

Izapideei eta prozedurari dagokienez, bete egin dira, bai 8/2003 Legea, bai Xedapen Orokorrak Izapidetzeko Jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko Gobernu Kontseiluaren Erabakia.

Ilido horretatik, eta 8/2003 Legearen egiturari jarraiki:

Hasiera-fasea, eta 8/2003 Legeko 5. artikulua aplikatuz:

Lan eta Justizia sailburuaren 2017ko uztailaren 26ko agindu baten bidez abian jarri zen Euskadiko kooperatiben legearen aurreproiektua egiteko prozedura.

2017ko urriaren 9an araugintzari ekin aurreko kontsulta publikoaren izapidea egin zen, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 133. artikuluan ezartzen duena betetzeko: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan agertu zen, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren abenduaren 12ko 132/2017 Ebazpenarekin bat etorritik; izan ere, horren bitartez xedatzen da argitaratu egin behar dela Gobernu Kontseiluaren erabakia, xedapen orokorrak egiteko prozedura aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituen.

Izapideen hasierako fase honetan honako hau hartu zen kontuan aurreproiektua egiteko: ekainaren 24ko 4/1993 Legea, Euskadiko kooperatibena, eraberritzeko proposamena, EAEko hiru unibertsitateek egindakoa; proposamen horren funtsa da EAEko kooperatibak arautzen dituen esparru juridikoa gaur egungo eskaeretara egokitzea eta aspaldion gertatu diren aurrerapen juridikoak eta sortu berri diren tresna juridikoak txertatzea.

Izapideen fasea:

8/2003 Legearen 7.1 artikulua aplikatuz, sailburuaren 2018ko otsailaren 19ko agindu batek abiarazi zuen, Euskadiko Kooperatiben Legearen aurreproiektua aldeztatik onesten duen erabakiak; erabaki horretan legearen lehen zirriborroa txertatu zen, bi hizkuntzetan.

Aldi berean, 2018ko urtarrilaren 31n, hain zuzen, organo kudeatzaileak memoriak egin zituen: Aurreproiektuaren justifikazio teknikoa, ekonomikoa eta generokoa.

Ondoren, honako txosten, alegazio eta oharra bildu ziren (8/2003 Legea: 7.3., 8., 9. eta 11. artikulua):

- Lan eta Justizia Saileko Zerbitzu Zuzendaritzaren txosten juridikoa, 2018ko martxoaren 2koa, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak eginak; 8/2003 Legea, 7.3. artikulua.

- Legeak enpresetan edukiko duen eraginari buruzko txostena, 2018ko martxoaren 13koa, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak egina.
- Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren (HHABHZ) txostena, 2018ko martxoaren 14koa.
- Euskadiko EPSV Konfederazioaren alegazioak, 2018ko martxoaren 16koak.
- Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren alegazioak, 2018ko martxoaren 21ekoak; interesdunen ordezkaria den aldetik eskatu zuen; 8/2003 Legearen 8.3. artikulua eta Gobernu Kontseiluaren 201eko abenduaren 28ko erabakia, Lehen, 7. puntua.
- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren 2/2018 txostena, 2018ko martxoaren 23koa; 8/2003 Legea, 8. artikulua.
- Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren oharrak proiektuari buruz, 2018ko martxoaren 26koak.
- Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, 2018ko apirilaren 3koa.
- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren oharrak proiektuari buruz, 2018ko apirilaren 13koak.
- Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen 4 /2018 txostena, apirilaren 11koa.
- Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Herri Administrazioen Hizkuntza Normalkuntzarako Zuzendaritzaren txostena, 2018ko apirilaren 26koa.
- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren oharrak, 2018ko maiatzaren 7koak.
- Lehiaren Euskal Agintaritzaren 270/2018 txostena, 2018ko ekainaren 27koa.
- Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 13/18 Irizpena, 2018ko ekainaren 27koa.
- Auditores BNFIXen alegazioak, 2018ko uztailaren 17koak.
- Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren txostena, 2018ko urriaren 1ekoa.
- Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, 2018ko urriaren 2koa.

Halaber, honako hauek ez dute aurkeztu txostenik, ez alegaziorik, eskatu arren (8/2003 Legea, 9. artikulua): hiru foru aldundiek (2018ko martxoaren 6an eskatuak) eta Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) (2018ko martxoaren 7an eskatuak).

Araugintzako espedientearen instrukzioan, memoria bat egin da aurreproiektuaren testua aldatu den bakoitzean; ondorioz, honako bertsio hauek egon dira:

1.- Aurreproiektuaren **lehen bertsioa**, sailburuaren 2018ko otsailaren 19ko aginduan, Euskadiko Kooperatiben Legearen aurreproiektua aldeztatik onesten duenean, txertatutakoa. Horrekin batera aurreproiektua justifikatzeko memoria teknikoa eta memoria ekonomikoa egin ziren (biak 2018ko urtarrilaren 31koak), eta generoaren araberrako eraginari buruzko txostena ere bai (2018ko urtarrilaren 31koa). Gainera, 2018ko urriaren 9an Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak araugintzari ekin aurreko kontsulta publikoaren izapidea egin zuen.

Hori egiteko honako hau ere hartu zen kontuan: Euskadiko Kooperatiben 4/1993 Legea, ekainaren 24koa, eraberritzeko proposamena, EAEko hiru unibertsitateek egindakoa.

2.- Aurreproiektuaren **bigarren bertsioa** eta horren justifikazio-memoria, 2018ko maiatzaren 25ekoak, honako hauen ondoren egindako aldaketan ondorioz: **i) jendaurreko entzunaldiaren izapidea**, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioaren bidez egin, eta **Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren txostena**; **ii) sailen txostenak**: Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak egindako txostena, 2018ko martxoaren 2koa; Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren oharra proiektuari buruz, 2018ko martxoaren 26koa; Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren oharra proiektuari buruz, 2018ko apirilaren 13koa; Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren oharra, 2018ko maiatzaren 7koa; **iii) generoari eta hizkuntzari buruzko aginduzko txostenak**: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen txostena, 2018ko apirilaren 3koa; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Herri Administrazioen Hizkuntza

Normalkuntzarako Zuzendaritzaren txostena, 2018ko apirilaren 26koa; **iv) honako hauei eskatutakoak:** Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren txostena, 2018ko martxoaren 14koa; Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen 4/2018 txostena, apirilaren 11koa; **v) azkenik**, aurreproiektuaren bigarren bertsiorako kontuan eduki dira Euskadiko EPSV Konfederazioaren alegazioak, 2018ko martxoaren 16koak.

3.- Aurreproiektuaren **hirugarren bertsioa** eta horren justifikazio-memoria, 2018ko uztailaren 20koak. Honako hauen ondorioz egin da: Lehiaren Euskal Agintaritzaren 270/2018 txostena, 2018ko ekainaren 27koa; Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen 13/18 Irizpena, 2018ko ekainaren 27koa; Auditores BNFIXen alegazioak, 2018ko uztailaren 17koak.

4.- Aurreproiektuaren **laugarren bertsioa** eta horren justifikazio-memoria, 2018ko urriaren 10ekoak. Hauen ondorioz egin da: Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzaren txostena, 2018ko urriaren 1ekoa; Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, 2018ko urriaren 2koa.

Hori guztia behar bezala dokumentatuta dago izapide-espedientean; hortaz, ez dago memoria honetan errepikatu beharrik. Memoria honek Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak aurreproiektuaz egindako oharrak hartu behar ditu kontuan; hortik **bosgarren bertsioa** sortuko da.

III.- EMANDAKO AGINDUZKO TXOSTENEN ONDORIOZ AURREPROIEKTUAREN TESTUAN EGINDAKO ALDAKETAK, ONARTU EZ DIREN OHARREN JUSTIFIKAZIOA ETA AZKENEAN ONARTU DEN TESTUAREN ANTOLAMENDU JURIDIKOAREKIKO DOIKUNTZA.

Hain zuzen ere, lege berriaren eraginpeko sektorea eta hark uki litzakeen administrazioak entzuteko fasean, izapidetzeko memoria egokiak egin dira araugintzako espedientearen instrukzioan (8/2003 Legearen 7.3., 8., 9. eta 11. artikulua betetzeko); memoria horietan 8/2003 Legeak 10.2. artikuluan ezartzen duena aurreratzen eta betetzen da aurreproiektuaren testuan aldeztu aurreko onespentik egin diren aldaketei dagokienez, eta kontuan hartzen dira informaziorik ez onartu ez zaizkien oharrei buruz egindako gogoeta juridikoak, lege horrek eskatzen duen zehaztasunarekin eta bertan eskatzen den xehetasun-mailarekin.

Horrenbestez, ez da geratzen besterik Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak (aurrerantzean EABJ) aurreproiektu honetaz eman duen irizpena ebatzea baino. Izan ere, **2018ko azaroaren 28an EABJk aginduzkoa duen irizpena eman zuen (176/2018); irizpenean adierazten da bertan egindako oharra kontuan eduki ondoren legearen aurreproiektua Gobernu Kontseiluari bidali ahal zaiola, onetsi dezan.**

Beraz, azken fase honetan aurkeztutako oharra aintzat hartu behar dira eta behin betiko testua finkatu behar da.

Aurreproiektuaren edukiari buruz egindako azterketan, EABJk hiru ohar mota egiten ditu: ohar orokorrak, artikuluei buruzkoak eta legegintza-teknikaren arlokoak.

I.- OHAR OROKORRAK.

A) Araua emateko erabilitako teknikari buruzkoak:

Aukera dago Eusko Jaurlaritzak, legegintza-eskuordetzarekin, 4/1993 Legea berriro partzialki aldatzeko, aurrez jada lege hori aldatzen dutenak eta emanda daudenak batuta.

Gai honen gainean, EABJk adierazten du, jada 2016ko txostenean egin zuen moduan, emandako irizpenean justifikatuta egongo zela aurrez ekitea Ley 4/1993 Legeari buruz planteatu zen aldaketari; eta horrek aukera emango zion Jaurlaritzari, arau aldarazle berarekin, orain planteatzen den bat egite hori gauzatzeko, izan ere, ahalmen handia eskaintzen du eskuordetza-teknika horrek.

Guk ere, aholku-organoak bezala, aukera bat dela uste dugu. Normalean beharrezkoa izaten da bat egindakoa arautzea, argitzea eta bateratzea, alde batetik zein bestetik; aitortu beharra dago zaila dela helburua zehatz betetzea, baina handia da legegintza-eskuordetzaren eragina, eta bide horretan printzipio eta irizpide jakin batzuei jarraitu behar zaie, ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 52. artikulua adierazten duenarekin bat; bada, artikulua horren arabera, gobernuaren testua, edozein kasutan ere, onetsia izan behar da, nola eta Legebiltzarraren Osoko Bilkuran irakurraldi bakarra egin, eta dagokion eztabaida eta osoko bozketa eginda.

Aukera hau sarritan erabiltzen da, eraginkorra delako, baina egoitza doktrinalean kritikatu ere kritikatzeko dute, larregi erabiltzen delako, eta, zenbaitetan, egoitza judizialean zuzendu egiten dute. Horregatik erabaki da testu arauemailea osorik Legebiltzarrera eramatea, bertan eztabaida dadin; horrek zilegitasuna eta segurtasun juridikoa emango dio, eta, bide batez, orain dela 25 urte adostutako araudiaren baliotasuna espreski berretsiko da.

B).- Euskal foru zuzenbide zibilean eskumena zertan den: aurreproiektuaren azalpen-zatian, zuzenbide zibil propioaren eskumen-titulua sartzeari, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.5. artikulua.

Eskumen-titulu propioa, espezifikoa eta nahikoa “KOOPERATIBENA” da, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.23. artikuluan zehazten den moduan; izan ere, artikulua horrek Autonomia Erkidego honi ematen dio gai honetan erabateko eskumena, merkataritza-azietako legeria orokorrarekin bat. Eskumen-titulu horren nahikotasuna guztiz egiaztatuta eta egonkortuta dago, bai legearen aldetik, bai jurisprudentziaren aldetik, eta horren gainean egin diren azietan ez da antzeman segurtasun juridikoko arazorik.

Gauzak horrela, esaten denean gai hau ezin dela “zuzenbide zibil kontzeptutik kanpo utzi”, edo horren baitan sartzen denean batzar legegilean onartutako edozein arau ELehen 149.1-8. artikulua emandako eskumena baliatuz, komeni da zehaztea gai honetan eskumen propioa edo erabateko eskumenik ez daukan Autonomia Erkidego batez ari garela (apirilaren 6ko 1/1981 Legea, Galiziako Autonomia Estatutuarena), eta kasazio-eskumeneko ondorioetarako egiten dela.

Ez da Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion zerbait, eta zuzenbide zibil propioaren aldarrikapena egiteko beharrik dagoen edo abagune egokia den eztabaida daiteke, baina akaso komeni da, modu osagarrian, horren aipamena egitea abian den aurreproiektuaren azalpen-zatian.

C) Sozietate kooperatibo txikiari buruzkoak.

1.- Ekainaren 25eko 6/2008 Legean espreski aipatzen da, lege horrek Sozietate Kooperatibo Txikia kooperatiben arau orokorraren baitan sartzen baitu, ordezkari moduan, eta aurreproiektuaren azalpen-zatian bien arteko harremanaz hitz egiten da; baina, hala ere, akaso komeni da azken xedapenetako lehenengoan, 2. zenbakian, horren aipamena egitea modu honetara:

“2.- Aldi berean, kooperatiben lege hau eta bere garapenerako arauak osagarri gisa aplikatuko zaizkie sozietate kooperatibo txikiei, horiek arautzen baititu ekainaren 25eko 6/2008 Legeak, Euskadiko Sozietate Kooperatibo Txikiarenak.”

2.- Helburua da irizpide finko bat erabiltzea sozietate kooperatiboen arautze propio horretan; izan ere, aipatu den 6/2008 Lege horrek izendatzen eta arautzen duenak, sozietate kooperatibo txikiak, eta gainerako sozietate kooperatiboek arau propioak izango dituzte (baina elkarren osagarri ere izango dira, aurrez aipatu denez). Dena dela, honen berri ematen duen erakundeak berak proposatzen du 150.3.b) artikulua edukia laburbiltzea, horretan hitz egiten baita administrazioak bertaratzeaz xedapen gehigarri bat arautzen duen jendaurreko saiora.

Hirugarren Xedapen Gehigarria

“Baldin eta sozietate kooperatibo txiki bat deskalifikatzen bada, horren ordeztu Lege honen 150. artikulua aplikatuko da, zehaztapen hau eginda: legearen 3.b) zenbakian jendaurreko saioa dator araututa; bada, saio horretan, administrazioak barik, nahikoa izango da bazkide bat bertaratzea.”

D)- Nola modulatu den erantzukizuna jasotzen den ordainsariaren arabera, 50.1. artikulua, 1. paragrafoa.

Jada araututa dago, indarrean den 4/1993 Legearen 47.1. artikulua arabera, eta ez dugu uste epaileak horren gainean duen ikuspegiak aparteko arazorik eragingo duenik.

Dena dela, aintzat hartu behar dira hurrengoak:

1) administratzaile-kargua, printzipioz eta modu orokorrean, doakoa dela; 45.1. art., eta kooperatiben ohiko jarduera;

2) kasu gehienetan, ez direla kudeatzaile profesionalak –honen berri ematen duen erakundeak aipatzen duen epaian esaten denez: “merkataritza-jardueretara ohituta ez dauden pertsonak”, “borondatez ari direnak, neurri handi baten”, ez zutenak izan “administratzaile bati eskatzen zaion gutxieneko zuhurtasuna” (horrek oso argi uzten du zuhurtasun-maila diferenteak daudela, nahiz eta gertaera objektiboak diren jarduketa axolagabea, egindako mina eta kausalitate-harremana)–,

3) Kudeaketa-jardueraren oinarrian dago kudeaketa demokratikoaren printzipio kooperatiboa, eta ez da soilik eskubide bat, 23.1.a) art., betebeharra ere bada, 22.b) art.

Horri erantsi behar zaio EABJren txostenean bertan jasotzen dela erantzukizuna modulatzeko edo ñabardurak egiteko aukera (problematika edo zailtasun praktikoa edozein dela ere), aintzat hartuta K.k.ren 1103. artikulua; eta azken erabakia kasua ezagutzen duen auzitegiaren “ahalmen diskrezionalaren” esku uzten da. Horren harira, dena dela, bi zehaztapen egin behar dira:

1.- Auzitegi zibilek eurek adierazi izan dute, historikoki, modulazio hori ezin dela izan ez diskrezionala, ez arbitrarioa, eta kasuan kasuko ezaugarri eta arauak aztertu behar direla.

2.- Modulazio hau “behar den adinako arretaren” baitan sartu zen 4/1993 Legean, K.k.n inspiratuta, baina bere 1726. artikuluan, agintaldiari dagokionean; erakundearena da jatorrian administratzaile-lana; idatzitakoa hitzez hitz jasotzen da.

Edozein kasutan ere, zehatzago eta segurtasun juridiko handiagoarekin jardutekotan, 50.1. artikulua lehen paragrafoa laburbildu beharko litzateke, eta hirugarren paragrafo bat gehitu, espreski erruaz aritzeko, ondoko hitzok erabiliz:

“Erruren bat dagoen jarduketetan erantzukizuna zehazteko orduan, zorrotzago jokatuko da karguak ordainsaria badu, eta malguago bestela”

E) Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa eragile sozial izatea.

1. Gogoan izan behar da Euskadiko Kooperatiben Konfederazioari, *intuitu personae*, eragile sozial izaera ematearen oinarrian dagoela zilegitasun demokratiko ordezkatzaileria, aldi berean aurreproiektuaren 153.3. artikulua arkitekturaren gainean eraikia. Ez da abstraktua aurreproiektuaren 145.1. artikuluan aipatzen den eztabaidatu osteko aitortza (hau da, ordezkariak duten beste eragile sozial batzuk egon daitezke azpisektoreen azpiko mailetan, esaterako hezkuntza-arloan, etab.); azken batean, konfederazio honi aitortzen zaiona da funtsezko zeregina Euskal Kooperatibismo osoaren barne-harremanetan. Izan ere, euskal kooperatibismo gehiena ordezkariak du Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, eta zilegitasun osoa du horretarako, behin eta berriz aipatzen gabiltzan aurreproiektuaren 153. artikulua horrekin bat.

2. Hala eta guztiz ere, kooperatiben elkartegintza edo asoziazionismoa garatu ahala, sortu litezke beste erakunde batzuk aurretik zehaztutako ordezkariak-funtzioa betetzen dutenak, betiere gehiengo jakin bat izanik, “euskal kooperatibismo osoa” ordezkariak baitute. Ondorioz, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa ez da izango aukera bakarra euskal kooperatibismo osoaren barne-harremanak kudeatzeko; egon liteke beste erakunde kooperatibo bat, ordezkariak-ahalmena izateko ezarri diren irizpideak betetzen dituenak.

3. Bestalde, EABJk bere txostenean azpimarratzen duen enpresa-izaeraren ildotik, beren-beregi jakinarazi behar da dagokion ordezkariak insituzionaleko erakundeetan, erabaki-guneetan edo kontsulta-guneetan ezarritako ordezkariak-arauak aintzat hartuta.

Horregatik:

1. Aurreproiektuaren 2. Paragrafoaren 145.1. artikuluan hau aipatzen da:

“Era berean, Euskal Kooperatibismo osoaren eragile sozial berezia eta solaskide esanguratsua izango da, enpresa-ordezkaritza dela-eta indarrean dauden arauak aintzat hartuta, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan izena emandako kooperatiben ehuneko hirurogei baino gehiago bere baitan hartzen duen erakundea, erregistroan jardunean baldin badabil. Eta erakunde esanguratsu izango dira, halaber, kide-kopurua, ehunekotan, Erregistroan guztira izena emanda eta aktibo dauden kooperatiben bazkideena edo hortik gorakoa duten kooperatibak.”

2.- Aurreproiektuaren 146.2.a) artikuluan hau aipatzen da:

“Euskal kooperatiben mugimenduaren ordezkaritza instituzionala bermatuko da, indarrean den Legearen 145.1. eta 152.2. artikuluetan esaten denarekin bat, eta kooperatibismoa solaskide esanguratsua izango da kontsultagune eta erabakigune desberdinetan, erakundeetan ordezkaritza duten alderdien artean eta horien arautze etengabea.”

II.- BESTE OHAR BATZUK, ARTIKULUEN GAINEAN

Aintzat hartuta 18.2. artikulua, zeinak ezartzen duen auziak ordena zibilaren gainean eskumena duten epaile eta auzitegien **esku uztea**, eta gogoan hartuta Autonomia Estatutuaren 10.5. artikulua, dioena eskubide zibil propioaren eskumen-tituluaz, azaldu denarekin eta aurreko paragrafoan esan denarekin koherentea izatearren, **egoki deritzogu merkataritza-auziak epaileen eta auzitegien esku uztea, argitasunaren izenean.**

Aintzat hartu behar da, gainera, pareko merkataritza-auzien sozietate-arauak ere, zehazki, uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina onartzen duen horrek, espreski epaile eta auzitegien esku uzten duela auzien ebazpena.

Gogoratu beharra dago kooperatiben auzian Euskal Autonomia Erkidegoak duen eskumena erabatekoa dela, eskusiboa, Euskal Autonomia Erkidegoaren 10.23. artikulua araberak, “merkataritza-auzietarako legeria orokorrarekin bat”; bada, aztertu den kasuan, dagokion eztabaida eginda, eskumenpeko jurisdikzioa aplikatuko dela interpreta daiteke.

Aintzat hartuta 48.2. artikulua, bideokonferentzia egiten denean akordioak non egin behar diren zehaztea.

Batzar orokorraren Akta arautzen du aurreproiektuaren 39.1.a) Artikuluak, eta bertan zehazten da zein lekutan egin behar diren akta bakoitzeko bilerak, bideokonferentzia bidez egin zein ez. Oso bazkide gutxik hartuko dute parte bideokonferentzia bidez, baina, edozein kasutan ere, hura gauzatzeko lekua dagokion deialdian zehaztuko da, aurreproiektuaren 35.5. artikuluan esaten denez, eta ez da beharrezkoa izango aurreproiektuaren 48.2. artikuluan zehaztea.

100. Artikulua, erregistro-ezereztea, bitarteko elektronikoen erabilera.

Kontuan hartu beharko da zein euskarri elektronikotan dauden kontserbatu beharreko liburu eta dokumentuak. Gogoratu beharra dago liburuak eta gainerako kontularitza-erregistroak koadernatuta eta foliotan antolatuta egongo direla, eta erabili aurretik Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren eskutik pasatuko direla, aurreproiektuaren 74.2. artikuluekin bat; baina baliozkoak izango dira, halaber, dagozkion liburu-erregistroaren prozedura informatiko eta elektronikoa bidez egindako idazpen eta oharrek, agindu honen 3. zenbakian jasotzen denez.

118.3 Artikulua.- etxebizitzaren kooperatibak, erabilera-lagapenean.

Ekainaren 18ko 3/2015 Legearen hirugarren xedapen gehigarriak, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzaren gainekoak, zera arautzen du, irabazi asmorik gabeko erakundeen esku uztea eraikin-multzoak, edo horien sustapena, nola eta erabilera-lagapenean; nahiz eta badiren autosustapenerako edo sustapenerako beste aukera batzuk, kooperatiben bitartez.

Edozein modutan ere, bai era batera zein bestera, funtsean, modu berean araututa dago.

Zehatzago esanda, kontseilu-errektoreak kontrolatutako besterentze bat irabazi asmorik gabekoa den edo horretan etekinik dagoen ikusteko prebentzioa, horrelako entitateetan, ez da beharrezkoa, entitateon izaera eta helburua zein den jakinda, eta 117. artikulua eta harekin bat datozenak kontuan izanda; azken batean, erabilera-lagapena esleipena egiteko modu bat baino ez da eta.

Bigarren xedapen iragankorra. Estatutuak egokitzeko premia eta hura ez betetzearen ondorioak.

Horri buruz, honakoa azpimarratu behar da:

- Kasu honetan ez da indarrean den araua modu nabarmenean, errotik edo guztiz aldatuko, kooperatiben 1/82 Legetik 4/93 Legea aldatzean gertatu zen bezala. Funtsean, berritze bat da, moldaketa jakin batzuekin, eta denek ez dute eraginik edo ondoriorik izango estatutuen egokitzapenean.
- Eta 1993aren ostean kooperatibetan lege aldetik egin izan diren moldaketek eta berrikuntzek, estatutuen arautzean neurri baten eraginik izan badute ere, ez dute estatutuetan funtsezko aldaketarik ekarri, gai batzuetako arauketa berriak gorabehera.
- Bestetik, merkataritza-arloan, oraintsu indarrean jarritako 31/2014 Legeak –irizpena emateko hartu da kontuan– artikulua jakin batzuetan baino ez du eragiten legeak ekarritako aldaketak lehen batzar orokorrean eztabaidatzea, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera, data horretan sartu baitziren aldaketok indarrean. Ez da ondorio jakinik aipatzen legea ez betetzearen. Ez zen berdin gertatu 1989ko Sozietate Anonimoen Legearekin eta 1995eko Sozietate Mugatuen Legearekin.
- Ez du halakorik eskatzen uztailaren 2ko 1/2010 LEDaren kapital-sozietateen testu bateginak ere (osorik hartuta, 541 artikulutan); hain zuzen ere, kasu honetan, testu bategina delako.

Horregatik guztiagatik, hasieran idatzi zen bezala uztea erabaki dugu.

III.- ZENBAIT OHAR, LEGEGINTZA TEKNIKA DELA ETA.

Hauek egiteko aintzat hartu dira 1993ko martxoaren 23an Gobernu Kontseiluaren Akordioan onartu ziren lege-proiektuak osatzeko lldoak, zehazki Irizpenaren 148. eta 166. paragrafoen bitartean jasotakoak; **ildo horiek guztiak, jarraian adieraziko dena salbu, jasota daude proposatutako araudian, Memoria honi atxikitako horretan**, izan ere: errazago idazten laguntzen dute; segurtasun juridikoa ematen diote; jasotako arau guztietara doituta daude; eta, azken batean, estiloan hobekuntza dakarte.

Zioen azalpena, azken ohar bat XIII. atalean.

Berrikusi eta gero, argigarria delakoan, lokuzio hau txertatu da: “haien arauketa”:

“Azkenik, kooperatiba mistoak direla eta, halako izena jar dakieke Legez arauta dauden guztiei, edozein motatakoak direla ere. Bada, **haien arauketa** berrikuntza garrantzitsua izan zen 1993an, eta gerora garatuz joan da erregelamenduari jarraiki, zertarako eta enpresa-proiektu kooperatiboen finantzaketa errazteko”

32.1.b) Artikulua- argi uztea, azalpen-zatian, bi eratako administrazio-organoak egon litezkeela.

43.1. artikulua lehene paragrafoan zehazten du zein eratako administrazio-organoak dauden. Beraz, errepikakorra izan liteke hori 32. artikuluan sartzea, artikulua honetan bereizten baitira bere izaeragatik desberdinak diren administrazio-organoak; ez da hitz egiten horien baitan dauden azpitaldeez, ezta batzar-motez ere (ordezkariak, unibertsalak, lehen, bigarren edo hirugarren deialdian egindakoak...)

88.5, 103.4.h), 129.1 eta 133. artikulua- “eta/edo”

Izan ere, ez dute zentzurik aldi berean gehitu egiten duten (“eta”) eta hautabidea ematen duten (“edo”) aukerek.

Dena dela, ez da hala gertatzen **88.5. artikuluan**, horretan bat ez, aukera bi baitaude. Aukeretako bat da ondarea eta kooperatibako bazkide direnak bereiztea, kooperatiba ez den erakunde baten alde, eta beste aukera da ondarea edo kooperatibako bazkide direnak bereiztea, kooperatiba ez den erakunde baten alde.

Beraz, hizkuntza bidezko oinarrizko ekonomia bati begira eta alferrikako errepikapenak saihestearren, eutsi egiten zaio “eta/edo” horri.

Antzera gertatzen da aurreproiektuaren **103.4.h) artikuluan**: langile batek urritasun edo disfuntzio psikikoak edo zentzumenezkoak izan ditzake aldi berean, edo, bestela, psikikoak bakarrik edo zentzumenezkoak bakarrik.

Aurreproiektuaren **129.1. artikuluari** erreparatuz gero ere, garraio-kooperatiba bat izan daiteke garraio-zerbitzuak antolatzeko eta emateko; garraio-zerbitzuak antolatzeko bai, baina emateko ez; eta, azkenik, garraio-zerbitzuak emateko bai, baina antolatzeko ez.

Eta, azkenik, aurreproiektuaren 133. artikuluari ere aplika dakioke 103.4.h) artikuluan azaldutakoa.

132.2. artikulua, junior kooperatibak.

Noski, junior kooperatibek izaera hori galtzeak euren sailkapenari eragiten badie, horrek esan nahi du nahitaez sailkapen “berria” dutela; izan ere, lehenago “junior kooperatiba” moduan sailkatuta

zeuden.

Azken Xedapenetako Bigarrena.- erabilera-eremua.

Honek eskumen-titulua ematen dio euskal legegileari zenbait kooperatibaren gainean arauak ezartzeko (eskumen-arloa). Gai nagusiarekin lotuta dago, baina xedapenak berak ez du gai nagusia arautzen, horretarako legezkotasuna adierazten du.

Azken Xedapenetako Hirugarrena.- beste kooperatiba-mota batzuk.

Kasu honetan, jarduketa-agindu bat da –ez du gaia bera arautzen–, Gobernuari zuzendua, Gobernuak berak mota berriak arautu ditzan eta **arau bereziak ezar ditzan aldi berean berriak diren berezitasun sozioekonomikoetarako**; izan ere, ohiko izaera duen sozietate kooperatibo baten sailkapena jasota dago aurreproiektuaren 102. artikuluan. Arau honen oinarrian dago kooperatibek euren estatutuak libreki osatzeko aukera; eta horietan erabiliko da euren antz handiena duten erakunde-motetarako aurreikusitako araudia.

2.- Artikuluen barne sailkapena dela eta:

1.- Oinarrizko iripidetzat erabiliko da indarrean dagoen legearena (indarrean den 19.1. Art., 4/1993 Legearena), beraz, aldatu gabeko artikuluen sailkapenari eutsiko zaio, eta aldaketak egindako artikulua sailkatzeko irizpide bera erabiliko da.

2.-Horrela, paragrafo berri bat sartu bada (indarrean den 36.1. Art.) eta oraindik zenbakitu barik badago, zera esan nahi du, oinarrizko kontzeptu edo ideia bati burukzoka dela (aurreratu dugun kasuan, batzar orokorra egiteko lekua); hurrengo paragrafo zenbakitua beste kontzeptu bati buruzkoa izango da, eta horrela hurrenez hurren, arautu beharreko gaiaren baitako guztiekin (batzar orokorraren funtzionamendua); guztiak ere mota bereko itemak izango dira. Bestalde, letrak edo zenbakiak erabiliko dira zerrenda edo zenbaketetan (indarrean den 44.1. Art.), eta horiek izendatuko ditugu soilik osotasun baten atal edo zati direnean, hau da, paragrafoaren azpiatal direnean.

3.- Beraz, euren edukia esanguratsua den edo ez, horren arabera “paragrafoek” ere garrantzi desberdina izango dute; eta horren arabera sailkatuko da artikuluen edukia.

Azkenik, erabaki da, berriro ere, aurreproiektuaren edukia berrikustea genero-ikuspegitik.

Azaldu eta argudiatu den guztiaren ondoren, izapidetze-organoak adierazi du bukatutzat ematen duela Euskadiko kooperatiben lege-proiektuaren idazketa, abenduaren 22ko 8/2003 Legearekin bat egindakoa, bertan arautzen baita izaera orokorreko xedapenak osatzeko prozedura; gero, azken onespena eman beharko zaio, aipatutako prozedura-arauaren 12. artikulua dioenarekin bat.

Honako honek elektronikoki sinatua: Jesús Alfredo Ispizua Zuazua	Honako honek elektronikoki sinatua: Joaquín Díaz Arsuaga
Aholkularitza juridikoko arduraduna, GIZARTE EKONOMIAKO ZUZENDARITZA	Gizarte Ekonomiako Zuzendaria, GIZARTE EKONOMIAKO ZUZENDARITZA



IV

**DICTAMEN DE LA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI /
EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN
IRIZPENA**

**EAE-ko KOOPERATIBEN LEGE-
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI**



SRA. CONSEJERA DE TRABAJO Y JUSTICIA

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en la sesión del día 28 de noviembre de 2018, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 173/2018, relativa al **anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi** (Ref.: DNCG_LEY_162180/17_12).

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Calonge Crespo.

PRESIDENTE:

D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:

D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:

D^a M^a Teresa Astigarraga Goenaga.

D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.

D^a Fátima Saiz Ruiz de Loizaga.

D. Imanol Zubizarreta Arteche.

D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.

D. Iñaki Calonge Crespo.

D.^a Miren Izaskun Iriarte Irureta.

SECRETARIO:

D. Jesús M^a Alonso Quilchano.

DICTAMEN N° 176/2018

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 10 de octubre de 2018 de la Consejera de Trabajo y Justicia, con fecha de entrada en la Comisión del mismo día, se somete a consulta el anteproyecto de ley señalado en el encabezamiento.
2. El expediente remitido, además del texto del anteproyecto y de la citada orden de solicitud, consta de los siguientes documentos:
 - a) Orden de 21 de julio de 2017 de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se da inicio al procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi.
 - b) Trámite de consulta pública previa a la elaboración de la norma, de 9 de octubre de 2018, realizado por la Dirección de Economía Social.



- c) Informe de impacto en función del género, de 31 de enero de 2018.
- d) Memora económica relativa al anteproyecto, de 31 de enero de 2018.
- e) Memora técnica justificativa del anteproyecto, de fecha 31 de enero de 2018, elaborada por la Dirección de Economía Social del departamento promotor de la iniciativa.
- f) Documento de Propuesta para una reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, elaborado por las tres universidades vascas.
- g) Escritos de alegaciones de 14 de febrero de 2018.
- h) Orden de 19 de febrero de 2015 de la Consejera, de aprobación previa del anteproyecto de Ley de cooperativas de Euskadi, en la que se incluye un primer borrador del texto de la norma en bilingüe.
- i) Informe jurídico departamental, de 2 de marzo de 2018, elaborado por la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios.
- j) Informe de impacto en la empresa, de fecha 13 de marzo de 2018, elaborado por la Dirección de Economía Social.
- k) Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (en adelante, DACIMA) de fecha 14 de marzo de 2018.
- l) Alegaciones de la Federación de EPSV de Euskadi, de 16 de marzo de 2018.
- m) Informe 2/2018 del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (en adelante, CSCE) de 23 de marzo de 2018.
- n) Alegaciones de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, de 21 de marzo de 2018.
- o) Observaciones al proyecto del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de 26 de marzo de 2018.
- p) Informe de fecha 3 de abril de 2018 emitido por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
- q) Observaciones al proyecto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 13 de abril de 2018.
- r) Informe 4/2018, de 11 de abril, del Pleno de la Junta Asesora de Contratación Pública.



- s) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de la Viceconsejería de Política Lingüística, de 26 de abril de 2018.
- t) Observaciones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de 7 de mayo de 2018.
- u) Segunda versión del anteproyecto de ley de fecha 25 de mayo de 2018.
- v) Memoria de tramitación del anteproyecto de fecha 25 de mayo de 2018.
- w) Informe 270/2018 de la Autoridad Vasca de la Competencia de 27 de junio de 2018.
- x) Dictamen 13/18 del Consejo Económico y Social Vasco(CES), de 27 de junio de 2018.
- y) Alegaciones de Auditores BNFIX, de fecha 17 de julio de 2018.
- z) Tercera versión del anteproyecto de ley de fecha 20 de julio de 2018.
- aa) Memoria de tramitación del anteproyecto de fecha 20 de julio de 2018.
- bb) Informe de la Dirección de Patrimonio y Contratación de 1 de octubre de 2018
- cc) Informe de la Oficina de Control Económico de fecha 2 de octubre de 2018
- dd) Memoria de tramitación del anteproyecto de 10 de octubre de 2018.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

- 3. Este dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que incluye como ámbito de la función consultiva de la Comisión los anteproyectos de Ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que contempla, lo que no es el caso.

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

- 4. El texto sometido a dictamen está compuesto de una parte expositiva, 154 artículos — dispuestos en 4 títulos, 15 capítulos y 18 secciones—, 8 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 1 derogatoria y 5 finales.
- 5. El texto mantiene la estructura formal del texto vigente reproduciendo ampliamente su contenido material.



6. En este sentido, podemos destacar que, junto con el mantenimiento de gran parte del articulado, se actualiza el texto normativo integrando en el mismo las modificaciones de que ha sido objeto a lo largo de su vigencia. También se ha aprovechado el momento para realizar determinados ajustes y mejoras jurídico-técnicas que contribuyen a la coherencia de la norma y a una mejor interpretación y aplicación práctica.
7. Los objetivos y contenidos de la reforma han sido convenientemente pormenorizados a través de la parte expositiva, donde se analiza con detalle las modificaciones propuestas.
8. Como objetivos generales, tal y como se afirma a lo largo del expediente, podemos destacar los siguientes:

La actualización del modo y la intensidad de la actuación administrativa respecto del fomento cooperativo por una parte, así como sobre el control del cumplimiento de la legalidad cooperativa, por otra.

(...) solventar la obsolescencia de determinados elementos, el coste y dificultad de su aplicación; reforzar la autonomía de regulación adaptada a cada proyecto cooperativo, compatibilizándolo con el mantenimiento de las líneas definitorias de una sociedad como cooperativa; garantizar su funcionamiento democrático y participativo a la par que su gestión y control eficaces; así como el reforzamiento de la colaboración público privada; y en definitiva, agregar un nivel de seguridad jurídica, tanto en las relaciones internas como respecto de personas terceras no socias, que hagan de la legislación vasca de cooperativas un instrumento certero para fijar las relaciones intracooperativas y el tráfico jurídico externo.

9. Los citados objetivos se ven reflejados en la parte dispositiva, que tiene los siguientes contenidos:
10. El título I, “De la sociedad cooperativa”, integra tres capítulos.
11. El capítulo I, a través de 6 artículos, contempla las disposiciones generales en la materia: en el artículo 1, el concepto y principios de la sociedad cooperativa; en el artículo 2, las cuestiones relativas a su denominación; en el artículo 3, el domicilio social; y en el artículo 4, el capital social mínimo necesario para la constitución de las sociedades. Además, el artículo 5 regula las operaciones con terceras personas y el artículo 6, los contenidos relativos a las secciones de las cooperativas que deberán ser definidos en los estatutos.



12. En el capítulo II, dedicado a la “Constitución de la cooperativa”, se dispone en el artículo 7 los aspectos relativos a la asamblea constituyente; en el artículo 8, las particularidades de la cooperativa en constitución y en el artículo 9, la calificación previa del proyecto de estatutos por parte del Registro de Cooperativas de Euskadi. Asimismo, el artículo 10 regula la cooperativa irregular; el artículo 11, la forma de constitución de la cooperativa; el artículo 12, los contenidos y características de la escritura de constitución; el artículo 13, el contenido mínimo de los estatutos y, finalmente; y el artículo 14, la nulidad de la cooperativa.
13. El capítulo III integra los artículos dedicados a regular el “Registro de Cooperativas de Euskadi”. El artículo 15 contempla su organización; el artículo 16, la eficacia del registro; el artículo 17, sus funciones; y el artículo 18, las normas de aplicación supletoria
14. Dentro del capítulo IV, dedicado a las “Personas socias”, el artículo 19 establece las personas que pueden tener tal condición; el artículo 20, su admisión en la cooperativa; y el artículo 20, las personas que tienen la condición de socias de trabajo. Por su parte, los artículos 22 y 23 establecen respectivamente las obligaciones y derechos de las personas socias, el artículo 24, contempla el derecho de información de los socios y el artículo 25, sus límites y garantías. Además, el artículo 26 refleja la baja voluntaria en la cooperativa, el artículo 27, la baja obligatoria, el artículo 28, la expulsión de las personas socias, el artículo 29, los aspectos relativos a las normas de disciplina social, el artículo 30, lo concerniente a la suspensión o baja obligatoria de la persona socia trabajadora o de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor y el artículo 31, el régimen de las personas socias inactiva o no usuarias y las personas socias en excedencia.
15. El capítulo V, dedicado a “Los órganos de la cooperativa”, se inicia con el artículo 32, que realiza una enumeración de los mismos, distinguiendo aquellos que son necesarios, a saber la asamblea general y el órgano de administración, de aquellos que pueden ser contemplados con carácter potestativo en los estatutos de la cooperativa, cuales son la comisión de vigilancia, el consejo social y el comité de recursos, sin perjuicio de otros que se prevean en los citados estatutos pero que en ningún caso podrán ostentar competencias atribuidas a los anteriores.
16. La sección primera de este capítulo se dedica a la regulación de la asamblea general, el artículo 33 detalla su concepto y sus competencias, el artículo 34, las clases de asambleas generales, el artículo 35, su convocatoria y el artículo 36, su funcionamiento. Por su parte, el artículo 37 contempla los aspectos relacionados con el derecho al voto, el artículo 38, el régimen de mayorías para la adopción de acuerdos, el artículo 39, los aspectos del acta de asamblea general, el artículo 40, la asamblea de delegados y el artículo 41, el régimen de impugnación de acuerdos de la asamblea general.



17. La sección segunda se titula “De la administración y representación de la cooperativa”. Dentro de la misma, en el artículo 42 se recoge la naturaleza y competencias de los administradores, en el artículo 43, la forma de elección de los mismos, en el artículo 44, las causas de incapacidad y las prohibiciones para ser administrador, en el artículo 45 se aborda la remuneración y en el 46, la duración del mandato y la forma de cese. También se regula la composición y renovación del consejo rector en el artículo 47 y en el artículo 48, su funcionamiento. Además el artículo 49 establece los deberes que deberán cumplir las personas administradoras, el artículo 50, su responsabilidad, el artículo 51, las acciones de responsabilidad contra las mismas y el artículo 52, la impugnación de sus acuerdos.
18. En la sección tercera, correspondiente a la comisión de vigilancia, el artículo 53 regula su composición, mandato y nombramiento, el artículo 54, las facultades de información, el artículo 55, su ámbito de aplicación y el artículo 56, sus competencias y funcionamiento.
19. La sección cuarta se dedica a “Otros órganos”, contemplando en el artículo 57 la figura del consejo social, su naturaleza y funciones, y en el artículo 58, la composición y funciones del Comité de recursos.
20. El capítulo VI, relativo al régimen económico, se inicia con el artículo 59, que determina de forma expresa la responsabilidad de la cooperativa por las deudas sociales, el artículo 60 se dedica a la composición del capital social, el artículo 61 aborda las aportaciones obligatorias al capital social y el artículo 62, las voluntarias, el artículo 63, los intereses que pueden devengar las aportaciones, el artículo 64, la actualización de las aportaciones, el artículo 65, su transmisión y el artículo 66, su reembolso. El artículo 67 regula las participaciones especiales y el artículo 68, otro tipo de financiaciones. La determinación de excedes netos es contemplada en el artículo 69, el artículo 70, se refiere a su distribución, el artículo 71, al Fondo de reserva obligatorio, el artículo 72, a la contribución para la educación y promoción corporativa y otros fines de interés público y el artículo 73, a la imputación de pérdidas.
21. El capítulo VII, dedicado a la documentación social y contabilidad, incluye el artículo 74, que detalla la documentación social, el artículo 75, la contabilidad de las cooperativas, el artículo 76, la auditora de sus cuentas y el artículo 77, la figura del letrado asesor.
22. El capítulo VIII, relativo a la modificación de los estatutos, contiene los artículos 78 y 79 dedicados a la modificación de estatutos y al cambio de domicilio social, respectivamente.
23. El capítulo IX, “Fusión y escisión de la cooperativa”, en su artículo 80 regula las modalidades y efectos de la fusión, en el artículo 81 aborda el proyecto de fusión, en el



artículo 82, la información sobre la misma, en el artículo 83, el acuerdo de fusión, en el artículo 84, el derecho de separación del socio y en el artículo 85, el derecho de oposición de los acreedores. En el artículo 86 se detallan los aspectos relativos a la escritura e inscripción de la fusión, en el artículo 87, las fusiones especiales y en el artículo 88, la escisión de la cooperativa.

24. El capítulo X, dedicado a la transformación, incluye dos artículos el artículo 89, sobre la transformación de cooperativas en sociedades civiles o mercantiles, y el artículo 90, sobre la transformación de las sociedades civiles o mercantiles asociación, agrupación u otro tipo de entidad de carácter no cooperativo en cooperativas.
25. En el capítulo XI, sobre disolución y liquidación, el artículo 91 contempla las causas de disolución, el artículo 92, la eficacia de las causas de disolución, el artículo 93, el proceso de liquidación, el artículo 94, el nombramiento de los liquidadores, el artículo 95, la transmisión de funciones, el artículo 96, las funciones de los liquidadores, el artículo 97, la intervención de la liquidación, el artículo 98, la adjudicación del haber social, el artículo 99, el balance final, el artículo 100, la cancelación registral y el artículo 101, el concurso de la cooperativa.
26. El título II, intitulado “Disposiciones especiales”, aborda la regulación de los diferentes tipos cooperativas.
27. El capítulo I regula las diferentes clases de cooperativas a través de sus diferentes secciones.
28. La sección 1ª, dedicada a las normas comunes a todas ellas, incluye un único artículo 102 sobre la calificación y normativa aplicables con carácter general.
29. La sección 2ª, relativa a las cooperativas de trabajo asociado, contiene el artículo 103 sobre el objeto y norma generales de este tipo de cooperativa, el artículo 104, relativo al periodo de prueba previo a la admisión como socio, el artículo 105, sobre el régimen de trabajo de las personas socias, el 106, referente al régimen disciplinario y el artículo 107, a cuestiones litigiosas que se remiten a los órganos jurisdiccionales de orden social cuando tengan referencia al vínculo socio-laboral, y en el resto de casos, a la jurisdicción de los juzgados y tribunales mercantiles.
30. La sección 3ª contempla las cooperativas de consumo en su artículo 108, relativo a su objeto y función social.
31. La sección 4ª, que regula las cooperativas de enseñanza, recoge en su artículo 109 los objetivos y modalidades de las mismas, en el artículo 110, las especialidades de las cooperativas de enseñanza integrales y en el artículo 111, las personas socias de naturaleza pública o de utilidad pública.



32. La sección 5ª, denominada “Cooperativas agrarias y alimentarias”, establece en el artículo 112 el objeto y actividades de las mismas y en el artículo 113, el régimen de sus operaciones con terceras personas no socias.
33. La sección 6ª, “Cooperativas de explotación comunitaria”, define en el artículo 114 el objeto y ámbito de este tipo de compañías, en el artículo 115, el régimen de las personas socia y en el 116, la estructura económica de las mismas.
34. La sección 7ª se dedica al régimen de las “Cooperativas de vivienda”. El artículo 117 establece el objeto, operaciones y ámbito que les corresponde, el artículo 118, el régimen de adjudicación o cesión de la propiedad, el uso o el disfrute de la vivienda y locales, el artículo 119, el régimen de las personas socias, el artículo 120, el consejo rector, el artículo 121, la obligación de auditar las cuentas y disponer de letrado asesor y el artículo 122, la promoción de vivienda de protección oficial y las trasmisión de derechos.
35. La sección 8ª, “Cooperativas financieras”, refleja las características de las cooperativas de créditos y seguros en sus artículos 123 y 124, respectivamente.
36. La sección 9ª, denominada “Cooperativas sanitarias”, define las cooperativas de asistencia sanitaria en su artículo 125 y las de instalaciones sanitarias en su artículo 126.
37. La sección 10ª, “Cooperativas de servicios”, establece las diferentes modalidades de las mismas. Así, en su artículo 127, las cooperativas de servicios profesionales, en su artículo 128, las cooperativas de servicios empresariales, en el artículo 129, las cooperativas de transporte y en el artículo 130, las cooperativas de servicios institucionales. Además, en el artículo 131 recoge las normas complementarias a todas ellas.
38. La sección 11ª, a través de su artículo 132, regula las Junior cooperativas.
39. La sección 12ª, dedicada a las cooperativas de integración social, aborda su definición y características en su artículo 133 y el régimen de las personas sociales en el artículo 134.
40. El capítulo II regula la “Integración y agrupación cooperativa” en sus diferentes secciones.
41. La sección 1ª se dedica a las “Cooperativas de segundo o ulterior grado”. El artículo 135 define su objeto y características, el artículo 136, la capacidad de las mismas y la forma de ingreso y baja de las personas socias, el artículo 137, el régimen económico, el artículo 138, la estructura orgánica y el derecho de voto, el artículo 139, la liquidación de las mismas y el artículo 140, la normativa de aplicación supletoria.



42. La sección 2ª, “Otras modalidades de colaboración económica”, determina en el artículo 141 las agrupaciones empresariales, en el artículo 142, los acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus objetos sociales, en el artículo 143, los grupos cooperativos y en el artículo 144, las cooperativas mixtas que son aquellas en las que existen personas socias minoritarias.
43. El título III, “De las cooperativas y la Administración”, expone en el artículo 145 el reconocimiento de la Confederación de Cooperativas de Euskadi como agente social, las cooperativas que se consideran de iniciativa social, el interés social y el reconocimiento de utilidad pública, y en el artículo 146, las medidas de fomento y difusión del cooperativismo. Por su parte regula, en el artículo 147, la inspección cooperativa que corresponde al Gobierno Vasco, en el artículo 148, las infracciones cooperativas, en el artículo 149, las sanciones cooperativas, en el artículo 150, las causas y el procedimiento de descalificación de una cooperativa y en el artículo 151, la intervención temporal de las cooperativas como consecuencia de irregularidades en el funcionamiento
44. Finalmente el título IV contiene dos capítulos dedicados al asociacionismo cooperativo
45. El capítulo I, titulado las “Asociaciones cooperativas”, después de recoger en su artículo 152 los principios generales en este ámbito, introduce en su artículo 153 la posibilidad de la existencia de las uniones, federación y confederaciones de cooperativas.
46. Por último, el capítulo II, en su único artículo 154, se dedica al Consejo Superior de Cooperativas, entidad pública de carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas vascas para todos los temas que afecten al cooperativismo detallando sus funciones.
47. El texto incluye ocho disposiciones adicionales: la primera, relativa al cómputo de plazos; la segunda, a las cooperativas de transporte de trabajo asociado; la tercera, relativa a los programas anuales para el impulso, promoción y fomento del cooperativismo; la cuarta, sobre la igualdad de trato en materia de fomento y consolidación de empleo; la quinta, dedicada a las medidas de igualdad de género en las cooperativas y que establece la obligación de las cooperativas de procurar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en sus órganos y la sexta sobre la utilización de las lenguas oficiales; la séptima procede a la modificación de la letra a) del artículo 102 del Texto refundido de la Ley de patrimonio de Euskadi, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2007 de 6 de noviembre; y la octava está dedicada a la promoción de la adopción de acuerdos sobre previsión social voluntaria para las personas socias de las mismas.



48. Asimismo se contemplan dos disposiciones transitorias: la primera, relativa a los expedientes en tramitación y la segunda, a la aplicación de los actuales estatutos.
49. La disposición derogatoria única deroga la actual Ley de cooperativas y el artículo 5.3 de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la sociedad cooperativa pequeña de Euskadi.
50. Por último, se incluyen cinco disposiciones finales la primera; sobre la entrada en vigor, que será a los treinta días de su publicación en el BOPV; la segunda, relativa al ámbito de aplicación de la norma; la tercera apunta la posibilidad de regulación, por parte del departamento competente del Gobierno Vasco, de nuevas clases de cooperativa; la cuarta posibilita la actualización de los importes cuantitativos fijados en la norma; y la quinta regula la aplicación y desarrollo de la ley, concretando la obligación de la aprobación por parte del Gobierno de los reglamentos de desarrollo de la función inspectora y del procedimiento de sanción cooperativa.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

51. La Comisión viene señalando que, al abordar el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de Ley en el seno del ejecutivo, tiene en cuenta que “el legislador no ejecuta la Constitución, sino que crea derecho en libertad dentro del marco que esta ofrece, en tanto que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se opera de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97 CE) (entre otras, STC 209/1987, de 22 de diciembre)”, por lo que, salvo los casos en que la Constitución (CE), el Estatuto de Autonomía (EAPV) o, en ocasiones, las leyes orgánicas prevean algún trámite específico —supuestos ciertamente excepcionales en nuestro ordenamiento—, aquel examen es esencialmente un instrumento para estudiar la racionalidad de la regulación proyectada, esto es, su utilidad para alcanzar los objetivos que persigue su dictado.
52. El procedimiento de elaboración y aprobación de proyectos de ley es la vía que permite al gobierno autonómico participar en la función legislativa y, por tanto, articular sus políticas públicas a través de normas con rango de ley. Consecuentemente, “el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de las Comunidades Autónomas, en general, y la elaboración de anteproyectos de ley, en particular, quedan por completo al margen del artículo 149.1.18 CE en lo que se refiere tanto a las «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas» como al «procedimiento administrativo común»” (STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018).
53. A estos efectos, por tanto, contamos con un importante instrumento de referencia como es la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante LPEDG), la cual, sin ignorar las mencionadas circunstancias, pretende orientar la actividad del Gobierno a fin de que procure seguir en la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que



emplea para elaborar las disposiciones generales. De ese modo, señala su exposición de motivos, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone.

54. Para realizar su análisis del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquella; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos—; y (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—.
55. Teniendo en cuenta estos criterios, cabe señalar que la Orden de inicio del procedimiento de elaboración de la norma, de 2 de julio de 2017, da cuenta del objeto y finalidad de la regulación, su viabilidad jurídica y material y las repercusiones en el ordenamiento jurídico. Fundamenta la dificultad del análisis del impacto económico que tendrá y la ausencia del mismo en el campo presupuestario. Además, detalla los informes y trámites necesarios para su aprobación y el método para la redacción bilingüe del texto normativo, que será el de la traducción.
56. El anteproyecto fue sometido a consulta previa a la elaboración de la norma mediante una memoria explicativa que fue publicada en el portal web de la Administración General de la Comunidad *Irekia*.
57. El órgano promotor de la iniciativa ha realizado el Informe de impacto en función del género, cuya elaboración exige el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres (en adelante LIMH), habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión de 21 de agosto de 2012, las directrices para la realización de la evaluación previa de impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. En el mismo se contienen una evaluación previa del impacto en función del género y las medidas que la norma propone para eliminar las desigualdades y promover la igualdad, destacándose dentro del texto las relativas a la prohibición de discriminación en la admisión como persona socia y en el fomento de la presencia equilibrada en los órganos de las cooperativas.



58. También se ha redactado la memoria económica en la que, de acuerdo con la normativa aplicable, se expone la incidencia económico presupuestaria, económico-organizativa, así como la incidencia que el proyecto tiene en los recursos públicos, en los particulares y en la economía en general. En todos los aspectos se destaca que la nueva normativa, en el caso de generar algún impacto, será mínimo respecto del existente en la actualidad.
59. Obra en el expediente una memoria justificativa en la que se analiza la oportunidad de la norma y donde se concretan las razones que la motivan y los objetivos perseguidos y las posibles alternativas jurídicas existentes. También se realiza una exposición detallada del contenido y estructura, donde se incide en las novedades proyectadas en la norma. La memoria realiza igualmente una valoración de la ausencia de impacto que la norma tiene en las cargas administrativas existentes. Además, expone las medidas que propone para fomentar la igualdad de género, al procurar que en los órganos societarios la presencia de socios y socias sea equilibrada.
60. Consta en el expediente un documento denominado “Propuesta para una reforma de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi”, elaborado por las tres universidades vascas como proyecto de investigación, donde, tras el análisis general de las reformas necesarias, se propone un articulado al respecto con las justificaciones pertinentes.
61. Figuran determinadas observaciones y propuestas al articulado que, recibidas a través del trámite de audiencia pública, fueron elaboradas por un economista y auditor de cuentas.
62. Después de la realización de los trámites precedentes y tras las consideraciones pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la LPEDG, la consejera acordó aprobar, con carácter previo, el texto inicial bilingüe del anteproyecto de ley y, por consiguiente, la continuidad de los trámites que procedieran para su aprobación.
63. El informe jurídico cumple las exigencias del artículo 7.3 LPEDG y abarca, en sucesivos epígrafes, los antecedentes, competencia y un exhaustivo análisis del contenido del anteproyecto, efectuando una serie de consideraciones al respecto para la mejora y adecuación del texto. Finalmente realiza un análisis de los trámites necesarios para la tramitación del anteproyecto.
64. Se ha realizado el informe de impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/ 2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco. En el mismo se detallan las medidas que favorecen y facilitan el funcionamiento de la sociedad cooperativa haciéndola más competitiva. Se señala que son medidas que facilitan el emprendimiento y el desarrollo de la actividad empresarial cooperativa, sin renuncia, por otra parte, a la identidad corporativa.



65. Por su parte, el informe de organización de la DACIMA realiza un análisis de los aspectos procedimentales del anteproyecto y realiza una valoración positiva de aspectos organizativos relativos a las funciones de los órganos de la cooperativa y de su funcionamiento, así como de la utilización de las tecnologías de la sociedad de la información. Además, propone que la documentación social de las cooperativas y los trámites relacionados con el registro de cooperativas sean exclusivamente electrónicos.
66. Figura escrito de la Federación de EPSV de Euskadi solicitando la inclusión en la futura ley de la facultad de incorporar acuerdos sobre previsión social para las personas socias.
67. Conforme a lo establecido en el artículo 145.2. b) de la vigente Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi (en adelante, LCE) el anteproyecto ha sido informado por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE). El informe, de carácter favorable, realiza una serie de consideraciones específicas, destacando la necesidad de que se reconozca en la ley la representación de las cooperativas vascas en temas y organismos relacionados con el empleo. También muestra su disconformidad con la ampliación al 40% de las operaciones con terceros por parte de las cooperativas de vivienda. Además de realizar diversas consideraciones para excepcionar el porcentaje de personas socias en el caso de cooperativas de vivienda que realicen operaciones con entidades públicas o administraciones, y sobre las cooperativas de enseñanza y los conciertos educativos.
68. Ha remitido alegaciones Konfekoop, solicitando el aseguramiento de la representatividad institucional del movimiento cooperativo vasco en organismos de representación institucional relacionados con el empleo. Asimismo, manifiestan su interés de que la ley recoja la preferencia del acogimiento al régimen de conciertos educativos para los centros educativos cooperativos.
69. El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha realizado diversas aportaciones al texto relativas a las cooperativas agroalimentarias, para las que, tras la aprobación de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política agraria y alimentaria, entienden pertinente que se denominen cooperativas agrarias y alimentarias. También señalan la necesidad de adaptar su régimen a lo previsto en la Ley 8/2005, de 15 de octubre, del Estatuto de la mujeres agricultoras, en lo relativo al régimen de la titularidad compartida.
70. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha elaborado el informe recogido en el artículo 21 LIMH, en la que destaca la necesidad de profundizar en el análisis para poder evaluar correctamente el impacto de género en el ámbito cooperativo. Por otra parte, realiza diversas consideraciones para la inclusión entre los contenidos del anteproyecto de



referencias a la necesidad de aplicar y de elaborar planes de igualdad, así como de incorporar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón del sexo y fomentar la formación y educación de la personas socias, y recomendaciones relativas a la especial consideración de las sociedades cooperativas que desarrollen sus labor conforme a principios de igualdad de mujeres y hombres.

71. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha realizado diversas observaciones al anteproyecto. El departamento destaca la necesidad de que el anteproyecto dé cabida a nuevas fórmulas de inmuebles de uso residencial, como las *co-housing* o viviendas en régimen de cooperativas en cesión de uso, y al respecto plantea sus consideraciones sobre la modulación de los requisitos de disolución y el porcentaje mínimo para su constitución. Por otra parte, realiza diversas fundamentaciones sobre la enajenación de viviendas a tercera personas y sobre la necesaria extensión de la exigencia de porcentaje mínimo de socios en todas aquellas promociones en las que participe alguna administración pública, y sobre la adquisición de terrenos de gestión pública por parte de las cooperativas y la revisión del término vivienda de protección oficial actualmente inexistente.
72. La Junta Asesora de Contratación Pública ha emitido su informe en el que, tras analizar la incidencia del anteproyecto en la contratación pública, realiza diversas observaciones al articulado manifestando su opinión favorable al anteproyecto.
73. La Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas ha informado desde la doble perspectiva del cumplimiento de la normativa lingüística y de su incidencia en la normalización del uso del euskera.
74. El Departamento de Educación ha considerado innecesario recoger en el texto de la ley las previsiones relativas a la preferencia en los conciertos educativos de las cooperativas de enseñanza, al señalar que dicha preferencia ya se encuentra recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, y en el Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, Reglamento de los conciertos educativos del País Vasco.
75. El departamento impulsor de la iniciativa ha elaborado una memoria en la que da una respuesta fundamentada a todas y cada uno de las alegaciones y sugerencias realizadas hasta ese momento, acogiendo gran parte de ellas, además de satisfacer la exigencia de Emakunde profundizando en el análisis de los datos sobre la conformación de las cooperativas desde el punto de vista de género.



76. La Autoridad Vasca de la Competencia elabora un informe manifestando la conveniencia de que en el seno del articulado se señale la sujeción de las cooperativas a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
77. Consta el informe del Consejo Económico y Social Vasco (CES) emitido en virtud del artículo 3.1.a) de la Ley 8/2012 de 17 de marzo, reguladora del mismo. El CES muestra su desacuerdo con la consideración como agente social de la Confederación de Cooperativas de Euskadi ya que considera “inconveniente utilizar un término que puede resultar equivoco, en la medida en que en lenguaje coloquial evoca otras entidades que tiene un carácter distinto al de una confederación de cooperativas (sindicatos y patronales)”. El CES, entendiendo que la única finalidad del precepto es el reconocimiento a la confederación, sugiere una redacción alternativa utilizando el término de “agente interlocutor”. Por su parte, estima que tampoco es correcto atribuirle directamente el carácter de representatividad ya que este debería estar referido a la confederación que en cada momento cumpla los requisitos. Además, realiza determinadas precisiones y consideraciones con el objeto de mejorar o acotar algunos de los aspectos contemplados en el articulado. Finalmente, sugiere la conveniencia de incluir en el articulado a las cooperativas de utilidad pública y de iniciativa social
78. En el dictamen del CES figura un voto particular formulado por el representante de Konfekoop. La discrepancia se centra en la consideración como agente social del movimiento cooperativo y en las medidas de fomento propuestas derivadas de lo anterior, que, a diferencia del CES, estima que no se deben limitar al ámbito laboral sino que deben contemplarse en todos aquellos ámbitos donde se afecten sus intereses.
79. Tras los últimos informes se elaboró una amplia memoria de tramitación en la que se da respuesta puntual y fundamentada a las cuestiones planteadas.
80. Fruto de la tramitación hasta el momento se elaboró una 2ª versión del anteproyecto de ley.
81. Figura el informe del Servicio de Patrimonio sobre el anteproyecto, que centra su atención en la cuestión relativa a la adquisición de terrenos de titularidad pública por parte de las cooperativas declaradas de utilidad pública para el cumplimiento de sus fines sociales, considerando necesario que se incluya una referencia relativa a que se podrá realizar siempre que la respectiva normativa pública lo contemple, además de la correlativa modificación del texto refundido de la Ley de patrimonio de Euskadi, que permite disponer bienes de manera gratuita a favor de este tipo de cooperativas para fines de interés público o social y sobre la que considera necesario acotar que el destino de los terrenos será la construcción de viviendas para los socios.



82. Consta asimismo el informe de la Oficina de Control Económico en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El informe destaca que el texto proyecta una falta de incidencia presupuestaria directa e inmediata para la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), si bien echa en falta información relativa a la actividad de fomento en materia de cooperativismo. Sugiere incluir un mayor detalle sobre las cooperativas Juniors y los conciertos educativos. Se cita la ausencia de una previsión o estimación sobre el coste previsto por la utilización de medios electrónicos en los diferentes procesos corporativos. Finalmente, aun resaltando su dificultad, destaca la ausencia de valoración de la incidencia económica que puede tener el proyecto en otras administraciones, en los particulares y en la economía en general.
83. Como conclusión se ha elaborado una memoria de tramitación que da respuesta a las consideraciones de la OCE. Al respecto cabe señalar que formalmente no se ha elaborado una memoria sucinta de todo el procedimiento, tal y como requiere el artículo 10.2 de la LPEDG, que facilitaría el conocimiento de la tramitación del anteproyecto en un único documento. Por el contrario, a tal efecto debemos acudir a las diferentes memorias parciales que sí cumplen satisfactoriamente dicha función pero que complejizan el análisis del expediente. Por ello, más allá de las respuestas que el tramitador ofrezca a sus interlocutores en momentos puntuales, para los efectos de un mejor manejo y comprensión del expediente hubiera sido más adecuado que existiera una memoria evolutiva sucinta que fuera incorporando las diferentes consideraciones sobre las observaciones efectuadas, pero que permitiera conocer en un documento único las diferentes justificaciones y razones que motivan el texto en tramitación.
84. Independientemente de lo anterior, debemos considerar que se ha dado cumplimiento al procedimiento de elaboración previsto en la LPEDG.

TÍTULO COMPETENCIAL

85. Esta Comisión ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la materia a través del Dictamen 66/2016 con ocasión de la tramitación de un anteproyecto similar en la anterior legislatura.
86. En aquel dictamen señalamos que el hecho de constituir la disposición proyectada una nueva modificación de la LCE, respecto de cuya modificación anterior ha emitido este órgano consultivo los dictámenes 48/1999 y 6/2005, excusaba a esta Comisión en parte de realizar mayores consideraciones en cuanto a la competencia que habilita a la Comunidad Autónoma para la adopción de la norma y le permite remitirse a lo dicho en aquellos.



87. En todo caso, cabe destacar que el título que habilita a la CAPV para intervenir en esta materia es el relativo a cooperativas, que le atribuye el artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía del País Vasco con carácter exclusivo, conforme a la legislación general en materia mercantil (artículo 149.1.6ª de la CE).
88. Las implicaciones de dicha competencia de la CAPV en materia de cooperativas fue objeto de expreso análisis por el Tribunal Constitucional en la Sentencia —STC— 72/83, con motivo del examen de constitucionalidad de la Ley vasca 1/1982, de 11 de febrero, sobre cooperativas, antecedente de la actual LCE.
89. En lo fundamental se señaló que las competencias de grado exclusivo previstas en el artículo 10 del EAPV comprenden normalmente competencias legislativas y de ejecución, por lo que el artículo 10.23 EAPV atribuye a la CAPV la competencia para regular por ley las cooperativas, debiéndose prescindir de posiciones doctrinales acerca de si las cooperativas han de calificarse o no como sociedades mercantiles. Consecuentemente, la expresión “conforme a la legislación general en materia mercantil” se ha de interpretar en el sentido de que habrá que respetar tal legislación en cuanto sea aplicable a las cooperativas, como sucede cuando la legislación general de cooperativas remite a la legislación mercantil o cuando contiene preceptos mercantiles (STC 72/83, FJ 3).
90. En conclusión, la CAPV tiene competencia para regular por ley las cooperativas que llevan a cabo su actividad societaria típica, en los términos ya expuestos, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aun cuando establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades de carácter instrumental fuera del territorio de la misma.
91. Se señaló además en dicha sentencia que la competencia de la CAPV en la materia se atenderá fundamentalmente a las funciones típicas de las cooperativas, constituidas por las relaciones de las cooperativas con sus socios, también llamadas relaciones societarias internas, por contraste con las relaciones jurídicas con terceros, que tienen un valor instrumental, aunque también necesario (STC 72/83, FJ 4).
92. La prelación de las fuentes del régimen jurídico, que hacen de aplicación directa las disposiciones autonómicas en materia de cooperativas por virtud de su competencia exclusiva, se vuelve a reconocer más recientemente en la STC 241/2005, de 11 de noviembre FJ 4, por relación a una clase especial de cooperativas, las cooperativas de crédito.
93. En la misma, aparte de recapitularse la doctrina general sobre los títulos competenciales que en la materia afectan respectivamente a las comunidades autónomas y al Estado (delimitada, además de en la señalada STC 72/83, en las SSTC 44/84 y 165/85), se significa —si bien en relación con cierta clase específica de



cooperativas, las cooperativas de crédito, recordando a su vez pasajes de las SSTC 134/92, F2 y 155/93, F3— que las comunidades autónomas—que, por cierto, ostentan ya todas en estos momentos competencias del mismo grado en materia de cooperativas— deberán adecuar sus disposiciones relativas a las cooperativas a las normas estatales en materia de ordenación del crédito, de coordinación de la planificación económica, legislación mercantil y de relaciones y condiciones laborales.

94. Así mismo, no podemos dejar de constatar la relación de esta materia con el título competencial establecido en el artículo 10.5, del Estatuto de Autonomía de Euskadi, conforme al cual, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco “la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia”. Y ello porque el encaje de esta ley, y de un amplio elenco de las normas contenidas en la misma, dentro del amplio concepto de “Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco” ha sido reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.
95. A este respecto, es preciso traer a colación la asentada doctrina de la Sala primera de lo civil del Tribunal Supremo que, partiendo de la afirmación de que “la Ley de Cooperativas del País Vasco no puede ser excluida del concepto de Derecho civil especial propio de dicha Comunidad Autónoma” (Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil de 10 de mayo de 2011, Rec. 81/2011; Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil de 1 de marzo de 2011, Rec. 939/2010) y con base en el art. 14 del EAPV, viene a resolver la competencia de la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para conocer del recurso de casación por las infracciones de sus preceptos. Esta consideración, por lo demás, es también la que fundamenta y abre la vía a algunos de los preceptos del anteproyecto que, como veremos más adelante al volver sobre este tema, sobre la base de otros ya contenidos en la legislación ahora sustituida, afirman la competencia de órganos jurisdiccionales del orden civil.
96. Esta doctrina, por lo demás, viene a confirmar la ya establecida respecto de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, sobre la consideración de que el recurso basado en la infracción de sus preceptos se fundaba, “exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad” (Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil de 13 de junio de 2006, Rec. 1401/2005; Auto del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil de 31 de julio de 2007, Rec. 2094/2006).
97. En consecuencia, la CAPV posee desde una perspectiva competencial habilitación genérica para dictar la iniciativa que se dictamina.



ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

I CONSIDERACIONES GENERALES

A) Sobre la técnica normativa empleada

98. La LCE desde su publicación, en junio de 1993, ha sufrido una serie de modificaciones derivadas de la Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la LCE, y de la Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la LCE. Además, en este periodo se ha publicado la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la sociedad cooperativa pequeña de Euskadi (LSCPE), que completa el panorama legislativo en la materia y que, a su vez, reformó la LCE.
99. En el ámbito reglamentario se ha desarrollado la normativa de cooperativas mediante el Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la LCE, el Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, y el Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las cooperativas de iniciativa social.
100. Así las cosas, tal y como hemos avanzado, uno de los principales motivos de la reforma proyectada es la refundición de los mencionados textos legales que han ido modificando el régimen de cooperativas a lo largo del tiempo, con el objetivo de facilitar la identificación y aplicación de la norma en vigor, esto es, para la seguridad jurídica necesaria en la interpretación y aplicación de la norma.
101. También se aprovecha la coyuntura para elevar de rango determinados contenidos reglamentarios que se estima merecen tal consideración. Además, esta compilación, como se expresa en la exposición de motivos, incluye una labor añadida de armonización, fundamentalmente terminológica y de identidad de razón y soluciones jurídicas, y de aclaración respecto de aquellos elementos normativos que pudieran adolecer de concreción o suscitar dudas en su aplicación.
102. Así, gran parte de los preceptos incluidos en el anteproyecto mantienen en su totalidad una redacción idéntica a la vigente, y otra parte de ellos limitan su modificación a introducir los ajustes necesarios para adecuar su tenor a las novedades surgidas tras su aprobación o a la realización de correcciones o meros ajustes técnicos o aclaratorios.
103. Además el anteproyecto reproduce la gran mayoría de las novedades que fueron incorporadas en el texto que se tramitó en la anterior legislatura. Al mismo se han incorporado las sugerencias realizadas desde esta Comisión y otras modificaciones y ajustes técnicos que entran dentro del amplio margen de configuración que tiene el



legislador en una materia en la que ya hemos expresado el amplio margen competencial de que goza la CAPV.

104. Entre las novedades más significativas cabe destacar la regulación de los supuestos de suspensión y baja obligatoria para los socios de trabajo de las cooperativas; la obligación temporal de celebración de la asamblea general ordinaria; la fijación de los porcentajes del fondo de reserva obligatorio que se pueden emplear para compensar pérdidas o la ampliación a un año del periodo que dispone el socio para hacer frente a las pérdidas. También se ha incidido en la exigencia de modificación estatutaria en el supuesto de transformación obligatoria entre aportaciones con derecho de reembolso y aquellas cuyo reembolso pueda ser rehusado incondicionalmente o en la vinculación del rehúse del reembolso de las aportaciones a un criterio objetivo de carácter económico relacionado con la evolución de la actividad empresarial. Unido a lo anterior, se regula la escisión o segregación de una sociedad cooperativa en favor de una entidad no cooperativa; se eliminan requisitos para la transformación de cooperativas; se flexibiliza el modo operativo de transferencia de los fondos irrepartibles y se aclaran conceptos del patrimonio cooperativo. Además de otras novedades relacionadas con los liquidadores y las cooperativas de vivienda o enseñanza.
105. En todo caso, tal y como señalamos en nuestro Dictamen 66/2016, en este tipo de supuestos suele acudir a las técnicas legislativas dispuestas al efecto. En nuestro caso, el artículo 52.2 de la Ley de Gobierno prevé dos técnicas diferentes, a saber, la delegación legislativa para la realización de un texto articulado, que debe acordarse mediante ley de bases, o para refundir varios textos legales en uno sólo, lo que debe acordarse mediante ley ordinaria.
106. La delegación legislativa, en sus dos modalidades, está configurada de forma similar en el texto constitucional —artículos 82 a 85 y 153.a) de la CE— con proyección sobre el conjunto del ordenamiento. De este modo, los principios que allí se establecen imponen unos límites y unos requisitos que son aplicables tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
107. En el presente caso nos encontraríamos en el segundo supuesto, donde se debería aprobar una ley ordinaria de modificación de la vigente ley y en la misma se habilitaría al Gobierno a realizar la refundición. En este caso se requiere que la delegación especifique si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi el texto refundido elaborado requiere, como garantía añadida, la conformidad parlamentaria (artículos 52.2 y 4 de la Ley de Gobierno y 192 Reglamento del Parlamento Vasco).



108. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha precisado que “no es menos cierto que la labor refundidora que el Legislador encomienda al Gobierno aporta también un contenido innovador, sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa”. En esta dirección, afirma que “el Texto Refundido, que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales refundidas, las cuales quedan derogadas y dejan de ser aplicables desde ese momento, supone siempre un juicio de fondo sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, sobre todo en el segundo tipo de refundición prevista en el artículo 82.5 de la Constitución, es decir, el que incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, pues ello permite al Gobierno, como hemos dicho en la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 16, la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de la refundición, con el fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación precedente, para lograr así que el Texto Refundido resulte coherente y sistemático” (STC 166/2007, de 4 de julio, FJ 8).
109. Así, el texto refundido facilita el conocimiento de la regulación de tal materia, pues su aprobación supone la derogación de las normas refundidas. La elección de una técnica u otra puede venir condicionada por la densidad normativa de la modificación o por motivos de alteraciones sistemáticas en el ordenamiento en vigor, entre otras.
110. La particularidad viene derivada del principio de seguridad jurídica —ex artículo 9,3 CE— que ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4).
111. De esta forma, el texto refundido no innova el ordenamiento jurídico sino que se limita a reproducir disposiciones vigentes, y el análisis del mismo únicamente se refiere a si la normativa proyectada respeta los términos de la delegación y si, en términos jurídicos, en el texto refundido se ha llevado a cabo correctamente la refundición de las disposiciones afectadas. En cambio, si se opta por elaborar un texto integral, como en el presente caso, el análisis tiene una dimensión diferente ya que nos encontramos ante un derecho nuevo que sustituye al anterior, aun teniendo idénticos contenidos en gran parte de su articulado. En este escenario la perspectiva del análisis de la norma que se pretende aprobar se modifica, entrando en juego otro tipo de visiones, que pudieran abocar al cuestionamiento o, incluso, a la modificación de la normativa en vigor con el consiguiente riesgo para el tráfico jurídico.
112. Así las cosas, examinado el contenido del anteproyecto, esta Comisión considera que este es uno de los ejemplos en los que hubiera estado justificado acometer previamente la modificación planteada sobre la LCE, autorizando al Gobierno, en la



misma norma modificativa, para ejecutar la refundición que ahora se plantea, dado las amplias facultades que se puede otorgar mediante dicha técnica delegativa.

B) Competencia en derecho civil foral vasco

113. Tal y como hemos reflejado en el apartado destinado al análisis competencial, existe una íntima relación entre la materia de cooperativas y el título competencial establecido en el artículo 10.5, del EAPV, conforme al cual es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco “la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil, foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia”.
114. La explicitación de los fundamentos jurídicos habilitantes en que se apoye un proyecto de ley y, por tanto, de los títulos competenciales ejercitados, son siempre, por sí solas, muestra de una técnica legislativa depurada (apartado 1.2 de la segunda de las directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993). Y, en tanto que elemento primordial del principio de seguridad jurídica, son también exigencia de los principios de buena regulación, cuya justificación en la exposición de motivos es expresamente requerida por la legislación básica (apartados 1 y 4 del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).
115. Pero, además, en el caso de las normas que guardan relación con el derecho civil foral o especial propio de la Comunidad Autónoma, la cita expresa, o no, de dicho título deviene especialmente relevante respecto a esa misma seguridad jurídica, ya que el no hacerlo puede ser determinante a la hora de concretar el órgano judicial competente a los efectos del recurso de casación, que puede venir atribuida a la Sala primera del Tribunal Supremo o a las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia (segundo párrafo del artículo 478.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil). Así, el propio Tribunal Supremo ha llegado a considerar la cita expresa del título competencial como el “criterio más seguro” para responder a esta cuestión, “de modo que una norma autonómica podrá calificarse de norma de Derecho Civil foral o especial si ha sido aprobada por la asamblea legislativa correspondiente en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1-8ª de la Constitución” (así por ejemplo, en autos de 3 de marzo de 2015, sobre derecho civil gallego, y de 20 de mayo de 2015).
116. Siendo esto así, por razón de seguridad jurídica y dado que esta regulación, como también ha dejado sentado el Tribunal Supremo, “no puede ser excluida del concepto de Derecho civil especial propio de dicha Comunidad Autónoma”, sería pertinente que en el primer apartado de la exposición de motivos constara expresamente dicha referencia



a la competencia recogida en el artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía, junto con la del ya referido con carácter principal, en relación con el artículo 10.23.

C) Sociedad cooperativa pequeña

117. A pesar de su carácter refundidor de los diversos textos legales aparecidos en uno único, la parte expositiva señala que se mantiene la vigencia de la LSCPE, “ya que regula una cooperativa cuyas características singulares exigen una ley propia y claramente diferenciada, respecto de la cual la ley general actúa con carácter supletorio. Esta norma en efecto, responde a una estructura de ordenación compleja en que se integran distintas clases y grados de cooperativas además de las mixtas, en un equilibrio sistemático que la inserción de la norma que regula la sociedad cooperativa pequeña quebraría”.
118. En todo caso, más allá de su mención y justificación en la exposición de motivos no encontramos en la parte dispositiva referencia alguna a dicha circunstancia. Al respecto, sería conveniente reflejar esta particularidad del ámbito de aplicación de la norma contribuyendo a la claridad normativa. A estos efectos se podría utilizar la disposición final segunda para incluir dicha referencia, teniendo en cuenta, en todo caso, los comentarios que respecto a la misma posteriormente realizaremos.
119. Por el contrario, en el artículo 150.3.b) existe una referencia a la cooperativa pequeña, concretamente dentro del trámite de audiencia en el procedimiento de descalificación cooperativa, que por coherencia normativa convendría trasladar su contenido a la LSCPE utilizando para ello una disposición adicional.

D) La responsabilidad de los administradores

120. El anteproyecto, tal y como se refleja en las memorias del mismo, ha incorporado los aspectos sustanciales relativos al gobierno corporativo derivados de lo establecido en la Ley estatal 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo. En este sentido ha procedido a adaptar el antiguo artículo 47 de la LCE a través del artículo 50 del anteproyecto, dedicado a la responsabilidad de los administradores. En el mismo se establece que “los administradores responderán, siempre que haya intervenido dolo o culpa, de los daños que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo, que deberá estimarse con más o menos rigor en función del carácter retribuido o no del mismo”.
121. Llama la atención que el citado artículo mantenga el inciso final del artículo vigente que establece una limitación o graduación de la responsabilidad unida a la mayor o menor profesionalización del desempeño del cargo. Una especie de atenuante o exoneración basada en el binomio retribución versus gratuidad.



122. Para que exista responsabilidad en este tipo de supuestos se necesita la concurrencia del ejercicio de su cargo, la producción de un daño mediante un comportamiento en el que haya intervenido dolo o culpa y la existencia de una relación de causalidad entre ambos, lo que provocará la responsabilidad de los administradores ante el daño causado.
123. Según la teoría general de las obligaciones, la responsabilidad está basada en el deber de actuar con una diligencia adecuada en el cumplimiento de las funciones. Esta obligación se recoge en el artículo 49 del texto, al establecer los deberes de los administradores. Así, dispone que deberán actuar en sus funciones con la diligencia de un ordenado empresario, desempeñando su cargo con lealtad y obrando de buena fe.
124. Esta exigencia, como no podía ser de otra forma, se realiza con independencia de que el cargo se desempeñe de manera retribuida o no. Así, a la hora de establecer las obligaciones de los administradores, estas son idénticas para todos ellos no pudiendo minorarse por el hecho de la ausencia de retribución. Se les supone una conducta adecuada a la buena fe y que, en la gestión de sus atribuciones, emplean la diligencia debida, debiendo ser conocedores del funcionamiento de la cooperativa, en virtud de su deber de información, suponiéndosele una dedicación adecuada al cargo para cumplir sus obligaciones. Lo que no parece lógico es que se le pueda estimar que deben cumplir sus obligaciones con menor diligencia o lealtad derivado de la gratuidad del cargo.
125. Puede resultar adecuado traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de julio de 2002, en la que se manifiesta que:
- En general, la conducta de los miembros del Consejo Rector adolece de graves anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones como administradores, puestas de manifiesto en la sentencia recurrida, sin que los exonere la circunstancia de que se trata «de agricultores, miembros además de una cooperativa de base, personas poco acostumbradas a la actividad comercial o mercantil propiamente dicha, que acuden a las reuniones periódicamente, sin actuar en el día a día de la Cooperativa, con más voluntad que otra cosa y sin posibilidad, muchas veces, de conocer el funcionamiento real de la entidad, funcionamiento llevado a cabo por Directores o Gerentes comerciales en los que se delegaban las funciones», como se expone en el motivo, pues lo cierto es que no actuaron con la más elemental prudencia exigida a un administrador.
126. Otra cuestión es que, derivado de la variabilidad de la diligencia empleada y de las circunstancias que en su producción pueden concurrir, la responsabilidad misma



puede ser matizada tras su nacimiento. Si bien, en este capítulo debemos entender que en el ejercicio de la acción de responsabilidad la modulación de la misma entra dentro del arbitrio judicial. Así, el artículo 1.103 del Código Civil indica que “la responsabilidad que procede de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones, pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”.

127. Por tanto, el criterio de la integridad de la reparación no es un concepto absoluto, admitiéndose la posibilidad de que sea moderada en virtud de las circunstancias concurrentes, derivadas en nuestro caso, principalmente, de la intensidad de la culpa, dependiendo ello de la facultad discrecional del juzgador. Sin embargo, el mantenimiento en el texto de un factor de variabilidad en función de la onerosidad del cargo es una circunstancia que puede resultar excesivamente problemática en su aplicación.

E) La consideración como agente social de la Confederación de Cooperativas de Euskadi

128. El artículo 145 reconoce como agente social a la Confederación de Cooperativas de Euskadi en su interlocución representativa del conjunto del cooperativismo vasco.
129. Tal y como indica el artículo 153.3 del texto, cuando una confederación agrupe, al menos, al sesenta por ciento de las federaciones de cooperativas de Euskadi registradas, se denominará Confederación de Cooperativas de Euskadi.
130. Ya señalamos en nuestro Dictamen 66/2106 que el concepto de agente social inicialmente deviene de lo establecido en el artículo 7 de la CE que reconoce ese papel a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales al entender que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Además, a través del artículo 131.2 CE establece la participación de los sindicatos y de otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas en la planificación económica.
131. Es evidente que, en los últimos años, los agentes sociales han ido adquiriendo mayor protagonismo en el diseño, no solo de las políticas más ligadas al campo laboral, sino también de otro tipo de políticas sociales, sectoriales e, incluso, económicas. Además, han ido surgiendo otro tipo de colectivos que por sus intereses han entrado a formar parte del círculo de influencia en la vida social y económica.
132. Ahora bien, circunscrito a nuestro análisis, conviene puntualizar que el concepto de agente social es un concepto genérico, dedicado a un conjunto de agentes que operan y participan en la vida, fundamentalmente, institucional. La consideración como agente social es una atribución que corresponde a un colectivo en general pero que no



puede atribuirse *intuitu personae*. Es un concepto que, en su caso, se podría predicar del movimiento cooperativo vasco en su conjunto pero que no puede ser exclusivo ni excluyente de una concreta agrupación empresarial, en nuestro caso.

133. Así, la Confederación de Cooperativas de Euskadi es una asociación empresarial más, dentro de un conjunto de asociaciones, federaciones o confederaciones empresariales de diverso tipo que son consideradas en su conjunto agentes sociales.
134. Más aun, en nuestro ámbito no cabe descartar de antemano la posible existencia de alguna otra asociación, federación o confederación que agrupe a diferentes cooperativas, que formarán parte a su vez del conjunto empresarial cooperativo y a las que inicialmente no se les puede negar su representatividad.
135. Otra cosa diferente es su representatividad a efectos de participación institucional u otro tipo. Representatividad que se formula, generalmente, en función de la mayor o mayor o menor implantación en el ámbito cooperativo o empresarial sectorial o general.
136. En este tipo de supuestos, como ya resaltó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 98/1985 de 29 de julio, “en cuanto a la representación Institucional ante las Administraciones Públicas u otras Entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista, debe entenderse que la Ley se limita a establecer la capacidad representativa de los sindicatos que tengan el carácter de más representativos a nivel estatal o de Comunidad Autónoma, pero no impide que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias de organización, integren además en sus propios órganos a otros sindicatos que no tengan esta consideración legal” (posibilidad que obviamente hay que entender predicarse igualmente de las asociaciones empresariales). De ahí se colige que la legislación estatal marque necesariamente un mínimo que debería ser respetado por la legislación autonómica, pero también que esta pueda ampliar el círculo de posibles sujetos, siempre que se respeten las mismas exigencias constitucionales derivadas del respeto al artículo 14 CE.
137. Esta representatividad ya estaría garantizada mediante lo dispuesto en el artículo 146.2.a) del anteproyecto, donde se asegura la representatividad institucional del movimiento cooperativo vasco, propiciando la presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y decisión y organismos de representación institucional económicos, educativos, laborales y sociales del País Vasco y su progresiva consolidación.
138. Es decir, es el movimiento cooperativo vasco el que con carácter general ostentaría el carácter de agente social y no exclusivamente la Confederación de Cooperativas de Euskadi. En todo caso, convendría establecer un criterio de representatividad que



permita asignar la máxima participación representativa a la Confederación de Cooperativas de Euskadi como entidad más representativa en estos ámbitos, sin que ello implique la negación de la representatividad a otro tipo de asociaciones, federaciones o confederaciones en su ámbito sectorial concreto.

139. Unido a lo anterior, es necesario llamar la atención sobre la posibilidad de que en algún momento pueda no existir una confederación de cooperativas que cumpla los requisitos para denominarse de Euskadi. En este sentido, a los efectos de la representación cooperativa en el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi prevista en el artículo 154.3, se podría arbitrar alguna fórmula que permita la representación de las cooperativas.

II OTRAS OBSERVACIONES AL ARTICULADO

140. Tanto en el **artículo 18.2**, como en otras partes del anteproyecto (**apartado IV de la exposición de motivos y artículos 35.2, 41.2, 94.2, 97.1 y 107**), se ha modificado el texto preexistente pretendiendo identificar los juzgados concretos que la Ley Orgánica del poder judicial (LOPJ) ha designado para el conocimiento de determinados asuntos del derecho sustantivo cooperativo.
141. Tal y como manifestábamos al hablar del ámbito competencial, el derecho sustantivo objeto de regulación constituye una parte del derecho civil especial que corresponde a la CAPV y cuyo conocimiento está atribuido, por tanto, a los juzgados y tribunales competentes de dicho orden civil, ex art. 14 del EAPV. Dentro del citado orden, la distribución de los asuntos entre los diferentes juzgados y tribunales es una competencia ajena a la CAPV, realizándose de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del poder judicial, que actualmente reside el mismo en primera instancia en los juzgados de lo mercantil y en apelación en los tribunales civiles correspondientes.
142. Por todo ello, todas las referencias citadas se deberían realizar genéricamente respecto al orden civil o respecto a los jueces y tribunales competentes del orden civil.
143. En el **artículo 48.2**, dedicado a la celebración de las reuniones del consejo rector, convendría especificar, en el supuesto de que los acuerdos se adopten mediante videoconferencia o método similar, cuál será el lugar en el que se consideran que los acuerdos son adoptados, que generalmente será el del domicilio social de la cooperativa.
144. El **artículo 100**, dedicado a la cancelación registral, debería introducir la posibilidad de que la documentación a conservar pueda realizarse mediante medios electrónicos y no exclusivamente en formato tradicional.



145. El artículo 118.3, relativo al régimen de cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso, debería cohererse con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País Vasco (LVPV), que regula la promoción o adquisición de conjuntos residenciales por asociaciones sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso.
146. En particular, convendría señalar que la intervención del consejo rector en los casos de baja de una persona socia y transmisión de su derecho de uso se realiza a los efectos de garantizar la inexistencia de lucro o beneficio especulativo en la mencionada enajenación.
147. Finalmente se observa que la **disposición transitoria segunda** establece una fórmula de aplicación de los actuales estatutos, previendo una modificación tácita de los mismos. En este sentido, en aras a la seguridad jurídica sería conveniente establecer un periodo de adaptación de los estatutos a la ley y sus consecuencias.

III OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

148. En la materia de técnica normativa la Comisión recuerda que el anteproyecto se debe ajustar a las Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 1993, aplicables en virtud de la disposición adicional tercera de la LPEDG.
149. Siguiendo lo expresado en las mismas se formulan las siguientes observaciones a fin de lograr un producto normativo técnicamente más acabado.
150. Dentro del primer apartado de la **exposición de motivos**, la mención a la reforma de la LCE efectuada a través de la disposición adicional cuarta de la LSCPE, al no ser una disposición dedicada únicamente a la reforma de la ley, debe ser formulada indicando en primer lugar la disposición concreta que provocó la reforma de la norma junto con la referencia a su ubicación normativa. Finalmente se debería indicar que ella provocó la reforma de la LCE.
151. La mención que se realiza en el apartado III de la exposición de motivos a la ley de sociedades de capital debería ser referida a su nombre oficial completo.
152. El apartado IX de la exposición de motivos debería eliminar la referencia a “transformación” de cooperativas, ya que la materia, tal y como se indica en su título, es abordada en el siguiente apartado X.
153. El anteúltimo párrafo del apartado XII de la exposición de motivos, en la frase “...por las singulares características esta clase...” debería incluir la preposición “de” para dar sentido a la oración.



154. El último inciso del apartado XIII de la exposición de motivos debería ser revisado para completar la frase o en su caso suprimir el párrafo por innecesario.
155. La referencia a “personas terceras no socias” que se repite a lo largo del texto deberá sustituirse por la de “terceras personas no socias” por ser más correcta gramaticalmente.
156. El **artículo 32.1.b)** refiere como órgano necesario de la cooperativa al órgano de administración. Dada la ausencia en la parte dispositiva de un artículo dedicado expresamente a definir sus clases, sería conveniente que en el mismo se indicara que pueden ser el consejo rector o la administración única.
157. El **artículo 88.5** utiliza la combinación de dos conjunciones “y/o” para establecer una posibilidad que expresa conjuntamente adición y alternativa, lo cual no es admitido gramaticalmente, ya que normalmente el valor que se le pretende atribuir es el de la conjunción “o”, por lo que, cuando se quiere indicar que puede ser una cosa u otra o ambas, se debe usar la conjunción «o» sola; la conjunción “y” se empleará sólo cuando abarque los dos términos de la combinación, para indicar que será una cosa y otra, ambas. La misma consideración debe realizarse respecto a los artículos 103.4 h), 129.1 y 133.
158. El **artículo 132.2**, relativo a las Junior Cooperativas, debería calificar el motivo de la clasificación, indicando que la comunicación de la pérdida de consideración se realiza a los efectos de su “oportuna” o “nueva” clasificación.
159. En la denominación del **título III** sería más adecuado precisar que se trata de Administración “pública” reflejando de manera más coherente el contenido del articulado.
160. La modificación de la Ley de patrimonio de Euskadi, realizada través de la **disposición adicional séptima**, debería hacerse mediante una disposición final, que es la adecuada para reflejar “cláusulas de modificación del derecho vigente, cuando la modificación de una norma no sea el objetivo principal de la disposición”.
161. La **disposición final primera**, dedicada a la entrada en vigor de la norma, debería ubicarse en último lugar de las disposiciones finales, reservado para las que incluyen reglas sobre eficacia temporal de la norma.
162. La **disposición final segunda**, relativa al ámbito de aplicación, debería ubicarse dentro del articulado, concretamente en el capítulo dedicado a las disposiciones generales, ya que su contenido está relacionado con la materia principal de la norma y no con cláusulas de modificación, reglas de supletoriedad, mandatos de actuación o reglas sobre eficacia general de la norma, que son los mandatos que se ubican en parte final.

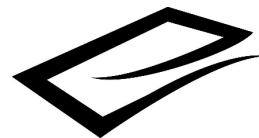


163. Por su parte, la **disposición final tercera**, a pesar de que ostenta un cierto carácter de mandato de complemento normativo, encontraría un acomodo más adecuado en el capítulo dedicado a las clases de cooperativas ya que se está advirtiendo que pueden crearse otro tipo de cooperativas reglamentariamente, además de las definidas en el texto legal, cuando las circunstancias así lo aconsejen, siguiendo los trámites definidos
164. Finalmente, **con carácter general**, convendría revisar la estructura de determinados artículos, al objeto de utilizar un mismo criterio para clasificar internamente el contenido de los artículos.
165. Así, existen artículos con diversos párrafos sin numeración, los cuales convendría numerar (si solo hay uno, la numeración no es necesaria). En el caso de que algunos párrafos se consideren apartados de los mismos, se deberán subdividirse utilizando letras. Por último, en principio, los apartados no deben subdividirse, pero, si excepcionalmente fuera necesario, cada división se numerará (1.º, 2.º, 3.º [...]).
166. En cuanto a la utilización de un lenguaje no sexista, al igual que en el resto del texto, se deberá sustituir el término “socios” por “personas socias”. En el mismo sentido convendría reemplazar el vocablo “socios trabajadores” por “personas socias trabajadoras”.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2018 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre).



Vº Bº:

Jesús María Alonso Quilchano,
Secretario

Sabino Torre Díez,
Presidente

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO**

Fecha de la firma: **30/11/2018 10:37:51**

Validación de la firma:  **Correcta**



LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURU ANDREA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osoko bilkurak, 2018ko azaroaren 28an egindako saioan, ertzean adierazitako kideak bertaratu direla, zure **kontsulta** aztertu du (173/2018 zenbakiarekin erregistratu da); hain zuzen ere, **Euskadiko kooperatibei buruzko Legearen aurreproiektuari** dagokiona (**Erref.: DNCG_LEY_162180/17_12**).

Eztabaidatu ondoren, aho batez eman du irizpen hau. Batzordearen iritzia Calonge Crespo batzordekide jaunak adierazi du.

PRESIDENTEA:

Sabino Torre Díez jauna.

PRESIDENTEORDEA:

Xabier Unanue Ortega jauna.

BATZORDEKIDEAK:

M^a Teresa Astigarraga Goenaga andrea.

Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.

Fatima Saiz Ruiz de Loizaga andrea.

Imanol Zubizarreta Arteché jauna.

Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.

Iñaki Calonge Crespo jauna.

Miren Izaskun Iriarte Irureta andrea.

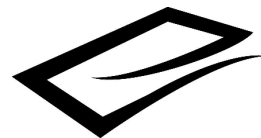
IDAZKARIA:

Jesus M^a Alonso Quilchano jauna.

176/2018 IRIZPENA

AURREKARIAK

1. Lan eta Justiziako sailburuak 2018ko urriaren 10ean emandako Aginduen bidez, batzorde honi izenburuan adierazi lege-aurreproiektuaren kontsulta egin zitzaion egun horretan bertan.
2. Bidalitako espedientean, Legearen aurreproiektuaren testuaz eta aipatutako eskaera-aginduez gain, honako agiri hauek daude:
 - a) Agindua, 2017ko uztailaren 21ekoa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Euskadiko kooperatibei buruzko Legearen aurreproiektua egiteko prozedura abiarazten duena.
 - b) Araua egin baino lehenagoko jendaurreko informazioaren izapidea, 2018ko urriaren 9koa, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak egina.



- c) Generoaren araberako eragin-txostena, 2018ko urtarrilaren 31koa.
- d) Aurreproiektuari buruzko memoria ekonomikoa, 2018ko urtarrilaren 31koa.
- e) Aurreproiektua justifikatzen duen memoria teknikoa, 2018ko urtarrilaren 31koa, ekimena sustatu duen saileko Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak eginikoa.
- f) Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Legea (ekainaren 24ko 4/1993 Legea) berritzeko proposamen-dokumentua, hiru euskal unibertsitateek egin.
- g) Alegazio-idazkiak, 2018ko otsailaren 14koak.
- h) Agindua, 2015eko otsailaren 19koa, adierazitako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatibei buruzko Legearen aurreproiektua alde aurretik onartzen duena. Arauaren testuaren lehen bertsioa dakar, testu elebidunean.
- i) Sailaren txosten juridikoa, 2018ko martxoaren 2koa, Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzak eginikoa.
- j) Enpresako eraginari buruzko txostena, 2018ko martxoaren 13koa, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak eginikoa.
- k) Txostena, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzarena (aurrerantzean HHABHZ), 2018ko martxoaren 14koa.
- l) Alegazioak, Euskadiko BGAE federazioak eginikoak, 2018ko martxoaren 16koak.
- m) 2/2018 Txostena, Euskadiko Kooperatiben Batzorde Nagusiarena (EKBN), 2018ko martxoaren 23koa.
- n) Alegazioak, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eginikoak, 2018ko martxoaren 21ekoak.
- o) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren oharrak proiektuari, 2018ko martxoaren 26koak.
- p) Txostena, 2018ko apirilaren 3koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak igorritakoa.
- q) Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren oharrak proiektuari, 2018ko apirilaren 13koak.
- r) 4/2018 Txostena, apirilaren 11koa, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen osoko bilkurakoa.



- s) Txostena, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Herri Administrazioen Hizkuntza Normalkuntzarako Zuzendaritzarena, 2018ko apirilaren 26koa.
- t) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren oharrak, 2018ko maiatzaren 7koak.
- u) Legearen aurreproiektuaren bigarren bertsioa, 2018ko maiatzaren 25koa.
- v) Aurreproiektua izapidetzeko memoria, 2018ko maiatzaren 25koa.
- w) Lehiaren Euskal Agintaritzaren 270/2018 txostena, 2018ko ekainaren 27koa.
- x) 13/18 Irizpena, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte-Arazoetarako Batzordearena (EGAB), 2018ko ekainaren 27koa.
- y) BNFIX auditoreen alegazioak, 2018ko uztailaren 17koak.
- z) Legearen aurreproiektuaren hirugarren bertsioa, 2018ko uztailaren 20koa.
- aa) Aurreproiektua izapidetzeko memoria, 2018ko uztailaren 20koa.
- bb) Txostena, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzarena, 2018ko urriaren 1ekoa.
- cc) Txostena, Kontrol Ekonomikoko Bulegoarena, 2018ko urriaren 2koa.
- dd) Aurreproiektua izapidetzeko memoria, 2018ko urriaren 10ekoa.

BATZORDEAREN ESKU-HARTZEA

- 3. Irizpen hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3.1. a) artikuluekin bat eman da; artikulua horrek Batzordearen kontsultafuntzioaren eremutzat jotzen ditu Legearen aurreproiektuak, edozein dela ere haien arloa eta xedea, betiere ez badaude biltzen dituen salbuespenen barruan sartuta, eta honako hau ez da horietako bat.

LEGEAREN AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

- 4. Irizpen-testuak zati hauek jasotzen ditu: xedapenak, 154 artikulua —4 titulutan, 15 kapitulutan eta 18 ataletan banatuta—, 8 xedapen gehigarri, 2 xedapen iragankor, 1 xedapen indargabetzaile eta 5 azken xedapen.
- 5. Indarrean dagoen testuaren egitura formala mantentzen du, eta zabal azaltzen du eduki materiala.



6. Ildo horretan, nabarmentzekoa da, indarrean dauden artikulua asko bere horretan uzteaz batera, araudiaren testua eguneratu dela. Bertan sartzen dira indarrean egon den bitartean egin zaizkion aldaketak. Era berean, aldaketa nahiz hobekuntza juridiko eta tekniko jakin batzuk egiteko aukera baliatu da, araudiari koherentzia emateko, eta interpretazio eta aplikazio praktikoa izateko.

7. Erreformaren helburuak eta edukiak behar bezala zehaztu dira xedapenetan, xehetasun handiz aztertzen baitira proposatutako aldaketak.

8. Espedientean aipatzen den moduan, helburu orokor gisa, honako hauek nabarmendu ditzakegu:

Administrazioaren jarduna eguneratzea kooperatibak sustatzeko moduan eta ahaleginean, eta kooperatibek legea betetzearen gaineko kontrolean.

(...) zaharkituta geratutako hainbat alderdi gainditzea, kontuan harturik horien kostua eta aplikatzeko erakusten duten zailtasuna; kooperatiben autonomia indartzea, proiektu kooperatibo bakoitza ondoen dagokion moduan erregulatzeko, betiere errespetatuz sozietate bati kooperatiba-izaera ematen dioten identifikazio-lerroak; kooperatiben funtzionamendu demokratikoa eta parte-hartzailea bermatzea, eta, aldi berean, kudeaketa eta kontrolen eraginkortasuna bermatzea eta publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren indartzea. Funtsean, segurtasun juridikoa eranstea lortu nahi da, barne nahiz bazkide ez diren hirugarrenenikiko harremanetan, hau da, kooperatibei buruz EAEn dagoen legeria tresna egokia izatea kooperatiben barne-harremanak eta kanpoko trafikoa finkatzeko.

9. Helburu horiek xedapenetan jasota daude, eta eduki hauek ditu:

10. I. tituluak, «Kooperatiba-sozietatea», hiru kapitulu daude.

11. I. kapituluak 6 artikulua ditu, arloko xedapen orokorrak jasota: 1. artikuluan, kooperatiba-sozietatearen kontzeptua eta printzipioak; 2. artikuluan, horien izenari buruzko zenbait alderdi; 3. artikuluan, egoitza soziala; eta, 4. artikuluan, sozietateak eratzeko behar den gutxienezko kapital soziala. Gainera, 5. artikulua hirugarrenekin egin beharreko eragiketarak arautzen ditu, eta 6. artikulua, berriz, estatutuetan definitu beharreko kooperatiba-ataleko buruzko edukiak.

12. II. kapituluak, «Kooperatiba eratzea», kooperatibak eratzeko batzarrei buruzko zenbait alderdi xedatzen dira 7. artikuluan; 8. artikuluan, eratzen ari diren kooperatiben berezitasunak; eta, 9. artikuluan, Euskadiko Kooperatiben Erregistroak estatutuen



proiektuari aldeztu aurretik emandako kalifikazioa. Era berean, 10. artikulua kooperatiba irregularra arautzen du; 11. artikulua, kooperatiba eratze modua; 12. artikulua, kooperatiba eratze eskrituraren edukia eta ezaugarriak; 13. artikulua, estatutuen gutxienezko edukia; eta, azkenik, 14. artikulua, kooperatibaren deuseztasuna.

13. III. kapituluaren, «Euskadiko Kooperatiben Erregistroa» arautzeko artikulua sartzen dira. 15. artikulua kooperatiben antolamendua jasotzen du; 16. artikulua, erregistroaren eraginkortasuna; 17. artikulua, eginkizunak; eta 18. artikulua, aplikatzekoak diren arau osagarriak.
14. IV. kapituluaren barruan, «Pertsona bazkideak», 19. artikulua ezartzen du nor izan daitezkeen bazkide; 20. artikulua, nor onartzen den kooperatiban; eta 21. artikulua, nor diren lan-bazkide. Bestalde, 22. eta 23. artikuluek, hurrenez hurren, bazkideen betebeharrak eta eskubideak ezartzen dituzte. 24. artikulua bazkideen informaziorako eskubidea jasotzen du, eta 25. artikulua, berriz, eskubide horren mugak eta bermeak. 26. artikulua, gainera, kooperatiban borondatez baja ematea jasotzen du; 27. artikulua, nahitaezko baja; 28. artikulua, bazkideen kanporatzea; 29. artikulua, gizarte-diziplinako arauak buruzko aspektuak; 30. artikulua, bazkide langilearen edo lan-bazkidearen galarazpenari edo nahitaezko bajari dagozkion aspektuak arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduko, produkzio edo ezinbestekoak direla-eta; eta, 31. artikulua, bazkide ez aktibo edo ez erabiltzaileen eta eszedentzia dauden bazkideen erregimena.
15. V. kapituluaren hasieran, «Kooperatibako organoak» izenekoan, 32. artikulua dago. Artikulu berri horrek organoen zerrenda ematen du, eta bi motatakoak bereizten ditu. Alde batetik, ezinbestekoak direnak: batzar nagusia eta administrazio-organoa. Bestetik, kooperatibaren estatutuetan hautaz kontuan har daitezkeenak: zaintza-batzordea, gizarte-kontseilua eta errekurso-batzordea; nolatan ere, beste organo batzuk ezar daitezke estatutuetan, baina ezingo dituzte inolaz ere beren gain hartu aurrekoei esleitutako eskumenak.
16. Kapitulu horretako lehenengo atalak batzar nagusia arautzen du; 33. artikulua bere kontzeptua eta eskuduntzak zehazten ditu; 34. artikulua zein batzar nagusi mota dagoen; 35. artikulua haren deialdia; eta, 36. artikulua, funtzionamendua. Bestalde, 37. artikulua boto-eskubidearekin loturiko alderdiak aurreikusten ditu; 38. artikulua, akordioak hartzeko gehiengoaren erregimena; 39. artikulua, batzar orokorraren aktaren alderdiak; 40. artikulua, ordezkarien batzarra; eta 41. artikulua, batzar orokorraren akordioak aurkatzeko erregimena.
17. Bigarren atalaren izenburua hau da: «Kooperatibaren kudeaketa eta ordezkaritza». Atal horren barruan, 42. artikuluan, administratzaileen izaera eta eskumenak jasotzen dira;



43. artikuluan, administratzaileak aukeratzeko modua; 44. artikuluan, administratzaile izateko ezintasun eta debekuen arrazoiak; 45. artikuluan, ordainsariak; eta 46. artikuluan, agintaldiaren iraupena eta kargutik kentzeko modua. Zuzendaritza-kontseilua eratzea eta eguneratzea ere arautzen da 47. artikuluan; 48. artikuluan, berriz, kontseiluaren funtzionamendua. Halaber, 49. artikuluan administratzaileek bete beharreko eskakizunak ezartzen dira; 50. artikuluan, erantzukizuna; 51. artikuluan, eskakizun horien aurkako erantzukizun-ekintzak, eta 52. artikuluan, erabakiak aurkaratzea.
18. Hirugarren atalean, zaintza-batzordeari buruzkoan, 53. artikuluan batzordearen osaera, agintaldia eta izendapena arautzen da; 54. artikuluan, informazioa emateko eskumenak; 55. artikuluan, aplikazio-esparrua, eta 56. artikuluan, eskumenak eta funtzionamendua.
19. Laugarren atalean, «Beste organo batzuk» aztertzen dira; 57. artikuluan, gizarte-kontseiluaren figura jasotzen da, baita figura horren izaera eta eginkizunak ere; eta, 58. artikuluan, baliabide-batzordearen osaera eta eginkizunak.
20. Erregimen ekonomikoari buruzko VI. kapitulua 59. artikuluekin hasten da, kooperatibek gizarte-zorretan duten erantzukizuna zehazten duena; 60. artikulua kapital sozialaren osaketari buruzkoa da; 61. artikulua, kapital sozialari egin beharreko ekarpenei buruzkoa; 62. artikulua, borondatezko ekarpenei buruzkoa; 63. artikulua, ekarpenek sor ditzaketen interesena; 64. artikulua, ekarpenen eguneratzeari buruzkoa; 65. artikulua, ekarpenen transmisioari buruzkoa; eta, 66. artikulua, azkenik, ekarpenen errenboltsoari buruzkoa. 67. artikulua partaidetza bereziak arautzen ditu, eta 68. artikulua, beste finantzaketa mota batzuk. Soberakin garbien zehaztapena 69. artikuluan jasotzen da; 70. artikuluan, soberakin horien banaketa; 71. artikuluan, nahitaezko erreserbaren funtsa; 72. artikuluan, korporazioko hezkuntzarako eta sustapenerako laguntza eta interes publikoko beste helburu batzuk; eta 73. artikuluan, galerak egozte.
21. VII. kapituluan, agiri sozialei eta kontabilitateari buruzkoan, 74. artikulua agiri sozialak zehazten dira; 75. artikulua, kooperatiben kontabilitatea; 76. artikulua, kontuen ikuskaritza; eta, 77. artikulua, abokatu aholkatuaren figura.
22. VIII. kapituluan, estatutuak aldatzeari buruzkoan, 78. eta 79. artikuluetan, hurrenez hurren, estatutuak aldatzea eta egoitza soziala aldatzea aztertzen da.
23. IX. kapituluan, «Kooperatibaren bat-egitea eta zatitzea» izenekoan, 80. artikuluan, bat-egitearen modalitateak eta ondorioak arautzen dira; 81. artikuluan, bat egiteko proiektua; 82. artikuluan, bat egite horri buruzko informazioa; 83. artikuluan, bat-egite akordioa; 84. artikuluan, bazkideak eskubiderik gabe uztea; eta 85. artikuluan,



hartzekodunei aurka egiteko eskubidea. 86. artikuluan, bat-egitearen idazketa eta inskripzioari buruzko alderdiak zehazten dira; 87. artikuluan, bat-egite bereziak; eta 88. artikuluan, kooperatiba zatitzea.

24. X. kapituluak, eraldatzeari buruzkoak, bi artikulua jasotzen ditu: 89. artikulua, kooperatibak sozietate zibil edo merkataritza-sozietate bilakatzeari buruzkoa, eta 90. artikulua, sozietate zibilak edo merkataritza-sozietateak elkarre, talde edo izaera kooperatibokoa ez den beste edonolako erakunde mota bilakatzeari buruzkoa.
25. XI. kapituluak, kooperatibak desegin eta likidatzeari buruzkoak, 91. artikulua, desegiteko arrazoiak arautzen ditu; 92. artikulua, desegiteko arrazoiaren eraginkortasuna; 93. artikulua, likidatze-prozesua; 94. artikulua, likidatzaileen izendapena; 95. artikulua, funtzioen eskualdatzea; 96. artikulua, likidatzaileen eginkizunak; 97. artikulua, likidazioaren esku-hartzea; 98. artikulua, sozietatearen ondasunak esleitzea; 99. artikulua, azken balantzea; 100. artikulua, erregistroa baliogabetzea; eta 101. artikulua, kooperatibaren lehiaketa.
26. II. tituluak, «Xedapen bereziak» izenekoak, kooperatiba mota desberdinen arauak jasotzen du.
27. I. kapituluak kooperatiba mota guztiak arautzen ditu hainbat atalen bidez.
28. 1. atalean, kooperatiba guztiei dagozkien arauak jorratzen dira. Artikulu bakarra jasotzen du, 102. artikulua, oro har aplikatu beharreko kalifikazioari eta arauketari buruzkoa.
29. 2. atalean, lan elkartuko kooperatibei buruzkoak, 103. artikulua, kooperatiba mota horien xedea eta arau orokorrak jasotzen ditu; 104. artikulua, bazkide gisa onartzeko aurretiazko proba aldiari buruzkoa da; 105. artikulua, bazkideen lan-araubideari buruzkoa; 106. artikulua, diziplina-araubideari buruzkoa; eta, 107. artikulua, laneko eta gizarteko loturari erreferentzia egiten dioten auzizko kontuei buruzkoa, gizarte alorreko jurisdikzio-organismoen igortzen zaizkienak, edo, gainerako kasuetan, merkataritzako epaitegi eta auzitegiak igortzen direnak.
30. 3. atalaren 108. artikuluan, kontsumo-kooperatibak jasotzen ditu, xede eta eginkizun sozialari dagokienez.
31. Irakaskuntza-kooperatibak arautzen dituen 4. ataleko 109. artikulua, kooperatiba horien helburuak eta modalitateak jasotzen ditu; 110. artikulua, irakaskuntza-kooperatiba integralen espezialitateak; eta 111. artikulua, izaera edo erabilgarritasun publikoko bazkideak.



32. 5. atalean, «Nekazaritzako eta elikagaigintzako kooperatibak» izenekoan, 112. artikulua kooperatiba horien xedea eta jarduerak ezartzen ditu; eta 113. artikulua, bazkide ez diren hirugarrenekin egin beharreko eragiketen araubidea.
33. 6. atalean, «Erkidegoan ustiatzeko kooperatibak» izenekoan, 114. artikulua mota horietako konpainien xedea eta esparrua definitzen du; 115. artikulua, bazkideen araubidea; eta 116. artikulua, kooperatiba horien egitura ekonomikoa.
34. 7. atalean, «Etxebizitza-kooperatibak» izenekoan, kooperatiba horien araubidea jorratzen da. 117. artikulua kooperatiba horiei dagokien xedea, eragiketak eta esparrua ezartzen ditu; 118. artikulua, jabetza esleitzeko edo lagatzeko araubidea; 119. artikulua, bazkideen araubidea; 120. artikulua, zuzendaritza kontseilua; 121. artikulua, kontuak ikuskatzeko eta abokatu aholkularia izateko betebeharra; eta 122. artikulua, etxebizitza babestuen sustatzea eta eskubideak besterentzea.
35. 8. atalean, «Finantza-kooperatibak», izenekoan, kreditu- eta aseguru-kooperatiben ezaugarriak jasotzen dira 123. eta 124. artikuluetan, hurrenez hurren.
36. 9. atalean, «Osasun-kooperatibak» izenekoan, 125. artikulua asistentzia sanitarioko kooperatibak definitzen ditu; eta 126. artikulua, berriz, osasun-instalazioen kooperatibak.
37. 10. atalean, «Zerbitzu-kooperatibak» izenekoan, kooperatiba horien modalitate ezberdinak ezartzen dira. Hala, 127. artikulua zerbitzu profesionalen kooperatibak arautzen ditu; 128. artikulua, enpresa-zerbitzuen kooperatibak; 129. artikulua, garraio-kooperatibak; eta 130. artikulua, erakundeetako zerbitzu-kooperatibak. Gainera, 131. artikulua kooperatiba horien guztien arau osagarriak jasotzen ditu.
38. 11. ataleko 132. artikulua kooperatiba txikiak arautzen ditu.
39. 12. atalak, gizarteratze-kooperatibak arautzen dituenak, 133. artikuluan horien definizioa eta ezaugarriak lantzen ditu, eta, 134. artikuluan, bazkideen erregimena.
40. II. kapituluan, «Kooperatiban sartzea eta sailkatzea» arautzen da hainbat ataletan.
41. 1. Atalean, «Bigarren mailako kooperatibak eta ondorengoak» arautzen dira. 135. artikulua kooperatiben xedea eta ezaugarriak definitzen ditu; 136. artikulua, kooperatiba horien ahalmena, eta bazkideei alta eta baja emateko modua; 137. artikulua, araubide ekonomikoa; 138. artikulua, egitura organikoa eta boto-eskubidea; 139. artikulua, kooperatiben likidazioa; eta 140. artikulua, aplikatu beharreko araudi osagarria.
42. 2. atalak, «Lankidetzak ekonomikoko beste modalitate batzuk », enpresa-elkarteak arautzen ditu 141. artikuluan; 142. artikuluan, gizarte-helburuak lortzeko kooperatibarteko



akordioak; 143. artikuluan, talde kooperatiboak; eta, 144. artikuluan, kooperatiba mistoak, zeinetan bazkide minoritarioak existitzen diren.

43. III. tituluak, «Kooperatibak eta administrazioa», 145. artikuluan aitortzen du Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, gizarte eragile den aldetik, baita gizarte-ekimenekotzat hartzen diren kooperatibak, gizarte-interesa eta onura publikoaren aitortza; 146. artikuluan, bestetik, kooperatibismoa sustatu eta hedatzeko neurriak jasotzen ditu. 147. artikulua Eusko Jaurlaritzari dagokion kooperatibetako ikuskaritza arautzen du; 148. artikulua, arau-hauste kooperatiboak; 149. artikulua, zehapen kooperatiboak; 150. artikulua, kooperatiba bati aipua kentzeko arrazoiak eta prozedura; eta, 151. artikulua, kooperatiben aldi baterako kontu-hartzailletza, funtzionamenduan irregulartasunak izatearen ondorioz.
44. Azkenik, IV. tituluak, kooperatiben asoziazionismoari buruzko bi kapitulu jasotzen dira.
45. I. kapituluak, «Kooperatiba-elkartek» izenekoan, 152. artikulua esparru horretako printzipio orokorrak jaso ondoren, 153. artikulua kooperatiben hainbat elkarte, federazio eta konfederazio izateko aukera sartzen du.
46. Azkenik, II. kapituluko 154. artikulua (artikulu bakarrik) Kooperatiben Goren Kontseilua arautzen du. Erakunde publikoa da, baita EAEko administrazio publikoetako erakunde aholku-emailea ere kooperatibismoari eragiten dioten gai guztietan, bere funtzioak zehaztuz.
47. Testuan zortzi xedapen gehigarri daude: lehenengoa, epeak kontatzeari buruzkoa; bigarrena, lan elkartuko garraio-kooperatibena; hirugarrena, kooperatibismoa bultzatu eta sustatzeari buruzkoa; laugarrena, enplegua sustatu eta kontsolidatzearen arloko jokabide-berdintasunari buruzkoa; bosgarrena, kooperatibetako genero-berdintasuneko neurriei buruzkoa, kooperatiben obligazioa ezartzen duena bere organoetan gizonen eta emakumeen presentzia orekatua izan dadin; seigarrena, hizkuntza ofizialen erabilerari buruzkoa; zazpigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondarearen Legearen testu bateginekoko 102. artikuluko a) letra aldatzeari buruzkoa, zeina azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartu zen; eta, zortzigarrena, kooperatibetako bazkideen gizarte-aurreikuspenari buruzko erabakiak hartzea sustatzeari buruzkoa.
48. Era berean, bi xedapen iragankor aurreikusten dira: lehenengoa eginbidean dauden espedientei buruzkoa da; eta bigarrena, egungo estatutuak aplikatzeari buruzkoa.
49. Xedapen indargabetzaile bakarrik egungo Kooperatiben Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-sozietate txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 Legeko 5.3 artikulua indargabetzen ditu.



50. Bukatzeko, bost azken xedapen sartzen dira; lehenengoa, indarrean sartzeari buruzkoa da (EHAAn argitaratu eta hogeita hamar eguneko epean jarriko da indarrean); bigarrena, arauaren aplikazio-eremuari buruzkoa; hirugarrena, Eusko Jurlaritzako sail eskudunak kooperatiba mota berriak arautzeko aukera ematen duena; laugarrena, arauan ezarritako zenbateko kuantitatiboak eguneratzea ahalbidetzen duena; eta bosgarrena, legea aplikatzeari eta garatzeari buruzkoa. Azken horretan, gobernuak ikuskatzeko eginkizuna eta zehapen kooperatiboko prozedura gauzatzeko erregelamenduak onartzeko betebeharra zehazten da.

PRESTATZEKO PROZEDURA

51. Batzordeak adierazi izan duenez, Legearen aurreproiektuak Eusko Jurlaritzaren barruan egiteko prozeduraren azterketari ekinez gero, hau hartu behar da kontuan: «Legegileak ez du Konstituzioa betearazten, Konstituzioak berak eskaintzen duen esparruan zuzenbidea askatasunez sortu baizik, erregelamenduak egiteko ahala Konstituzioarekin eta legeekin bat etorrita gauzatzen baita (EKren 97. artikulua) (besteak beste, 209/1987 KAEa, abenduaren 22koa)»; beraz, Espainiako Konstituzioak (EK), Autonomia Estatutuak (EAEAE) edo, batzuetan, lege organikoek berariazko izapideak aurreikusten dituztenean salbu —eta benetako salbuespenak dira horiek gure ordenamenduan—, analisi hori, funtsean, tresna bat da, proiektatutako erregulazioaren arrazoizkotasuna aztertzeko, hau da, edukia zenbateraino den baliagarria helburuak erdiesteko.
52. Legearen proiektuak egin eta onartzeko prozedura da gobernu autonomikoari funtzio legegilean parte hartzeko bidea ematen diona, eta, hortaz, bere politika publikoak artikulatzeko, lege-lerruna duten arauen bitartez. Ondorioz, «autonomia-erkidegoen legegintza-ekimenen jarduna, orokorrean, eta legeen aurreproiektuen elaborazioa, bereziki, KEren 149.1.18 artikuluan ezarritakotik kanpo gelditzen da zeharo, bai “administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak” dagokienez, bai “administrazio-prozedura bateratuari” dagokionez» (55/2018 KAE, 2018ko maiatzaren 24koa).
53. Ondorio horietarako, beraz, badugu erreferentzia-tresna garrantzizko bat, hots, abenduaren 22ko 8/2003 Legea, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzkoa (aurrerantzean, XOEPL), zeinak, inguruabar horiek ahaztu gabe, Jurlaritzaren jardura bideratu nahi izan baitu, Jurlaritza, lege-proiektuak idazterakoan, xedapen orokorrak egiteko metodologia berbera erabiltzen saia dadin. Hala, zioen azalpenean esaten duenez, oso ekarpen ona egiten da legegintza-ahalmena duenaren lana errazteko, proiektu hobeto oinarrituak eta antolatutak, teknika juridiko txukunago eta xede dituen helburuak lortzeko egokiagoa dutenak aurkezten zaizkiolako, eztabaidatu eta erabaki dezan.
54. Legearen proiektuak egiteko prozedurari buruzko azterketa egiteko, batzordeak XOEPLren jarraibideak sistematizatu eta honako hauek bereizi ditu: (i) hasierako fasea,



ekimena proposatu duen organoaren barrukoa, helburu nagusitzat duena hasierako testua eta horri eusten dioten arrazoiak finkatzea eta kasu bakoitzean dagozkion izapideak egiteko beharrezko dokumentazioa prestatzea; (ii) prozedura irekitzeko fasea, arauak eragin diezaiekeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteko fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-iter guztia ebaluatuta, behin betiko testua finkatu, eta azken dokumentuak prestatuko ditu —justifikazio-memoria eta memoria ekonomikoa—.

55. Irizpide horiek kontuan hartuta, adierazi behar da legea prestatzeko prozesuari hasiera ematen dion 2017ko uztailaren 2ko Aginduak jakitera ematen duela zein diren erregulazioaren xedea eta helburua, haren bideragarritasun juridikoa eta materiala eta antolamendu juridikoari eragindakoak. Izango duen eragin ekonomikoa aztertzea zaila dela zehazten du, eta aurrekontu-eremuan ez dela ageri. Gainera, araua onartzeko behar diren txostenak eta izapideak xedatzen ditu, baita testu arauemailea elebitan idazteko metodoa ere, itzulpena, alegia.
56. Aurreproiektua aurretiaz kontsultatu zen araua idatzi baino lehen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren webgunean (*Irekia*) argitara eman zen memoria argitzailearen bitartez.
57. Ekimena sustatu duen organoak generoaren arabera eraginaren alde aurretiko ebaluazioa egin du, Gizon eta Emakumeen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko (aurrerantzean, GEBL) 19. artikulua eskatzen duenari jarraikiz. Gobernu Kontseiluak onartu ditu, 2012ko abuztuaren 21eko saioan, generoaren arabera eraginaren alde aurreko ebaluazioa egiteko, eta emakume eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko nahiz horien artean berdintasuna sustatzeko neurriak sartzeko ildoak. Ekimenean, generoaren arabera eraginaren aurretiko ebaluazioa jasotzen da, baita ezberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko proposatzen dituen arauak ere. Testuaren barruan, nabarmentzekoak dira bazkide gisa onartzean diskriminazioa debekatzeari buruzko arauak eta kooperatiba-organoetan presentzia orekatua izatea bermatzen duten arauak.
58. Era berean, memoria ekonomikoa idatzi da. Horren arabera, aplikatzekoa den araudiarekin bat etorriz, eragin hauek zehazten dira: ekonomian eta aurrekontuan duen eragina; ekonomian eta antolamenduan duena, eta proiektuak baliabide publikoetan, partikularretan eta, oro har, ekonomian duen eragina. Alderdi guztietan nabarmentzen da araudi berriak eraginen bat sortzen badu, eragin hori minimoa izango dela egungoarekin alderatuta.



59. Espedientean, justifikazio-memoria dago. Bertan aztertzen da arauaren egokitasuna, eta memoria eragin duten arrazoiak, lortu nahi diren helburuak eta alternatiba juridiko posibleak zehazten dira. Edukiaren eta egituraren azalpen zehatz bat ere egiten da bertan, non arauak proiektatutako nobedadeak azpimarratzen diren. Memorian, era berean, aztertu egiten da araudiak ez duela eraginik egungo administrazioak ordaindu beharreko kargetan. Horrez gain, genero-berdintasuna bultzatzeko proposatzen diren neurriak azaltzen dira; izan ere, organo bazkideak ahaleginduko dira bazkideen presentzia orekatua bermatzen.
60. «Euskadiko Kooperatiben ekainaren 24ko 4/1993 Legea aldatzeko proposamena» izeneko dokumentu bat dago espedientean, hiru euskal unibertsitateek ikerketa-proiektu bezala gauzatua, non, behar diren aldaketen analisi orokor bat egin ondoren, horiei buruzko artikulua proposatzen diren, justifikazio egokiekin.
61. Artikuluei egindako ohar eta proposamen batzuk jasotzen dira, zeinak, jendaurreko informazioaren izapidetik jaso ondoren, ekonomialari batek eta kontu-ikuskari batek landu dituen.
62. XOEPLren 7. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorrita aurreko izapideak egin ondoren eta aurreko kontsiderazioak aintzat hartu ondoren, kontseilariak Legearen aurreproiektuaren hasierako testu elebiduna aurretiazko izaeraz onartzea erabaki zuen, eta, ondorioz, Legea onartzeko behar ziren izapideekin aurrera jarraitzea.
63. Txosten juridikoak XOEPLren 7.3. artikuluko eskakizunak betetzen ditu, eta ondoko ondoko hainbat epigrafetan aurreproiektuaren aurrekariak, eskumenak eta edukiaren inguruko azterketa egiten da, eta horri buruzko zenbait ohar egiten, testua hobetu eta egokitze aldera. Azkenik, aurreproiektua izapidetzeko beharrezkoak diren izapideen inguruko azterketa bat egiten da.
64. Enpresetan duen eraginari buruzko txostena egin da, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari laguntzeko 2012ko ekainaren 28ko 16/2012 Legeko 6. artikuluan ezartzen den moduan. Bertan zehazten dira kooperatiba-sozietatearen funtzionamendua ahalbidetu eta errazten duten neurriak; lehiakorrago egiten dute kooperatiba. Neurri horiek kooperatiben enpresa-jarduera eta garapena ahalbidetzen duten neurriak direla adierazten da; korporazio izaerari uko egin gabe, bestalde.
65. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren antolaketa-txostenak, bere aldetik, aurreproiektuaren prozedura-aspektuei buruzko azterketa egiten du, eta balorazio positiboa ematen die kooperatibaren organoen funtzioen antolaketa-aspektuei eta kooperatibaren funtzionamenduari, baita informazioaren gizarteko teknologien erabilerari ere. Gainera, kooperatibetako



gizarte-dokumentazioa eta kooperatiben erregistroari lotutako izapideak elektronikoak bakarrik izatea proposatzen du.

66. Euskadiko BGAE Federazioaren idazkian ageri da, non bazkideentzako gizarte-aurreikuspenari buruzko akordioak etorkizuneko legean sartzeko eskaera egiten den.
67. Indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatibei buruzko Legearen 145.2.b) artikulua ezartzen duenarekin bat etorritik (ekainaren 24ko 4/1993 Legea), Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenak aurreproiektuari buruzko txostena eman du. Txostenak, aldeko izaera duenak, ohar espezifiko batzuk egiten ditu; horietan, legean euskal kooperatiben ordezkartza aitortzeko beharra azpimarratzen da, enpleguari lotutako gaietan eta organismoetan. Ez dator bat etxebizitza-kooperatiben aldetik hirugarrenen operazioak % 40a handiagotzearekin. Gainera, zenbait ohar ere egiten ditu erakunde publikoekin edo administrazioekin operazioak gauzatzen dituzten etxebizitza-kooperatibetako bazkideen portzentajeak salbuesteko, baita irakaskuntza-kooperatibei eta hezkuntzako itunei buruz ere.
68. Konfekoopkek alegazioak igorri ditu euskal kooperatiben mugimenduaren ordezkagarritasun instituzionala bermatzeko, enpleguari lotutako ordezkartza instituzionaleko organismoetan. Era berean, haien iritzian, legean jasota egon behar luke hezkuntza-zentro kooperatiboak lehentasunez hezkuntzako itunen erregimenari lotzea.
69. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak nekazaritzako elikagaien kooperatibei buruzko zenbait ekarpen egin dizkio testuari. Sailaren iritzian, egoki da kooperatiba horiek nekazaritza- eta elikagaigintza-kooperatiba izena hartzea, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren Legea onartu ondoren (abenduaren 23ko 17/2008 Legea). Horien erregimena Emakume Nekazarien Estatutuaren Legeak (urriaren 15eko 8/2005 Legea) aurreikusitakora moldatzeko beharra ere adierazten du, titulartasun partekatuen erregimenari dagokionez.
70. Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeak GEBLren 21. artikuluan jasotzen den txostena idatzi du, non kooperatiben eremuko generoaren eragina zuzen aztertutik ahal izateko analisis sakontzeko beharra nabarmentzen den. Bestalde, beste zenbait kontsiderazio ere egiten ditu, aurreproiektuaren edukien artean berdintasun-planak egin eta aplikatzeko beharri buruz, sexu-jazarpena eta sexuarengatik jazarpena prebenitzeko berariazko neurriak hartzei buruz eta bazkideen prestakuntza eta hezkuntza sustatzeari buruz, baita gomendio batzuk ere, beren jarduna emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioekin bat etorritik gauzatzen duten kooperatiba-sozietateen begiramen bereziari dagokionak.



71. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak zenbait kontsiderazio egin dizkio aurreproiektuari. Aurreproiektuak bizitegi-erabilerako eraikin formula berriei lekua egiteko beharra nabarmentzen du Sailak, esaterako, *co-housingari* edo erabilera-lagapeneko kooperatiba-erregimeneko etxebizitzetzi; eta, horri dagokionez, kontsiderazioak egiten ditu horiek desegiteko baldintzen modulazioari eta eratzeko gutxieneko portzentajeari buruz. Bestalde, beste zenbait gogoeta ere egiten ditu, horien artean: hirugarrenei etxebizitza besterentzeari buruzkoa, administrazio publikoren batek parte hartzen duen promozio guztietara hedatzea bazkideen gutxieneko portzentajearen betebeharrari buruzkoa, kooperatibek kudeaketa publikoko lursailak eskuratzeari buruzkoa, eta, azkenik, egungo babes ofizialeko etxebizitzaren terminoa berrikusteari buruzkoa.
72. Kontratazio Publikoko Batzorde Aholkulariak bere txostena igorri du, non, aurreproiektuak kontratazio publikoan duen eragina aztertu ondoren, zenbait ohar egiten dizkion artikuluei, aurreproiektuaren aldeko iritzia agertuz.
73. Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak bi ikuspuntutatik eman du irizpena: hizkuntza-araudia betetzearen ikuspuntutik eta euskararen erabileraren normalizazioan daukan eraginaren ikuspuntutik.
74. Hezkuntza Sailak ez du beharrezkotzat jo legearen testuan irakaskuntza-kooperatibetako hezkuntzako itunen lehentasunari dagozkion aurreikuspenak sartzea, adierazi baitu lehentasun hori jada jasotzen dela Hezkuntzaren Lege Organikoan (maiatzaren 3ko 2/006 Legea), abenduaren 18ko 2377/1985 Errege Dekretuan, Hezkuntzako itunei buruzko oinarrizko arauen erregelamenduan eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzako itunen erregelamenduan (irailaren 8ko 293/1987 Dekretua).
75. Ekimena sustatu duen sailak memoria bat egin du, non erantzun arrazoitua ematen dien ordura arte egindako alegazio eta iradokizun guztiei, horietako parte handi bat onartuz. Gainera, Emakunderen eskakizunari ere erantzuna ematen dio, kooperatiben osatzeari buruzko datuen analisisan genero-ikuskera sakonduta.
76. Lehiaren Euskal Agintaritzak txostena egin du, artikuluetan kooperatibak Lehia Defendatzeko Legeari (15/2007 Legea, uztailaren 3koa) lotzen zaizkiola adieraztea komeni dela nabarmenduz.
77. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen txostena ere badu, martxoaren 17ko 8/2012 Legearen 3.1.a) artikuluari jarraikiz emandakoa. EGAB ez da ados agertu Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa gizarte eragiletzat hartzearekin, izan ere uste du «ez dela egokia gaizki-ulertuak sor ditzakeen termino bat erabiltzea, hizkuntza arruntan kooperatiba-konfederazio batena ez den izaerako beste erakunde batzuk gogora dakartzalako (sindikatuak eta patronalak)». EGABek, manuaren helburu bakarra



konfederazioaren aitortza dela ulertuta, beste idazkera bat proposatzen du, eta «agente solaskidea» hitza proposatzen du. Gainera, ez du uste zuzena denik hari ematea ordezkagarritasun-izaera zuzenean, uste baitu unean-unean baldintzak betetzen dituen konfederazioari erreferentzia egin beharko liokeela. Gainera, zenbait zehaztapen eta ohar egiten dira artikuluetan jasotako alderdi batzuk hobetzeko edo mugatzeko. Azkenik, onura publikoko eta gizarte-ekimeneko kooperatibak artikuluetan sartzea komeni dela ematen du aditzera.

78. EGABen irizpenean, Konfekoopeko ordezkariak eginiko boto partikular bat ageri da. Ez datoz bat kooperatiben mugimenduko eragileztat jotzea eta hortik eratorritako proposamenak sustatzeko neurriak; izan ere, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak uste du ez dutela lan-esparrura mugatu behar, haien interesak tartean dauden esparru guztietan aintzat hartu behar direlakoan.
79. Azken txostenen ondoren, izapiderako memoria zabal bat egin zen, non erantzun puntual eta arrazoitua eman zitzaizen planteatutako gaiei.
80. Orain arteko izapideen emaitza da Legearen aurreproiektuaren 2. bertsioa.
81. Ondare Zerbitzuak aurreproiektuari buruz egindako txostenak hizpide nagusi du onura publikoko kooperatibek titulartasun publikokoak diren lursailak eskuratzea, haien sozietate-helburuak betetzeko. Horretarako, beharrezkotzat jotzen du horri aipamen egitea, eskuratzea egin daitekeela zehazteko, beti ere dagokion araudi publikoan hala jasota badago. Euskadiko Ondarearen Legearen testu bateginaren aldaketa korrelatiboak ere aipatzen dira txosten horretan; horrek aukera ematen du kooperatiba mota horien alde ondasunak doan erabiltzeko, interes publikoko edo gizarte-intereseko helburuetarako. Ildo horretan, beharrezko jotzen du zehaztea lursailen helmuga bazkideentzako etxebizitzak eraikitzea izango dela.
82. Era berean, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena ere ageri da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25.etik 27.era bitarteko artikuluetan xedatutakoarekin bat etorritik. Txostenak nabarmentzen duenez, testuak ez du aurrekontu-eragin zuzen eta berehalakorik Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan, eta kooperatibismoaren arloko sustapen-jardunari buruzko informazio gehiago jaso nahi luke. Kooperatiba txikien eta hezkuntzako itunen inguruko zehaztapen gehiago sartzea gomendatzen du. Prozesu korporatibo desberdinetan bitarteko elektronikoak erabiltzeagatik aurreikusitako kostuari buruzko aurreikuspen edo zenbatespen baten gabezia aipatzen da. Azkenik, zailtasuna nabarmendu bada ere, aipatzekoa da proiektuak izan dezakeen eragin ekonomikoaren inguruan baloraziorik egin ez izana, bai partikularren kasuan, bai ekonomian, oro har.



83. Amaitzeko, izapide-memoria bat egin da, EKLren kontsiderazioei erantzuna eman diena. Horri buruz, aipatu behar da formalki ez dela prozedura osoaren memoria laburrik landu, XOEPLeren 10.2 artikulua eskatzen duen bezala. Memoria horrek aurreproiektua dokumentu bakar batean izapidetzea erraztuko luke. Kontrara, helburu horretarako, memoria partzialetara jo beharko da, zeinek funtzio hori behar bezala betetzen duten, nahiz eta espedientearen analisia zaildu. Hori dela eta, tramitatzailerak bere solaskideei eskain diezazkieken erantzunez harago, egokiagoa zatekeen, espedientea hobeto ulertu eta erabiltzeko, bilakaeraren memoria labur bat egotea, egindako oharrei buruzko kontsiderazio desberdinak jasoko lituzkeena, baina dokumentu bakar batean jasota izapidetzen ari den testuaren justifikazio eta arrazoi desberdinak.
84. Adierazitakoa gorabehera, kontuan hartu behar dugu XOEPLen aurreikusitako prozedura bete egin dela.

ESKUMEN-TITULUA

85. Batzorde honek izan zuen jada gaiari buruzko iritzia emateko aukera 66/2016 Irizpenaren bitartez, aurreko agintaldian antzeko aurreproiektu baten izapidetu zela eta.
86. Irizpen hartan adierazi genuen aurreikusitako xedapenak Kooperatibei buruzko Legea berriz ere aldatzea dakarrenez —organo aholku-emaile honek 48/1999 eta 6/2005 irizpenak eman ditu aurreko aldaketa batzuen inguruan—, Batzorde honi eskatzen diola, alde batetik, gogoeta handiagoa egiteko Euskal Autonomia Erkidegoari arau ezartzeko ahalmena nahiz arau horretan esandakoari lotzeko gaikuntza ematen dion eskumenari dagokionez.
87. Edonola ere, nabarmendu behar da EAERI esparru horretan esku hartzeko titulua Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.23 artikuluan berariaz aipatzen diren kooperatiben inguruko tituluak ematen diola, merkataritza-arloko legeria orokorrearekin bat etorritik (KEren 149.1.6 artikulua).
88. EAERen eskumen horrek kooperatiben esparruan dituen ondorioak berariaz aztertu zituen Konstituzio Auzitegiak 72/83 Epaian, Kooperatibei buruzko otsailaren 11ko 1/1982 Legearen (egungo EKLren aurreko legearen) konstituzionaltasuna aztertzean.
89. Funtsean, adierazi zen EAERen 10. artikuluan aurreikusitako berariazko eskumen-mailetan, oro har, legegintzako eskumenak eta eskumen exekutiboak jasotzen direla. Horrenbestez, EAEReko 10.23 artikulua EAERI legegintzako eskumena ematen dio kooperatibak arautzeko. Hala, alde batera utziko dira kooperatibak merkataritza-sozietatetzat jo ala ez erabakitzeko dotrinazko jarrerak. Ondorioz, «merkataritza-arloko



legeria orokorrarekin bat etorri» legeria derrigor bete behar dela interpretatu behar da, betiere kooperatibei aplikatzekoa denean; adibidez, kooperatiben legeria orokorrak merkataritza-arloko legegintzari helden dienez, edo merkataritzarekin loturiko xedapenak jasotzen direnean (72/83 KAE, 3. OJ).

90. Horrenbestez, EAEk sozietateen ohiko jarduera gauzatzen duten kooperatibak legez arautzeko eskumena du, adierazitako baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen barruan, baita harreman juridikoak ezartzen direnean edota lurraldetik kanpo jarduera instrumentalak gauzatzen direnean ere.
91. Gainera, epai horretan adierazi zen EAEk esparru horretan duen eskumena, funtsean, kooperatiben ohiko eginkizunetara mugatuko dela. Kooperatibek haien bazkideen artean dituzten harremanen bidez eratuko dira (*sozietateen barne-harreman* ere esaten zaie, hirugarrenetik harreman juridikoekin kontrastean), eta balio instrumentala dute, beharrezkoak ere izan arren (72/83 KAE, 4. OJ).
92. Araubide juridikoaren iturrien lehentasuna duela gutxi onartu da berriz ere azaroaren 11ko 241/2005 KAEren 4. OJn, berariazko eskumenaren arabera kooperatiben arloan autonomiako xedapenak zuzenean aplikatzen direlako, kooperatiba mota berezi batzuen arabera (kreditu-kooperatibak).
93. Lehentasun horretan, hizpide dugun esparruan hurrenez hurren autonomia-erkidegoei eta estatuari (aipatu 72/83 KAEn agertzean gain, 44/84 eta 165/85 KAEetan ere ageri da) eragiten dieten arloen eskumen-tituluei buruzko dotrina orokorra laburbiltzeaz gain, jakinarazi egiten da —nahiz eta kooperatiba mota jakin batzuen inguruan bakarrik (kreditu-kooperatiben inguruan), KAE hauek, era berean, gogora ekarri: 134/92 KAE 2. oinarria eta 155/93, 3. oinarria— autonomia-erkidegoek —bide batez, horiek guztiek dagoeneko kooperatiba-arloko maila berbera dute— kooperatiben inguruko xedapenak egokitu beharko dituztela kreditu-antolamenduari buruzko, eta plangintza ekonomikoaren koordinazioari, merkataritza-legeriari eta lan-harremanak nahiz - baldintzak koordinatzeko estatuko arauetara.
94. Era berean, ezin dugu alde batera utzi arlo horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren (EAE) 10.5 artikuluan ezarritako eskumen-tituluen arloarekin duen lotura. Horren arabera, berariaz Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da «Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan berezkoa den zuzenbide zibila, foru-zuzenbidea eta zuzenbide berezia mantentzea, aldatzea eta garatzea (idatzizkoa edo ohiturazkoa), eta indarrean egongo den lurralde historikoa zehaztea». Izan ere, lege hau, eta «Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan berezkoa den idatzizko edo ohiturako zuzenbide zibila, foru-zuzenbidea eta zuzenbide berezia» kontzeptu zabalaren barruan jasotako arau sorta zabala, behin baino gehiagotan onartu da jurisprudentzian.



95. Ildo horretan, Auzitegi Nagusiko arlo zibileko lehen salako dotrina ezarrita dagoela zehaztu behar da, esaldi honetan oinarrituta: «Euskal Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben legea ezin da Autonomia Erkidego horri dagokion zuzenbide zibilaren kontzeptutik baztertu» (81/2011 errekurtsua, 2011ko maiatzaren 10ekoa, Auzitegi Nagusiko arlo zibileko lehen salakoa; 939/2010 errekurtsua, 2011ko martxoaren 1ekoa, Auzitegi Nagusiko arlo zibileko lehen salakoa), eta EAEEn 14. artikuluan oinarrituta, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko arlo zibileko eta zigor-arloko salaren eskumena ebazteko, hain zuzen, aginduak hausteagatik zer kasazio-errekurtsio jarri behar den jakiteko. Bestalde, gogoeta hori funtsezkoa da eta aurreproiektuaren hainbat aginduren bidea irekitzen du; izan ere, gai honetara itzultzean aurrerago ikusiko dugun bezala, orain ordeztu den legerian jasotako beste batzuetan oinarrituta, ordena zibileko jurisdikzio-ordenek eskumena dutela baieztatzen da.
96. Dotrina horrek, bestalde, Galiziako kooperatibei buruzko abenduaren 18ko 5/1998 Legearen inguruan ezarritakoa berresten du; izan ere, oinarri gisa hartzen du agindu horien arau-hausteen errekurtsuaren funtsa «berariaz (edo beste arrazoi batzuekin batera) Erkidegoko Zuzenbide zibilari, foru zuzenbideari edo zuzenbide bereziari» dagozkiola (1401/2005 errekurtsua, 2006ko ekainaren 13koa, Auzitegi Nagusiko arlo zibileko lehen salarena; 2094/2006 errekurtsua, 2007ko uztailaren 31koa, Auzitegi Nagusiko arlo zibileko lehen salarena).
97. Ondorioz, hizpide dugun irizpenean, EAEk, eskumenen ikuspuntutik, ekimena agintzeko gaikuntza-eskumena du.

AURREPROIEKTUAREN EDUKIAREN AZTERKETA

I GOGOETA OROKORRAK

A) Erabilitako araudi-teknikari dagokionez

98. EKL 1993ko ekainean argitaratu zenez geroztik, hainbat aldaketa izan ditu Euskadiko kooperatibei buruzko legea aldatzen duen ekainaren 29ko 1/2000 legearen eta Euskadiko kooperatiben legea bigarren aldiz aldatzen duen abenduaren 1eko 8/2006 legearen bidez. Gainera, garai horretan Euskadiko kooperatiba-sozietate txikien ekainaren 25eko 6/2008 legea argitaratu da; hizpide dugun arloko legeria osatzen du, eta, aldi berean, aipatu EKLa aldatu zuen.
99. Araudiaren esparruan, kooperatiben araudia dekretu hauen bidez garatu da: Euskadiko kooperatiben legearen erregelamendua onesten duen martxoaren 29ko 58/2005 Dekretua, Euskadiko kooperatiben erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua onesten duen martxoaren 29ko 59/2005 Dekretua eta gizarte-ekimeneko kooperatibak arautzen dituen apirilaren 4ko 61/2000 Dekretua.



100. Gauzak horrela, aurreratu dugun moduan, batez ere arrazoi nagusi honen ondorioz egin da erreforma: aipatutako legezko testuak bateratu egin dira, denborarekin kooperatiben erregimenaren arabera aldatu direlako, indarrean dagoen araua errazago identifikatzeko eta aplikatzeko; hau da, araua interpretatzeko eta aplikatzeko behar besteko segurtasun juridikoa emateko.
101. Bide batez, mailaz igo dira igoera hori merezi zuten erregelamenduen eduki jakin batzuk. Gainera, bilduma horrek, zioen azalpenean adierazten den bezala, harmonizazioa gaineratzen du, batez ere terminologian eta izatezko arrazoian, baita zenbait konponbide juridiko ere, aplikatzean zehaztasun falta duten edo zalantzak eragin ditzaketen araudiko elementu jakin batzuk argitzeko.
102. Hala, aurreproiektuan jasotako agindu askok gaur egun indarrean dagoenaren idazketa berdina dute, eta beste batzuetan, zenbait aldaketa egin dira aurreproiektua onestean edo zuzentzean, nahiz egokitzapen teknikoak edo argitzeko egokitzapenak egin ostean sortutako nobedadeetara egokitzeko.
103. Aurreproiektuak, gainera, aurreko legealdian izapidetutako testuan sartu ziren berritasun gehienak errepikatzen ditu. Bertan sartu dira batzorde honek egindako iradokizunak eta baita beste aldaketa eta doikuntza tekniko batzuk, legegileak daukan konfiguraziorako tarte zabalaren barnean sartzen direnak. Aurrez adierazi dugun bezala, EAEk lehiarako tarte zabala dauka alde.
104. Berritasun garrantzitsuenen artean honako hauek aipatu behar dira: kooperatibetako lan-bazkideentzako galarazpenen eta nahitaezko baje kasuen arautzea; ohiko batzar nagusia ospatzeko denborazko beharra; galerak berdintzeko erabil daitezkeen derrigorreko erreserba-funtseko portzentajeen ezartzea; eta, baita, bazkideak galerei aurre egiteko duen aldia urte batera arte luzatzea. Estatutuak aldatzeko exijentzia ere azpimarratu da, baldin eta itzultzeko eskubidea duten ekarpenak nahitaez bihurtu nahi badira kooperatibak baldintza gabe ukatuz gero itzultzeko eskubiderik ez duten ekarpen; nabarmendu da, baita, ekarpenak itzultzea ukatzea enpresa-jardueraren bilakaerarekin zerikusia duen irizpide ekonomiko objektibo batekin lotu behar dela. Aurrekoari lotuta, kooperatiba-sozietate baten zatitzea eta banantzea arautu da kooperatiboa ez den erakunde baten alde; kooperatibak eraldatzeko baldintza batzuk ezabatu dira; bana ezin daitezkeen funtsen transferentziarako modu operatiboa malgutu da; eta, azkenik, kooperatiba-ondarearen kontzeptuak argitu dira. Gainera, likidatzaileei eta etxebizitza- edo irakaskuntza-kooperatibei lotutako berritasun batzuk ere badaude.
105. Edonola ere, 66/2016 Irizpenean aipatu bezala, kasu horietan helburu horretarako ezarritako legegintzako teknikak erabili ohi dira. Gure kasuan, Gobernuko Legearen 52.2 artikulua bi teknika aurreikusten ditu: artikulua jasotzen dituen testua egiteko



legegintzako ordezkari (oinarrizko legeen bidez adostu behar da), edo legezko testu bat baino gehiago bakar batean bateratzea (ohiko lege baten bidez adostu behar da).

106. Legegintza-eginkizuna eskuordetzea, bi modalitateetan, konstituzioaren testuaren antzera egituratuta dago —KEren 82.etik 85.era arteko artikulua eta 153.a) artikulua—, antolamenduaren multzo osoaren gainean aurreikusita. Hala, bertan ezarritako printzipioek muga eta baldintza jakin batzuk ezartzen dituzte, eta estatu-esparruan nahiz autonomia-esparruan aplika daitezke.
107. Kasu honetan, bigarren kasua hartu behar da kontuan. Indarrean dagoen legea aldatuko lukeen lege arrunt bat onetsi beharko litzateke, eta bertan emango litzaioke gobernuari bateratzeko gaikuntza. Kasu honetan, ordezkariak zehaztu behar du testu bakarra egitera soilik mugatzen den, besterik gabe, ala, horrez gain, bateratu beharreko lege-testuak arautu, argitu eta harmonizatu behar diren. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, egindako testu bateratuak, berme erantsi gisa, legebiltzarraren adostasuna beharko du (Jaurlaritzaren 52.2 eta 4. artikulua eta Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduko 192. artikulua).
108. Kasu honetan, Konstituzio Auzitegiak honako hau zehaztu du: «egia da, era berean, legegileak Jaurlaritzari legeak bateratzeko ematen dion eginkizunaren edukia berritzailea dela, eta hori gabe ez lukeela zentzurik izango legeak egiteko eskumena eskuordetzeak». Zuzendaritza honek honako hau baieztatzen du: «testu bateginak indarrean jartzen direnetik aurrera legezko xedapen bateratuak (indargabetu egin dira, eta une horretatik aurrera ez dira aplikatuko) ordeztu dituen, funtsezko judizioa dakar beti bateratutako agindua sistematikoki interpretatzearen gainean, batez ere Konstituzioaren 82.5 artikuluan aurreikusitako bigarren bateratze motan; hau da, bateratu beharreko legezko testuak arautzeko, argitzeko eta harmonizatzearen eskumena dakar; otsailaren 6ko 13/1992 KAEn esan dugun bezala (16. OJn), bateratu beharreko arau osagarriak zehazteko, eta hutsuneak betetzeko. Horretarako, batu behar diren lege-testuen garbiketa teknika egin behar da manuak argitu, bateratu eta aurreko erregulazioen antzemandako desadostasunak eta antinomiak kenduz.» (166/2007 KAE, uztailaren 4koa, 8. OJ).
109. Hala, testu bateratuak arlo horretako erregulazioaren berri izatea errazten du. Izan ere, hori onesteak esan nahi du arau bateratuak indargabetu egiten direla. Teknika bat edo beste aukeratzea baldintzatuta egon daiteke aldatzen diren arauen garrantziaren arabera edo indarrean dagoen antolamenduan aldaketa sistematikoak egitearen arabera, besteak beste.
110. Berezitasuna segurtasun juridikotik dator —EKren ex 9,3 artikulua—, aplika daitekeen antolamendu juridikoaren eta arlo juridikoan tutoretzapean dauden interesen gaineko ziurtasuntzat jo daiteke (15/1986 KAE, urtarrilaren 31koa, 1. OJ); besteak beste,

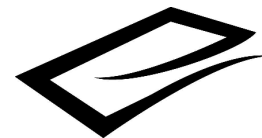


herriarren artean zuzenbidea aplikatzean boterearen jarduketa zein ote den jakiteko sortutako zentzuzko itxaropena (36/1991 KAE, otsailaren 14koa, 5. OJ) edo legegilea argia izatea eta arauak nahasterik ez eragitea (46/1990 KAE, martxoaren 15koa, 4. OJ).

111. Hori horrela, testu bateginak ez du berritzen antolamendu juridikoa, indarrean dauden xedapenak ematera mugatzen baita. Aurreikusitako araudiak eskuordetzearen baldintzak errespetatzen ote dituen soilik aipatzen du, eta, alderdi juridikoei begiratuta, testu bateginean kasuan kasuko xedapenak behar bezala bateratu diren aztertzen du. Dena den, testu osoa egitea aukeratzen bada, kasu honetan bezala, analisiak beste dimentsio bat du; izan ere, aurrekoa ordeztu duen beste eskubide bat dugu hizpide, nahiz eta artikulua gehienek eduki berdin-berdinak izan. Gauzak horrela, aldatu egin da onesteko dagoen arauaren analisiaren ikuspuntua. Horrenbestez, beste mota bateko ikuspuntuak hartu behar dira kontuan, edo, bestela, indarrean dagoen araudia aldatu behar da, eta, ondorioz, trafiko juridikoa arriskuan jarriko litzateke.
112. Beraz, aurreproiektuaren edukia aztertuta, Batzorde honek uste du kasu honetan justifikatuta egongo litzatekeela EKLri buruz proposatutako aldaketa alde aurretik egitea, eta, era berean, Jaurlaritzari baimena ematea, aldatutako arauan bertan, orain hizpide dugun bateratzea gauzatzeko, kontuan hartuta eskuordetzeko teknika horren bidez eskumen zabalak eman daitezkeela.

B) Euskal foru-zuzenbide zibilaren eskuduntza

113. Eskuduntzen azterketara zuzendutako atalean islatu dugun bezala, harreman estua dago kooperatiben gaiaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren (EAE) 10.5 artikuluan ezarritako eskumen-tituluaren arloaren artean. Horren arabera, berariaz Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena da «Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan berezkoa den zuzenbide zibila, foru-zuzenbidea eta zuzenbide berezia mantentzea, aldatzea eta garatzea (idatzizkoa edo ohiturazkoa), eta indarrean egongo den lurralde-eremua zehaztea».
114. Lege-proiektu batek oinarri hartuko dituen oinarri juridiko gaitzaileak esplizitu egitea, eta, hortaz, erabilitako eskuduntza-tituluak ere argi eta garbi adieraztea beti da legegintzako teknika landu baten adierazle (lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak idazteko bigarren gidalerroko 1.2 apartatua, 1993ko martxoaren 23ko gobernu-kontseiluaren akordio bidez onartuak). Eta, segurtasun juridikoko printzipioaren funtsezko elementu gisa, arautze egoki baten printzipioen esijentzia ere badira, zeinen arrazoien azalpenean egiten den justifikazioa berariaz eskatzen duen oinarritzko araudiak (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikulua 1. eta 4. apartatuak, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearena).



115. Baina, gainera, foru-zuzenbide zibilarekin edo autonomia-erkidegoko zuzenbide bereziarekin harremana duten arauen kasuan, titulu hori berariaz aipatzea, edo ez, bereziki garrantzitsua da segurtasun juridiko horri dagokionez; izan ere, ez aipatzea erabakigarria izan daiteke kasazio-errekurtsoaren ondoreetarako organo judizial eskuduna zehazterako orduan, zeina Auzitegi Gorenaren lehenengo epaimahaiari edo Justizia Auzitegi Nagusiaren epaimahai zibil edo penalei esleai dakiekeen (Prozedura Zibilaren Legearen 478.1 artikulua bigarren lerrokada, urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea). Hala, Auzitegi Gorenak berak ere eskuduntzako tituluaren aipu espezifikoak jo du «irizpide seguruenentzat» zalantza horri erantzuna emateko, eta, hortaz, «arau autonomiko bat foru-zuzenbide zibilekotasun edo berezikotasun hartu ahal izango da dagokion legegintzako biltzarrek, Konstituzioaren 149.1-8. artikulua egotzen dizkion eskuduntzen jardunean, onartu badu» (hala jasotzen da, adibidez, 2015eko martxoaren 3ko autoetan, zuzenbide zibil galiziarri buruzkoetan, eta 2015eko maiatzaren 20koetan).
116. Hori horrela, segurtasun juridikoa dela-eta, eta araubide hori, Auzitegi Gorenak ezarri duen bezala, «ezin denez autonomia-erkidego horren zuzenbide zibil bereziaren kontzeptutik kanpo gelditu», egokia litzateke arrazoiak azaltzen dituen lehen apartatuan berariaz aipatzea eskuduntzaren erreferentzia hori, Autonomia Estatutuaren 10.5 artikuluan jasotzen dena, aipatutako izaera nagusikoaz gain, 10.23 artikuluari lotuta.

C) Kooperatiba-sozietate txikia

117. Argitaratutako lege-testuak testu bategin bakar batean biltzea asmo izateaz gain, azalpen-zatiak Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikien Legeak indarrean jarraitzen duela adierazten du, «izan ere, bere ezaugarri bereziak direla-eta, lege propioa eta behar bezala desberdindua behar duen kooperatiba arautzen du, zeina lege nagusiak gehigarritzat hartzen duen. Arau horrek, hain zuzen, antolaketa-egitura konplexu bati erantzuten dio, barnean hartuz, oreka sistematiko batean, kooperatiba mistoak ez ezik, mota eta maila ezberdinetako kooperatibak. Kooperatiba-sozietate txikien erregulazio-araua lege honetan txertatuz gero, oreka hori apurtu egingo litzateke».
118. Edonola ere, arrazoen azalpenean aipatu eta justifikatzeaz haratago, ez dugu zirkunstantzia horren inolako erreferentziarik aurkitu parte xedatzailean. Horri dagokionez, komenigarria litzateke arauaren aplikazio-eremuaren partikularitasun hori islatzea, araua argitzen lagunduz. Helburu horretarako, azken xedapenetatik bigarrena erabil liteke erreferentzia hori txertatzeko, aintzat hartuta, betiere, beranduago horri buruz egingo ditugun oharrek.
119. Kontrara, 150.3.b) artikuluan badago kooperatiba txikiaren erreferentzia bat, kooperatibari aipua kentzeko prozeduraren informazioaren izapidetaren barnean zehazki. Arauaren koherentzia mantentzeko, komeni da eduki hori Euskadiko



Kooperatiba Sozietate Txikien Legera pasatzea, horretarako xedapen gehigarri bat erabiliz.

D) Administratzaileen erantzukizuna

120. Aurreproiektuak, memorian jasotzen den bezala, gobernu korporatiboari buruzko oinarritzko alderdiak jasotzen ditu, abenduaren 3ko 31/2014 estatuko Legean ezarritakotik eratorrita (Gobernu Korporatiboa Hobetzeko Kapital Sozietateei buruzko Legea). Ildo horretan, moldatu egin da EKLren 47. artikulua zaharra, aurreproiektuaren 50. artikulua bitartez, zeina administratzaileen erantzukizunari dagokion. Honako erantzukizun hau ezartzen da: «Administratzaileek izango dute legearen edo estatutuen kontrako egintzen ondorioz sorturiko kalteen erantzukizuna, baita karguari dagozkion funtzioak gauzatzean eragindako kalteena ere, betiere dolo edo erruz jardun badute. Erantzukizun hori zenbatesteko, kontuan hartuko da ea administratzailearen kargua ordainpekoa den ala ez».
121. Arreta deitzen du aipatutako artikulua amaierako aipamenean indarreko artikulua mantentzea, erantzukizunen mugaketa edo mailaketa sartu nahi duena, kargua betetzeko profesionaltasun handiagoa ala txikiagoa zehaztearekin batera. Nolabaiteko aringarria edo salbuespena binomio honetan oinarrituta egongo litzateke: ordainsaria versus doakotasuna.
122. Erantzukizuna ezartzeko, kasu horietan, aldi berean gertatu beharko dira dagokion kargua gauzatzean, doloa eta kulpak izan duen portaera baten bitartez kaltea eragitea, eta, gainera, bien artean kausazko lotura egon behar du, horrek ekarriko baitu administratzaileek eragindako kalteen gaineko erantzukizuna izatea.
123. Betebeharren teoria orokorraren arabera, erantzukizuna eginkizunak behar bezalako arduraz jokatzu betetzean datza. Betebehar hori testuaren 49. artikuluan jasotzen da, administratzaileen betebeharrak ezartzen baitira. Hala, dagozkien eginkizunetan, enpresaburu ordenatuaren arduraz jokatu beharko da, kargua leialtasunez eta fedez beteta.
124. Eskakizun horretan, bestela ezingo lukeen eran, ez da aintzat hartuko kargua ordainduta edo ordaindu gabe betetzen den. Hori horrela, administratzaileen obligazioak ezartzerako orduan obligazio horiek berdinak dira denentzako, eta ezingo dira murriztu kargua ordaindu gabe betetzen delako. Jakintzat ematen da fede oneko jarrera izango dutela, eta dagozkien eginkizunetan, behar bezala arduraz jokatu dutela. Hala, kooperatibaren funtzionamendua zein den jakin beharko dute, informazioa jasotzeko betebeharra aintzat hartuta. Era berean, betebeharrak zehaztean, karguari dagokion dedikazioa egotziko zaie. Ez da logikotzat jotzen beren obligazioak prestasun edo leialtasun gutxiagorekin bete ditzaketela estimatzea karguaren ordainetan dirurik jasotzen ez dutelako.



125. Aipatzekoa da Justizia Auzitegiak 2002ko uztailaren 4an emandako epaia. Honako hau adierazten du:

Oro har, Zuzendaritza Kontseiluko kideen jokabideak irregulartasun larriak ditu administratzaile gisa dituzten betebeharretan (aurkatutako epaian jasotzen dira), baina ez ditu egoera horretatik salbuesten «nekazariak, eta, gainera, oinarritzko kooperatibako kide izateak; hots, merkataritza jarduerara oso ohituta ez dauden, eta bileretara maiztasunez joaten diren pertsonak, kooperatibaren egunerokotasunean beste ezertan baino gogo gehiagorekin jarduten dutenak, (askotan, gainera, erakundearen benetako funtzionamendua ezagutzeko). Funtzionamendu hori zuzendari edo gerente komertzialek gauzatzen dute, eta horien esku uzten dituzte eginkizunak», zioan adierazten den bezala; izan ere, ez zuten jokatu administratzaile bati eskatzen zaion oinarritzko zuhurtziarekin.

126. Beste kontu bat da, aintzat hartuta erakutsitako arduran eta tartean egon daitezkeen inguruabarretan aldaketak egonda, erantzukizuna bera sortu zen unearen ostean zehaztu daitekeela. Hori bai, kapitulu honetan ulertu behar dugu erantzukizuna gauzatzean, modulazioa erabakimen judizialaren barruan sartzen dela. Hala, Kode Zibilarren 1.103 artikuluan honako hau adierazten da: «Axolagabekeriaren ondoriozko erantzukizuna ere exijitu ahal izango da mota guztietako betebeharrak betetzeko, baina kasuen arabera, auzitegiek moderatzeko aukera egongo da».
127. Horrenbestez, konponketaren osotasun-irizpidea ez denez kontzeptu absolutua, onartu egin da tartean dauden inguruabarren arabera moderatu ahal izateko aukera. Gure kasuan, nagusiki erruaren intentsitatea hartu behar da kontuan, eta epaitzen duenaren hautazko eskumenaren arabera egongo da. Dena den, testuan karguaren kostu bidearen araberrako aldakortasun-eragile bat mantentzeak arazo gehiegi ekar ditzake berau aplikatzean.

E) Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa gizarte-eragiletzat hartzea

128. 145. artikulua gizarte-eragiletzat jotzen du Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa parte-hartzean, eta Euskadiko kooperatibagintza osoa ordezkatzeko du.
129. Testuko 153.3 artikulua adierazten duen bezala, konfederazio batek Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dauden kooperatiba-federazioen ehuneko hirurogei biltzen badu gutxienez, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa izango da haren izena.
130. 66/2016 Irizpenean aipatu genuen bezala, gizarte-eragilearen kontzeptua KEren 7. artikulutik eratorrita dago hasiera batean. Artikulu horretan, langileen sindikatuei eta



enpresa-elkarteei eginkizun hori aitortzen die, berezkoak dituzten interes ekonomikoak eta sozialak defendatzen eta bultzatzen laguntzen baitute. Gainera, 131.2 artikulua bidez ezartzen da sindikatuek eta profesionalen eta enpresaburuen beste erakunde batzuek nahiz erakunde ekonomikoek plangintza ekonomikoan parte hartuko dutela.

131. Begi-bistakoa da azken urteotan gizarte-eragileak gero eta protagonismo handiagoa hartzen ari direla diseinuan, lan-esparruarekin lotuen dauden politiketan ez ezik, bestelako politika sozial, sektorial edota ekonomikoetan ere bai. Gainera, beste era batzuetako kolektiboak sortu dira, eta bizimodu sozial eta ekonomikoaren eragin-eremuan sartzen dira.
132. Hori bai, gure analisisan oinarrituta, komeni da zehaztea gizarte-eragilearen kontzeptua orokorra dela, funtsean, erakundearen esparruan jardun eta parte hartzen duten eragile guztiak hartzen dituelako barne. Kolektibo orokor bati dagokio gizarte-eragiletzat jotzea, baina ezin da egotzi *intuitu personae*. Euskal kooperatiba-mugimendu osoaz esan daitekeen kontzeptu bat da, baina ezin dena, gure kasuan, ez eksklusiboa ez enpresa-talde zehatz baten baztertzaila izan.
133. Hala, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa beste enpresa-elkarte bat da, eta, oro har, gizarte-eragiletzat jotzen diren askotariko enpresa-elkarteen, enpresa-federazioen eta enpresa-konfederazioen multzo zabal baten parte dira.
134. Are gehiago, gure eremuan ezin dugu aurretiaz kooperatiba desberdinak bilduko dituen beste elkarte, federazio edo konfederazio baten existentzia posiblea baztertu, beren aldetik, gainera, kooperatibako enpresa-multzoaren parte egingo dutenak eta zeinei hasiera batean ezin zaien ordezkagarritasunik ukatu.
135. Beste gauza bat da zer ordezkaritza duten erakundearen edo bestelakoen partaidetzan. Ordezkaritasun hori, normalean, kooperatibaren eremuan edo enpresa- eta sektore-eremuan edo orokorrean duten ezarpen mailaren arabera egiten da.
136. Kasu honetan, Konstituzio Auzitegiak uztailaren 29an emandako 98/1985 Epaian adierazi zen bezala, «erakundeak administrazio publikoetan edo estatuko nahiz aurreikusita duten autonomia-erkidegoko beste erakunde eta organismo batzuetan ulertu behar da legea estatuan edo autonomia-erkidegoan ordezkaritza-maila handiena eta txikiena duten sindikatuen ordezkaritza-ahalmena zehaztera mugatzen dela; hala ere, ez du eragozten autonomia-erkidegoek, antolatzeke dituzten eskumenak baliatuz, beren organoetan legezko izaera hori ez duten beste sindikatu batzuk sartzea» (aukera hori, bistan dagoenez, modu berean gauzatu behar da enpresa-elkarteetan). Hortik ondorioztatzen da estatuko legeriak nahitaez ezarri behar duela autonomiako legeak gutxienez bete beharko lukeen kopurua, baina, era berean,



balizko subjektuen zirkulua zabaldu ahal izango du, betiere horren harira KEren 14. artikulutik eratorritako konstituzioko eskakizunak betetzen badira.

137. Ordezkaritza hori aurreproiektuaren 146.2.a) artikuluan xedatutakoaren bidez bermatuta legoke jada. Bertan ziurtatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko kooperatiba-mugimenduak ordezkariak izatea, eta bultzatu egingo da kooperatibagintzak ordezkariak eta solaskideak izan ditzan Euskal Autonomia Erkidegoko kontsulta- eta erabakitze-eremuetan eta erakundeen ordezkaritza duten organismoetan: ekonomia-, hezkuntza-, lan- eta gizarte-erakundeetan. Era berean, bultzatu egingo da hori pixkanaka araudian finkatzea.
138. Hau da, euskal kooperatiben mugimendua da, izaera orokorrean, gizarte-agente izaera edukiko lukeena, eta ez Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa esklusiboki. Edonola ere, komeni da ordezkagarritasun-irizpide bat ezartzea ordezkaritza-partaidetza handiena Euskadiko Kooperatiben Konfederazioari esleitzeko, eremuko erakunde esanguratsuena den aldetik. Horrek ez du esan nahi beste erakunde, federazio edo konfederaziori beren eremu sektorial zehatzetan ordezkagarritasunik ukatu behar zaionik.
139. Aurrekoarekin lotzeko, komeni da arreta deitzea momenturen batean Euskadi izena izateko baldintzak betetzen ez dituen kooperatiba-federazio bat ez existitzek egon daitekeen aukeraren gainean. Ildo horretan, kooperatibek Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluan duten ordezkaritzaaren efektuetarako (154.3 artikuluan aurreikusten dena), formularen bat arbitra daiteke kooperatiben ordezkagarritasunari bidea emateko.

II ARTIKULUEN GAINEKO BESTE ZENBAIT OHAR

140. **18.2 artikuluan** eta aurreproiektuaren beste zati batzuetan (**zioen azalpeneko IV. zenbakian eta 35.2, 41.2, 94.2, 97.1 eta 107 artikuluetan**), lehen zegoen testua aldatu da. Helburua da horren bidez identifikatzea zer epaitegi izendatu duen Botere Judizialeko Lege Organikoak (BJLO) kooperatiben oinarritzko zuzenbidearekin loturiko gai jakin batzuen berri izateko.
141. Eskumen-esparruari buruz hitz egitean aipatzen genuen bezala, araudiaren xede den oinarritzko zuzenbidea EAeri dagokion zuzenbide zibil bereziaren parte da, eta, beraz, ordena zibil horretako epaitegi eta auzitegi eskudunei dagokie horren berri izatea (EAEEKo ex 14. art). Ordena horren barruan, epaitegi eta auzitegi ezberdinen arteko gaiak banatzeko eskumena ez dagokio EAeri, Botere Judizialeko Lege Organikoan ezarritakoaren arabera egingo baita. Gaur egun, lehen auzialdian, merkataritza-arloko epaitegietan egingo da, eta, apelazioan, kasuan kasuko gizarte-gaietako auzitegietan.



142. Hori dela eta, egiten diren aipamen guztiak ordena zibilaren inguruan edo ordena zibileko epaile eta auzitegi eskudunen inguruan egin beharko lirateke.
143. **48.2 artikuluan**, zuzendaritza-kontseiluaren batzarrak ospatzeari buruzkoan, komeni da zehaztea, akordioak bideokonferentzien edo antzeko metodoen bidez hartzen badira, zein leku hartuko den akordioak onartu izanaren lekutzat (oro har, kooperatibaren egoitza sozialean hartuko dira).
144. **100. artikuluan**, erregistro-ezerezteari buruzkoan, aukera sartu beharko litzateke kontserbatu behar den dokumentazioa bitarteko elektronikoen bidez gordetzeko, eta ez soilik bitarteko tradizionalen bidez.
145. **118.3. artikulua**, lagapen erregimeneko etxebizitza-kooperatiben erregimenari buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitzari Buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legearen (EAEEL) hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bateratu beharko litzateke. Bertan arautzen da bizitegien sustapena eta eskuratzea. Irabazi asmorik gabeko elkarteek sustatuko dituzte, lagapen erregimenean.
146. Zehazki, komeni da aipatzea bazkide baten bajaren eta bere erabilera-eskubidearen eskualdatzearen kasuetan zuzendaritza-batzordeak egiten duen esku-hartzea besterentze horretan irabazi asmorik edo asmo espekulatiborik ez dagoela bermatzeko egiten dela.
147. Azkenik, aintzat hartu da **bigarren xedapen iragankorrak** egungo estatutuak aplikatzeko formula bat ezartzen duela, eta horiek isilbidezko aldaketa aurreikusten duela. Ildo horretan, segurtasun juridikoa lortzeko asmoz, komeni da epe bat ezartzea estatutuak eta haren ondorioak legera egokitzeko.

III LEGEGINTZAKO TEKNIKA-ARLOKO OHARRAK

148. Araugintza-teknika dela eta, Batzordeak gogorarazten du aurreproiektuak egokitu egin behar duela, oro har, legearen proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak egiteko 1993ko martxoaren 23ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez onetsitako gidalerroetara, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legearen hirugarren xedapen gehigarriaren arabera aplikagarriak direnetara.
149. Horietan adierazitakoari jarraituz, ohartarazpen hauek egin dira, teknikoki osoagoa den arauzko produktu bat lortze aldera.
150. **Zioen azalpenaren** lehen apartatuaren barnean, Euskadiko Kooperatiba Sozietate Txikien Legearen laugarren xedapen gehigarriaren bitartez egindako aipatutako Euskadiko Kooperatiben Legearen aldaketa, Legearen aldaketa egitera bakarrik



zuzendutako xedapena ez den aldetik, arauaren aldaketa eragin zuen xedapen zehatza aipatuz idatzi behar da lehenik eta behin, arauan non kokatzen den aipatzearekin batera. Bukatzeko, aipatu beharko litzateke horrek berak eragin zuela Euskadiko Kooperatiben Legearen aldaketa.

151. Zioen azalpenaren III. apartatuan Kapital Sozietateen Legeari egiten zaion aipamenak bere izen ofizial osoari egin beharko lioke erreferentzia.
152. Zioen azalpeneko IX. apartatuan kooperatiben «eraldaketaren» erreferentzia ezabatu behar litzateke, gai hori X. apartatuan lantzen baita, tituluari adierazten den bezala.
153. Gaztelaniazko jatorrizkoaren zioen azalpenaren XII. apartatuko azkenazko letrak, «... por las singulares características esta clase...» esaldian «de» preposizioa sartu behar da, esaldiak zentzua izango badu.
154. Zioen azalpeneko XIII. apartatuaren azken tartekia berrikusi egin beharko litzateke, esaldia osatu edo, hala badagokio, behar ez den letrada ezabatzeke.
155. Gaztelaniazko testuan, «personas terceras no socias» erabili beharrean, «terceras personas no socias» erabili behar da, gramatika-zuzentasuna kontuan hartuta.
156. **32.1.b).** artikuluen arabera, administrazio-argazkiak da kooperatiba ororen ezinbesteko argazkiak. Parte xedatzailean ez dagoenez argazki mota horiek berariaz definitzen dituen artikulurik, gomendagarria litzateke bertan adieraztea zuzendaritza-batzordea edo administrazio bakarra izan daitezkeela.
157. **88.5 artikulua** «eta/edo» juntagailuak tartekatzen ditu ezarpena eta aukera aldi berean zehazteko. Baina gramatika ezin da onartu; izan ere, oro har, «edo» juntagailuaren balioa eman nahi zaio. Beraz, gauza bat edo bat baino gehiago izan daitezkeela adierazi nahi denean, «edo» soilik erabili behar da; «eta» juntagailua, berriz, konbinazioaren bi kontzeptuak barne hartzen direnean soilik erabiliko da; hau da, gauza bat eta bestea —biak batera— izango dela adierazteko. Balio berbera izango du 103.4 h), 129.1 eta 133 artikuluetan.
158. **132.2. artikulua**, kooperatiba txikiei buruzkoan, sailkapenaren arazoia kalifikatu beharko litzateke, sailkapena galdu izanaren jakinarazpena «dagokion» sailkapena edo sailkapena «berriro» egiteko dela adieraziz.
159. **III. tituluaren** izenean egokiagoa litzateke administrazioa «publikoa» dela zehaztea, artikuluen edukia koherenteago islatuz.
160. Euskal Autonomia Erkidegoko Ondarearen Legearen aldaketa, **zazpigarren xedapen gehigarriaren** bitartez egiten dena, azken xedapen baten bidez egin beharko litzateke,

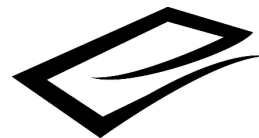


hori baita modu egokia «indarreko zuzenbidearen aldaketa-klausulak islatzeko, arau baten aldaketa ez denean xedapenaren helburu nagusia».

161. **Azken xedapenetatik lehenengoa**, araua indarrean jartzeari buruzkoa, azken xedapenen amaieran jarri beharko litzateke, hori baita arauaren denbora-eraginkortasunari buruzko arauak barnean hartzen dituenak.
162. **Azken xedapenetatik bigarrena**, aplikazio-eremuari buruzkoa, artikuluen barnean kokatu beharko litzateke, xedapen orokorren kapituluaren zehazki; izan ere, bere edukia arauaren gai nagusiari lotuta dago eta ez aldaketa-klausulei, osagarritze-arauei, jarduketa-mandatuak edo arauaren eraginkortasun orokorrari buruzko arauak, zeinak azken partean kokatzen diren mandatuak baitira.
163. **Azken xedapenetatik hirugarrena**, bere aldetik, nahiz eta mandatu osagarri normatiboaren nolabaiteko izaeraduna izan, hobeto egokituko litzateke kooperatiba motak lantzen dituen kapituluak; izan ere, araudiaren arabera beste kooperatiba mota batzuk sor daitezkeela adierazten da zirkunstantziak hala gomendatzen dutenetan, legeak testuan definitzen direnez gain, horretarako definitutako izapideak erabiliz.
164. Azkenik, **oro har**, komeni da artikulua jakin batzuen egitura aztertzea, irizpide bakar bat erabiltzeko artikuluen edukia barnetik sailkatzeko.
165. Halaber, artikulua batzuek zenbakirik gabeko hainbat errokada dituzte, eta komeni da horiei zenbakia jartzea (errokada bakarra badago, ez da beharrezkoa). Errokada batzuk horien barruan dauden zatitzat jotzen badira, letrak erabiliko dira; hau da, letrak erabiliz azpibanatuko dira. Azkenik, hasiera batean, apartatuak ez dira azpibanatu behar, baina, kasu berezietan beharrezkoa denean, zati bakoitzari zenbakiak jarriko zaizkio (1., 2., 3. [...]).
166. Gaztelaniazko testuan, hizkuntza ez-sexista erabiltzeko, «socios» beharrean, «personas socias» erabili behar da. Ildo horretatik, «socios trabajadores» beharrean, «personas socias trabajadoras» terminoa gomendatzen da gaztelaniazko jatorrizkoan.

ONDORIOA

Batzordearen irizpena da, txosten honen mamian egindako oharpenak kontuan hartu ostean, Legearen aurreproiektua Jaurlaritzaren Kontseilura bidal daitekeela, onetsia izan dadin.



Eta hala ziurtatzen dugu, Gasteizen, 2018ko azaroaren 30ean, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2 artikulua xedatzen duen betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzorde honi komunikatu behar zaio, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamenduaren 34. artikulua xedatzen duen moduan eta epean (irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori).

O. E.:

Jesús María Alonso Quilchano,
Idazkaria

Sabino Torre Díez,
Lehendakaria